

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**Los convenios hispano-norteamericanos de 1953 : sus
implicaciones jurídicas**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Luis Martínez Sanseroni

Madrid, 2015

TE
591

"LOS CONVENIOS HISPANO-NORTEAMERICANOS
DE 1.953: SUS IMPLICACIONES JURIDICAS"

TESIS DOCTORAL que presenta para la obtención del Grado de — Doctor, el Licenciado Luis MARTINEZ SANSERONI.

DIRECTOR DE LA TESIS:

Dr. D. Luis GARCIA ARIAS

Catedrático de Derecho Internacional Público
de la Facultad de Derecho de la Universidad-
Complutense de Madrid.

MADRID

1973

Mi agradecimiento sincero a las muchas personas que han contribuido a la realización de esta tesis y en especial - al Dr. Gonzalez Campos y al director - de la misma Dr. García Arias quienes, - con sus orientaciones, consejos y facilidades me han venido alentando constantemente.

2.3004

INDICE

págs.

PROLOGO 2

INTRODUCCION

✓ I. Objeto *El Convenio Defensivo* 9
II. Método, estructuración y plan 14
✓ III. Fuentes 22

PARTE PRIMERA

Capítulo I Sistemática general de los Convenios..... 26

PARTE SEGUNDA

Capítulo I ✓ Las bases militares y el Derecho Inter-
nacional: su problemática y encuadra-
miento.

Sección I: Consideraciones generales... 33

Sección II: Emplazamiento 35

Capítulo II Aproximación formal al Convenio Defensivo

Sección I: Estructura 43

Sección II: Obligaciones de ambas par-
tes:

Sc.A. De los Estados Unidos. 46

Sc.B. De España 51

Sección III: Valoración general previa .. 54

✓ Capítulo III El Convenio y las competencias norteameri-
canas en España: su determinación.

Sección I: Introducción 57

Sección II: Determinación de éstas:

Sc.A. Competencias de las F.
A.-U.S.A. en nuestro espa-
cio aéreo 62

	<u>págs.</u>
Sc.B. Competencias de las F. A.-U.S.A. en nuestro espa cio marítimo	68
Sc.C. Competencias del Gobi- erno U.S.A. relativas a la construcción de las zonas e instalaciones	74
Sc.D. Competencias del Gobi- erno U.S.A. relativas a - la utilización de las zo- nas e instalaciones; su - problemática	82
Sc.E. Competencias del Gobi- erno U.S.A. complementa- rias de la utilización de las zonas e instalaciones	91
Sc.F. Las F.A.-U.S.A. en Es- paña y la utilización de las zonas e instalaciones	94

✓ Capítulo IV

Análisis de las competencias norteameri- canas a la luz del Derecho Internacional general	
Sección I:	Introducción 117
Sección II:	Las competencias en el espa cio aéreo español 118
Sección III:	Las competencias en el espa cio marítimo español 128
Sección IV:	Las restantes competencias; planteamiento final 147

PARTE TERCERA

Capítulo I

Aspectos de la <u>Ayuda Económica</u>	
Sección I:	El Artículo V del Convenio.. 152
	Sc.A. Su contenido 152
	Sc.B. Su origen, evolución y significado 158

	<u>págs.</u>
Sección II: La Ayuda propiamente dicha	163
Sc.A. Análisis formal del Artículo primero del - Convenio	163
Sc.B. Sus objetivos sustan- tivos	167

PARTE CUARTA

<u>Capítulo I</u>	Naturaleza jurídico internacional del Con- venio Defensivo	
Sección I:	Planteamiento	175
Sección II:	La doctrina	176
Sección III:	Nuestra posición	180

PARTE QUINTA

<u>Capítulo I</u>	El Convenio de Ayuda para la Mutua Defensa	
Sección I:	El Artículo I, punto 1º ...	186
Sección II:	El programa de "suministros offshore"	
	Sc.A. Encuadramiento	189
	Sc.B. Antecedentes y natura- leza del Acuerdo de 30- -7-1954	190
	Sc.C. Su significación	193
Sección III:	La utilización de la Ayuda.	196
Sección IV:	El programa "facilities as- sistance"	
	Sc.A. Encuadramiento	200
	Sc.B. Antecedentes y propó- sitos	201
	Sc.C. Obligaciones para am- bas partes	204
	Sc.D. Su significación	207

PARTE SEXTA

Capítulo I

Los Convenios y los Derechos Internos	
Sección I: Breve referencia al Derecho Internacional	214
Sección II: Los Convenios y el Derecho interno español	
Sc.A. Introducción	215
Sc.B. El término "ratificación de tratados" en el Artículo 14 de la Ley - de Cortes	216
Sc.C. El término "serán - oídas" del indicado Artículo	221
Sc.D. Conclusión	224
Sección III: Los Convenios y el Derecho interno norteamericano ...	226

PARTE SEPTIMA

Capítulo I

Los Convenios y el sistema internacional de seguridad colectiva de la Carta de - las Naciones Unidas	
Sección I: Emplazamiento	240
Sección II: La ayuda para la defensa y los acuerdos de legítima - defensa individual y colectiva en la Ley de Seguridad Mutua	247
Sección III: El Convenio Defensivo	256

PARTE OCTAVA

Capítulo I

Los Convenios y la defensa exterior de España	
Sección I: Introducción	259
Sección II: Los Convenios y nuestra de fensa exterior	263

	<u>págs.</u>
Sección III: La utilización conjunta y su significado	266
Sección IV: El suministro de material y su significado	269
Sección V: La seguridad exterior de las zonas e instalaciones y su significado	275
<u>CONCLUSIONES</u>	277
<u>NOTAS DE PIE DE PAGINA</u>	286
 <u>BIBLIOGRAFIA</u>	
I <u>Documentos</u>	321
A) Del Congreso de los Estados Unidos	
1. Concernientes al Convenio Defensivo	
2. Concerniente a los otros dos Convenios	
B) Otros documentos	
1. Norteamericanos	
2. Españoles	
3. De la Sociedad de Naciones y Naciones Unidas	
4. Del Tribunal Internacional de Justicia	
II <u>Fuentes de conocimiento utilizadas</u>	329
III <u>Obras, artículos y trabajos específicos</u>	330
A) Obras generales	
B) Artículos y trabajos específicos.	

APENDICES

I <u>Acuerdos de ejecución y desarrollo del Convenio Defensivo</u>	337
--	-----

	<u>págs.</u>
II <u>Acuerdos de ejecución y complementarios del Convenio de Ayuda para la Mutua Defensa</u>	341
III <u>Acuerdo complementario del Convenio de Ayuda Económica</u>	342
IV <u>Acuerdos celebrados de conformidad con el Título I de la Ley de Comercio Agrícola, Ayuda y Desarrollo de 1954 (Ley Pública 480)</u>	343
V <u>Ejecución orgánica e institucional en el Derecho español de los Convenios</u>	344
A) Organismos de Administración en sentido estricto.	
B) Otros Organos.	
C) Disposiciones administrativas "strictu sensu" de ejecución de los Convenios.	

TEXTOS INCLUIDOS

- I Convenio Defensivo
 - Acuerdo Técnico Anexo al Acuerdo Defensivo
 - Anexo Técnico nº 3
 - Borrador del Anexo Técnico nº 4
 - Acuerdo de Procedimiento nº 7
 - Acuerdo de Procedimiento nº 14
 - Acuerdo de Procedimiento nº 25
- II El Convenio de Ayuda para la mutua defensa
- III Convenio de Ayuda Económica

INDICE DE ABREVIATURAS MAS IMPORTANTES UTILIZADAS EN ESTA TESIS

Acdo. de Pto.....	Acuerdo de Procedimiento.
A.F.D.I.....	Annuaire Français de Droit International.
A.J.I.L.....	American Journal of International law.
Aranz.....	Aranzadi. Colección de Legislación y/o Jurisprudencia.
B.O.E.....	Boletín Oficial del Estado.
B.O.C.E.....	Boletín Oficial de las Cortes Españolas.
F.A.-U.S.A.....	Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
O.A.S.....	Organización de Estados Americanos.
Rec des Cours.....	Recueil des Cours de l'Académie - de Droit International de la Haye.
Rev. Bel. de Dr. Int.....	Revue Belge de Droit International.
R.E.D.I.....	Revista Española de Derecho Internacional.
Rev. Egyp de Dr. Int.....	Revue Egyptienne de Droit International.
Rev. Pol. Int.....	Revista de Política Internacional.
Sov. Year of Int. Law.....	Soviet Year-book of International Law.
T.E.A.C.....	Tribunal Económico Administrativo Central.

T.I.A.S.....	Treaties and Other International Act Series.
U.N.C.I.O.....	United Nations Conference on In- ternational Organization.
U.N.T.S.....	United Nations Treaty Series.
U.S.T.....	United States treaties and Other International Agreements.

P R O L O G O

1.- El 26 de septiembre de 1953, Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores de una parte y J. Clement Dunn, Embajador norteamericano en España por otra, firmaron en Madrid tres Convenios de la misma fecha en representación de España y de los Estados Unidos respectivamente: un primer Convenio titulado Convenio Defensivo; el segundo, sobre Ayuda Económica y el tercero, sobre Ayuda para la mutua defensa; estos dos últimos, acompañados de Anexos y Notas interpretativas (1).

En 1963, el 26 de septiembre, diez años después, sería Fernando Ma Castiella, entonces Ministro de Asuntos Exteriores de España y Dean Rusk, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, quienes en Nueva York procederían a renovar y revisar —se diría textualmente— aquel conjunto de relaciones convencionales nacido de la primera etapa.

Cuatro Anejos se firmaron en esta fecha. El primero, — quedaría bajo el título "Declaración conjunta que establece una relación de cooperación entre España y los Estados Unidos de América".

Esta Declaración —que no ha sido hasta ahora estudiada— despertaría en la opinión pública española y en parte de la de otros países extranjeros toda una problemática centrada en su significación. ¿Hasta qué punto esta declaración incidía en el Convenio Defensivo que en su virtud había de continuas vigente?.

El Anejo II, lo constituía un Canje de Notas que esta-

blecía el Comité Consultivo Hispano-norteamericano, intento de institucionalización de un órgano con atribuciones para "llevar a cabo más eficazmente las finalidades y objetivos especificados en el Convenio Defensivo de 26 de septiembre de 1953 y en sus - Acuerdos Técnicos y de procedimiento anejos".

Un Canje de Notas sobre asistencia militar y una Carta sobre empréstitos, asimismo del Secretario de Estado, a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, eran los constitutivos de los - Anejos III y IV (2).

Finalmente el 6 de Agosto de 1970, se firma en Washington, el Convenio de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos. Lopez Bravo, Ministro de Asuntos Exteriores de España y William P. Rogers, Secretario de Estado de los Estados Unidos, serían quienes en esta tercera etapa representarían a - estos Gobiernos, respectivamente. De esa fecha eran también un Anexo y cuatro cartas cursadas por el Secretario de Estado citado al Ministro español (3).

2.- Estas tres fases en las relaciones convencionales hispano-norteamericanas —que no agotan exhaustivamente todas - nuestras relaciones con los Estados Unidos— constituyendo tres etapas de muy importante significación para los dos países —quizá en mayor grado para España— en un conjunto de sectores entre los que resalta el militar en mayor grado.

Hasta el 26 de septiembre de 1970, —entrada en vigor

del Convenio actual—, esto es, en las dos primeras fases convencionales, la importancia cualitativa y cuantitativa de lo pactado se centró, ya desde 1953, en el Convenio Defensivo, Convenio eje podemos decir, sin el que los demás no adquirirían una plena significación, a pesar de poseer alguna autonomía como veremos - en esta tesis.

La importancia de dicho Convenio quedó reflejada en - toda una serie de acuerdos que hubieron de adoptarse para su desarrollo.

Del mismo mes de septiembre de 1953 eran, el Acuerdo Técnico Anexo al Convenio Defensivo; el Acuerdo Técnico nº 1, - sobre adquisición y desarrollo de las zonas, servidumbres e instalaciones acordadas; el Anexo Técnico nº 2, sobre normas de construcción; el Anexo Técnico nº 3, relativo a la utilización de - zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones y finalmente un Borrador del Anexo Técnico nº 4 sobre personal.

Con posterioridad en el tiempo irían apareciendo los - llamados Acuerdos de Procedimiento, que llegarían a sumar veintidós (4).

En la etapa presente, todos estos acuerdos, Técnicos y de Procedimiento, en desarrollo del Convenio Defensivo de 1953, así como el propio Convenio, se encuentran derogados en virtud - del Artículo 40 (cap. IX) —una de las disposiciones finales— del Acuerdo de Amistad y Cooperación ya mencionado. Es por esta razón por la que, el Capítulo VIII de éste, ha sido desarrollado

como lo fue en su día el Convenio Defensivo de 1953, por otros textos convencionales: un Acuerdo de desarrollo, catorce Anexos de Procedimiento y cuatro acuerdos constituídos por Canje de - Notas (5).

Todos aquellos textos anteriores en desarrollo del Convenio Defensivo de 1953, el propio Convenio incluido, carecen - pues de vigencia, excepción hecha de las remisiones específicas a preceptos concretos a que se hace mención en algún caso.

(2) Por su parte el Convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa, vendrían también con posterioridad, a ser desarrollado y completado por dos Canjes de Notas; el primero de 27-11-1956 sobre la disposición final de equipo y materiales suministrados a través del Convenio, el segundo, de 21-7-1960, con disposiciones para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica. Además de estos dos Canjes de Notas, bajo las directrices y principios del Convenio propiamente dicho, se desarrollarían dos programas: el de ayuda para instalaciones y el de suministros offshore. (6).

También dentro de este espacio de tiempo, son los - acuerdos constituidos por Canje de Notas y celebrados de conformidad con el Título I de la Ley de Comercio Agrícola, Ayuda y - Desarrollo de 1954, más conocida como Ley Pública 480 (7).

(3.- Al margen, sin embargo, de la afirmación más arriba indicada, la presente tesis doctoral no contiene un estudio

detallado de la vigencia de los textos convencionales de cualquiera de estas tres fases aludidas, o de su no vigencia.

Un estudio de este tipo necesitaría un conocimiento más amplio de la fase convencional a la que nos circunscribimos aquí, así como de las otras dos. Y, en mayor grado, de la que estamos viviendo en la actualidad, en la que su estudio se presenta con mayores dificultades.

Hay sectores del antiguo Convenio sobre Ayuda Económica de 1953 que aún permanecen en vigor, mientras que otros se encuentran ya derogados; otro tanto ocurre con el Convenio de Ayuda para la mutua defensa (8).

Por otra parte, tengamos en cuenta que, si bien en cuanto al Convenio Defensivo de 1953 podemos afirmar como se ha hecho, su falta de vigencia, ello no es óbice para que algunos de los nuevos textos convencionales de desarrollo del vigente Convenio, pudiesen regular de forma idéntica o muy similar a la de 1953, algunos sectores específicos; jurídicamente al menos, es factible tal supuesto.

Determinar pues, exacta y completamente la vigencia formal de aquellos —Económico y de Ayuda para la mutua defensa— o la idéntica regulación de competencias a la de 1953, existente en la fase actual, supondría agotar todo el enorme núcleo de relaciones nacidas al amparo de todo ese conjunto de textos, en una perspectiva comparada. Labor esta que no es la que llevo a

cabo con la realización de la presente tesis, pero que sí puede en un futuro servir de base apropiada para un trabajo de mayor alcance, a partir de los problemas aquí examinados.

I N T R O D U C C I O N

I OBJETO

1. La presente tesis doctoral se circunscribe al estudio de la primera de las fases anteriormente enunciadas en el Prólogo; esto es, al núcleo convencional de 1953.

Abarca y encierra un conjunto de problemas que son en sí bastante difíciles de tratar. Todo el sector, pongamos como ejemplo, relativo a las zonas e instalaciones, a las tradicionalmente conocidas "bases militares", es por si mismo un sector vidrioso a la hora de su estudio. Las implicaciones políticas y militares tienen una incidencia tan enorme en aquellas, que lo auténticamente jurídico se presenta a primera vista de forma muy difusa.

A esta dificultad intrínseca, hay que añadir otro dato y es la ausencia de fuentes, que es casi total en torno de las bases militares, no ya documentales, sino ~~también doctrinales~~, - ausencia que representa en último término un gran inconveniente para cualquier análisis preciso.

2. El estudio sustantivo de estos Convenios podía y puede realizarse desde tres perspectivas; ¹ en primer lugar desde una - perspectiva económica, ² en segundo lugar desde una perspectiva - política y en último término ³ desde una óptica jurídica.

Obviamente el estudio que aquí vamos a realizar lo es desde esta tercera perspectiva.

Es conveniente, sin embargo, deslindar concretamente estos campos, para tratar de conocer el posible contenido de - estos tres sectores y así, poder situar mejor la propia tesis.

3. El tratamiento económico vendría centrado en el estudio de la incidencia de estos Convenios en la situación económica general de nuestro país en 1953. Pensemos que la operación que suponía la puesta en funcionamiento de unas zonas e instalaciones en nuestro territorio, exigió todo un despliegue de medios económicos por parte de los Estados Unidos, que no podían dejar de repercutir a plazo medio en algunos índices de producción de nuestra economía y en último término en la política económica existente en aquellos años en España.

Estas construcciones iban a originar un proceso inflacionista difícil de contrarrestar con una política de autarquía económica como era la entonces existente (1). Esto era algo que el Gobierno de los Estados Unidos vería y trataría de salvar -- como veremos incidentalmente en su lugar.

4. El tratamiento político incidiría, de seguirse, más -- que en los textos mismos y en las obligaciones allí contenidas, en las situaciones y realidades políticas en las que estos Convenios operan. En 1953, estos Convenios tienen una significación muy específica en la política interior norteamericana y otro --

tanto ocurre con respecto a la significación en su política exterior.

Digamos en el primer sentido simplemente que, en aquella época, los esfuerzos a realizar en favor de la firma de unos Convenios con España, venían favorecidos por minorías congresistas con figuras como McCarran, McCarthy, O'Konski, Chavez, J. Murphy, Keogh y otros muchos (2), mientras que el Presidente Truman, entonces en la Casa Blanca, personalmente, se mantuvo siempre - reacio a todo tipo de relación diplomática con España (3). Las - fuerzas políticas en favor de unos convenios con nuestro país - venían del Congreso y no de la Administración.

Este es un dato a tener en cuenta, pues la situación en 1963 y en periodos posteriores ya no sería la misma (4); el equilibrio político de los poderes legislativo y ejecutivo de los Estados Unidos habría de alterarse en política exterior.

Y precisamente en cuanto a su política exterior, sector de interes asimismo para estudio detenido, estos Convenios y el Defensivo en particular guardan una significación muy específica dentro del sistema de seguridad que impulsan en gran manera los Estados Unidos, para su defensa y para la defensa de lo que en aquellos años se calificaría de "mundo libre".

Aun más importante sin duda, es la incidencia que tendrían en nuestra política exterior estos Convenios, sector que - no ha sido trabajado hasta ahora (5). Y de no menor importancia sería asimismo el estudio de la significación de aquellos, en -

la política interior española. En mi opinión, en este punto, -
 pienso que han tenido una significación muy notable. Todo estu-
 dio sin embargo desde esta óptica, resulta, no obstante, difícil
 de llevar a cabo por varios motivos, entre otros, la ~~ausencia~~ de
 fuentes al respecto, así como de estudios particulares (6).

No debemos finalmente olvidar su relevancia en el te-
 rreno de las políticas internacionales en presencia en aquellos
 años de 1953 en los que el mundo se encontraba en medio de la -
 denominada "guerra fría" (7). Estos Convenios insertaban a nues-
 tro país en uno de los dos bloques componentes de la bipolar es-
 tructura ideológica y militar en que el mundo se veía entonces -
 dividido.

5. Esta tesis, como hemos indicado ya, se circunscribe a
la órbita jurídica. El título de ella, sin embargo, alusivo en
 general a "sus implicaciones jurídicas", es en realidad lo sufi-
 cientemente amplio como para agrupar toda una gama de relaciones
 de muy distinta naturaleza y significación.

Pensemos que estas relaciones abarcan, desde la utili-
 zación del espacio aéreo español por las Fuerzas Armadas de los
 Estados Unidos, hasta los contratos de arrendamiento celebrados
 por súbditos norteamericanos pertenecientes a aquellas y desti-
 nados en España, para habitar en los distintos centros urbanos -
 próximos a las zonas e instalaciones.

La naturaleza y variedad de estas relaciones jurídicas es evidentemente amplia y materialmente es imposible abordarlas en su conjunto.

Es pues a la vista de estos diferentes núcleos de problemas jurídicos, como he optado por analizar tan solo aquellos que poseen una naturaleza internacional de caracter público, descartando los de naturaleza privada como pudieran ser, por ejemplo, los derivados de todas las transacciones llevadas a cabo con la ayuda económica (8), o las relativas a los contratos de suministro offshore; problemas, que presentan en muchos casos el interés que supone que una de las partes contratantes, bien el Gobierno norteamericano o bien una persona física o jurídica en su nombre, venga dotada de un caracter público.

Principalmente, el objeto de esta tesis se centra en el estudio del Convenio Defensivo. Es este Convenio el fundamental, en torno al cual gira, indudablemente, el económico.

Asimismo se estudia el Convenio de Ayuda a la mutua - defensa, que guarda con aquél una relación muy estrecha en algunos casos.

Es el Convenio Defensivo pues, el que presenta formal y sustantivamente el núcleo de problemas jurídico-internacionales de naturaleza pública más relevantes de que hablaba más arriba y sobre los que en definitiva va a girar esta tesis fundamentalmente.

II METODO, ESTRUCTURACION Y PLAN

1. El planteamiento metodológico que he seguido en esta tesis, ha partido del estudio de los tres Convenios propiamente dichos y en particular del Defensivo, aunque desde una perspectiva global de análisis que ha venido condicionada por unos supuestos fácticos.

Factores como fueron en principio la ausencia de los documentos jurídicos que desarrollaron el Convenio defensivo y en cualquier caso la falta de estudio de aquellos Convenios desde una óptica jurídica, por parte de la doctrina internacionalista española (9), determinaría una aproximación a ellos, tan solo en la medida en que afectaban a nuestras competencias propias de Estado soberano y en función de la incidencia de aquellas en estas competencias. El conocimiento posterior de los documentos - indicados, así como de otras fuentes documentales directas, determinarían todo un cambio de óptica.

(2. El estudio de los tres Convenios se ha llevado a cabo en dos etapas. En la primera, he procedido a una exégesis de los textos, fundamentalmente, en el Convenio Defensivo y en el Ayuda para la mutua defensa. Tras la exégesis, el análisis de aquellos, para ulteriormente inducir los puntos más relevantes y más significativos y de esa manera obtener lo auténticamente sustantivo de aquellos.

Las Partes Segunda, Tercera y Quinta de la tesis, son

las que he dedicado a esta primera etapa, es decir, al estudio exegético y analítico del Convenio Defensivo, de los aspectos - más significativos del Cº de Ayuda Económica y del Cº de Ayuda para la mutua defensa, respectivamente.

3. La segunda etapa se ha circunscrito a una interpretación funcional de esos puntos y de esos elementos ya obtenidos, interpretación funcional que, carentes de estudios generales sobre bases militares en el Derecho Internacional, (es decir de un estudio jurídico de las bases militares como institución propia o dentro de otras instituciones del Derecho Internacional Público) los he proyectado fundamentalmente en el plano de las competencias estatales.

¿Que suponen estos Convenios y en particular el Defensivo, en las competencias estatales de los Estados Unidos a ejercer en virtud de aquél y cuáles son sus incidencias en nuestras competencias? ¿Cuál es su significación en el Derecho Internacional General?. A estas interrogantes he dedicado la Parte Cuarta, tras el análisis del último Capítulo de la Parte Segunda: análisis de las competencias norteamericanas, a la luz del Derecho - Internacional general.

4. La interpretación funcional, sin embargo, de esta segunda etapa, encuadrada en este ámbito competencial, se ha circunscrito tan solo a las competencias de los Estados Unidos, ex-

cluyéndose del estudio el corolario que llevaba consigo aquellas, es decir su incidencia en nuestras competencias como Estado soberano.

Esta interpretación funcional pues, no se lleva a cabo aquí en esta perspectiva; interpretación que, debemos destacar, debiera hacerse por su gran significación en un próximo futuro.

Son en este plano a mi juicio tres, los núcleos competenciales de nuestro Estado que se vieron afectados por el ejercicio en España de las competencias de los Estados Unidos, acordadas en el Convenio Defensivo.

De un lado, el régimen fiscal, esto es, la aplicabilidad de nuestra legislación fiscal a los fondos norteamericanos a emplear en España, fondos que, no obstante están afectados a fines tan distintos como pudieran ser la adquisición de suministros por las F.A-U.S.A. destinadas en España, los gastos relativos a las construcciones a realizar por los Estados Unidos o las importaciones realizadas para la ejecución de aspectos militares del Convenio Defensivo, iban a quedar "relevados de todo impuesto" - (Artº III.3.a, del Convenio de Ayuda para la mutua defensa) (10).

El segundo núcleo, es el referente a la aplicabilidad de nuestra legislación y jurisdicción laborales a los trabajadores españoles y extranjeros al servicio de las F.A-U.S.A. destinadas en España.

Finalmente el tercer núcleo, de no menor importancia, es el relativo a la aplicabilidad de la legislación y jurisdicción

penales españolas, o, desde otra perspectiva, el estatuto de -
las F.A-U.S.A. en territorio español.

Pensemos que en cuanto a la jurisdicción sobre estas
Fuerzas se establecería en el Acuerdo Técnico Anexo que:

"Las Autoridades Militares de los Estados Unidos
tendrán el derecho de ejercer sobre los miembros
de sus fuerzas, las jurisdicciones y controles -
que les son conferidas por las Leyes y Reglamen-
tos de Estados Unidos" (Artº 17, punto 2º).

Y en cuanto a las leyes aplicables, el epígrafe a) del
punto 3º de este mismo artículo decía:

"Los Tribunales Militares de los Estados Unidos y
Autoridades de dicho país tendrán el derecho de -
ejercer en territorio bajo jurisdicción española
la jurisdicción criminal con relación a todas las
faltas o delitos que puedan cometerse por miembros
de las Fuerzas de los Estados Unidos y punibles -
bajo los términos del Uniform Code of Military Jus-
tice determinado por el "Manual for Courts Martial.
U.S. 1951", con las enmiendas o modificaciones que
pudieran introducirse".

Tres núcleos pues de competencias que no han sido abor-
dadas en la vertiente llevada a cabo en la indicada interpreta-
ción funcional, pero que son, como decía, un corolario derivado
de aquellas competencias que los Estados Unidos iban a ejercer -
en nuestro territorio.

5. Dentro de esta perspectiva y de estas dos etapas, el
estudio del Convenio de Ayuda Económica lo he realizado inmedia-
tamente después del estudio del Defensivo, circunscribiéndolo a
los que denomino aspectos más importantes de la Ayuda Económica
es decir, a los contenidos en los Artículos V y I del Convenio,

quedando excluidos por lo tanto el resto del articulado.

El más sustantivo de los preceptos que no trato, es el Artículo III que con el título de "garantías", indicaba el proceso a seguir cuando el Gobierno de los Estados Unidos otorgara las garantías previstas en la legislación nortamericana a proyectos a realizar en España por sus nacionales. Su vigencia, sin embargo, ha sido casi formal, pues la práctica al respecto no ha sido muy abundante (11).

El Artículo IV por su parte, que establece la posibilidad para los Estados Unidos de adquirir en España productos que necesitasen, debido a deficiencias de sus recursos o para formación de stocks en general, tampoco lo estudio.

6. Por lo que respecta al Convenio de Ayuda para la mutua defensa, que inserto en la Parte Quinta, con autonomía propia, - le doy un tratamiento más amplio y ello así porque si bien cabe analizarlo, como se hace, dentro de esta interpretación funcional, guarda una cierta autonomía. El programa de ayuda para la mutua defensa es un programa autónomo y distinto de las obligaciones contenidas en el Convenio Defensivo.

Excluyo de su estudio el Artículo II, que versaba sobre medidas en torno a la regulación de los intereses privados en la "cesión de derechos de patente e informaciones técnicas para la defensa", incluidas previsiones de seguridad, por constituir un tema con tratamiento propio, distinto en gran medida aunque no -

totalmente, del general que vamos a seguir.

7. Ahora bien, si como decíamos antes, esta interpretación funcional de los puntos más relevantes de los Convenios, los he proyectado en el plano de las ~~competencias estatales~~, esta proyección, fundamental como he dicho, no es la única realizada.

En efecto, esta interpretación funcional ha operado en otros dos planos, de un lado en el plano de las relaciones Derecho Interno-Derecho Internacional; en último lugar, quizá demasiado funcionalmente, en un plano más amplio, en el plano del -Derecho Internacional institucionalizado —al menos formalmente—; me refiero al plano de la seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Pero abordemos con detalle estas dos ópticas.

La Parte Sexta, dedicada a los Convenios y al Derecho interno español y norteamericano, posee una problemática propia que solamente he esbozado, fundamentalmente, en el caso del Derecho interno norteamericano, problemática de no fácil aprehensión y que a mi juicio presenta gran transcendencia.

Su inserción en la tesis en este lugar, contrariamente a como viene siendo ~~costumbre~~, responde a la perspectiva global de análisis que, de principio, había adoptado.

Es la Parte Séptima de otro lado, la dedicada al sistema de seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas y a la incidencia de aquellos Convenios en ese sistema.

¿Qué suponen nuestros Convenios, el Defensivo y el de Ayuda para la mutua defensa en particular, ante la Carta de las Naciones Unidas?. La interrogante, pienso, no es académica, y no lo es, porque tengamos en cuenta que, si bien las normas del Derecho Internacional Público pudieran derogarse por acuerdo particular en contrario, en virtud del carácter dispositivo que poseen (12), el Derecho de la Carta de las Naciones Unidas no posee el mismo carácter, pues como dice la propia Carta, en su Artículo 103: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta".

España no formaba parte en aquella época de las Naciones Unidas, sin embargo, esto no obstaba para que los Estados que la formaban, hicieran prevalecer frente a cualquier otro tratado, las obligaciones de la Carta, entre las que figuraban las relativas a no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales (Artº 2, 4) y su complementario: el arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos (Artº 2, 3) y a que los Estados no miembros —España en nuestro caso— actuaran de acuerdo con los principios de la Carta en la medida necesaria para el mantenimiento de la paz y la seguridad (Artº 2, 6).

Estos tres Convenios encerrarían un conjunto de obligaciones que por si mismas estaban en conflicto con las obligaciones de la Carta como en la indicada Parte podrá observarse.

Es sin embargo la perspectiva global de análisis que se ha adoptado en la tesis y en función de la sustantividad jurídica que se ha pretendido salvar en todo momento, lo que nos ha obligado en último término a buscar las razones de la quiebra formal del sistema de seguridad de la Carta, que implícitamente llevaría a dejar a la luz la falta de operatividad de - aquel artículo 103 indicado, y que desplazaría todo el problema, del Derecho de la Carta y de su sistema de seguridad, al Derecho Internacional general y sus instituciones y concretamente a la - institución de la legítima defensa.

8. Un último Capítulo, el insertado en la Parte Octava, - con el título de "Los Convenios y la Defensa exterior de España", refleja, finalmente, la significación de aquellos en la defensa exterior de España, como parte de la defensa nacional española, significación estudiada también desde esta interpretación funcional que inspira todo el transcurso de la tesis.

¿De qué manera afectan los Convenios nuestra defensa nacional, servicio público a realizar por nuestro Estado?. Esta es la interrogante a la que pretendo dar una respuesta en esta - última Parte, previa a las Conclusiones.

III FUENTES

1. Uno de los obstáculos principales que presentó el estudio y realización de esta tesis, ha sido la falta de fuentes; y ello hasta tal punto que los estudios los inicié desde una perspectiva distinta —como quedó dicho— de la que en la actualidad aparece en el índice.

Esta ausencia de fuentes, que si bien en el caso de las que califico como documentales, estaría en mayor grado justificado, no lo está tanto en el caso de las doctrinales; en efecto los únicos estudios que se han llevado a cabo por los internacionalistas, se han centrado en el sector del régimen de las fuerzas armadas en territorio extranjero, desatendiendo la problemática central de lo que constituye auténticamente la naturaleza y significación de las bases militares en el Derecho Internacional. El mismo Profesor Flory, el autor que más trabajó el tema en la década de los años 50, deja importantes sectores sin cubrir y no estudia las conexiones de las bases militares en el sistema de seguridad de la Carta de las Naciones Unidas.

El estudio del fenómeno de las bases militares, pienso, no está totalmente situado en el Derecho Internacional Público; no así su estudio desde otras perspectivas. En este último sentido, la doctrina norteamericana —Liska, Osgood, etc.— sí ha considerado el tema aunque con categorías de ciencia política —que, a mi juicio no dan una respuesta exacta a su significación

en el Derecho Internacional, si bien nos dan una visión desde otros ángulos que no dejan de tener interés —problemática de las alianzas, bloques militares, etc.—

2. Las fuentes documentales utilizadas son en su mayor parte, los Hearings de las Sesiones del Congreso de los Estados Unidos, el 83, 84 y 85 Congresos concretamente, que van del año 1953 a 1958, en sus dos Cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado.

Otras publicaciones asimismo son las editadas por la Government Printing Office, entre las que se encuentran, entre otras, el Boletín del Departamento de Estado y la colección de tratados United States Treaties Series.

De fuentes doctrinales, he utilizado tratados y manuales generales de Derecho Internacional Público, fundamentalmente en el estudio de las competencias estatales y su distribución, mientras que los artículos y trabajos específicos, se circunscriben a sectores particulares, fundamentalmente al de los acuerdos regionales y al de la seguridad colectiva, así como al resto de los puntos que estudio.

La bibliografía documental ha sido obtenida fundamentalmente en distintos centros españoles y algunos extranjeros —entre los que debe destacarse la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde el autor de esta tesis estuvo trabajando en el verano de 1971.

P A R T E P R I M E R A

CAPITULO I:

SISTEMATICA GENERAL DE LOS CONVENIOS

CAPITULO I: Sistemática general de los Convenios.

1. La primera nota que se desprende de una inicial lectura de los tres Convenios, es decir, del Defensivo, del de Ayuda para la mutua defensa y del Económico es su interrelación sustantiva, además de su remisión recíproca. De otro lado una característica observable es su carencia de sistemática.

En realidad podemos decir que hay una serie de preceptos que dotan a estos tres Convenios (y esto lo veremos a medida que los vayamos estudiando) de una unidad de tratamiento, unidad que es la que en último término determina la interrelación mencionada.

2. Ya en el Convenio de Ayuda Económica se contenía bastante impropriamente en principio un precepto que no debería haberse insertado en él. Se decía en el Artículo quinto que ambos Gobiernos se pondrían de acuerdo "sobre el número y características generales de las instalaciones militares de defensa mutua" que hubieran de construirse en España (Artº V, 3, b). Lógicamente esta alusión debía contenerse, como así ocurre, en el Convenio Defensivo.

Sin embargo esta inserción no era casual y no lo era en cuanto que el pago de la construcción de esas instalaciones se llevaría a cabo a través de un procedimiento que veremos en su momento y que tenía una conexión muy estrecha con la Ayuda -

Económica que el Gobierno norteamericano había de otorgar en función del Convenio de su nombre. El Convenio de Ayuda Económica - no iba a estar pues desconectado, al menos funcionalmente, del - Defensivo.

Otro punto significativo de la interrelación de que hablamos lo constituye la exención impositiva. Declarada en el Convenio de Ayuda para la defensa, en el Artículo III, se indicaba - su ámbito de aplicación particular que abarcaba el Convenio Defensivo, a los que en consecuencia se concertasen y al Convenio de Ayuda Económica (punto 3, c)). Este Artículo, el Anexo y la Nota interpretativa de aquél, aunque insertos en el de Ayuda para la defensa serian aplicables primeramente al Cº Defensivo y asimismo al de Aº Económica.

En este mismo Artículo, en su punto 1, el Gobierno de España se comprometía a poner a disposición del de los Estados Unidos, "las sumas en pesetas necesarias para los gastos administrativos y los derivados de las operaciones" que para los Estados Unidos acarreaba el programa de Ayuda Exterior.

Se hablaba de iniciar discusiones y establecer acuerdos al respecto, siendo que el procedimiento acordado venía regulado en el ya citado Artículo V del Convenio de Ayuda Económica, en - su punto tercero, donde se regulaba el proceso a seguir por el - Gobierno español, una vez notificadas las necesidades de gastos por parte del Gobierno norteamericano, "de conformidad con la - Ley de Seguridad Mutua de 1951".

3. Otro dato que denota falta de sistemática es el relativo a las repeticiones. El punto 7 del Artº 1º del Cº de Ayuda para la defensa y el b), asimismo del Aº 1º, pero esta vez del de Aº Económica, establecían idénticamente que el Gobierno español había de arbitrar medidas para depositar, segregar o asegurar destino a los fondos asignados o que se derivaran de cualquier programa de ayuda de los Estados Unidos a fin de que dichos fondos no pudieran quedar sujetos a embargo, confiscación, decomiso u otro proceso legal análogo por ninguna persona física o jurídica cuando, en la opinión de los Estados Unidos dicho proceso legal pudiera interferir los objetivos de los programas de asistencia.

Esta repetición creemos era innecesaria, como asimismo lo eran unas obligaciones generales para ambos países (mejoramiento de la comprensión y buena voluntad internacionales y mantenimiento de la paz; adopción de medidas para eliminar causas de tensión internacional y cumplimiento de obligaciones militares en - Acuerdos o Tratados en que sean parte) y para España (aportará al desarrollo y mantenimiento de su propio poder defensivo y el del "mundo libre", en la medida de su estabilidad política y económica, la plena contribución que le permitan su potencial humano, recursos, instalaciones y condición económica general; adoptará todas las medidas razonables que sean necesarias para desarrollar su capacidad defensiva; tomará todas las medidas adecuadas para asegurar la utilización efectiva de la asistencia eco-

nómica y militar proporcionada por los Estados Unidos de América) que aparecían igualmente en el Artº V del Convenio de Aº - para la defensa y en el Artº II, 2º del de Ayuda.

4. Es interesante por otra parte destacar que algunos de los preceptos más sustantivos de estos Convenios excedían del - ámbito de aplicación de si mismos. En efecto, la exención impositiva, las medidas a adoptar por el Gobierno español para evitar embargos, confiscaciones y otros procesos legales análogos, se referían obviamente a las inversiones, gastos y fondos derivados de los tres Convenios; sin embargo no se reducía a ellos tan solo sino que se aplicarían también a los derivados de cualquier programa de Ayuda Exterior. (Artº I, 7; III, 1; 3, a), principalmente del Cº de Aº para la defensa; Artº I, b del Cº de Aº Económica). Gastos por otra parte que se administrarían por el Gobierno norteamericano en España siguiendo el mismo procedimiento que las inversiones y gastos derivados exclusivamente de los tres Convenios, procedimiento ya comentado (Artº III, 1. Cº Aº para la defensa).

Con esta amplitud relativa a cualquier programa de Ayuda Exterior, la aplicación de estos preceptos rebasaba el ámbito estrictamente formal de los Convenios para abarcar relaciones - más amplias.

5. Hay finalmente en el Convenio de Aº Económica un Artí-

culo titulado "Resolución de las reclamaciones de los nacionales" que guarda una autonomía sustantiva frente a todo el conjunto convencional.

En el se establece entre los dos Gobiernos, la obligación de someter "a la decisión del T.I.J. o la de un tribunal de arbitraje o arbitral" toda reclamación presentada por los Gobiernos en nombre de uno de sus nacionales.

El objeto de estas reclamaciones lo constituye la adopción de medidas oficiales por cada Gobierno y que afecten a bienes o derechos de dichos nacionales, incluidos contratos o concesiones, circunscribiéndose en el tiempo a partir del 3 de Abril de 1948 (13).

Este punto no lo estudio en esta tesis; sin embargo - conviene destacar que este tipo de preceptos son más propios de un Tratado de Amistad y Cooperación, por su caracter general. - La misma nota interpretativa al Convenio establecía a propósito de esta cláusula compromisoria que todo acuerdo a que pudiera - llegarse al respecto quedaría sujeto "a la aprobación del Senado de los Estados Unidos de América" (punto 8), lo que le caracterizaba frente al resto de los preceptos, integrantes del Convenio, preceptos que no necesitaban del "advice and conyent" del Senado, como veremos en la Parte Sesta.

P A R T E S E G U N D A

CAPITULO I:

LAS BASES MILITARES Y EL DERECHO INTERNACIONAL:
SU PROBLEMÁTICA Y ENCUADRAMIENTO.

SECCION I: CONSIDERACIONES GENERALES

SECCION II: EMPLAZAMIENTO

CAPITULO I: Las bases militares en el extranjero y el Derecho internacional: Su problemática y encuadramiento.

SECCION I: Consideraciones generales

Antes de estudiar las bases militares o mejor, las zonas e instalaciones que preveía el Convenio que ahora examinamos, creo que es de interés situar este tema tan interesante en el plano internacional con el objeto de hacer unas reflexiones previas que nos sirvan, por una parte para comprender y acometer mejor su estudio y por otra, para tratar de situarlo con cierta claridad en este heterogéneo campo de las bases militares en el extranjero a la luz del Derecho Internacional.

Debemos resaltar, en primer lugar, un dato previo de carácter sociológico: la importancia de las llamadas "bases militares" y su problemática múltiple ha nacido en un momento histórico concreto; ha nacido a raíz de la segunda guerra mundial y ha alcanzado su auge en la época de la llamada guerra fría. "Después de 1945 y principalmente de la guerra de Corea", nos dice Flory (14) "las grandes potencias, aisladas o agrupadas en el seno de una entente, han obtenido, en tiempo de paz, la autorización de instalar y ocupar bases militares en un gran número de países extranjeros".

Este auge, que militar y estratégicamente se situa en estos años, es más tarde en plena crisis de Cuba, en 1962, cuando

alcanza su completo sentido político; en esta época los pueblos están pendientes de la grave situación por la que atravesó entonces el mundo (15).

Esta dato sociológico (y ello hay que tenerlo en cuenta) no debe desconocer, sin embargo, en modo alguno, que "las bases militares", salvando las diferencias, ya existían antes de la segunda guerra mundial. Es decir, no es un fenómeno moderno, ni desconocido totalmente para el Derecho Internacional.

SECCION II: Emplazamiento

1. Históricamente las "bases militares" se han encontrado en territorio en régimen de protectorado y ya en nuestros días encontramos bases militares aparecidas en virtud de situaciones que difieren notablemente en si mismas. Así, las encontramos en territorios sometidos a régimen de fideicomiso, o las situadas también en nuevos Estados que anteriormente estaban en situación colonial.

2. En cuanto a las primeras, podemos citar a título de - ejemplo, el Tratado celebrado entre Francia y Camboya de 11 de agosto de 1863, cuyo artículo 17 decía:

"Para llevar a cabo la realización de los artículos precedentes, el Gobernador de la Cochinchina, deseando establecer un terreno en el paraje denominado Chreuy Changva o los Quatre-Bras, para allí levantar un depósito de carbón y almacenes de aprovisionamiento para los buques franceses, S.M. el Rey de Camboya consiente en donar ese terreno por encima de la parte reservada en la parte extrema para construir un fuerte, debiendo tener el terreno concedido quince sons ó 500 metros entre los dos ríos. Si sobre tal terreno se encontrase una pagoda o lugar sagrado, se les respetará" (16).

Es interesante destacar, como vemos, que, por este Tratado, el Rey de Camboya autorizaba a Francia a través de su Gobernador en la Cochinchina a que se construyera un depósito de - carbón, unos almacenes de aprovisionamiento para la Marina francesa y el terreno oportuno para construir un fuerte. A medida - que vayamos profundizando en el tema iremos viendo que los pactos

en los que se preveen las que ahora llamamos "bases militares", al menos algunas de ellas, no se diferencian en gran manera de estas construcciones vistas en este Tratado de 1863.

Situación análoga la encontramos en el Tratado entre Francia y Annman de 6 de junio de 1884, en el artículo quince:

"... la autoridad francesa podrá hacer ocupar militarmente sobre el territorio de Annman y de Tonkin los puntos que ella crea necesarios para asegurar el ejercicio del protectorado" (17).

Si bien en este caso no se aludía a construcciones específicas en realidad, la situación de base era bastante análoga a nuestros efectos, a la vista en el Tratado anterior.

3. Por lo que se refiere a las bases militares existentes en territorios sometidos a fideicomiso "estratégico" (18), el - aprobado por el Consejo de Seguridad de la O.N.U. el 2 de abril de 1947, que ponía en manos de los Estados Unidos las islas del Pacífico, anteriormente bajo mandato japonés en la época de la - Sociedad de las Naciones dice que la Autoridad Administradora, los Estados Unidos, tiene título para establecer "bases militares, navales y aéreas y edificar fortificaciones en el territorio sujeto a fideicomiso (Artº 5) (19).

Asimismo en el resto de los acuerdos de Fideicomiso - aprobados por la Asamblea General en la segunda parte de su primera sesión (12-12-1946) se aludía, excepto en el referente a Nueva Guinea donde no se hacía referencia expresa a su futura -

existencia, a este punto, con la misma redacción u otra de naturaleza similar a la vista, en el caso de las islas del Pacífico.

4. Finalmente llegamos a un último grupo de bases militares de un Estado en territorio extranjero que son las existentes en base a acuerdos o tratados cuya "ratio essendi" es de naturaleza defensiva o conectados con toda la problemática de la Seguridad Internacional (20).

cuádruple división
5. Esta cuádruple división hasta ahora, vista, no es sin embargo exhaustiva totalmente. Hay que hacer mención a la hora de poseer una visión panorámica del problema, de las bases que aparecieron en época de guerra, fundamentalmente durante las dos guerras mundiales. Estas respondieron a una finalidad específica o si se quiere, a un objetivo inmediato: el servir para la derrota militar del adversario. Es este dato el que configuraría su status jurídico.

Su nacimiento tiene una autonomía propia y efectivamente la situación que motivaría su estatuto es realmente diferente al de los supuestos anteriores.

De época de la segunda guerra mundial eran las establecidas en Islandia por el Reino Unido en 1941 en el aeródromo de Reykjavik y devueltas por acuerdo de 4 de julio de 1946. También lo son, las establecidas en Portugal, en las islas Azores y en la isla Terceira por acuerdo de 17 de agosto de 1943, restituidas

el 2 de Junio de 1946, también por el Reino Unido (21). Podemos incluir asimismo aquí el tratado de 31 de marzo de 1942, concluido entre U.S.A. y Liberia donde se preveían la aparición en este último país de aeropuertos militares para su utilización por el primero (22). De este periodo son también las bases establecidas por el tratado de 9 de abril de 1941 entre U.S.A. y Dinamarca, - en Groenlandia (23).

En cuanto a estas bases militares, no hay ningún estudio técnico jurídico, al menos, a mi conocimiento.

6. Excluyendo, pues, las existentes en tiempo de guerra y sin ánimo de agotar el tema podríamos agrupar todas estas bases de la siguiente manera:

- a) bases militares en territorios sometidos a régimen de protectorado
- b) bases militares en territorios sometidos a régimen de fideicomiso
- c) bases militares en nuevos Estados ~~antes colonias~~
- d) bases militares cuya ~~ratio essendi~~ es su conexión con la problemática de la Seguridad y no comprendidas en el punto anterior.

De estos cuatro grupos, los dos primeros esto es, las bases que existieron en territorios sometidos a protectorado así como las existentes en territorios en régimen de fideicomiso apenas serán objeto de estudio y ello porque estos casos no plantean una problemática propia. Una característica común se da en estos

dos supuestos y es la limitación del "status internacional" de los territorios sometidos a algunos de estos dos regimenes.

Aquellas y estas se encuentran insertas en un régimen más amplio y en definitiva la naturaleza de los tratados de protectorado o el régimen del fideicomiso determinaría indirectamente la relación de esas bases con respecto al resto del territorio. Asimismo las competencias a ejercer, entre el Estado protector o administrador y aquel territorio sobre el que se ubican las bases, quedarían distribuidas según aquellos. En este caso la incidencia de las bases militares en estos territorios no se deduce de su propia existencia sino del tratado general que prevee o autoriza aquella, con lo que el problema se diluye a nuestros efectos.

Excluidos los dos primeros grupos pues, tan solo nos quedan los dos restantes. ¿Donde se sitúan las denominadas bases militares de nuestro Convenio defensivo?. Indudablemente entran dentro del grupo d, es decir, de aquellas cuya ratio essendi se inserta, como decíamos, con la problemática de la Seguridad Internacional.

7. Interesa sin embargo hacer una precisión y es que hasta ahora, este planteamiento ha sido general, teórico, o mejor - si se quiere, de encuadramiento. Llegado el momento de estudiar el status internacional de estas "bases militares en territorio extranjero" y especialmente las conectadas con la Seguridad entre

las que se encuentran las de nuestro Convenio defensivo, topamos indefectiblemente con una situación de hecho: la imposibilidad de un conocimiento, por una parte de la existencia misma de muchas de ellas y por otra ^{de} los textos convencionales que les han dado vida. Flory a este respecto decía ya en 1955 que: "Un recuento completo de las bases militares en el extranjero sería imposible. Las noticias sobre las realizaciones soviéticas son casi inexistentes. Las informaciones periódicamente dadas versan sobre las bases de los países occidentales; por razones de secreto militar, no son ni completas ni precisas... (24). Para emprender un análisis detallado sería necesario conocer el texto de todos los tratados y acuerdos técnicos. Sin embargo en este terreno el secreto militar constituye para el jurista un obstáculo insuperable" (25). La situación hoy, en verdad no ha cambiado notablemente.

¿Qué supone esto? Esto supone que los estudios sobre el tema no son muy numerosos y que resulta difícil encuadrar cualquiera de estas bases, en nuestro caso, las establecidas en este Convenio que estudiamos, dentro de una teoría general sobre el problema y lo es por la escasez de estudios doctrinales (26).

Vamos a concluir este capítulo y tomando como punto de partida estos datos de hecho, hagamos una consideración general que me parece importante: ¿Qué es lo que debemos entender por "base militar"?. En mi opinión y ya lo iremos viendo, el término no es estrictamente jurídico, sino que viene rodeado de

de toda esa carga político-sociológica de que hablábamos más -
arriba. El propio Convenio defensivo nos hablaba de "zonas e -
instalaciones" tan solo. Tengamos desde ahora presente este -
dato.

CAPITULO II:

APROXIMACION FORMAL AL CONVENIO DEFENSIVO.

SECCION I: ESTRUCTURA

SECCION II: OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES

SC. A. DE LOS ESTADOS UNIDOS

SC. B. DE ESPAÑA

SECCION III: VALORACION GENERAL PREVIA

CAPITULO II: Aproximación formal al Convenio Defensivo

SECCION I: Estructura

El Convenio Defensivo, es sin duda, el más importante de los tres. Desde la perspectiva de su estructura formal y de su relación con el derecho interno norteamericano (que estudiaremos en lugar oportuno) (27), quiero tan solo adelantar aquí el hecho de que mientras que los otros dos Convenios, como veremos más abajo, hacen referencia explícita a la legislación norteamericana sobre Seguridad Mutua, de 1951, en éste no se hace tal mención. Esto quiere decir que el Gobierno de los Estados Unidos, es decir, el Presidente en este caso, no se encontraba limitado sustantivamente. Expresándome más técnicamente, que no había de operar sobre la base de ninguna Ley interna que regulara los puntos de aquel, como en el caso del de Ayuda o del Económico, sino que operaba como titular del Poder Exterior, digamos, por ahora. En este caso, el Presidente actuaba no en calidad de administrador del Poder Legislativo, sino que, por el contrario, lo hacía como titular del Ejecutivo.

El Convenio consta de cinco artículos; sin embargo, la naturaleza de lo pactado es tan importante y abarca tal número de problemas que junto con él y en su desarrollo han ido apareciendo otros textos convencionales complementarios.

Ya en algunos de sus artículos se establecía que tales

textos convencionales complementarios eran necesarios. En el segundo, entre otros, se decía: "A los fines de este Convenio y de conformidad con los Acuerdos Técnicos que sean concertados entre las autoridades competentes de ambos Gobiernos..."

Estos Acuerdos a que se alude, son cuatro, además de un borrador al cuarto y llevan todos la misma fecha, es decir, 26 de septiembre de 1953. Son los que a continuación se indican:

- Acuerdo Técnico Anexo al acuerdo defensivo
- Acuerdo Técnico nº 1: Adquisición y desarrollo de las zonas, servidumbres e instalaciones acordadas.
- Anexo Técnico nº 2: Normas de construcción
- Anexo Técnico nº 3: Utilización de zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones.
- Borrador del Anexo Técnico nº 4: Personal.

Junto a ellos y en su desarrollo se fueron concertando paulatinamente, asimismo, veintidós Acuerdos de Procedimiento con enmiendas y complementos posteriores en algunos de ellos, que fueron los que regularon con detalle prácticamente todos los puntos conexos al Convenio, ya especificados en los Anexos Técnicos. - Como se irá viendo a lo largo de su estudio, desde la regulación de vuelos de aviones militares (Acdo nº 14) hasta los requisitos a cumplir por los Miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos, en lo que a pasaportes y documentos de identidad se refiere - (Acdo nº 10) se reglamentaron todo un grupo de materias a que - dio lugar la puesta en marcha del Convenio.

Frente a los Anexos Técnicos, los Acuerdos de Procedi-

miento, interesa resaltar lo ya apuntado: ninguno es de fecha 26 de septiembre de 1953. Diez de ellos se van sucediendo en el año 1954, once en 1955 y uno tan solo en 1956, si bien los acuerdos complementarios a algunos de ellos y algunas enmiendas son, lógicamente, muy posteriores: del año 1960 son, por ejemplo, la - enmienda de julio de 1960 al Acuerdo nº 18 sobre instalaciones - de petróleo en las bases navales españolas y el acuerdo complemen tario de mayo del mismo año al Acuerdo nº 25 sobre procedimientos navales en la base de Rota.

Esto refleja un dato significativo que me interesa resaltar y es que estos acuerdos fueron apareciendo en el tiempo, en función del momento y de su necesidad.

Es importante tener en cuenta también que estos Acuerdos de Procedimiento, sus complementos y enmiendas fueron formados, frente a los Convenios base, por personalidades militares, en particular, los Jefes del Alto Estado Mayor en cada momento, entre otros.

SECCION II: Obligaciones de ambas partes

Sc. A.: Obligaciones de los Estados Unidos

1. El Artículo primero contenía una introducción y tres puntos en los que se indicaban claramente las obligaciones de - ambos países. Por parte de los Estados Unidos, se obligaban a:

"... la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra y a través de un periodo de varios años, a fin de contribuir, con la posible cooperación de la industria española a la eficaz defensa aérea de España y para mejorar el material de sus fuerzas militares y navales en la medida que se convenga en conversaciones técnicas a la vista de las circunstancias..." — (punto 1).

Esta asistencia se especificaba algo más concisamente en el punto tres del mismo artículo:

"Al conceder asistencia a España, dentro de la política expresada, mientras avance la preparación de las zonas e instalaciones acordadas, el Gobierno de los Estados Unidos satisfará, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1, las necesidades mínimas de material requeridas para la defensa del territorio español, con el fin de que si llegase un momento en que se hiciera necesaria la utilización bélica de las zonas e instalaciones, se hallen cubiertas en la medida de lo posible las necesidades previstas en orden a la defensa aérea del territorio, y a la dotación de sus unidades navales, y lo más adelantado posible el armamento y dotación de las unidades de su Ejército" (punto 3).

Esta concesión de asistencia en forma de suministro de material de guerra, declarada en este artículo, tenía por objeto el contribuir a la eficaz defensa aérea de España y el mejorar el material de sus fuerzas militares y navales. El "quantum" de esa

ayuda no se especificaba, tan solo se decía sobre el punto: "en la medida que se convenga en conversaciones técnicas a la vista de las circunstancias"; también se establecían asimismo unos condicionamientos de tal ayuda, pero volvamos por ahora al objeto o fin de la ayuda porque merece estudiarse con algún detalle.

Como hemos visto, se hace una distinción y se habla por una parte de "eficaz defensa aérea de España" y por otra de "mejorar el material de sus fuerzas militares y navales" y esto no se hace, creo, sin sentido; no se habla de defensa marítima o - defensa terrestre sino de "defensa aérea". En realidad la ayuda general a las fuerzas armadas españolas tenían una prioridad en el Convenio y este era, no el mejoramiento de las fuerzas aéreas españolas, sino el contribuir a la eficaz defensa aérea de España. Con esta diferencia de matiz, había detrás una finalidad específica que el punto tres ya constataba, pero que ahora posee - un sentido más claro. Al conceder asistencia a España, decía, — mientras avance la preparación de las zonas acordadas, el Gobierno de los Estados Unidos, satisfará las necesidades mínimas de - material requeridas para la defensa del territorio español, con el fin de que llegado el momento de la utilización bélica de las zonas, se hallen cubiertas en la medida de lo posible las necesidades previstas en orden a la defensa aérea del territorio y a la dotación de sus unidades navales, y lo más adelantado posible el armamento y dotación de las unidades de su ejército.

Se vuelve en este artículo a utilizar esa expresión - "defensa aérea del territorio", y no es que las otras armas fueran dejadas de lado, cosa que como hemos visto no sucede. Se trataba en realidad de una necesidad impuesta por las circunstancias del momento. Entonces, el arma atómica no podía lanzarse, si no desde el aire. Carrero Blanco decía a este propósito (28):

"La utilización del explosivo nuclear no tiene por aquel entonces otra viabilidad que la que ofrece el bombardeo aéreo. La estrategia disuasoria de la OTAN, o lo que es lo mismo de los Estados Unidos, que es el único de sus miembros que dispone de tal arma, se basa en el empleo de las unidades del SAC ("Strategic Air Command") constituidas por aviones "B-36" "Conqueror" ..."

Era indudable que las zonas e instalaciones, de ser atacadas con mayor riesgo, lo serían por el aire, con armas atómicas y ante esto la defensa aérea de España y de las zonas allí situadas era un paso fundamental: debía ser dispuesta una red de alerta y lograr de la mejor manera posible una defensa eficaz.

Ya Martín Artajo, el propio signatario de los Convenios, hablaba en las Cortes en el discurso de presentación de aquellos, previo a su aprobación, de ese riesgo (29):

"Hubo que hacer ver al Gobierno estadounidense que un pacto militar de esta naturaleza obligaba al país a prevenir los medios para una defensa nacional proporcionada al riesgo, así en extensión territorial como en plenitud de eficacia..."

Después añadía:

"De aquí derivó la obtención del compromiso americano de ayuda al armamento de nuestro propio ejército, en la forma y cuantía que en los Pactos se

previene, comenzando por el ~~Arma de Aviación~~, ya que el peligro aéreo se ofrece como el más inminente en caso de conflagración, y siguiendo por la Marina, dada la gran extensión de nuestras costas y su vulnerabilidad, sin que esto quiera decir que se descuide la preparación del Ejército de tierra, singularmente mediante la modernización del utillaje de nuestras propias fábricas de armas y municiones".

Aunque no sea el lugar oportuno, digamos a este respecto que se estipulaba por otra parte en el Artículo III, que España asumiría "la obligación de adoptar las medidas necesarias" para la seguridad exterior de las zonas convenidas. Esta redacción, parece indicar que España adoptaría medidas para garantizar la seguridad exterior de las zonas convenidas más como una carga u obligación que como un derecho en ejercicio de su soberanía.

Ya profundizaremos sin embargo sobre estos puntos en otro lugar.

2. Una vez visto el objeto y fin de la ayuda, veamos con algún detenimiento los condicionamientos de ella a que aludíamos más arriba.

Los correctivos o mejor los condicionamientos de esta ayuda, también se especificaban en el punto 1 del artículo primero:

"Tal apoyo estará condicionado, como en el caso de las demás naciones amigas, por las prioridades y limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los Estados Unidos y de las exigencias de la situación internacional y supeditado a las concesiones de crédito por el Congreso".

La asistencia a prestar a las fuerzas militares españolas estaría sometida pues, por una parte a los compromisos internacionales de los Estados Unidos; por otra, a las exigencias de la situación internacional y por otra a las concesiones de crédito por el Congreso. En realidad estos tres condicionamientos limitaban o podían en potencia limitar aquella asistencia - en gran medida. ¿A qué compromisos internacionales en particular se refería? ¿A los derivados de su participación en la O.T.A.N., S.E.A.T.O., etc., o tan solo de los bilaterales de ayuda a la - defensa? ¿Por qué no a ambos?.

De otra parte ¿qué había de entenderse, por exigencias de la situación internacional?. Un hecho resulta evidente de todo ello y es que en uno u otro caso, el Gobierno de los Estados Unidos, era, deduzco, pues nada se indica en el texto, quien determinaría aquellos y estas, sin olvidar en último lugar la "supeditación" de la ayuda a las concesiones de crédito por el Congreso, limitación clara que no plantea ningún problema de interpretación.

Esta es, lamentablemente, la fórmula que pasa a los - textos de 1963 con alguna analogía (30), y se plasma de forma idéntica y aún más condicionada (pues se somete la ayuda a la legislación de los Estados Unidos en general) en el actual Convenio de Amistad y Cooperación de septiembre de 1970, en su artículo - 31 (31).

Sc. B.: Obligaciones de España

1. Por este Convenio, España se obligaba a autorizar "al Gobierno de los Estados Unidos a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el Gobierno de España aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos Gobiernos, como necesarias, "para los fines del Convenio, - con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden". - (Punto 2; Artº I).

Quedaba autorizado a este efecto el citado Gobierno a "preparar y mejorar las zonas e instalaciones convenidas para - uso militar y realizar en cooperación con el Gobierno de España, las construcciones necesarias a tal fin" (Artº II).

Vemos que se habla de "preparar y mejorar" en el texto y aún cuando posteriormente profundicemos sobre este punto, digamos por ahora que, con respecto a las zonas no se tuvo en principio una idea cierta sobre su número y localización, más aún, incluso su misma construcción. Es indicativo, a este respecto, resaltar lo que Mr. Perkins, Ayudante del Secretario de Estado para Asuntos Europeos, decía en julio de 1951, ante el Comité Conjunto de Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores del Senado (32).

"Como Vds. saben, el Almirante Sherman, fue allí (España) precisamente antes de su reciente muerte hace unas pocas semanas e inició conversaciones con Franco. ¿Cual es su programa?, comenzaremos a dialogar con los Españoles sobre la viabilidad de utilizar ciertas facilidades en España, no establecer bases en el momento presente, sino

que tendríamos el derecho a utilizar algunas de sus facilidades navales y aéreas.

Para hacer esto es probable que vaya siendo - necesario realizar algunas mejoras en algunas de aquellas facilidades para hacerlas útiles a nuestros propósitos".

2. Salvando lo que especificaban los Acuerdos técnicos - que veremos en su momento, el Convenio no era muy explícito en lo referente a la utilización de las "zonas e instalaciones". El Artículo II nos hablaba de lo que podría interpretarse como fines de utilización de aquellas en tiempo de paz, interpretación "a - sensu contrario" de lo dispuesto en el Artículo III, que hablaba de la utilización bélica. En este sentido podemos agrupar aquellos de este modo: a) acuartelar y alojar el personal civil y - militar indispensable en las mismas; b) almacenar y custodiar - provisiones, abastecimientos, equipo y material; y c) mantener - y mejorar las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de - dichas zonas y de su personal.

Por lo que respecta, sin embargo a su utilización bélica, su momento y utilización sería fijados "de mutuo acuerdo" (Artº III).

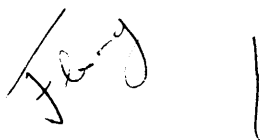
3. Con el fin de que el Gobierno de los Estados Unidos - llevaran a cabo y actuaran aquellos derechos, el Gobierno español se obligaba en este Convenio a "adquirir" los terrenos que pudieran "ser necesarios para fines militares", libres de toda carga o servidumbre: terrenos que pudieran ser necesarios para

finés militares, destaquemos esto porque en ejecución de este -
 Convenio defensivo habría de erigirse un complejo de instalaciones
en nuestro territorio.

La propiedad del suelo y de las obras de carácter permanente que se construyeran serían del Gobierno español, reservándose los Estados Unidos "el derecho de retirar todas las demás -
 construcciones e instalaciones hechas a sus expensas" bien cuando lo estimare conveniente, bien cuando el convenio fuese cancelado. En este último punto España podría, previa tasación, adquirir las siempre que no fueran "instalaciones de índole reservada" (Artº IV), expresión por otra parte muy significativa.

SECCION III: Valoración general previa

1. Es interesante resaltar en este momento que las obligaciones establecidas para ambas partes, al menos, las contenidas en el propio Convenio, parecieron en aquella época, valoradas globalmente muy positivas para la parte española. Flory, a este respecto decía en 1955 (33):

 "Por razones complejas, las bases extranjeras en España tienen un estatuto bastante particular por el que el cedente parece haber reservado el máximo de ventajas de las bases conjuntas, manteniéndose la casi totalidad de las prerrogativas de la soberanía".

Por nuestra parte se pensaba en 1953, que la expresión "conjuntamente con el Gobierno de España", con respecto a su utilización de que hablaba el Artículo I, 2 y más concretamente la expresada en el Artículo III: "Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta quedarán siempre bajo pabellón y mando español", con la reserva para los Estados Unidos tan solo, de "ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo estadounidense", eran fundamentalmente las garantías que dejaban sin afectar la soberanía española.

Martín Artajo, hablando en las Cortes en su discurso - ya citado de presentación en los Convenios (34) del espíritu de comprensión habido durante todas las negociaciones, decía:

"Ello nos permite esperar que este espíritu de - respeto a la plena independencia nacional, consiguado en los Acuerdos, perdure también en su apli-

cación, permitiendo la colaboración estrecha entre los dos pueblos que han negociado estos Acuerdos con perfecto respeto a su plena soberanía y a su total independencia" (35).

El propio Jefe del Estado, se manifestaba en este sentido en el discurso que a propósito del envío de los Convenios a las Cortes adjuntaba, al decir que la nación española iniciaba - esta colaboración con los Estados Unidos de América "dejando a - salvo nuestras peculiares ideologías y dentro de nuestra insobornable soberanía" (36).

Un estudio más pormenorizado del desarrollo de este -
Convenio nos hará ver que estas afirmaciones no son enteramente
exactas.

CAPITULO III:

EL CONVENIO Y LAS COMPETENCIAS NORTEAMERICANAS EN ESPAÑA: SU DETERMINACION.

SECCION I: INTRODUCCION

SECCION II: DETERMINACION DE ESTAS:

- SC. A. COMPETENCIAS DE LAS F.A.-U.S.A. EN NUESTRO ESPACIO AEREO.
- SC. B. COMPETENCIAS DE LAS F.A.-U.S.A. EN NUESTRO ESPACIO MARITIMO.
- SC. C. COMPETENCIAS DEL GOBIERNO U.S.A. RELATIVAS A LA CONSTRUCCION DE LAS ZONAS E INSTALACIONES.
- SC. D. COMPETENCIAS DEL GOBIERNO U.S.A. RELATIVAS A LA UTILIZACION DE LAS ZONAS E INSTALACIONES; SU PROBLEMÁTICA.
- SC. E. COMPETENCIAS DEL GOBIERNO U.S.A. COMPLEMENTARIAS DE LA UTILIZACION DE LAS ZONAS E INSTALACIONES.
- SC. F. LAS F.A.-U.S.A. EN ESPAÑA Y LA UTILIZACION DE LAS ZONAS E INSTALACIONES.

CAPITULO III: El convenio y las competencias norteamericanas en España: Su determinación

SECCION I: Introducción

1. Vamos a estudiar en este Capítulo cuáles eran, como - dice el título, las competencias norteamericanas en España, ejercidas en virtud del conjunto de textos convencionales que desarrollaron el Convenio Defensivo.

Su estudio nos presenta dos núcleos importantes de problemas, que podríamos denominar técnicos o formales. Veamos en qué consisten éstos.

De los textos pactados que constituyen y forman este - Convenio, surgen toda una gama de competencias que abarcan sectores específicos y que poseen naturaleza propia. ¿Podríamos sintetizar esas competencias de acuerdo con algún criterio jurídico?. El problema no es sencillo en modo alguno y exige previamente un conocimiento bastante completo de aquellas, estudio donde precisamente se observa la disociación existente entre el texto del - Convenio Defensivo y algunos de los Acuerdos Técnicos, de Procedi- miento que lo desarrollan, por una parte, y entre estos textos y su auténtico contenido sustantivo, por otra. Esta dificultad será la más importante de superar.

A título de ejemplo podemos resaltar un supuesto que - para mí posee una gran importancia pues refleja claramente esa -

disociación y que en principio aparece difuminado en el Convenio. Ya hemos visto que España autorizaba al Gobierno de los Estados Unidos a desarrollar, mantener y utilizar, juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española. ¿Qué significaba sin embargo esto? ¿Cual era la amplitud del concepto "zonas e instalaciones"? y lo que es más importante ¿qué se entendía por territorio bajo jurisdicción española?. A primera vista quizá pudiera parecer sin sentido interrogante, sobre todo, su segunda parte, pero no lo creo así ¿Se debía entender el territorio, en un sentido técnico-físico o en un sentido más amplio? ¿Se refería al espacio marítimo, al aéreo y al territorio físico, o tan solo al tercero?.

Pongo este caso como ejemplo tipo de las disociaciones de que adolecen los textos, pues como ya iremos viendo las competencias de los Estados Unidos no se limitaban a las relativas al territorio propiamente dicho, sino también y resalto de nuevo su importancia a las poseídas en nuestros espacios aéreo y marítimo.

2. El segundo núcleo de problemas como arriba decía es técnico-formal pero creo que tiene también cierta importancia: es el referente a la titularidad del ejercicio de las competencias de que hablamos y vamos a estudiar.

Es indudable que desde una perspectiva estrictamente -

jurídica (37) son los Estados Unidos los titulares de aquellas y su Gobierno quien las actúa. Creo, sin embargo que es de interés estructurar su estudio teniendo en cuenta la letra de los diferentes acuerdos, pues nos aclarará bastante la realidad.

En este sentido destaquemos que se utilizan varias expresiones distintas. En el Convenio propiamente dicho se empleaba "el Gobierno de los Estados Unidos" tan solo, pero a medida que se desarrolla aquel, la terminología va modificándose y así en el Acuerdo Técnico Anexo aunque predomina el ya visto (Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10...), se habla en algunos casos de "Estados Unidos", como en el Artº 9: "... los Estados Unidos podrán, fuera..."; o en el Artº 14: "Los Estados Unidos podrán establecer...".

Es en este Acuerdo Técnico también, donde, determinando las competencias, se utiliza por otra parte la expresión: "Las Fuerzas de los Estados Unidos destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas" (Artº 7). Esta expresión merece destacarse porque es la única vez que aparecerá en todos los textos del Convenio y esto tiene una significación propia.

En conjunto, los términos utilizados son fundamentalmente estos tres: Gobierno de los Estados Unidos, Estados Unidos simplemente y Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El Acuerdo Técnico nº 3 sobre utilización de zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones, utilizaba en sus puntos (artículos) el término "Estados Unidos" (Introducción, párrafo

segundo; punto 3, b); puntos 6, 7 y 9) y el de "Fuerzas de los Estados Unidos" (puntos 4 y 8 entre otros). En los demás supuestos, esto es, prácticamente en todos los Acuerdos de Procedimiento que establecerían competencias específicas, ya se utilizaría tan solo el término Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (38).

¿Por qué esta variada titularidad?. Ya vimos más arriba que estos textos fueron apareciendo en el tiempo, en función del momento y de su necesidad; esto supuesto, es explicable esta falta de unidad orgánica sobre los titulares de las diferentes autorizaciones. A este dato, podemos añadir otro de mayor significación que es la muy diferente naturaleza de estas autorizaciones que ya iremos viendo y que en algunos casos se indicaban de forma muy específica. Pongamos como ejemplo el punto 8 del Acuerdo Técnico nº 3 donde se nos hablaba de "la utilización por las Fuerzas de los Estados Unidos de las telecomunicaciones, auxilio a la navegación...".

3. He querido mantener esta distinción de los propios Acuerdos, porque, aunque imperfecta en técnica jurídica, se amolda en gran medida a la realidad —es siempre de la realidad donde debemos partir— siendo tarea nuestra su estudio sustantivo. En este sentido distingo entre competencias de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en nuestros espacios aéreo y marítimo; competencias del Gobierno de los Estados Unidos relativas a la construcción —de las zonas e instalaciones; a continuación las competencias del

Gobierno de los Estados Unidos y de sus Fuerzas Armadas relativas a la utilización de las zonas e instalaciones, incluyendo - las que denomino competencias complementarias de la utilización de las zonas e instalaciones del Gobierno de los Estados Unidos.

Insisto, una vez más, que he seguido esta sistemática para no separarme de la realidad de los textos. En suma, se trata de una síntesis de esa gama de competencias y de esos sectores específicos de que hablaba al comienzo de la Introducción.

SECCION II: Determinación de estas

Sc. A.: Competencias de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el espacio aéreo español

1. Estas competencias atribuidas específicamente a las - Fuerzas Armadas de los Estados Unidos —en adelante F.A.-U.S.A.—, no se contenían en el Convenio, sino en el Acuerdo Técnico Anexo y en el Acuerdo de Procedimiento nº 14. No se encuentra en ellos ninguna conexión específica con aquél, pues en el Acuerdo Técnico Anexo se exponía estas competencias empleando tan solo, como veremos, la expresión "a los fines de este acuerdo". Y de otra parte, en el Acuerdo de Procedimiento se utilizaba la fórmula - "en consecuencia con la autorización contenida en los acuerdos de fecha 26.9.53".

La única alusión, muy concisa por otra parte, que se hace al respecto, estaba contenida, no en estos textos, sino en el Acuerdo Técnico nº 3, sobre utilización de zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones, donde claramente se autorizaba "a los Estados Unidos a utilizar en la medida que se estimase necesaria ... derechos de paso ... bajo los términos del Acuerdo Técnico firmado en 26.IX.53...". No se significaban, sin embargo, ni definían por su parte cuáles eran aquellos y los términos del indicado Acuerdo Técnico eran poco específicos como hemos visto. Quizá fuera esa autorización a la que se referían los — Acuerdos de Procedimiento. En cualquier caso, un hecho es evidente

y es que en el Convenio nada se indicaba al respecto. Esto debemos tenerlo presente por ahora.

¿Cuáles eran pues las competencias de las F.A.-U.S.A. de que hablamos, en nuestro espacio aéreo?

El Acuerdo Técnico Anexo en su artículo 7 y el Acuerdo de Procedimiento nº 14, regulaban este punto, el primero de forma general, el segundo más detalladamente.

Interesa, sin embargo, antes de ver qué nos dice el artículo 7 a que aludimos, hacer notar que en él se hace referencia a dos supuestos distintos. Se decía por una parte que:

"Las Fuerzas de los Estados Unidos destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas tendrán libertad para desplazarse... en su espacio aéreo (en el español)..."

Hasta aquí, se circunscribía la libertad de desplazamiento en nuestro espacio aéreo a las Fuerzas de los Estados Unidos destinadas en España. Sin embargo continuaba:

"La misma libertad se reconocerá a... las aeronaves dependientes de dichas Fuerzas, o afectas al servicio de los Estados Unidos a los fines de este acuerdo..."

Tales aeronaves... que se hallen en el espacio aéreo, estarán sometidas al control de sus mandos, pero observarán las normas de tráfico convenidas entre las Autoridades competentes de ambos Gobiernos..."

En estos párrafos, se autorizaba e importa resaltarlo, a las aeronaves dependientes de las Fuerzas Armadas U.S.A. o afectas al servicio de los Estados Unidos a los fines del Acuerdo, a sobrevolar nuestro espacio aéreo. Cabría preguntarse algunos puntos al respecto, pero destaquemos tan solo aquí que se les otor-

gaba en este Artículo una autorización general para sobrevolar nuestro espacio aéreo.

2. El Acuerdo de Procedimiento nº 14 de 12 de noviembre de 1954, que versa sobre "Regulación de vuelos de aviones militares", insistía de forma clara en su Artículo 1º en este mismo punto, sin aludir ya a las Fuerzas destinadas a servir las zonas e instalaciones acordadas. En efecto:

"En consecuencia con la autorización contenida en los acuerdos de fecha 26 de septiembre de 1953 - quedan autorizados los aviones militares de los - Estados Unidos de América o aviones de transportes contratados por el Gobierno de los Estados Unidos, para sobrevolar, aterrizar o despegar en España o en territorio bajo control español. Para la ejecución de esta autorización se acuerda lo siguiente...".

La autorización no presenta obscuridad en este punto, pues abarcaba a los aviones militares de los Estados Unidos de América y a los aviones de transporte contratados por el Gobierno del mismo país, aviones a los que más arriba se había denominado como "afectos al servicio de los Estados Unidos".

Este Acuerdo de Procedimiento tenía nueve puntos, pero solo nos interesan algunos de ellos, concretamente el referente al tráfico aéreo en general (punto dos) y al tráfico aéreo para entrenamiento (punto tres).

En lo que concierne al tráfico aéreo, el punto más relevante, establecía que:

"a) Todos los vuelos se llevarán a cabo de acuerdo con planes de vuelo debidamente aprobados..."

Estableciéndose a continuación quien había de otorgar la autorización:

"b) Los Mandos militares de los Estados Unidos concederán las autorizaciones de vuelo para todos los aviones del Gobierno de los Estados Unidos así como para los aviones de transporte contratados por dicho Gobierno que entren, salgan, sobrevuelen o efectúen vuelos en España o por territorio bajo control español..."

Importa resaltar la autonomía, en este punto, de los Mandos Militares de los Estados Unidos; autonomía que quedaba limitada en algún supuesto a una notificación a las Autoridades españolas competentes:

"c) Las autoridades de los Estados Unidos notificarán siempre que sea posible, a las autoridades españolas competentes, ~~con doce horas de antelación~~, los vuelos de aviones en formación a partir de la unidad escuadrón y que entren, salgan o sobrevuelen por España o por territorio bajo control español".

Vemos pues, que la libertad de movimientos de la aviación militar de los Estados Unidos en nuestro espacio aéreo era bastante amplia. En realidad la limitación de que se hablaba no era propiamente tal.

Por otra parte, sin entrar en el análisis de la significación del término "siempre que sea posible", del último párrafo transcrito, difícil de interpretar jurídicamente, parece evidente que la indicada notificación, no era exigible siempre. Ya insistiremos sin embargo, sobre esto, en otro momento.

Los Reglamentos de vuelo vigentes, y las instrucciones dictadas por las Autoridades (españolas) regionales o locales de

los Centros de control de Tráfico Aéreo, si habían de ser respetadas, (punto 2, a). Estas eran, en realidad, las únicas limitaciones, limitaciones técnicas, de la aviación militar de los Estados Unidos en nuestro espacio aéreo, según se indica en el Acuerdo (39).

El subpunto d) de este punto 2 (Tráfico Aéreo) nos hablaba de los casos de emergencia y parece equívoco. Decía que "en caso de emergencia, quedan autorizados los aviones militares de los Estados Unidos para aterrizar y despegar en cualquier Base aérea española". Creo, sin embargo entender que se debía referir a emergencias no precisamente bélicas. En estos supuestos, aquellos, quedaban autorizados para aterrizar y despegar "en cualquier Base aérea española". Tengamos presente que se indicaba base aérea española, es decir que no solamente podrían aterrizar y despegar de las indicadas en el Anexo Técnico nº 1, - que veremos en su momento, sino de cualquier base española, cualquiera que fuera, por lo tanto su ubicación.

Esta clausula, sin embargo, es lógica objetivamente y no nos vamos a plantear la interpretación del término "en caso de emergencia".

El punto 3 estipulaba que se pondría a disposición de las Autoridades militares de los Estados Unidos: "el espacio aéreo que resultara necesario para entrenamiento", (punto 3, a) (40) con la lógica eximente de no dar partes periódicos de situación a los centros de control ya que estarían operando siempre

dentro de unos puntos previamente acordados (41).

Antes de concluir esta parte, quisiera comentar el - punto 6 de este Acuerdo que tenía como epígrafe: "Accidentes - ocurridos a aviones militares de los Estados Unidos" y esto por una razón importante y es que creo que podemos conectar algunos de sus puntos, con otros a tratar en su momento. El párrafo más significativo es el primero en el que se decía:

"En caso de accidente ocurrido a aviones militares de los Estados Unidos o a aviones contratados por el Gobierno de los Estados Unidos las - Autoridades españolas y de los Estados Unidos - cooperarán en la adopción de las medidas de salvamento con responsabilidad primaria de las Autoridades de los Estados Unidos. Las medidas para hacerse cargo de retirar el avión averiado y su equipo técnico, serán de la responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados Unidos".

Quisiera resaltar en este párrafo el dato de que la - retirada del equipo técnico sería de la responsabilidad de los Estados Unidos con lo cual no cabía la posibilidad de que las - Autoridades Militares españolas pudieran tener acceso a un equipo técnico propiedad de los Estados Unidos, sin su consentimiento.

El párrafo segundo dejaba en las Fuerzas militares o de Policía española la "responsabilidad de la seguridad exterior de tales aviones averiados":

"Las Fuerzas militares o de Policía española tendrán en principio la responsabilidad de la seguridad exterior de tales aviones averiados. Sin embargo, de llegar primero al lugar del accidente las Fuerzas Militares de los Estados Unidos -

estas asumirán dicha responsabilidad en tanto -
lleguen las Fuerzas españolas".

Finalmente, el régimen excepcional del status de las
aeronaves militares de aquel país en nuestro espacio aéreo, con-
figurado como "caso de hostilidades o inminencia de las mismas"
era claramente especificado: "cualquier limitación o restricción
antes citada queda anulada" (punto 9).

No eran muchas, en realidad, aquellas.

Sc. B.: Competencias de las Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos en el espacio marítimo español *P. Tecuinos y Se Pooce*

1. Ya vimos al estudiar las competencias de las F.A.-U.
S.A. en nuestro espacio aéreo que no ~~se hallaban contenidas~~ en
el Convenio. Pues bien, otro tanto sucedía en el caso del espa-
cio marítimo, es decir, tampoco aparecía referencia de ellas en
el Convenio defensivo, sino que es en el Acuerdo Técnico Anexo
donde se indicaba, en el mismo artículo 7, al que ya hicimos -
referencia, cuando hablamos del aire; estableciéndose claramen-
te el contenido de aquellas en el Acuerdo de Procedimiento nú-
mero 11.

La única alusión general a estas competencias, se con-
tenía pues, como dijimos, entonces en el Acuerdo Técnico nº 3 -
sobre utilización de zonas convenidas derechos de paso e insta-
laciones donde se autorizaba a los Estados Unidos a utilizar -

derechos de paso aunque no se especificaba la naturaleza de aquellos. Traigamos pues aquí las consideraciones generales que hacíamos al hablar del espacio aéreo.

¿Qué competencias eran estas?. El artículo 7 del Acuerdo Técnico Anexo se ocupaba de este punto y así:

"Las Fuerzas de los Estados Unidos destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas tendrán libertad para desplazarse... en - las aguas jurisdiccionales (españolas)..."

Se hablaba en este punto pues de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas, pero a continuación resaltaba:

"La misma libertad se reconocerá a los buques, - embarcaciones... dependientes de dichas Fuerzas, o afectas al servicio de los Estados Unidos a los fines de este Acuerdo... Tales buques... que se hallen en... aguas jurisdiccionales... estarán sometidas al control de sus mandos, pero observarán las normas de tráfico convenidas entre las Autoridades competentes de ambos Gobiernos..."

Destaquemos aquí, al igual que en el caso del espacio aéreo, que esta autorización no se circunscribía a los buques dependientes de las Fuerzas de los Estados Unidos destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas sino que era más amplia y general, abarcando a los "buques visitantes - de la Marina de los Estados Unidos" así como aquellos bajo "control del Departamento de Defensa de los Estados Unidos".

2. El Acuerdo de Procedimiento que desarrollaba específicamente esta libertad de utilización era el nº 11, que conte-

nía las Normas relativas a las visitas de buques de los Estados Unidos a puertos españoles, completado por unos Procedimientos Navales para dar cumplimiento a estas normas. El Acuerdo decía en su artículo 1º:

"En consecuencia con la autorización contenida - en los Acuerdos de 26.9.53 se acuerda que tanto los buques visitantes de la Marina de los Estados Unidos como aquellos bajo el control del Departamento de defensa de los Estados Unidos podrán entrar, maniobrar y salir de los puertos - españoles y aguas territoriales con arreglo a - las condiciones que aquí se establecen".

A la vista de estos artículos podemos preguntarnos: ¿a qué espacios marítimos se referían estos acuerdos?. Por una parte el Acuerdo Técnico nos hablaba de aguas jurisdiccionales y el artículo primero que acabamos de ver nos habla por su parte de puertos españoles y aguas territoriales. Dejemos por ahora esta interrogante para más tarde y adelantemos tan solo que en torno a este punto no se hacía distinción sustantiva entre mar territorial y aguas interiores.

Por otra parte, frente al artículo anterior, en este se matizaba algo más y se concretaban los buques autorizados, que eran los de la Marina de los Estados Unidos y aquellos bajo el control del Departamento de Defensa. Esta concreción se especificaba de forma detallada en el número dos de los Procedimientos Navales donde se establecían estas categorías:

"a) Buques de la Marina, tanto combatientes como auxiliares, bajo el control operativo de los mandos de la flota de los Estados Unidos.

b) Buques de la Marina bajo control operativo del Servicio Militar de Transportes Marítimos -

(MSTS) (Military Sea Transportation Service).

c) Buques al servicio de la marina y denominados USNS (United States Naval Ships), todos - los cuales son propiedad de los Estados Unidos y manejados por el Servicio Militar de Transportes Marítimos (MSTS).

d) Otros buques que se encuentren bajo el control y al servicio del Departamento de Defensa".

¿Cuáles eran, sin embargo las condiciones de que nos hablaba el artículo primero del Acuerdo?. Las condiciones venían contenidas en el propio Acuerdo donde se establecían tres tipos de visitas o escalas: A, B y C y en función de cada una de ellas se indicaban aquellas:

"Los tipos de visitas o escalas para buques se clasifican y definen como sigue:

a) Tipo A. Visitas o escalas sin protocolo - son aquellas en que el ceremonial queda restringido a los saludos y visitas normales.

b) Tipo B. Visitas o escalas operativas son aquellas que tienen lugar principalmente por razones de logística, reparaciones o la realización de misiones operativas.

c) Tipo C. Visitas o escalas de cortesía son las de naturaleza protocolaria, en el curso de las cuales se realiza un intercambio de cortesías y recepciones oficiales, realizándose las gestiones previas por vía diplomática". (punto 2).

De estos tres tipos, el segundo, el "B", es el que - tiene más relevancia para nosotros, por ser su motivación razones de logística y la realización de misiones operativas.

Se establecía a este respecto en el acuerdo, que a - excepción de las visitas del tipo C, que por otra parte no tenían ninguna relevancia operacional militar y que requerían gestión previa por vía diplomática en cada caso específico, en los otros dos supuestos, visitas o escalas A y B, tan solo se exi-

gía "notificación oportuna sin más formalidades" (punto 3), - término que ya hemos visto utilizado con respecto a la aviación militar.

En estos casos la notificación había de tramitarse - iniciándose por el Departamento de Defensa, el Jefe de Operaciones Navales o los Mandos designados y se tramitaría al nivel de los Mandos de la Marina (punto 3).

A continuación se indicaba que quedaba sobreentendido que "salvo notificación en contra existe el permiso diplomático para las citadas visitas".

Creo, podemos derivar de aquí que cabía la posibilidad de control por parte de las Autoridades españolas de esas visitas o escalas, interpretación que parece confirmada en el punto 3, párrafo b) de los Procedimientos Navales, donde se subrayaba que:

"b) La notificación será dirigida al Agregado - Naval de los Estados Unidos (ALUSNA) en Madrid, España, el cual se pondrá de acuerdo con las competentes Autoridades Militares españolas, y tendrá informado de ello a la Embajada de los Estados Unidos" (42).

Parece pues, que estas visitas o escalas A y B podían no obtener el permiso diplomático en algunos supuestos, si bien ésta no era la presunción general, presunción que venía explicitada en el punto tres del Acuerdo y que decía, como vimos, que - "salvo notificación en contra existe el permiso diplomático para las citadas visitas". Esta inserción es significativa como veremos en su momento.

Así en el Artº 1, punto 2, se autorizaba a aquel a desarrollar "aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española" que se conviniera como "necesarias para los fines de este Convenio".

Es en el Acuerdo Técnico Anexo donde se ampliaba la autorización vista al preverse que los Estados Unidos podrían:

"... fuera de las zonas convenidas, construir ... oleoductos, almacenes y otras instalaciones, así como ampliar y construir caminos, puentes, mejorar y dragar fondeadores, dársenas y canales que faciliten el acceso y servicio de dichas zonas" (punto 9).

Esto se realizaría en los términos y condiciones que se acordara con las Autoridades españolas competentes.

También se autorizaba la construcción de instalaciones de telecomunicación, (punto 10).

Toda esta gama de construcciones, en síntesis podríamos agruparlas en: a) zonas e instalaciones en sentido estricto, b) instalaciones de apoyo y c) otras instalaciones, tres grandes categorías que nos van a servir como categorías de trabajo.

Una conclusión podemos avanzar ahora y es que además de las zonas en sentido estricto, se iban a construir todo un complejo de instalaciones de las que explícitamente nada se decía en el Convenio excepto cuando nos hablaba "de mantener y manejar las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de dichas zonas y de su personal" (Artº II, in fine), términos - por otra parte algo generales.

El Anexo Técnico nº 1 desarrolla y enumera con más -

Por otra parte, en torno a este procedimiento me parece importante resaltar que la conexión entre los Estados Unidos y España se llevaría a cabo a través de la Embajada, en el Agregado Naval y las Autoridades Militares españolas competentes, a diferencia del caso de los aviones militares donde se hablaba de Autoridades de los Estados Unidos y Autoridades españolas competentes (punto 2, c). Acdo. Pto. nº 14). Ya veremos en su momento la significación que ello encierra.

Finalmente se preveía en el punto 3 c) del Acuerdo, los casos de emergencia, donde este procedimiento visto quedaba alterado:

"En caso de urgencia, incluidas condiciones de mal tiempo en que no pudiera hacerse notificación anticipada de la visita o escala, se dará cuenta rápida de los detalles de la visita o escala a las Autoridades Navales españolas competentes y al Agregado Naval de los Estados Unidos".

Sc. C.: Competencias del Gobierno U.S.A. relativas a la construcción de las zonas e instalaciones

1. El Convenio defensivo que estudiamos no era muy explícito en lo relativo a la determinación de las zonas e instalaciones y en el proceso a seguir; toda esta normativa se incluía - en los acuerdos técnicos y de procedimiento. Lo que sí se indicaba en él era la autorización general que se otorgaba al Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la construcción de aquellas.

detalle cada uno de estos tres grupos:

a) Zonas e instalaciones en sentido estricto.-

En cuanto al primero de nuestros tres grupos, se consideraban autorizadas por ambas partes en el citado Anexo técnico, las siguientes zonas:

- "a) Base aérea de Madrid-Torrejón
- b) Base aérea del Copero
- c) Base aérea de Morón de la Frontera
- d) Base aérea de Sanjurjo
- e) Base aérea de Muntadas o Reus
- f) Base aérea de Los Llanos
- g) Base aérea de los Palacios
- h) Base aérea de Alcalá y San Pablo
- i) Muelle de descarga y pista de despegue en Matagorda
- j) Base aereonaval de Rota" (punto 3).

En cada una de estas localidades se autorizaba la realización de obras con fines:

- "a) Entretenimiento y utilización de aeronaves y buques.
- b) Dirección y mando.
- c) Almacenamiento y distribución de material, - abastecimiento y municiones.
- d) Alojamiento para personal, comedores y recreo.
- e) Comunicaciones.
- f) Servicios de protección de vuelo.
- g) Medios de transporte.
- h) Zonas de estacionamiento" (punto 5).

En la base aeronaval de Rota, además de la realización de estas obras, quedaba autorizado el Gobierno de los Estados Unidos a la construcción de:

- "a) Instalaciones aeronavales para base, revisión, instrucción y operación de toda clase de aeronaves.
- b) Instalaciones portuarias para carga y descarga de aviones, productos petrolíferos, municiones y carga general.
- c) Instalaciones de almacenamiento y distribución, para la recepción, almacenaje y expedición de

productos petrolíferos, incluyendo la expedición de estos por el oleoducto a otras zonas convenidas situadas dentro de España.

- d) Instalaciones de almacenamiento para la recepción, almacenaje y expedición de municiones.
- e) Instalaciones de transmisiones y ayudas para la navegación en operaciones militares".

b) Instalaciones de apoyo.-

Para el estudio de las instalaciones de apoyo, en nuestra terminología, podemos distinguir entre a, depósitos, bien de combustible, bien de municiones; b, oleoductos y c, instalaciones técnico logísticas.

a,)

Se autorizaba al Gobierno de los Estados Unidos en el Acuerdo Técnico nº 1 que estamos viendo, a instalar, por lo que respecta a servicios navales:

"... nuevos depósitos subterráneos o ampliación de los existentes destinados a combustibles y municiones en las localidades siguientes:

San Cristobal
Cartagena
El Ferrol
Palma
Mahón
Soller
Tarifa" (punto 6).

Es importante destacar que estas localidades así definidas aquí, era "localizadas", valga la expresión, más específicamente en momentos posteriores (43). Así, la autorización para la construcción, rehabilitación o acabado de depósitos para instalaciones petrolíferas se llevaría a cabo en Cartagena, El Ferrol y Mahón, según se indica en el Acuerdo de Procedimiento

nº 18, punto 2, que lo veremos en otra ocasión y que en cuanto a Soller, Tarifa, Cádiz, Palma de Mallorca y Canarias indicaba que serían objeto de acuerdo aparte, no habiendo llegado hasta mi estos.

Otro tanto ocurre con los depósitos de municiones para cuya construcción, rehabilitación o acabado quedaba autorizado asimismo el citado Gobierno.

El punto 7 de nuestro Acuerdo Técnico, preveía también la construcción de:

"...depósito de productos petrolíferos en las localidades que se mencionan con las capacidades - que más tarde se acuerden".

Se incluía estas localidades, sobre las que caben las mismas consideraciones indicadas inmediatamente antes, referidas a su localización:

"Zona de Cádiz
Zona de Bilbao
Zona de Madrid
Zona de Sevilla
Zona de Albacete
Zona de Barcelona".

El Acuerdo de Procedimiento nº 17 sobre construcción y utilización de instalaciones para depósitos de combustible en los aeropuertos civiles, efectivamente, autorizaba al citado — Gobierno la construcción de estos depósitos en Madrid, Sevilla y Barcelona, no mencionando ninguno de los otros.

Interesa resaltar ~~de~~ nuevo que estas instalaciones — son diferentes de las del grupo anterior, con la particularidad además de que las obras sobre depósitos de combustible, de que

nos habla el punto 6, se realizarían en localidades que eran bases navales españolas como nos dice el Acuerdo de Procedimiento nº 18 que lo desarrolla y ya mencionado. En cuanto a los depósitos de productos petrolíferos del punto 7, sus zonas de ubicación eran aeropuertos civiles españoles como veremos en el Acuerdo de Procedimiento nº 17, que los desarrolla asimismo. Son pues lugares diferentes de las "bases", valga el término.

b,)

En cuanto a los oleoductos, decía el punto ocho que se podían:

"... establecer los acuerdos para emplazamiento y establecimiento de servidumbres necesarias para la construcción de los siguientes oleoductos:
a) Matagorda a Madrid
b) Madrid Albacete
c) Madrid a Zaragoza
d) Bilbao a Zaragoza
e) Barcelona a Muntadas-Reus
f) Albacete a Cartagena
g) Rota a San Cristóbal" (punto 8).

Estas ubicaciones, que iban a adaptarse en el Acuerdo Técnico nº 3, sobre utilización, se concretaron sin embargo definitivamente en el Acuerdo de Procedimiento nº 22 donde se autorizaba a los Estados Unidos a la construcción de un oleoducto - para productos petrolíferos, con sus instalaciones afines (punto 1), con tuberías de enlace con las bases (punto 2), así como la existencia de puntos de almacenaje a lo largo de aquel (punto 2). De esta manera se construirá un oleoducto principal que

consistiría en "una tubería subterránea que iría desde el terminal de almacenaje de productos petrolíferos en Rota, hasta - Zaragoza" (punto 2, párrafo 1).

c,)

Finalmente las llamadas instalaciones técnico logísticas venían previstas en los puntos 10 y 11, con una redacción muy abstracta, al menos el primero, al indicar tan solo:

"Emplazamiento de los puestos de control de aviones y de alarma antiaérea en las localidades que acuerden las Autoridades Técnicas de ambos países" (punto 10).

El siguiente era algo más concreto:

"En igual forma se convendrán las localidades - más adecuadas para depósitos de material, para construir la red de telecomunicaciones..." — (punto 11).

El Acuerdo de Procedimiento nº 7, que sin embargo es el que regulaba en concreto este punto nos hablaba en su epígrafe I de "los Estados Unidos" en general, y decía:

"... los Estados Unidos quedan autorizados a construir, instalar, utilizar y mantener telecomunicaciones, redes de auxilio a la navegación y de control de aviones y alarma antiaérea en las zonas - acordadas, en su inmediata vecindad, o en servidumbres establecidas fuera de las citadas zonas..." (punto 2).

Más abajo veremos no obstante este Acuerdo en extenso.

c) Otras instalaciones.—

Un tercer grupo, diferente de estos dos, es el que - hemos calificado de "otras instalaciones". Entran en esta categoría las carreteras y vías de acceso a las Bases donde fueran

necesarias (punto 9) que podían construirse, así como las construcciones a las que se autorizaba al Gobierno de los Estados Unidos, contenidas en el Acuerdo Técnico nº 3, es decir a:

- "1. Llevar a cabo dragados y mejoras portuarias en la zona de Cádiz.
2. Instalar aquellos auxilios suplementarios a la navegación que pueda acordarse" (punto 7,a.).

2. Aquella autorización pues al Gobierno de los Estados Unidos de que nos hablaba el Convenio en su Artículo I, para desarrollar "zonas e instalaciones ... necesarias para los fines" del mismo, se ampliaba y refería a todo este complejo de instalaciones y construcciones que podríamos agrupar de la siguiente manera:

- "a,- Bases aéreas, obras necesarias en ellas y construcciones en aeropuestos civiles españoles.
- a,, - Construcciones en bases navales españolas.
- a,,, - La Base Naval de Rota y el Muelle de descarga y pista de despegue en Matagorda.
- a,,,, - Construcciones técnico-logísticas, oleoductos y demás instalaciones.

En realidad, analizadas todas estas instalaciones podemos extraer como primera conclusión que constituyen un elemento estático de operatividad de las Fuerzas de los Estados Unidos.

Aunque ya insistiremos al estudiar sobre esto la significación de la utilización de estas zonas e instalaciones dentro del significado del propio Convenio, las bases aéreas y las construcciones técnico-logísticas eran en definitiva construcciones a llevar a cabo para la operatividad de las Fuerzas Aé-

reas Norteamericanas; otro tanto podría decirse de los oleoductos. Las construcciones por el contrario en las bases navales españolas de depósitos de municiones y de combustibles lo serían para la de la marina de aquel país. (La Base Naval de Rota y las instalaciones en Matagorda tenían conexión con ambas Armas, instalaciones por tanto a utilizar por la Marina y las F.A.-U.S.A. indistintamente).

Esto interesa resaltarlo para poder valorar perfectamente en su momento la significación de estas zonas e instalaciones a la hora de estudiar su naturaleza jurídica.

Efectivamente la aparición de las Fuerzas Aéreas y de la Marina de los Estados Unidos en nuestro espacio aéreo y marítimo iban a exigir todo este desarrollo complejo de instalaciones de muy diferente naturaleza como hemos visto, instalaciones, todas ellas que en el texto inglés del Convenio quedaban calificadas de "areas and facilities" (44).

3. La Expropiación de terrenos.-

Paralelamente a la autorización del Artº I, el Convenio establecía la obligación por parte del Gobierno español de poner a disposición del Gobierno de los Estados Unidos, los terrenos que pudieran ser necesarios para fines militares (Artº - IV), redacción que parece más concordante por mirar al fin, con el número de construcciones a realizar vistas; redacción, por otra parte que se repetía también en el Acuerdo Técnico Anexo.

Su Artº 1 decía:

"A los fines del antedicho acuerdo (45) el Gobierno de España podrá a disposición del de los Estados Unidos libre de toda carga y servidumbre, los terrenos que se convenga ser necesarios para la construcción... de las zonas e instalaciones acordadas, sin carga ni gravamen por los Estados Unidos, conforme con el Artº IV del Acuerdo defensivo".

Se establecería también en el Artº 10 del mismo Acuerdo Técnico que, fuera de aquellas zonas que se indicaba y para la construcción de instalaciones de telecomunicación también - se facilitaría terreno o establecerían las oportunas servidumbres por parte del Gobierno Español.

En ejecución de estos puntos aparecieron en el ordenamiento español en 1955 el Decreto (Mº del Aire) de 25.2.55 sobre Expropiación forzosa, "para obras comprendidas en Acuerdos con Estados Unidos"; (46) y en 1956 un Decreto Ley (Jefatura del - Estado) y un Decreto (Mº Obras Públicas) ambos de fecha 23 de - marzo (47) en los que se declaraba de utilidad pública la construcción y explotación del oleoducto Rota-Zaragoza.

Sc. D.: Competencias del Gobierno U.S.A. relativas a la utilización de las zonas e instalaciones; su problemática.

Uno de los puntos más interesantes de este Convenio es éste, el relativo a la "utilización de las zonas e instalaciones" y lo es porque de él no se deduce en el texto su auténtica significación. Ya iremos viendo a lo largo de este epígrafe

toda la problemática que encierra este término.

Quizá para comenzar su estudio fuese conveniente deslindar dos planos, el plano formal, convencional y el plano sustantivo, propiamente jurídico; y ello lo creo así porque en el Convenio y sus acuerdos de desarrollo se dan ciertas incongruencias formales, incongruencias entre algunos de los textos, que no son fáciles de salvar si nos limitamos tan solo al estudio formal de aquellos. Pienso que debemos profundizar en la naturaleza de este término, de esa "utilización", en sus diferentes supuestos y así extraer unas consideraciones que nos permitan lograr y sobre todo "explicar" lo que aparecen como contradicciones.

Sc. A.: Perspectiva formal

1. El Convenio defensivo nos habla en dos ocasiones tan solo de este punto tan importante y lo hace de una manera más bien programática. La primera alusión al respecto viene contenida en el Artº I en el que se dice al respecto: "... a los mismos fines convenidos, el Gobierno de España autoriza al Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden, a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española...". - Digo más bien programática porque tan solo lo enuncia sin más

detalle, limitándose a indicar a propósito, la sujeción a los términos y condiciones que se acuerden.

La segunda mención del Convenio está en su Artº III, mención indirecta pero muy interesante en otros aspectos. "Las zonas", dice, "que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta, quedarán siempre bajo pabellón y mando español..."

A la vista de estas dos alusiones, podemos decir con cierta seguridad que las zonas e instalaciones quedarían bajo - pabellón y mando español y serían utilizadas conjuntamente por ambos Gobiernos. Esta es una conclusión a la que se puede llegar tras una lógica interpretación de estos dos artículos.

Supuesto esto, debemos, no obstante, interrogarnos por el significado de esa "utilización conjunta de las zonas e instalaciones" sobre las que nada se dice, salvo que se llevaría a cabo (al igual que su desarrollo y mantenimiento) "con sujeción a los términos y condiciones que se acuerde". ¿Qué significa el término "utilización conjunta"? ¿Cómo se actúa?. Estas interrogantes creo son de interés y para su respuesta hemos de ir a - los Acuerdos de desarrollo.

2. Es en estos acuerdos, donde nos vamos a encontrar con algunos problemas. El Texto que trata este punto es el Acuerdo Técnico nº 3, de la misma fecha de los Convenios (26.9.53) y - titulado: "Utilización de zonas convenidas, derechos de paso e

instalaciones". Este Acuerdo contenía unas normas sobre utiliza
ción, generales pero de gran interés. Decía su punto 1:

"... el Gobierno español autoriza a los Estados Unidos a utilizar la medida (sic) que se estime necesaria todas las zonas convenidas... e instalaciones contruidas o ampliadas bajo los términos del Acuerdo Técnico firmado en 26.9.53 a los fines establecidos en dicho Acuerdo y con excepción de aquello que pudiera específicamente limitarse o restringirse en este u otro de los Acuerdos Técnicos (párrafo segundo)".

Este párrafo contenía, como vemos, una autorización - bastante general pues abarcaba la utilización de todas las zonas convenidas, así como las instalaciones construidas "en la medida que se estime necesaria", a los Estados Unidos, sin otra reserva que "aquello que pudiera específicamente limitarse o restringirse" en el Acuerdo o en otros Anexos Técnicos.

Esta autorización general nos plantea el primer problema, de correspondencia de textos, pues hemos visto que estas zonas e instalaciones habían de utilizarse conjuntamente (Artº I y III del Convenio) y bajo Pabellón y Mando español. Signifiquemos también que este último dato nos lo volvía a confirmar de nuevo el propio Acuerdo Técnico donde se decía que:

"Para utilización de las zonas convenidas que estarán siempre bajo Pabellón y Mando español, con arreglo a lo establecido en el Artº XXI (48) del Acuerdo Defensivo..." (punto 3, introducción). - (49).

En realidad si estas zonas e instalaciones había de utilizarse bajo Pabellón y Mando español y en forma conjunta, no se comprende bien de que manera podía llevarse a cabo aquella, si -

se autorizaba al Gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo a utilizarlas sin ninguna limitación general y en la medida además que estimase necesaria.

No se comprende bien tampoco cómo por una parte se dice que las zonas e instalaciones se van a utilizar conjuntamente y bajo Mando español y por otra se otorgaba una autorización general de utilización de éstas a aquel Gobierno. Quizá las reservas a aquella puedan aclarar este punto, pero lo hagan o no, el caso es que, en principio, estas dos "utilizaciones" parecen excluirse recíprocamente.

3. Otro problema se presenta que contribuye a incidir en esta falta de coherencia formal. El Acuerdo Técnico que estudiamos nos decía en el párrafo c) del punto 3:

"En aquellos casos en donde exista la utilización conjunta por parte de las Fuerzas españolas y de los Estados Unidos, se convendrán por las Autoridades competentes españolas y de los Estados Unidos, los pormenores de utilización de cada Base o instalación. Dentro de cada una de estas Bases o instalaciones de utilización conjunta, podrán los Mandos competentes españoles y de los Estados Unidos acordar las zonas dentro de las que prevalecería la Autoridad de los mandos respectivos de cada nación y establecer aquellos acuerdos por separado que pudieran ser necesarios. Tales acuerdos pudieran ser necesarios con relación a la seguridad de la Base, tanto interna como externa y al mantenimiento de las instalaciones establecidas en ellas".

Aquí surge otro dato problemático, decíamos, en el sentido de que este párrafo se conecta en mayor medida con el Convenio propiamente dicho, pues se habla también de utilización con-

junta. El dato problemático radica sin embargo, en que este precepto nos habla de "en aquellos casos en donde exista la utilización conjunta", es decir, parece ser que algunas zonas e instalaciones serían utilizadas conjuntamente, pero solo algunas.

¿Serían utilizadas las zonas conjuntamente? ¿Lo serían tan solo algunas? ¿Podía utilizarlas el Gobierno de los Estados Unidos en la medida que lo estimase necesario? ¿Acaso la utilización de algunas de ellas era una limitación o restricción de las previstas, a esa autorización general?. Indudablemente la contradicción "in terminis" es clara. O las zonas se utilizaban conjuntamente y excepcionalmente algunas quedaban excluidas de ese régimen o eran utilizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y excepcionalmente algunas quedaban sujetas a uso conjunto; lo que no podía suceder era que se dieran los dos supuestos y eso es obvio por lógica jurídica elemental. La falta de correspondencia formal es pues evidente.

Sc. B. : Perspectiva sustantiva

1. Dejemos sin embargo esta aproximación formalista que parece en este momento difícil de resolverse y pasemos a estudiar la naturaleza de esa utilización como decíamos más arriba. ¿Qué es lo que dice el Convenio en ese sentido? ¿Cómo actúa el Convenio esa utilización? ¿Qué supone o contiene?.

Creo interesante estudiar esta perspectiva porque - pienso que es la única que nos puede dar una respuesta al problema. Tengamos presente en primer lugar para ello, que en este epígrafe hablamos tan solo de las competencias del Gobierno de los Estados Unidos y tengámoslo, porque en torno a este punto de la utilización y siguiendo la línea de análisis llevada - hasta ahora en la que estudiamos las competencias en función de sus titulares tal y como aparecen en los textos convencionales, cabe distinguir, asimismo en cuanto a la utilización de estas - zonas e instalaciones, las de las F.A.-U.S.A. destinadas en España. A éstas dedicaremos la subsección F de esta sección.

2. El Convenio en su Artº II nos hablaba, como ya vimos, de lo que suponía esta utilización, cuando al autorizarse a los Estados Unidos a preparar y mejorar ciertas zonas y realizar - las construcciones necesarias, se decía que lo serían:

"... para acuartelar y alojar el personal civil y militar indispensable en las mismas y atender a su seguridad disciplina y bienestar, a almacenar y custodiar provisiones, abastecimientos, - equipo y material".

A la vista de este artículo podemos distinguir como - fines de utilización, por una parte, el acuartelamiento y alojamiento de personal civil y militar y por otra el almacenamiento y custodia de provisiones, abastecimientos, equipo y material; fines, un tanto generales.

Estos fines, sin embargo, se especificaban más claramente en el Acuerdo Técnico nº 3, concretamente en su punto 1) párrafo segundo que contenía la autorización general que hemos visto más arriba. En él se decía que la autorización a los Estados Unidos (50) a la utilización de las zonas convenidas derechos de paso e instalaciones de apoyo se consideraba que comprendía:

- "a) El establecimiento en ellas de los elementos indispensables de las Fuerzas de los Estados Unidos para el mantenimiento en eficiencia de las instalaciones de las Bases.
- b) El empleo de dichas Fuerzas a efectos de entrenamiento.
- c) El funcionamiento de las instalaciones de apoyo para el mantenimiento de las Fuerzas de los Estados Unidos establecidas en las zonas convenidas.
- d) La utilización de las instalaciones adicionales construidas o ampliadas bajo los términos del Acuerdo Técnico o puestas a la disposición por el Gobierno español para la ejecución de los fines del Acuerdo".

El Gobierno de los Estados Unidos quedaba autorizado - de esta manera a establecer en ellas los elementos indispensables de sus Fuerzas Armadas y a emplearlas a efectos de mantenimiento de las Bases. A esas Fuerzas se refería el Convenio cuando hablaba de personal civil y militar.

Este punto contenía pues, la autorización al Gobierno de los Estados Unidos para que estableciese en estas zonas e instalaciones elementos de sus Fuerzas Armadas con un objetivo inmediato. Este objetivo era "el mantenimiento en eficiencia de las instalaciones de las Bases".

El fin próximo de la utilización de las en general de nominadas, zonas e instalaciones, era pues el mantenimiento en eficiencia de las instalaciones de las Bases por elementos indispensables de las Fuerzas de los Estados Unidos.

3. ¿Tenía sin embargo el Gobierno de aquel país alguna - otra competencia sobre estas zonas? (51). El punto 3, a) nos lo indicaba:

"Las Bases especificadas en el Anexo Técnico número 1 y la red de control de aviones y de alarma antiaérea, las comunicaciones y demás instalaciones de apoyo serán mantenidas con el personal mínimo necesario para poder apoyar las operaciones en caso de emergencia y entretenimiento de unidades militares de los Estados Unidos..."

Este párrafo preveía una utilización de las zonas con la finalidad que yo llamaría remota: el apoyo de operaciones en caso de emergencia y el entrenamiento de unidades militares de los Estados Unidos. Dos fines pues, para los que el Gobierno de los Estados Unidos estaba también autorizado. En cuanto al entrenamiento de unidades militares era necesario el acuerdo previo con las Autoridades españolas:

"Los Estados Unidos quedan... autorizados a utilizar, previo acuerdo con las Autoridades españolas, estas Bases para llevar a cabo el entrenamiento - de unidades tácticas sobre unas normas de rotación de las citadas unidades" (párrafo b).

4. Desde esta perspectiva sustantiva, el Gobierno nortea-

americano estaba autorizado pues a establecer en las zonas e instalaciones los elementos indispensables de sus Fuerzas Armadas para, a) por una parte, mantener en eficiencia las instalaciones de las Bases y b) por otra, utilizar éstas, previo acuerdo con las Autoridades españolas para entrenamiento de unidades tácticas militares. En general, podía utilizar todas las zonas e instalaciones para c) operaciones de apoyo en caso de emergencia.

5. Destaquemos que estas competencias eran las ejercidas en tiempo de paz. El Anexo Técnico donde se contenían aquellas lo decía claramente:

"Los términos de este Anexo Técnico son aplicables a la utilización de las zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones de apoyo en tiempo de paz ..." (punto 2).

Sc. E.: Competencias del Gobierno U.S.A. complementarias de la utilización de las zonas e instalaciones

El núcleo de competencias que vamos a ver aquí las califico de complementarias porque no derivan estrictamente de la utilización de las zonas e instalaciones que hemos visto en el epígrafe anterior, sino que están relacionadas con ellas, contribuyendo a su mantenimiento. Su tratamiento jurídico propio no — debe dejarse de lado por ser estas competencias de naturaleza diferente a las anteriores.

Quizá podamos ver en el propio Convenio la autorización general sobre su ejercicio en el Artº II, cuando al final nos dice que se autorizaba también a los Estados Unidos a "mantener y manejar las instalaciones y servicios necesarios de apoyo de dichas zonas y de su personal", pero pasemos a su estudio específico.

El Acuerdo Técnico Anexo dice en el Artº 8:

"A todos los efectos del acuerdo defensivo relacionado con la preparación y utilización de las zonas e instalaciones convenidas, queda autorizado el Gobierno de los Estados Unidos, para hacer uso en territorio español, de todos los Servicios Públicos, en las mismas circunstancias y con las mismas tarifas aplicadas a las Fuerzas - Armadas españolas".

Esta autorización se encontraba después, en el Acuerdo Técnico nº 3 concretada a supuestos específicos y así vemos que:

"Los Estados Unidos quedan autorizados a:
a) Hacer uso sin restricciones y en todo tiempo - en la medida posible, de la red pública de carreteras de España, para utilizarla en el movimiento de aquellos abastecimientos, materiales y equipo que pudieran necesitar las Fuerzas de los Estados Unidos y para transporte de personal de las mismas dentro y entre las zonas e instalaciones convenidas, así como entre puertos y aeropuertos de entrada y las zonas e instalaciones convenidas. Para estos fines los Estados Unidos podrán usar para sus Fuerzas los vehículos que estimen necesarios, tanto en modelo como en cantidad" (punto 9, a).

Interesa resaltar que esta concreción de aquella autorización a la utilización de la red pública de carreteras de España para estos específicos fines es una manifestación o actuación de aquella, con un carácter en modo alguno exhaustivo en mi opinión.

Prueba de ello es que se autorizaba también al Gobierno de los Estados Unidos a:

"Transportar a través de la RENFE aquellos abastecimientos, materiales y equipo que pudieran necesitar las Fuerzas de los Estados Unidos en España y para transporte de personal de las mismas dentro y entre las zonas e instalaciones convenidas, así como entre puertos, aeropuertos de entrada y las zonas e instalaciones convenidas, a tarifas no superiores a las aplicables a las Fuerzas Armadas españolas y de acuerdo con planes interesados por las Fuerzas de los Estados Unidos" (punto 9.b).

Se concretaba asimismo la utilización de los puertos - españoles.

"Quedan autorizados los Estados Unidos al uso de todos los puertos y ríos españoles, así como a - facilidades de atraque con arreglo a las mismas cargas y derechos que sean aplicados a los buques de la Marina de guerra española" (párrafo introductorio). (punto 7).

Y se especificaba además la autorización para:

"Apostar y mantener en puertos españoles aquellos buques que pudieran considerarse necesarios para mantener comunicaciones, enlaces y apoyo de proyectos militares bajo los términos del Acuerdo - Técnico firmado en 26.9.53" (punto 7, a), 5).

En el Acuerdo de Procedimiento nº 11, ya estudiado, - sobre procedimientos Navales se particularizaba en este sentido:

"Las embarcaciones de pequeño tonelaje pertenecientes a la Marina de los Estados Unidos y al Departamento de Defensa, o asignadas a estos servicios podrán circular por las vías fluviales españolas y puertos, en la misma forma que lo efectúan los buques de la Armada Española" (punto 4, d).

Por otra parte, el Acuerdo de Procedimiento nº 7 sobre

Transmisiones y electrónicas contenía unos preceptos que son - consecuencia también del Artículo 8 de que hablábamos al principio. Se indicaba que "... los servicios telefónicos, telegráficos y de teletipo podrán ser proporcionados por los recursos locales a los Estados Unidos, en apoyo de sus propias Fuerzas - en España". (punto I) 1).

Se pactaba finalmente que las "normas para la obtención de las instalaciones y servicios de telecomunicaciones alambricas terrestres que se consideren necesarias por los Estados Unidos" serían convenidas entre las Autoridades Militares competentes - españolas y de los Estados Unidos, (punto II) 1) (52) como resultado de la coordinación entre las necesidades de las Fuerzas de ambos países.

Sc. F.: Las F.A.-U.S.A. en España y la utilización de las zonas e instalaciones

1. Hemos visto en la Subsección D anterior que el mantenimiento en eficiencia de las instalaciones de las Bases era el objetivo próximo o primero en la utilización de todas las zonas e instalaciones por el Gobierno de los Estados Unidos; sin embargo este mantenimiento no podía llevarse a cabo sin el establecimiento en ellas de los elementos indispensables de las Fuerzas de aquel país.

Este hecho iba a materializarse en el Artº 16 del -
Acuerdo Técnico Anexo que nos decía:

"Para la realización de este Convenio, los Estados Unidos podrán destinar a territorio bajo jurisdicción española a miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos..."

Artículo que iba a complementarse en el Borrador del
Acuerdo Técnico nº 4, sobre personal, donde se indicaba:

"En apoyo del Artº XVI del Acuerdo Técnico de fecha 26.9.53 se acuerda lo siguiente con referencia al personal de los Estados Unidos en territorio español durante la vigencia del Acuerdo.

1- Cantidad de personal

a).- Por la presente (53) quedan autorizados los Estados Unidos a traer al territorio bajo jurisdicción española al número mínimo de miembros militares de sus fuerzas que se estimen necesarios para el funcionamiento, administración y control de Base e instalaciones que contengan, para llevar a cabo los fines del Acuerdo Defensivo firmado en 26.9.53 y del Acuerdo Técnico firmado en 26.9.53..."

Eran pues estas Fuerzas a destinar a territorio bajo jurisdicción española y que se estimasen necesarias por los Estados Unidos (elementos indispensables de las F.A. de aquel país, como nos decía el Acuerdo Técnico nº 3 (punto 1, párrafo segundo), las que iban a operar estas zonas e instalaciones. - Pero, ¿había en los acuerdos algún precepto general que determinase sus competencias? ¿se establecía en ellos el modo o manera de la operatividad de esas zonas?; en otros términos, ¿de qué manera estas Fuerzas Norteamericanas administrarían las mencionadas zonas e instalaciones? ¿Cuáles eran, en definitiva, sus competencias, en torno a ellas?.

Ya iremos viendo que la alusión a estas competencias es casuística, no general. Es decir, así como las autorizaciones al Gobierno de los Estados Unidos eran generales en función del fin al que se utilizarían y otro tanto sucedía con las F.A.-U.S.A. en nuestros espacios aéreo y marítimo, las otorgadas a estas Fuerzas eran particulares atendiendo a la función específica que aquellas en concreto tuvieran que cumplir.

En realidad, las competencias del Gobierno de los Estados Unidos venían determinadas por las finalidades a las que habían de servir, finalidades que hemos visto anteriormente como -próximas y remotas. Las competencias de sus Fuerzas Armadas en las zonas e instalaciones por otra parte, eran unas competencias cuyo fin radicaba en el mantenimiento en eficiencia de esas mismas zonas e instalaciones, lo cual exigía que cada zona e instalación concreta, cumpliera su misión específica, distinta de las otras.

El Acuerdo Técnico nº 3 contenía, sin embargo una alusión general a las Fuerzas en cuestión, en el párrafo c) del -punto 3 ya visto, cuando decía: "En aquellos casos en donde exista la utilización conjunta por parte de las Fuerzas españolas y de los Estados Unidos, los pormenores de utilización de cada base o instalación...".

Esta alusión, por otra parte, no otorgaba en realidad unas competencias concretas ni generales a aquellas Fuerzas; lo que preveía era la posibilidad de ejercicio en algunas zonas, -

de ciertas competencias tanto de parte de las F.A.-U.S.A. como de parte de las españolas.

Pasemos, sin embargo a conocer estas competencias, distinguiendo entre las zonas e instalaciones en sentido estricto, las instalaciones de apoyo y las técnico-logísticas.

2. En las zonas e instalaciones en sentido estricto.-

En cuanto a las zonas e instalaciones en sentido estricto tan solo en dos casos se hablaba de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, una de ellas en el Acuerdo Técnico nº 3, donde se hacía referencia específica a las instalaciones navales de la Bahía de Cádiz (Matagorda); el otro, en el Acuerdo de Procedimiento número 25 en el que se establecían las normas que regirían la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de la Base Naval de Rota de 15.12.1955.

a) Muelle de descarga y pista de despegue en Matagorda.-

En Matagorda, decía el Acuerdo Técnico: "La pista de despegue podrá ser utilizada conjuntamente por las Fuerzas españolas y de los Estados Unidos y en la forma que acuerden los mandos navales competentes (punto 4,a), y en cuanto al "muelle e instalaciones a construir..., quedará bajo control del mando local de los Estados Unidos, que actuará en coordinación con las Autoridades locales españolas" (punto 4,b).

b) Base aeronaval de Rota.-

La utilización de la Base Naval de Rota se regulaba en

los siguientes documentos:

- "1º. Acuerdo de Procedimiento nº 25: normas que -
regirán la utilización conjunta por España -
y los Estados Unidos de la Base Naval de Rota
de 15.12.1955 (Texto A).
- 2º. Nota adicional al párrafo 3º del Acuerdo de
Procedimiento nº 25, de 9.1.1957 (Texto B).
- 3º. Procedimientos navales de vigilancia que com
pletan las normas que rigen la utilización -
conjunta por España y los Estados Unidos de
la Base Naval de Rota de 18.5.1959 (Texto C).
- 4º. Procedimientos navales para la ejecución de -
las operaciones portuarias; complemento de las
normas que rigen la utilización conjunta por
España y los Estados Unidos de la Base Naval
de Rota de 13.5.1960 (Texto D).
- 5º. Anexo al Acuerdo de Procedimiento nº 25 (Tex-
to E).

Es sin duda esta reglamentación, de las más específi-
cas y la más dilatada del Convenio Defensivo, pero pasemos a su
estudio y veamos qué competencias se otorgaban a las Fuerzas de
los Estados Unidos en ella.

El Texto A es el fundamental; en él se disponía que:

"... El Gobierno de España establece para utili-
zación conjunta por España y los Estados Unidos,
la zona indicada en el Anexo nº 1... (54). La zo
na convenida será llamada en adelante "Base Na-
val de Rota..." (punto 1,a).

A continuación se establecía que:

"Toda la zona comprendida dentro de los límites
de la Base Naval de Rota señalados en el Anexo
nº 1, (54) con excepción de aquella a que hace
referencia el apartado 2º, queda asignada para
las instalaciones y servicios de las Fuerzas de
los Estados Unidos..." (punto 3).

Teniendo en cuenta que:

"La organización, el funcionamiento y la utiliza-
ción de las instalaciones en ella, correrá a car

go del Mando de las Fuerzas de los Estados Unidos" (punto 1, a, segundo párrafo).

Así pues, el Mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos organizaría, haría funcionar y utilizaría las instalaciones existentes en la Base, con excepción de aquella zona a la que hacía referencia el apartado 2º, es decir, la zona española (55).

Destaquemos pues que la Base Naval de Rota era asignada para instalaciones y servicios de las Fuerzas de los Estados Unidos con carácter general, mientras que la zona española quedaba desgajada con respecto a la norteamericana por excepción. Este dato es interesante retenerlo porque iba a condicionar la normativa de los textos en muchos puntos.

¿Se limitaba tan solo el Acuerdo a asignar a las F.A.-U.S.A. la organización y utilización de la zona norteamericana de la Base? Efectivamente no. En este sentido se establecía en el punto 1,b):

"Se acuerda, expresamente, el uso conjunto por - los buques y aviones militares de las respectivas Fuerzas de las instalaciones portuarias, pistas, ayudas a la navegación, torre de Mando y equipo de emergencia contra incendios y accidentes aunque estos puedan estar físicamente emplazados en cualquier zona".

Estas zonas eran esquemáticamente, pues, a) las instalaciones portuarias, b) las pistas (de aviación, creo, debemos entender); c) las ayudas a la navegación; d) la torre de Mando y e) equipo de emergencia contra incendios y accidentes. También -

se utilizarían conjuntamente "las vías de comunicación dentro - de la Base" (punto 7).

Una vez conocidas, sin embargo, estas zonas de uso - conjunto que podían "estar físicamente emplazadas en cualquier zona" y sujetas por tanto a su propio Mando, podemos preguntarnos cómo se coordinaría su organización, funcionamiento y utili zación entre las F.A.-U.S.A. y las de España.

A esta interrogante solamente responde el Acuerdo re- firiéndose a la zona bajo Mando estadounidense; en esta zona el Comandante Naval Norteamericano "tendría en cuenta" las necesi- dades españolas para empleo militar de aquellas, coordinando las necesidades de los dos Gobiernos. En efecto:

"En la función que le correspondan según el apar- tado 1.a. Las Fuerzas de los Estados Unidos, por medio de su Comandante Naval local, tendrán en - cuenta las necesidades españolas para empleo mi- litar de las instalaciones cuya utilización con- junta se ha acordado y en todos los casos coordi- narán las necesidades del Gobierno español actuan- do a través de su Comandante Naval local, con a- quellas de los Estados Unidos" (punto 1,c).

Nada se dice, sin embargo, de la zona bajo Mando espa- ñol. La otra referencia que hay en este punto no aclara gran - cosa:

"En atención a que las instalaciones, cuyo empleo conjunto se ha acordado, son de capacidad limita- da y que pueden surgir necesidades que no pudie- ran ser satisfechas cimbultáneamente, se conviene que, en tales casos, la resolución que recaiga - sea de acuerdo entre los Mandos navales respecti- vos" (párrafo d, punto 1).

Esta falta de referencia a la zona española por una -

parte, y este párrafo por otra, hacen difícil lograr una coherencia en la utilización de estas zonas conjuntas, porque o — bien el empleo conjunto de esas zonas, se llevaría a cabo previo acuerdo de los Mandos navales respectivos en todos los casos, según vemos en este párrafo o tan solo en la zona española, con lo que en la zona norteamericana su Comandante Naval se limitaría a coordinar las necesidades españolas, teniéndolas en cuenta; o por el contrario el párrafo en cuestión se aplicaría "en todos los casos", con lo cual entonces parece difícil interpretarlo con el anterior.

El problema radica en que no conocemos, por carecer — de los anexos donde se contenían las zonas, la ubicación de las zonas conjuntas, es decir, si esas instalaciones portuarias, — pistas, etc., estaban tan solo en la zona norteamericana (56) o también lo estaban en la zona española. El párrafo d) visto, nos habla de la capacidad limitada de estas zonas, aunque el b) también visto, hablaba de la posibilidad de emplazamiento de — aquellas en cualquier zona.

Personalmente pienso que lógica y económicamente no — tendría sentido construir estas mismas instalaciones (las portuarias, las pistas, ayudas a la navegación y torre de Mando) en — cada zona y que en realidad aquellas se encontraban ubicadas en la zona norteamericana. Por ahora, la ausencia de claridad de — los textos nos deja planteado así el problema.

El Texto D, ya mencionado al principio regulaba por su parte los procedimientos para la ejecución de operaciones portuarias y el único lugar que se menciona en dicho texto es "el área asignada para las instalaciones y servicios de las - Fuerzas de los Estados Unidos" (punto 2), lo que quiere decir que las instalaciones portuarias se hallaban en la zona americana. Su artículo 1º decía:

"Las Marinas de los Estados Unidos y España acuerdan que los procedimientos para las operaciones - portuarias aquí establecidos se ajustarán al Acuerdo de Procedimiento nº 25 en cuanto al Reglamento concerniente a la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de América de la Base - Naval de Rota" (punto 1).

Este pues parece ser uno de los acuerdos de que se nos hablaba antes.

c) La utilización conjunta de las bases.-

En estos momentos, sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cuáles eran en realidad las competencias de las F.A.-U.S.A. situadas en las zonas en sentido estricto, y cuál es la significación sustantiva de su utilización, "conjuntamente" con las Fuerzas Armadas de España?

Por ahora vamos tan solo a esclarecer el término para en otro momento analizar su significación. Los Textos, hemos visto, no abarcaban a todas las bases.

Los relativos sin embargo a la Base Naval de Rota eran bastante esclarecedores.

Ante esta concisión, creo de interés transcribir lo -

que el General Kissner y Mr. Douglas, a la sazón, Jefe de JUSMG y del MAAG en España por una parte y Vicesecretario de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos respectivamente por otra, indicaban en 1954, en sesión de trabajo en el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado Norteamericano a preguntas de algunos senadores: (57)

"Mr. Douglas:	Así es. Están (habla de las - bases militares (58) en función de la mutua defensa.
Senador McCarran:	¿En uso conjunto?
Mr. Douglas:	Sí, señor
Senador McCarran:	En otras palabras, conjuntamente, ambas naciones, bien - los Estados Unidos o España - pueden usarlas, exacto?
General Kissner:	Utilizaremos las pistas conjuntamente, pero nos han asegurado que en un área americana el oficial de mando no será molestado por operaciones españolas y tendrá completo mando sobre nuestros medios, equipo, personal y operaciones.
Senador Thye:	En otras palabras, nos relevarán en el mando de las instalaciones a su terminación. (59)
General Kissner:	Así es
Senador Thye:	¿Tiene jurisdicción completa - sobre ellas?
Mr. Douglas:	Sujeta al uso conjunto de las pistas de despegue.
Senador Thye:	Sí, pero no pueden vetar ninguna decisión que pueda adoptar relativa a supervisión.
General Kissner:	Así es."

Parece ser pues, en estas Bases había un área que sería americana, a cuyo frente estaría un oficial norteamericano - con mando completo, con la garantía de que no sería molestado por

las actividades llevadas a cabo por las Autoridades españolas.

Una limitación tan solo había, que era la de las pistas de despegue, que habían de sujetarse a uso conjunto.

En realidad como hemos visto, las alusiones que contienen los acuerdos en cuanto a las bases, a propósito de su utilización concuerdan con estas declaraciones. En efecto en la zona de Matagorda, la pista de despegue podía ser utilizada conjuntamente por ambas Fuerzas (punto 4, a), Acuerdo Técnico nº 3), mientras que el muelle e instalaciones a construir quedarían bajo control del mando local de los Estados Unidos (punto 4,b), Acuerdo Técnico nº 3).

Por su parte la Base aeronaval de Rota respondía también a esta dinámica. Tras asignarse a las Fuerzas de los Estados Unidos una zona específica (punto 3. Acuerdo de Procedimiento 25) hemos visto que se establecía que el funcionamiento y utilización de las instalaciones ubicadas en aquella zona correría a cargo del Mando de las Fuerzas de los Estados Unidos (punto 1, a, segundo párrafo. Acdo Pto. 25).

El uso conjunto que se preveía, se circunscribía a - las instalaciones portuarias, pistas, ayudas a la navegación, - torre de Mando y equipo de emergencia contra incendios y accidentes; instalaciones todas ellas que, como apuntamos, pienso se encontraban en la zona norteamericana, con lo que a pesar de esa utilización conjunta declarada, el Comandante Naval local norteamericano al tener en cuenta, se decía, las necesidades -

españolas para empleo militar de esas instalaciones conjuntas, esta utilización quedaba planteada desigualmente en el plano - jurídico. (Punto 1, c, Acuerdo Procedimiento 25). La parte española se veía condicionada jurídicamente en alguna manera al programa del Comandante Naval local norteamericano.

3. En las instalaciones de apoyo

a) Depósitos de combustible.-

Por lo que se refiere a los depósitos de combustible el Anexo Técnico nº 3 establecía:

"El Gobierno español autoriza la utilización de aquellas zonas acordadas, asignadas para la distribución del combustible, juntamente con aquellas instalaciones de almacenamiento de los mis mos..."

No se especificaba a quien se autorizaba la utilización pero tras este párrafo se distinguía por una parte las instalaciones para suministro de las Fuerzas de los Estados Unidos y - por otra aquellas para suministro conjunto de las Fuerzas Armadas mencionadas y de las españolas.

Hay que recurrir a los Acuerdos de Procedimiento para conocer más de cerca este punto. Y así las instalaciones de combustible para suministro exclusivo de las F.A.-U.S.A. venían reguladas en el Acuerdo de Procedimiento nº 20 de 25 de Agosto de 1955 titulado "Almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en las Bases aéreas" en cuyo punto 4 se indicaba que:

"Las instalaciones petrolíferas tratadas en este

Acuerdo son para uso exclusivo de las Fuerzas de los Estados Unidos".

Por su parte en cuanto a los depósitos de suministro conjunto, el Acuerdo de Procedimiento nº 18 de 28 de Abril de 1955 contenía las normas que regirían la utilización conjunta de las instalaciones petrolíferas en las Bases y Estaciones Navales españolas para las Marinas de España y los Estados Unidos, acompañado de un Anexo de 17 de Agosto de 1956. Entre estos dos textos debió haber otro de 10 de mayo de 1955 que no ha llegado hasta mí pero que el de agosto de 1956 citaba anulándolo. Vamos a considerar, sin embargo, sólo el último para su estudio.

Tras autorizar a la Marina de los Estados Unidos la construcción de instalaciones de petróleo en Cartagena, el Ferrol (La Graña) y Mahón, se establecía refiriéndose a las dos primeras que:

"Los Mandos locales de los Estados Unidos en Cartagena y La Graña serán responsables del funcionamiento, administración, utilización y mantenimiento de las instalaciones de petróleo y zonas asignadas en estas dos localidades..." (punto 5, a).

En cuanto a Mahón, se establecía que:

"El Mando, administración, control de operaciones, mantenimiento y conservación, incluyendo gastos de estos servicios, de las instalaciones de petróleo en Mahón, correrán a cargo de la Marina española..." (punto 11).

La utilización de estos depósitos venía regulada con algún detalle. Se establecía que:

"... en el Ferrol (La Graña) será reservado para uso de la Marina española un depósito de superficie con capacidad de 9.430 barriles, en el cual podrán almacenarse productos de cualquier especificación. Del mismo modo la Marina española reservará en las instalaciones de petróleo de Mahón - tres tanques de hormigón con una capacidad de almacenamiento de 95.000 barriles, aproximadamente en total, para el almacenamiento por la Marina de los Estados Unidos de productos de las especificaciones militares de los Estados Unidos. El resto del almacenaje en Mahón será asignado para el uso de la Marina española, pudiéndose almacenar productos de cualquier especificación" (punto 8).

Con respecto a los muelles se indicaba:

"Los muelles al servicio de estas instalaciones serán administrados por los Mandos locales españoles".

Esto parece lógico si tenemos en cuenta que se trataba de bases navales españolas. Continuaba este punto 7 así:

"No obstante, los programas para la utilización de estos muelles serán preparados por el Mando local de los Estados Unidos, de acuerdo con el Mando local español teniendo en cuenta las necesidades de ambas Marinas..."

Se incluía, no obstante en cuanto a los programas de utilización de muelles algunas directrices:

"... Los buques cisterna de carga o descarga de productos petrolíferos tendrán prioridad sobre todos los demás buques que utilicen los muelles, dándose el segundo lugar de prioridad para el uso de estos muelles a otros buques de guerra - que se dediquen a la carga o descarga de productos petrolíferos..."

No se indicaba si esos buques serían de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de las Fuerzas Armadas de España, aunque si tenemos en cuenta la escasez de ese carburante en Es-

paña del que es muestra patente todos los acuerdos al efecto de rivados del Convenio, comprenderemos que se aplicarían de hecho a los buques norteamericanos.

En cuanto a los buques de guerra españoles se preveía que podían:

"... descargar productos petrolíferos en depósitos bajo la administración de la Marina de los - Estados Unidos, cuando estos productos sean compatibles con las especificaciones militares aplicables de los Estados Unidos..." (punto 8).

Finalmente interesa resaltar que el Acuerdo preveía - "el cambio de productos petrolíferos entre ambas Marinas" (punto 12), pudiéndose obtener estos para su uso "de cualquier instalación de petróleo regida" por una u otra Marina (punto 12, a y d).

¿Qué significación tenía en este caso la utilización de estas instalaciones? Había, hemos visto, dos tipos de instalaciones. Por una parte los depósitos en las Bases aéreas, por otra las construidas en Estaciones Navales españolas. En el primer caso la utilización era exclusiva de las F.A.-U.S.A. (60).

Sin embargo en cuanto a los depósitos de combustible a utilizar en las Bases Navales españolas, se establecía la responsabilidad de los Mandos locales de los Estados Unidos en el funcionamiento y administración de aquellas en Cartagena y La - Graña reservándose el Mando local español estas funciones en las instalaciones de Mahón —a construir también por los Estados - Unidos—.

En estas instalaciones se reservarían un número específico de barriles para la Marina del otro país para el almacenaje de productos petrolíferos fundamentalmente (punto 8 Anexo al Acuerdo de Procedimiento nº 18), previéndose el cambio de productos petrolíferos entre ambas Marinas (punto 12 de dicho Anexo), y pudiendo obtenerse estos de cualquier instalación de petróleo regida por una u otra Marina (punto 12 a) y d) de dicho Anexo).

b) Depósitos de municiones.-

Como ya vimos más arriba el Acuerdo que regula este punto es el de Procedimiento nº 24, de 15.10.1955, titulado "Normas que rigen el desarrollo y utilización de las instalaciones de almacenamiento de munición naval de los Estados Unidos en España", complementado con un Anexo de Procedimiento de 16 de julio de 1956.

El Acuerdo, enumerando los terrenos donde quedarían ubicados estos depósitos nos diría:

"Los terrenos indicados en el punto número 2 de estas normas, para almacenamiento de municiones de la Marina de los Estados Unidos, en Cartagena y el Ferrol del Caudillo, son asignados a los Estados Unidos a fines operativos de alojamiento y de almacenamiento. Los detalles de utilización de estas instalaciones y cuestiones de mando y administración estarán regidos por los procedimientos que se establezcan entre las Marinas de España y de los Estados Unidos" (punto 7).

El Anexo a este acuerdo es, sin embargo, el más significativo para nosotros. El punto 7, establecía a este respecto:

"En el Ferrol del Caudillo y Cartagena, los Estados Unidos designarán los Mandos locales en las Zonas de los Estados Unidos y estos Mandos ejercitarán sus funciones, en lo que respecta a las zonas de los Estados Unidos de acuerdo con este y otros acuerdos relacionados con este asunto". (párrafo b).

Se especificaban, sin embargo, estas funciones y así:

"El Mando naval local de los Estados Unidos será responsable de la administración y utilización y custodia de los productos contenidos dentro de las zonas o instalaciones asignadas a los Estados Unidos y del mantenimiento de los mismos. Estas responsabilidades incluyen la custodia y mantenimiento de municiones y explosivos de los Estados Unidos y de las operaciones de dichas zonas e instalaciones, incluyendo la recepción, almacenamiento y suministro de las municiones y explosivos, de determinación de las cantidades, tipos y especificaciones de municiones y explosivos que deban ser almacenados" (párrafo c).

¿Había en este caso competencia conjunta de las Fuerzas Armadas de los dos países?. En el Anexo, en su punto 4, se nos decía:

"La Marina española autoriza al uso del muelle de La Algameca en Cartagena y de las vías de comunicación interiores de dicha Base, para el manejo y transporte de municiones de la Marina de los Estados Unidos. La Marina de los Estados Unidos de forma análoga, autorizará el uso del muelle de municiones que será construido en Laje (El Ferrol del Caudillo) y las necesarias vías de comunicación interna de la zona asignada al mismo en el Ferrol del Caudillo, para el manejo y transporte de municiones de la Marina española...".

Se podían distinguir pues dos zonas, cada una de ellas con una finalidad específica: unas zonas a acordar, para los depósitos, su alojamiento y almacenamiento; y otras, los muelles de Algameca y en Laje, y las vías de comunicación de las bases -

en Cartagena y el Ferrol respectivamente donde se hallaban aquellos. Nada se decía sobre la utilización de las primeras, pero si además estaban bajo Mando local americano, podemos afirmar - que aquella era exclusiva de aquel Mando. Por el contrario, las segundas lo eran en forma conjunta. Sobre ellas se estipulaba - que:

"Los programas de operaciones para el uso conjunto de los muelles de municiones, serán preparados por los Mandos navales locales de España y los - Estados Unidos. Al preparar estos programas, estos Mandos, tendrán en cuenta las necesidades de ambas Marinas y asegurarán la coordinación de esfuerzos a máxima eficacia..." (punto 7, párrafo d).

Esta utilización habría de realizarse pues de acuerdo con programas llevados a cabo por ambos Mandos locales navales. Este punto es más claro que su análogo visto en Rota y formalmente no plantea problemas.

Podemos concluir pues que en estas instalaciones la - utilización conjunta se circunscribiría a la utilización de estos dos muelles, y sus vías respectivas de comunicación para el manejo y transporte de municiones, mientras que los terrenos específicos en aquellas dos Bases españolas se utilizarían por la Marina de los Estados Unidos, si bien de acuerdo a procedimientos a establecer entre las dos Marinas pero que no debían limitar las funciones a ejercer en ellos por el Mando Naval local, previstas en el párrafo C, punto 7.

Llegamos finalmente a las instalaciones técnico-logísticas.

4. Instalaciones técnico-logísticas.-

El Acuerdo de Procedimiento nº 7 de 30 de abril de 1954, titulado Transmisiones y electrónicas era de entre los mencionados hasta ahora el que con más claridad aludía a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ya el Anexo Técnico nº 3 en su punto 8 nos decía:

"La utilización por las fuerzas de los Estados Unidos de las telecomunicaciones, auxilio a la navegación, control de aviones y red de alarma antiaérea, propuesta para ampliación en o en la inmediata vecindad de, o en las servidumbre de paso por fuera de las zonas convenidas, se establecerá de mutuo acuerdo en un Anexo Técnico independiente y unido al Acuerdo Técnico firmado en 26.9.53).

El término Fuerzas, no se utilizaba, por otra parte en algunos casos; por ejemplo el punto I, párrafo dos de este acuerdo, que ya vimos en el epígrafe de las competencias del Gobierno de los Estados Unidos (61), nos hablaba tan solo de los Estados Unidos. En el punto II, párrafo 4 se empleaba una fórmula muy genérica cuando decía:

"Podrán ser instaladas, redes telefónicas, de tele tipo y de intercomunicación consideradas como necesarias para el apoyo de las operaciones militares de los Estados Unidos..."

Esta oscilación terminológica, no debe no obstante preocuparnos mucho, porque realmente incidían en pequeña manera en la distribución general de las competencias como veremos en lugar oportuno.

Efectivamente, el punto III autorizaba a las Fuerzas -

Armadas de los Estados Unidos al mantenimiento y utilización - de un núcleo de transmisiones de radio, tres de ellas con finalidad estrictamente militar y una cuarta con fines recreativos. Quedan autorizadas, se decía:

- "a) Una instalación radio principal en enlace con la red militar mundial de los Estados Unidos.
- b) Aquellas otras instalaciones menores de radio comunicación, que puedan ser necesarias en - apoyo de los servicios militares y administrativos de los Estados Unidos en España.
- c) Instalaciones radio para comunicación con aviones militares de los Estados Unidos que se encuentren en vuelos de largo alcance a o desde España y zonas contiguas a esta nación".

Se incluían finalmente:

"Aquellas otras instalaciones radio que contribuyan al normal bienestar e instrucción de las Fuerzas de los Estados Unidos, pudiendo incluir los - elementos de la red militar de aficionados (MARS) y aquellas estaciones de radiodifusión de baja - potencia de las bases que pudieran ser necesarias".

También se autorizaba a las Fuerzas indicadas la instalación de "aquellos auxilios electrónicos a la navegación que - consideren necesarios para satisfacer sus propios requisitos - operativos" (punto V, 1.), así como de una estación móvil de - vigilancia de tráfico radio de dichas Fuerzas (punto VII).

Todas las instalaciones quedarían comunicadas, con la instalación de "circuitos de control desde las zonas convenidas hasta las instalaciones de transmisión y de recepción y hasta - las de auxilios electrónicos a la navegación, situadas fuera de las zonas convenidas" (punto II, 5).

Hasta aquí, nada se decía sobre la utilización de estas

instalaciones, lo que hacía pensar que sería de uso exclusivo - de las Fuerzas, fundamentalmente al menos por su significación militar las de transmisiones de radio.

Esto, sin embargo, nos lo confirma el propio acuerdo, al referirse a las Torres de Mando y la red de control de aviones y alarma antiaérea donde se hablaba específicamente de utilización conjunta.

En efecto en cuanto a las primeras se decía:

"Las Torres de Mando de las bases aéreas que se utilicen conjuntamente por las Fuerzas Españolas y las de los Estados Unidos, podrán ser dotadas conjuntamente por personal español y de los Estados Unidos. Las Fuerzas de los Estados Unidos suministrarán el material requerido para cubrir sus propias necesidades. Las normas operativas unificadas serán desarrolladas conjuntamente y de mutuo acuerdo para satisfacer las necesidades de aquellas bases aéreas, incluso las comunicaciones y normas entre bases adyacentes en donde exista o pueda producirse una super posición sistemática de tráfico" (punto IV, 1).

Tan solo se refiere este punto a las Torres de Mando de las bases aéreas que se utilizasen conjuntamente por ambas - Fuerzas.

Ya hemos visto sobradamente la incongruencia formal del término utilización y su empleo en estos textos, de ahí que no insistamos ya en este punto. Signifiquemos sin embargo, que como en los otros casos ya vistos, las normas operativas unificadas serían desarrolladas conjuntamente y de mutuo acuerdo, si bien es interesante resaltar que en estas Torres de Mando no se

hablaba de Fuerzas de ambos países sino de "necesidades de aquellas bases aéreas". Evidentemente el núcleo de actividades de estas Torres iba a ser estadounidense.

Finalmente la utilización de la red de control de aviones y de alarma antiaérea quedaba reflejada en el punto VI que decía:

"Las Fuerzas de los Estados Unidos podrán instalar y mantener una red de control de aviones y de alarma antiaérea en aquellas localidades que se determinen de mutuo acuerdo entre las Autoridades Militares competentes de España y de los Estados Unidos, la cual será utilizada conjuntamente con las Fuerzas Aéreas españolas".

CAPITULO IV:

ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS NORTEAMERICANAS A LA LUZ
DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL.

SECCION I: INTRODUCCION

SECCION II: LAS COMPETENCIAS EN EL ESPACIO
AEREO ESPAÑOL

SECCION III: LAS COMPETENCIAS EN EL ESPACIO
MARITIMO ESPAÑOL

SECCION IV: LAS RESTANTES COMPETENCIAS: PLAN-
TEAMIENTO FINAL

CAPITULO IV: Análisis de las competencias norteamericanas a la luz del Derecho Internacional general

SECCION I: Introducción

Hemos visto a lo largo del Capítulo III cuáles eran - las competencias norteamericanas en España, es decir, su determinación.

Estudiamos entonces, las relativas a la utilización de los espacios aéreo y marítimo españoles, así como las referentes a la construcción y utilización de las zonas e instalaciones. Vamos a pasar ahora al análisis de esas competencias, pero en - este caso desde una perspectiva crítica.

¿Qué relación guardan con el Derecho Internacional general estas competencias ejercidas en España por los Estados Unidos?. En otros términos, las competencias estatales que por Derecho Internacional general eran ejercidas por nuestro Estado, - ¿se ven en alguna manera modificadas por este Convenio?.

Dos interrogantes estas que nos van a permitir profundizar en este análisis. Vamos a distinguir para ello tres sectores: el espacio aéreo, el marítimo y las competencias restantes.

SECCION II: Las competencias en el espacio aéreo español

1. El Derecho Internacional positivo común sobre el espacio aéreo viene consagrado en la Convención de aviación civil internacional de Chicago de 7 de diciembre de 1944 (62). En ella - se constata "la soberanía exclusiva y absoluta" de cada Estado - "sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio" (Artículo 1º), principio que ya se había reconocido en el Convenio de París de 13 de octubre de 1919.

El Convenio de Chicago, sin embargo, no regula el delicado sector de la aviación militar, como tampoco lo hizo el de París. La Convención se circunscribe tan solo a aeronaves civiles, quedando excluidas las que se califican de aeronaves de Estado (Artº 3,a)) que comprenden las destinadas a servicios aduaneros o policiales y los que a nosotros conciernen, servicios militares (Artº 3,b)).

Estos dos puntos, relativo el primero a la soberanía - del Estado sobre su espacio aéreo y el segundo a la exclusión de las aeronaves militares del ámbito de aplicación de la Convención son los que determinan que:

"Ninguna aeronave de Estado perteneciente a un Estado contratante volará sobre el territorio de otro Estado o aterrizará en éste, sin autorización otorgada por acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las condiciones estipuladas" (Artº 3, punto c) (63).

La Convención pues prevee la exigencia de "autorización

otorgada por acuerdo especial o de otro modo" para este tipo de aeronaves.

No se habla en el Convenio de Chicago de aeronaves militares más que en este Artículo tercero ya visto. Sí se prevee por otra parte, el limitar o prohibir a las aeronaves de los Estados contratantes de sobrevolar ciertas zonas de su territorio (Artº 9) pero se refiere a las civiles (64).

España ratifica la Convención por Instrumento de 21 de febrero de 1947, (65) pasando a formar parte pues de nuestro derecho interno. En 1953, la normativa al respecto de nuestro derecho era la indicada, normativa que se complementaría después con la Ley de Navegación aérea de 21 de julio de 1960 que contiene - las normas vigentes aplicables "en el espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial", espacio que se declara expresamente, queda sujeto a la soberanía del Estado español (Artº 1). Esta Ley sigue el sistema de establecer unas normas - comunes a la navegación civil y militar (66) y su artículo segundo dice que el Estado español "podrá autorizar el tránsito inno-cuo sobre su territorio de las aeronaves extranjeras". Nada se - dice, por otra parte sobre la naturaleza de esas aeronaves pero el artículo 89 es más concreto:

"Las aeronaves de Estado extranjeras no podrán - volar sobre territorio de soberanía nacional, sin previa autorización o invitación, salvo las desti-nadas al servicio de búsqueda y salvamento, con - arreglo a los convenios especiales...".

Las aeronaves militares caen pues dentro de este precepto que tiene sus antecedentes en la Convención, en el artículo visto. Se habla en aquella de "autorización otorgada por acuerdo especial o de otro modo", en éste de "previa autorización o invitación" y en ambos casos, según condiciones estipuladas o convenios especiales respectivamente.

2. Visto el régimen convencional internacional y el interno, sobre la utilización militar del espacio aéreo podemos preguntarnos: ¿qué es lo que suponen los Acuerdos y las competencias de las F.A.-U.S.A. que vimos, al respecto?, ¿suponen una concordancia con la normativa jurídica general?.

El Acuerdo Técnico Anexo, implícitamente nos lo decía, pero es el Acuerdo de Procedimiento nº 14 el que expresamente hablaba de la autorización. Decía en su artículo primero: "... quedan autorizados los aviones militares de los Estados Unidos... para sobrevolar, aterrizar o despegar en España o en territorio bajo control español".

El problema hasta aquí pudiera estar correctamente planteado, pero a partir de aquí corremos el riesgo de no poder determinar los aspectos jurídicos que caracterizan este punto y la razón fundamental es la ausencia de una práctica arbitral o judicial, así como la ausencia de estudios doctrinales, sobre la utilización del espacio aéreo por aeronaves militares, al menos a mi conocimiento (67).

La Convención de Chicago vista nos habla como sabemos de autorización otorgada por acuerdo especial o de otro modo y siempre de conformidad con las condiciones estipuladas; nuestra Ley, de previa autorización o invitación. La autorización previa parece ser pues requisito esencial aunque no se limita tan solo a ella misma en sentido formal, sino que también ha de hacerse - de conformidad con las condiciones estipuladas, condiciones que dotarían de una sustantividad a esa autorización.

H. Perrin de Boussac, uno de los pocos autores que han escrito sobre el tema, decía en 1931, a propósito de esta autorización que "puede ser especial, general, temporal y permanente. Pero creemos que una autorización para que el propio sistema de autorización sea eficaz y responda con objeto de obtener el fin que se le asigna, debe ser especial. No solamente especial en - cuanto a la persona del militar, sino especialmente también en cuanto a su fin. Otorgar una autorización general equivaldría a suspender por un tiempo más o menos largo, es cierto, la necesidad misma de autorización" (68).

Jurídicamente la afirmación parece exacta y responde al principio de soberanía que en torno a la utilización del espacio aéreo para fines militares adquiere su significación más propia.

Los aviones que comprendía la autorización que nos ocupa eran los militares de los Estados Unidos de América y los de transporte contratados por el Gobierno de los Estados Unidos como hemos visto. (Artº 1-Acuerdo Procedimiento). La determinación de estos era obviamente objeto de las disposiciones legales norteamer

ricanas. Este era el que podríamos configurar como elemento material de la autorización.

3. Caben sin embargo unas interrogantes en torno a la naturaleza de esta autorización. ¿Era aquella general o particular? o de otro modo, ¿había de otorgarse para cada vuelo específico o era simplemente suficiente la indicada en el Artículo primero del Acuerdo de Procedimiento? ¿Era ilimitada en el tiempo o temporal? ¿Había de insertarse en ella, o al menos tenerse en cuenta, la finalidad de los vuelos? (69).

En cuanto a la primera pregunta, es decir, la de si era necesaria autorizaciones de vuelo para cada supuesto específico o era bastante la que ya vimos, si hemos de atenernos al texto de los Acuerdos, hemos de concluir que la "Autorización" del artículo primero era la única otorgada por España, es decir, no se preveía en este texto autorización especial para cada vuelo. Esto parece lógico si tenemos en cuenta su "elemento material", que objetivamente abarcaba o podía abarcar a todos los aviones militares de los Estados Unidos y a los contratados de transporte por aquel Gobierno. Exigir autorización específica llevaba implícita la limitación de vuelo de aquellos aviones, como a sensu contrario nos indicaba P. de Boussac. La autorización pues, era general y quedaba recogida en estos Acuerdos.

Por lo que respecta a la finalidad de los vuelos tampoco se especificaba nada concreto. El Acuerdo Técnico Anexo, -

cuando otorgaba a las F.A.-U.S.A. la libertad que estudiamos tan solo decía "a los fines de este acuerdo", y el Acuerdo de Procedimiento aludía "in g nere" a la autorizaci n contenida en los acuerdos de fecha 26.9.53, por lo que podemos afirmar la ausencia de finalidad espec fica en el sentido de la interrogante que nos hac amos.

Tampoco se hablaba sobre la duraci n de esta autorizaci n, lo cual parece indicar que estar a vigente en tanto en cuanto estuviera vigente el Convenio Defensivo.

Todo esto nos permite afirmar con alguna base que la Autorizaci n que Espa a concedi  a los Estados Unidos en su Fuerzas Armadas para la utilizaci n de nuestro espacio a reo comprend a por un lado a todas las aeronaves militares de aquel pa s, as  como las aeronaves de transporte contratadas por aquel Gobierno; por otra parte no estaba limitada en el tiempo ya que abarcaba la vigencia general del Convenio Defensivo y por  ltimo la finalidad de la Autorizaci n era la indicada de manera general en el Acuerdo T cnico Anexo, es decir, a los fines del mismo.

Debe destacarse aqu  que  ste r gimen contrasta singularmente con el establecido con Francia en virtud del Acuerdo de 4.10.1952 donde se indicaba que la entrada y despliegue de todas las unidades a reas de las F.A.-U.S.A. necesitaban el acuerdo en cada caso de las autoridades gubernamentales competentes y que las operaciones de salidas de aer dromos, cubiertas por el acuerdo excepci n hecha de misiones de la OTAN, no podr an ser llevadas a

cabo sin el acuerdo entre los dos Gobiernos (70).

4. El Acuerdo de Procedimiento, sin embargo, contenía unos preceptos que estaban destinados a la ejecución de la autorización que estudiamos y que en nada modifican en mi opinión el carácter y naturaleza ya estudiados. Eran unos preceptos que me atrevería a otorgarles el carácter de "reglamentarios" o como dice el propio Acuerdo, de ejecución de la autorización.

Se establecía que:

"a) Todos los vuelos se llevarán a cabo de acuerdo con planes debidamente aprobados. Las dotaciones norteamericanas se regirán por los Reglamentos de Vuelo vigentes en España y por las instrucciones dictadas por las Autoridades regionales o locales de Control de Tráfico Aéreo".

A continuación decía el punto b):

"b) Los Mandos Militares de los Estados Unidos - concederan las autorizaciones de vuelo para todos los aviones del Gobierno de los Estados Unidos - así como para los aviones de transporte contratados por dicho Gobierno que entren, salgan, sobrevuelen o efectúen vuelos en España o por territorios bajo Control español".

Terminando en el c):

"c) Las Autoridades de los Estados Unidos notificarán siempre que sea posible a las Autoridades españolas competentes, con doce horas de antelación los vuelos de aviones en formación a partir de la unidad escuadrón y que entren, salgan o sobrevuelen por España o por territorio bajo control español".

Estos tres puntos interesa analizarlos y hacer unas observaciones. En primer lugar se preveía que todos los vuelos -

habían de llevarse a cabo de acuerdo con planes debidamente aprobados. No se decía en el punto a, por quién había de serlo, pero sí en el b: los Mandos Militares de los Estados Unidos.

Esta aprobación, o mejor estas autorizaciones de vuelo específicas, es decir otorgadas para cada vuelo, en nada debe identificarse con la autorización general que hemos estudiado antes y esto me parece importante retenerlo. Esto es así, entre otras cosas por los sujetos que la otorgan, que como hemos dicho son los Mandos Militares de los Estados Unidos en este caso, frente a la general que la otorga el Estado español.

Desde esta perspectiva estos preceptos son tan solo de carácter procedimental, reglamentarios para las F.A.-U.S.A. como apuntábamos más arriba.

Pero hay, sin embargo, otro dato que me interesa destacar y es, este de los sujetos.

Hablaba el punto b) de Mandos Militares de los Estados Unidos, en general; no se empleaba el término de Mandos locales como ocurría en el caso de la utilización de algunas instalaciones (71). Esta es la significación sustantiva que a mi juicio posee el término. Las competencias relativas a nuestro espacio aéreo iban a ser ejercidas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y no precisamente por las Fuerzas destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones. El Término era más amplio.

Finalmente el tercer punto de estudio es el c). ¿Qué

significación jurídica tenía en realidad esa notificación de - que se nos hablaba?. Esta interrogante es difícil de responder porque la indicada notificación escapa un tanto al régimen estudiado.

Por una parte hablaba de Autoridades de los Estados - Unidos no de Mandos Militares de aquel país, que eran los que - habían de autorizar normalmente, como hemos visto hasta ahora, los vuelos. Por otra se hablaba de "siempre que sea posible", - lo que suponía que aquellas Autoridades podían no notificar si efectivamente no era posible, posibilidad que lógicamente era - interpretada por aquellas.

¿Cual es la significación de esta notificación en ge- neral?. En mi opinión creo que en nada alteraba el régimen gene- ral visto. Los Mandos Militares de los Estados Unidos autorizarían el vuelo de todo avión militar de aquel Gobierno y por lo tanto de estos aviones en formación. Lo que sucede es que las Autori- dades de los Estados Unidos, no sus Mandos Militares, habían de notificar siempre que fuera posible, este tipo de vuelos a las Autoridades españolas. Parece ser, esta notificación, la expre- sión residual de una deferencia a las autoridades españolas que en nada modificaba el régimen general visto que, por tanto, que- daba jurídicamente inalterado; deferencia que efectivamente ha- bía de tenerla las Autoridades de los Estados Unidos pero que al mismo tiempo nos confirma la libertad de actuación de los Mandos Militares norteamericanos en nuestro espacio aéreo al no tener

ellos que notificar.

5. Situados en este lugar cabe preguntarse. En realidad, este régimen que consagra el Convenio Defensivo, ¿es el mismo - que vemos más arriba, propio del Derecho Internacional común en materia del espacio aéreo?

A la vista del Derecho Internacional común y del Convenio de Chicago que consagra la soberanía exclusiva y absoluta de cada Estado sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio (Artº 1) (72) —principio que pasa a nuestra Ley de Navegación de 1960 (73)— y que en su virtud y en cuanto a las aeronaves militares, establece que no podrán volar o aterrizar "sin la autorización otorgada por acuerdo especial y de conformidad" con condiciones estipuladas (Artº 3, punto c)); el régimen que disponen este Acuerdo Técnico y de procedimiento, ¿acaso no está en - alguna manera al margen de aquel?. La autorización general otorgada en estos textos ¿no se aparta en cierto modo de esta norma internacional general?.

SECCION III: Las competencias en el espacio marítimo español

1. El examen de las competencias norteamericanas en nuestro espacio marítimo presenta una autonomía y una dinámica propias, que le caracterizan y diferencian del espacio aéreo. Examen de esas competencias que exige, por otra parte, un conocimiento previo de las normas internacionales que fundamentan las competencias de los Estados sobre aquél, al igual que hicimos en el espacio aéreo.

En sentido estricto el término "espacio marítimo" es - un término equívoco; y es equívoco en el sentido de que en él incluyen conceptos jurídicos distintos que conviene deslindar claramente.

Como vimos más arriba, la terminología de los Acuerdos no es uniforme sino variada. De un lado nos hablaban de "aguas - jurisdiccionales" —Acuerdo Técnico Anexo— y de otro de "aguas territoriales y puertos" —Acuerdo de Procedimiento—.

En el espacio marítimo se engloban, a nuestros efectos, tres figuras distintas con normativa internacional caracterizada: por una parte las aguas interiores; en segundo lugar, el mar territorial y, en último término, la zona contigua.

Esta última, la zona contigua, sobre la que el Estado ribereño "puede adoptar las medidas de fiscalización necesarias" para evitar las posibles infracciones a sus leyes fiscales, de - inmigración, policía aduanera y sanitaria, así como reprimirlas,

(74) obviamente queda fuera de este análisis.

Nuestro análisis se circunscribe pues, a las aguas interiores y al mar territorial respectivamente, esto es, al análisis de las competencias norteamericanas en estos espacios marítimos específicos, a la luz del Derecho Internacional.

Estudiemos pues estos dos puntos.

2. El Derecho Internacional general sobre el mar territorial, viene contenido en la Convención de Ginebra sobre el mar territorial y zona contigua de 29 de abril de 1958, Convención - que tan solo contiene algunos preceptos relativos a las aguas interiores.

El Artículo 1º de la Convención, declara en cuanto al mar territorial:

"La soberanía de un Estado se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores a una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial".

Sin embargo, a continuación, y a diferencia de la soberanía sobre el espacio aéreo consagrado en la Convención de Chicago de 1944 ya vista, se indica:

"Esta soberanía se ejerce de acuerdo con las disposiciones de estos artículos y demás normas de derecho internacional".

Este ejercicio de la soberanía sobre el mar territorial no va a ser, según la Convención ginebrina, exclusivo y absoluto, como ocurre con el espacio aéreo. Ha de ejercerse según las dis-

posiciones de la Convención y demás normas de Derecho Internacional, siendo una de las disposiciones de la propia Convención, el denominado derecho de "paso inocente".

En efecto, el Artº 14, bajo la subsección A, que versa sobre reglas aplicables a todos los buques dice:

"1. Sin perjuicio de lo dispuesto en estos artículos, los buques de cualquier Estado con litoral marítimo o sin él gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial". (75)

Este mismo Artº 14, en su número 2 nos indica el significado del término "paso" y el cuatro define negativamente cuándo aquel paso es inocente (76) y así :

"2. Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial, ya sea para aprovecharlo sin penetrar en las aguas interiores, ya sea por dirigirse hacia estas aguas, ya sea para dirigirse hacia altamar viniendo de ellas".

Y en cuanto al término inocente:

"4. El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. Tal paso se efectuará con arreglo a estos artículos y a otras disposiciones del Derecho Internacional" (77).

Vemos pues que el derecho de paso inocente, está condicionado al hecho de que aquel no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. En este sentido el Artº 23, aplicable asimismo a los buques de guerra establece que:

"Cuando el buque de guerra no cumpla las disposiciones establecidas por el Estado ribereño para el paso por el mar territorial y no tenga en cuen

ta la invitación que se le haga a que las respete, el Estado ribereño podrá exigir que el buque salga del mar territorial".

Una de las normas internacionales vigentes pues en aquellos años (78) era la de que el buque militar tiene el derecho de paso inocente por el mar territorial de los Estados extranjeros, siempre no obstante que cumpla las disposiciones establecidas por el Estado ribereño.

3. Por lo que a las aguas interiores se refiere, la Convención se limita tan solo a enunciar su definición, definición conectada y derivada del concepto mismo del mar territorial:

"Las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial se considerarán como - aguas interiores" (Artº 5, punto 1).

El concepto mismo de aguas interiores abarca pues todas las aguas en el interior de la línea de base del mar territorial y su régimen jurídico viene determinado libremente por el Estado soberano de las mismas (79).

4. La normativa internacional vigente pues en aquellos años, es la de que el buque militar tiene el derecho de paso inocente por el mar territorial de los Estados extranjeros, siempre no obstante que cumpla las disposiciones establecidas por el Estado ribereño.

En cuanto a las aguas interiores, su régimen jurídico viene determinado única y exclusivamente por el Estado ribereño.

Ahora bien, conocido el Derecho Internacional general al respecto, debemos preguntarnos. ¿Cuál es la normativa española tanto sobre nuestro mar territorial como con respecto a nuestras aguas interiores?

La interrogante es obligada para posteriormente proyectar sobre aquella, las competencias norteamericanas enunciadas - más arriba.

Nuestro derecho, por una parte, análogamente a como se indica en la Convención mencionada (que pasó a formar parte de - aquél el 25 de Febrero de 1971) (80), no declara genéricamente - la exclusividad de su soberanía sobre el mar territorial, posición distinta de la adoptada para con el aire en la Ley de Navegación aérea de 1960, sino que se limita a configurar su carácter de dominio público.

En segundo lugar podemos afirmar de manera general que en él no se hace distinciones entre el mar territorial y las - aguas interiores, a la hora de determinar el régimen jurídico de estos espacios acuáticos (Azcárraga), sino que procede a su tratamiento, conjuntamente.

Así, la Ley de Costas de 26 de Abril de 1969, declara de dominio público el mar territorial nacional, incluyendo en él algunas de las llamadas aguas interiores. En efecto:

"Son bienes de dominio público sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos:
El mar territorial que ciñe las costas o fronteras del territorio nacional con sus ensenadas, - radas, bahías, abras, puertos y demás abrigos utilizables para pesca y navegación" (Artº 1, punto 3) (81).

Por otra parte es nuestro propio Código Civil el que declara de dominio público el resto de las aguas que para el Derecho Internacional vienen considerándose como interiores: los ríos, los lagos y las lagunas (Artículo 407, punto 1º y 4º).

Estas categorías que nuestro derecho adopta, no suponen, sin embargo una modificación a la naturaleza y régimen de aquél y de éstas en virtud del Derecho Internacional.

En efecto, en torno a su régimen, la Orden del Ministerio de Marina de 27 de Marzo de 1958 (82) que, entre otros su puestos, regula el tránsito de buques de guerra extranjeros por aguas jurisdiccionales españolas, nos dice:

"Con arreglo a las normas consuetudinarias del Derecho Internacional marítimo no se requiere autorización especial para el tránsito por las aguas jurisdiccionales españolas. Los buques de guerra que naveguen por ellas, deberán ostentar, de forma bien visible, el pabellón de su nación y los submarinos deberán hacer el tránsito en superficie".

El derecho de paso inocente que se consagraría en la Convención ginebrina, venía ya configurado en nuestro derecho interno.

Se indicaba además en el párrafo tercero de este artículo:

"Para fondear en aguas jurisdiccionales, efectuar algún ejercicio a cualquier otra operación fuera del simple tránsito por las mismas, será preciso obtener la correspondiente autorización del Gobierno español, la cual se gestionará por vía diplomática en un plazo mínimo de quince días"

Como vemos pues, nuestra legislación interna estaba en perfecta armonía con el Derecho Internacional. De un lado tanto las aguas interiores como el mar territorial venían configurados en nuestro derecho como de "dominio público", y por otra parte - se establecía el derecho de paso inocente como excepción a aquel dominio.

5. No obstante, dentro del régimen de las aguas interiores, determinado por las disposiciones de nuestro ordenamiento interno, es decir, definido por el Estado español de conformidad con las prescripciones del Derecho Internacional, hay que destacar - un tipo específico de aguas interiores que presenta una problemática especial en el ámbito internacional, me refiero a los puertos.

Desde un punto de vista estricto, el régimen jurídico de éstos, como parte de las aguas interiores, viene determinado por el Estado respectivo, en nuestro caso, por nuestro derecho interno.

Ahora bien, la problemática aludida se centra en la - visita de buques de guerra extranjeros a estos puertos.

¿Tienen los buques de guerra el derecho de visitar - puertos extranjeros, en nuestro caso los españoles, habida cuenta de la norma de Derecho Internacional según la cual todo Estado. -España- tiene el derecho de regular su régimen jurídico - discrecionalmente?

¿Existe alguna norma interna española que regule este punto?

La normativa conocida del siglo XIX, la constituyen - dos Reales Ordenes, la primera de 19 de Abril de 1867, la segunda de 11 de Agosto de 1882 (83), en la primera de las cuales se diría que:

"En España se reconoce y practica como principio de Derecho Internacional, que nuestros puertos y radas, abiertos al comercio extranjero, lo están igualmente para los buques de guerra de las naciones con quienes se está en paz..."

Estas Reales Ordenes que reconocían como principio de Derecho Internacional la apertura de nuestros puertos a los buques de guerra extranjeros, principio no tan reconocido por el Derecho Internacional (84), sería rectificado en 1928, por un - Real Decreto-Ley, vigente aún en la actualidad en cuyo artículo segundo puede leerse:

"En tiempo de paz, los buques de guerra extranjeros están autorizados de una manera permanente - para visitar los puertos españoles, sin más excepción que los Arsenales, pues para la entrada en éstos se precisa una autorización especial" (85).

En virtud^{pues} de este Real Decreto-Ley, nuestro ordenamiento autoriza de forma permanente la visita de puertos españoles a buques de guerra extranjeros.

La autorización sin embargo, en esta disposición, no aludirá a ningún principio de Derecho Internacional.

Por otra parte, esta autorización, prevista en este - Real Decreto-Ley, sería desarrollada en la Orden Ministerial ci

tada de 1958 (86), sobre visitas de buques de guerra extranjeros a puertos españoles, condicionándola al igual que en aquel pero más ampliamente, de doble manera. En efecto, de un lado pueden observarse unas limitaciones formales y en segundo lugar, unas limitaciones substantivas.

Los condicionamientos formales son, fundamentalmente, la regulación de la autorización de las visitas entre otros requisitos; autorización que ha de tramitarse previa solicitud, - con treinta días de antelación para las visitas oficiales y quin ce para las no oficiales (norma 3ª).

Los sustantivos son, por su parte, limitaciones que - han de obedecer los buques en cuestión durante la visita, siendo los más significativos para nosotros, los contenidos en el - punto c) de la Norma 6ª que dice:

- "Tampoco podrán los buques de guerra extranjeros en puertos españoles:
1. Levantar croquis o planos del puerto ni de - tierra firme.
 2. Sumergirse los submarinos.
 3. Ejecutar la pena de muerte.
 4. Desembarcar individuos de Marinería, Tropa - con armas, así como tampoco cualquier clase de material de guerra, si no es con autorización especial para cada caso.
 5. Realizar sondeos o cualquier otra clase de - trabajos submarinos, requieran o no el empleo de buzos.
 6. Las embarcaciones menores que circulen por el puerto no podrán llevar armamento alguno.
 7. Los buques que llevan a bordo aviones o helicópteros no podrán ponerlos en vuelo o desembarcarlos; no obstante si fuera necesario pasar algunos a tierra para recorrido, reparaciones, pruebas, etc. se pondrá en conocimien

to de las Autoridades respectivas para la con
cesión, si procediere del oportuno permiso".

Condicionamientos formales y sustantivos, que tenían - como finalidad -los sustantivos en mayor medida- el evitar realizar en nuestros puertos toda una serie de actos que podrían atentar a la seguridad del Estado. Condicionamientos los sustantivos, por otra parte, que no vienen determinados tanto por el régimen - de los puertos, como por la discrecionalidad del Estado en regular en su territorio las actividades de un buque de guerra extranjero, representante de un Estado extranjero que lleva a cabo en puertos de otro Estado el ejercicio del servicio público de la defensa nacional.

6. ¿Qué supone las competencias norteamericanas frente a este régimen que acabamos de ver?

Sistematizando la exposición llevada a cabo más arriba al hacer enumeración de aquéllas, podemos reducir a dos, fundamentalmente, las competencias que ejercerían las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en los buques visitantes de la Marina de aquel país junto con aquellos bajo el control del Departamento de Defensa, en nuestro espacio marítimo.

La primera, general, era la libertad de desplazamiento en nuestras aguas jurisdiccionales. Recordemos que el Artículo 7 del Acuerdo Técnico Anexo, nos decía:

"Las Fuerzas de los Estados Unidos, destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas tendrán libertad para desplazarse... en las aguas jurisdiccionales (españolas)..."

Y a continuación:

"La misma libertad se reconocerá a los buques, embarcaciones... dependientes de dichas Fuerzas, o afectas al servicio de los Estados Unidos a los fines de este Acuerdo... Tales buques... que se hallen en... aguas jurisdiccionales... estarán sometidas al control de sus mandos..."

La segunda, por otra parte, más específica, se circunscribía a la libertad de entrar, maniobrar y salir de las aguas territoriales y puertos, con las condiciones allí establecidas. (Acuerdo de procedimiento nº 11, artículo 1º).

Dos libertades que, debemos mencionar, adolecen de falta de coherencia. En efecto, de un lado, parece que la libertad de desplazamiento de esos buques era ilimitada, estando tan solo sometidos aquellos buques al control de sus mandos, mientras que de otro, podían entrar, maniobrar y salir de las aguas territoriales y puertos aunque con ciertas condiciones.

¿Cabe pensar que este desplazamiento era posible después de entrar en aquellas aguas, entrada que quedaba sujeta a unas condiciones? De ser así, aquella autorización, en principio sin limitación estaría asimismo condicionada de forma indirecta, cosa que no parece deducirse de la redacción del Artículo 7 ya visto.

No creo, sin embargo que quepa otra interpretación.

¿Cuáles eran, por otra parte, esas condiciones de que nos hablaba el Artículo 1º del Acuerdo de Procedimiento nº 11?

Su enumeración ya se indicó anteriormente, pero conviene estudiarlas ahora con algún detalle.

Tras definir el número dos de los Procedimientos Navales, cuáles eran los buques de la Marina y bajo control del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Acuerdo de Procedimiento dedicaba los puntos dos, tres y cuatro a enumerar las condiciones de que hablábamos. Se distinguía a este efecto tres tipos de visitas o escalas a las que ya aludiremos, y se especificaba que:

"Los buques podrán visitar y hacer escala en los puertos españoles haciendo la oportuna notificación, sin más formalidades, excepto en el caso - previsto en el párrafo dos, c)... Queda entendido que, salvo notificación en contra existe el - permiso diplomático para las citadas visitas".(3)

Se establecía, recordemos, una diferenciación entre los tipos de visita A y B por una parte y el C por otra, a efectos de procedimiento a seguir.

En el primer supuesto, es decir, en el caso de visitas en el que el ceremonial quedaba restringido a los saludos y visitas normales (sin protocolo; Tipo A) así como aquellas que tenían lugar principalmente por razones de logística, reparaciones o la realización de misiones operativas (Tipo B), el procedimiento a seguir era el de notificar sin más formalidades, con el permiso diplomático concedido previamente, aunque con la salvedad de que pudiera producirse notificación en contra.

Las otras visitas (Tipo C) eran las de naturaleza pro-

tocolaria, para las que había de realizarse las gestiones previas por vía diplomática.

Por su parte, el punto 3 del Acuerdo de Procedimiento establecía que tal notificación de que hablamos (las visitas tipo A y B), sería iniciada por el Departamento de Defensa, el Jefe de Operaciones Navales o los Mandos designados y que se tramitaría al nivel de los Mandos de la Marina; es decir que bien el Departamento de Defensa, bien el Jefe de Operaciones Navales, o bien los Mandos designados, podían iniciar esa notificación que había de tramitarse al nivel de los Mandos de la Marina, no especificando más este último punto.

Por su parte los Procedimientos Navales establecían que esa notificación sería dirigida al Agregado Naval de los Estados Unidos en Madrid (punto 3, párrafo b). Quizá pudiera ser éste el trámite a que antes se aludía. Fuera sin embargo así o no, aquel había de ponerse de acuerdo con las competentes Autoridades Militares españolas primeramente y después informar de ello a la Embajada de los Estados Unidos.

Para las citadas visitas quedaba entendido que salvo notificación en contra, existía el permiso diplomático.

Este punto, el relativo a los sujetos de la notificación nos confirmaba implícitamente el carácter particular de la notificación, que había de tramitarse en último término, entre el Agregado Naval de los Estados Unidos en Madrid y las Autoridades Militares españolas, tramitación que, a pesar de la presunción

favorable del permiso diplomático, podía terminar en una falta de acuerdo por parte de estas Autoridades españolas con la consiguiente denegación de aquel.

¿Cuál era por otra parte, el contenido de esa notificación?

Venía enunciado en el número tres de los Procedimientos Navales:

"a) La notificación comprenderá el nombre del puerto o zona donde se propone hacer la visita o escala; nombre y tipos de los buques así como si estos contestan o no los saludos al cañón; nombre de los Oficiales que arbolan insignia, Jefes de unidades, Comandantes, Capitanes Mercantes y Oficiales Militares de Enlace que se hallan a bordo, y los pasajeros de distinción que pudieran hallarse embarcados; periodo y fechas que comprenden la visita o escala; tipo de la visita o escala y género de privilegios deseados".

Del contenido de esta notificación podía depender de esta manera, la denegación del permiso.

Visto estos condicionamientos formales, el punto cinco de los indicados Procedimientos Navales enumeraba por su parte, - si bien no exhaustivamente "las diferentes clases de privilegios que normalmente" podrían ser concedidos a los buques de los Estados Unidos, siendo de mayor interés para nosotros, los enumerados como de clase 5ª y 6ª respectivamente, que decían:

"Instrucción. Comprenderá la utilización de zonas de instrucción en tierra y en aguas jurisdiccionales en aquellos lugares que pudieran convenirse con los mandos locales" (Clase 5ª).

Los de la Clase 6ª, titulados "instrucción de vuelos", - decía:

"Comprenderá el estacionamiento en tierra de los aviones y la realización de vuelos de instrucción de aviones tanto desde a bordo como desde tierra".

7. ¿Qué suponen, sin embargo, estas competencias norteamericanas como nos preguntábamos más arriba, frente a aquel régimen que vimos?.

En la década de los años 50. el Derecho Internacional y el Derecho interno español sobre el mar territorial admitían - el derecho de paso inocente en aquél de los buques de guerra extranjeros. En cuanto a nuestras aguas interiores y específicamente para la visita de aquellos a nuestros puertos, el Real Decreto-Ley de 1928 y la O. M. de 1958 eran únicamente la normativa - vigente, conteniendo la primera disposición unos condicionamientos sustantivos a la autorización de entrada idénticos a los indicados en la Orden Ministerial y entre los que figuraban precisamente la prohibición de estos dos tipos de privilegios que hemos visto se otorgaban a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

¿Cuál era pues la relación entre estas competencias norteamericanas y esta normativa?.

En sentido estricto, la entrada y régimen de los buques norteamericanos en puertos españoles, pudiendo éste autorizar aquella o no hacerlo, era algo que dependía y depende de la discrecionalidad del Estado.

Si en 1928, el Estado español autorizaba, aun cuando -

con ciertos condicionamientos, aquella entrada, podía, en virtud de aquella discrecionalidad, sustituir o modificar este régimen con posterioridad.

La problemática en nuestro caso queda reducida en realidad a un problema de validez o nulidad de ese Real Decreto-Ley o de la Orden Ministerial, frente al Convenio Defensivo en el que se contenían estas competencias.

Un dato que nos confirma esta afirmación, lo constituye el régimen actual de los buques de guerra nucleares norteamericanos, fundamentalmente submarinos, en nuestras aguas jurisdiccionales, régimen en el que en este caso hay una concordancia formal entre nuestro Derecho interno y el nuevo Convenio de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos —acuerdo internacional—.

En efecto, los Artículos 69 y 70 de la Ley de Energía nuclear de 29 de abril de 1964, encuadrados en el Capítulo XI —de aquella titulado "De los buques y aeronaves nucleares" (87), nos dirán al respecto:

"Quedan sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo los buques y aeronaves nucleares, incluso los buques de guerra y aeronaves militares y los que gocen de igual estatuto jurídico; no obstante para estos últimos no será aplicable lo que se establece en el Artículo 74" (Artº 69).

Por su parte el 70 indicaba:

"Se considera como excepción al derecho de "transito inocente" el paso por aguas jurisdiccionales de los buques nucleares o el sobrevuelo por territorio nacional de aeronaves nucleares".

Los buques de guerra nucleares, quedaban como vemos - pues en cuanto a su régimen en nuestras aguas jurisdiccionales —expresión empleada una vez más en nuestro ordenamiento— dentro de la discrecionalidad del Estado, alterando para este tipo de buques la normativa anterior, relativa al paso inocente.

De otro lado y en cuanto a la concordancia antes aludida, el Artículo VIII del Acuerdo de Desarrollo del Capítulo - VIII del Convenio de Amistad y Cooperación, nos dirá de forma - clara:

"Los movimientos de buques de propulsión nuclear en aguas jurisdiccionales de España, así como su entrada y salida de puertos españoles, no se considerarán incluidos en las previsiones de los párrafos precedentes; estos movimientos se realizarán de acuerdo con las autorizaciones que conceda el Gobierno español, que serán tramitadas a través del Comité Conjunto" (88).

8. En el orden de ideas expuesto hasta ahora, sin embargo, ni el Real Decreto-Ley de 1928, ni la Orden Ministerial de 1958, ni aún este articulado de la Ley de Energía Nuclear, plantean - problemas de análisis frente al Derecho Internacional, con respecto a las aguas interiores; y lo que es más importante, tampoco - los plantean con respecto al mar territorial, a mi juicio, incluso teniendo en cuenta la Convención de Ginebra.

La razón de esta última afirmación reside en que la soberanía del Estado sobre el mar territorial, además de ejercerse de acuerdo con las disposiciones de la Convención, también ha de

ejercerse, recordemos el propio artículo 1º de ésta, de conformidad con las "demás normas de Derecho Internacional", entre las que indudablemente figuran las consuetudinarias, nacidas de la práctica de los Estados. Estas disposiciones de nuestro Derecho interno, en efecto, son, en definitiva, las normas que determinan la práctica española, práctica constitutiva de una posible nueva norma consuetudinaria.

En cuanto al régimen de las aguas interiores, por otra parte no existe problemática de ninguna significación.

9. Las competencias de los Estados Unidos en nuestro espacio marítimo adquieren así un carácter distinto de las ejercidas en nuestro espacio aéreo, pues las normas del Derecho Internacional general sobre el mar territorial no venían taxativamente enunciadas en la Convención de Ginebra.

Tengamos en cuenta que las disposiciones de ésta no afectaban "a las convenciones u otros acuerdos internacionales ya en vigor" (Artº 25) cosa que no sucede en la Convención de Chicago de diciembre de 1944 en la que los Estados contratantes aceptarían que ésta derogaba "todas las obligaciones y Acuerdos existentes entre ellos" incompatibles con sus disposiciones y se comprometían "a no contraer tales obligaciones o entrar en tales acuerdos" (Artº 82).

A la hora de analizar aquellas competencias norteamericanas para determinar si tales vienen fundamentadas en el Dere-

cho Internacional general, el problema en realidad se desplaza por remisión del Derecho Internacional general al Derecho interno, para insertarse, dentro ya de las competencias del Estado, en un sector específico de éstas. Se inserta concretamente en el sector en el que el Estado ejerce el servicio público de la defensa nacional.

El tratamiento de estas competencias pues, se subsume en el de la naturaleza del propio Convenio Defensivo y allí se estudia implícitamente.

SECCION IV: Las restantes competencias: planteamiento final

¿Qué relación guardan con el Derecho Internacional general las competencias de los Estados Unidos relativas, por una parte a la construcción de todo ese complejo de zonas e instalaciones (Sc. C, S. II, Capítulo III); por otra las relativas a su utilización, que como vimos, no tenían otro fin que el funcionamiento administración y control de aquellas, fin por otra parte que no es otro sino el mantenimiento en eficiencia de las instalaciones de las bases? ¿Qué relación guardan con el Derecho Internacional general las competencias norteamericanas vistas relativas a la utilización de todos los Servicios Públicos, los ríos, puertos españoles, etc. (Sc. E, S.II)?. Y finalmente, ¿qué significación tienen las relativas al apoyo de operaciones en caso de emergencia y al entrenamiento de unidades militares y tácticas. (Sc. E, S. II)?.

El planteamiento en este caso presenta dificultades y las presenta porque así como con respecto al aire y al mar el Estado ejerce unas competencias específicas de utilización, hasta el punto de haber sido éstas objeto de regulación internacional; en este caso el problema se nos presenta desde otra vertiente.

El jurista francés Burdeau, otorga al territorio un doble significado: por una parte nos dice, supone y encierra un "cadre de competence" que ejerce el Estado; por otra y al mismo tiempo un "moyen d'action" de aquel. Competencias aquellas que

no son absolutas y medio de acción éste que no es total sino - que es considerado por el Estado como instrumento de los servicios llevados a cabo por él (89).

Pienso, sin embargo que éste "cadre de competence" y ese "moyen d'action" que ejerce el Estado podríamos subsumirlos perfectamente en las categorías del Profesor Rousseau, es decir, en las competencias territoriales y personales por un lado y las relativas a los servicios públicos por otro, todas ellas competencias que "el Derecho Internacional reconoce a los Estados" - (90). Es decir las competencias territoriales y personales serían las integrantes de ése "cadre" y las relativas a los servicios - públicos serían las que el Estado ejercería como "moyen d'action". Competencias todas ellas que responden a una función: el deber - de desarrollar en el territorio la actividad estatal, las funciones de Estado a las que se refiere el Profesor Carrillo (91).

Ahora bien, si efectivamente, estos tres núcleos de - comperencias son los que el Derecho Internacional general reco- noce a los Estados, y queremos conocer la relación que guardan con él las competencias indicadas y ejercidas por los Estados - Unidos, ¿no será preciso conocer la incidencia de estas compe- tencias en los tres núcleos vistos, que por D. Internacional general debe ejercer el Estado?.

La pregunta presenta dificultades, pues en el caso del espacio aéreo se trataba tan solo de analizar una competencia concreta: su utilización por las aeronaves de las F.A.-U.S.A.. En -

este caso, sin embargo el análisis abarca toda una gama de competencias.

Esta interrogante, planteada desde esta óptica, se nos presenta en realidad bastante problemática.

En efecto, el planteamiento metodológico de la tesis, ya dijimos (92) tenía por objeto el estudio de la naturaleza y -significación jurídico-internacional de las competencias norteamericanas a ejercer en España y no de las competencias españolas a las que nuestro Estado debió ceder como corolario evidente de ejercicio de aquellas.

Desde esta perspectiva pues, el problema queda planteado de modo diferente: ¿cuál es la naturaleza de estas competencias ejercidas en nuestro territorio por los Estados Unidos que determina que todo un conjunto de competencias españolas que por Derecho Internacional general le correspondía actuar, entre otras, la exclusiva utilización militar de nuestro espacio aéreo, cedan ante aquellas?.

Este es en realidad, el núcleo del problema, pero a esta interrogante voy a dedicar la Parte Cuarta de esta tesis, en la que estudio la naturaleza jurídica de este Convenio.

P A R T E T E R C E R A

CAPITULO I:

ASPECTOS DE LA AYUDA ECONOMICA.

SECCION I: EL ARTICULO V DEL CONVENIO.

SC. A. SU CONTENIDO.

SC. B. SU ORIGEN, EVOLUCION Y SIGNIFICADO.

SECCION II: LA AYUDA PROPIAMENTE DICHA.

SC. A. ANALISIS FORMAL DEL ARTICULO PRIMERO
DEL CONVENIO.

SC. B. SUS OBJETIVOS SUSTANTIVOS.

CAPITULO I: Aspectos de la ayuda económica

SECCION I: El Artículo V del Convenio

Sc. A: Su contenido

1. El Artículo V del Convenio de Ayuda Económica es de los de mayor importancia sustantiva y uno de los que en la práctica ha tenido mayor significado. Tenfa por objeto inmediato, fijar un destino a las pesetas equivalentes a las cantidades de dólares que "con carácter de donación" se facilitasen por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud de la ayuda técnica y económica que dicho Gobierno se comprometfa a otorgar (Artº 1). Reflejaba claramente, como veremos, una de las notas de que hablaba al estudiar al estudiar la sistemática de los convenios: su estrecha interrelación. En efecto este Artículo estaba relacionado intimamente con el Convenio Defensivo e indirectamente con el de Ayuda.

Su antecedente se hallaba en la Sección 115, punto 6 de la Ley de 1948, que más tarde sería modificada sustancialmente por la 521 de la Ley de 1951. Es quizá esta modificación una de las más importantes que se introducían en esta última Ley.

Se establecfa en el artículo en cuestión que:

"Se abrirá una cuenta especial en el Banco de España a nombre del Gobierno español -que en -

adelante se llamará Cuenta Especial- en la - que se depositarán pesetas en cantidades de valor equivalente al coste en dólares para - el Gobierno de los Estados Unidos de América de las mercancías, servicios e información - técnica (incluidos los costes de transformación, almacenaje, transportes, reparaciones y otros servicios) que se pongan a disposición del Gobierno español con carácter de donación conforme al presente Convenio. El Gobierno de los Estados Unidos de América notificará periódicamente al Gobierno español el coste en dólares de tales mercancías, servicios e información técnica, y el Gobierno español actoseguido, ingresará en la Cuenta Especial el importe equivalente en pesetas - computado al cambio que mutuamente se halla convenido entre ambos Gobiernos" (punto 2).

Así pues el montante de esta cuenta sería el equivalente en pesetas de los dólares asignados como donación.

2. Pero ¿cuál era el destino de esas pesetas?. El - propio artículo era bastante explícito y nos lo indicaba en los puntos a) y b) del número tres. Por una parte las necesidades en pesetas del Gobierno de los Estados Unidos de - América "para gastos administrativos y de ejecución como - consecuencia de las operaciones realizadas en España de conformidad con la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y disposiciones modificativas y complementarias"; por otra parte se hablaba en el epígrafe b) de "las necesidades para gastos en pesetas que se ocasionan por la construcción y mantenimien-to de dichas instalaciones militares"(aludía a las previs-
tas en el Convenio Defensivo).

Como ya iremos viendo, parece ser que el Gobierno de los Estados Unidos de América tuvo un interés especial, a juzgar por el articulado, en constatar claramente este punto así como dotarlo de un carácter de urgencia. En efecto, el número dos de este artículo concluía: "El Gobierno español - podrá, en cualquier momento, anticipar depósitos en la Cuenta Especial, que serán acreditados a cuenta de futuras notificaciones, de acuerdo con lo establecido en este párrafo". Vemos pues que no solo se depositarían las pesetas equivalentes a los dólares ya asignados sino también a dólares por asignar, esto es depósitos a cuenta de aquellos.

Este punto, a mayor abundamiento, venía aclarado - en el número siete de las Notas Interpretativas que acompañaban al Convenio donde decía.

"Queda entendido que el sentido y la intención de la última frase del párrafo dos del artículo V es que el Gobierno español adoptará medidas para asegurar que las sumas en pesetas depositadas en la Cuenta Especial son suficientes en todo momento para permitir al Gobierno de los Estados Unidos de América atender sus obligaciones de pago en pesetas para los fines previstos en este convenio. Los Estados Unidos de América informarán al Gobierno español, -- siempre que sea necesario, de sus necesidades en pesetas y están de acuerdo en que sus peticiones al Gobierno español para atender dichas necesidades no deberán exceder del importe de la asistencia económica y técnica asignada en firme a España con carácter de donación en el momento de hacer dichas peticiones".

Se ve claramente el carácter de urgencia que antes aludía, al expresarse que las sumas serían "suficientes en -

todo momento" para permitir al Gobierno de los Estados Unidos de América atender sus obligaciones de pago en pesetas.

3. Visto, sin embargo, el destino de estas pesetas podemos preguntarnos, ¿cómo quedaban distribuidas estas sumas?. En torno a esta interrogante no era sin embargo muy esclarecedor este artículo, pues tan solo se hablaba de un 10% con referencia a los gastos administrativos y de ejecución y la redacción no estaba del todo clara. "Estas sumas", es decir, las que el Gobierno español pondría a disposición del Gobierno de los Estados Unidos retirándolas de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial en la forma pedida por el Gobierno de los Estados Unidos en su notificación (punto 3. a) "serán cargadas al porcentaje mencionado en este párrafo. El diez por ciento de cada depósito efectuado de acuerdo con este artículo se pondrá a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América....".

El mismo procedimiento aparecía en el párrafo siguiente que se refiere a los gastos en pesetas que se ocasionan por la construcción y mantenimiento de dichas instalaciones militares, al decir que: "El Gobierno español, acto seguido", es decir, después de la notificación periódica por parte del Gobierno de los Estados Unidos de aquellos, "facilitará estas sumas retirándolas de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial en la forma requerida por el Gobierno de los

Estados Unidos de América en su notificación".

Frente al párrafo anterior en el que se fijaba un 10% como porcentaje a distraer o retirar, en éste nada se indicaba como vemos. Una primera interpretación nos hace optar entre dos posibilidades: o ese 10% incluía ambos gastos (administrativos y militares) o tan solo hacía referencia a los primeros como específicamente se indicaba en el párrafo.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, un dato y es que si consideramos que esta Cuenta Especial tan solo contenía el contra-valor en nuestra moneda de la "asistencia técnica y económica..... facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos con carácter de donación", y por otra parte el interés que los Estados Unidos habían puesto en este punto dándoles prioridad (93) frente a los otros gastos, podríamos pensar que ese 10% era relativamente escaso como para cubrir los gastos administrativos y los de construcción y mantenimiento de las instalaciones militares. Este porcentaje pues, parece deducirse, tan solo se destinaba a los gastos administrativos y no a aquellos. ¿Qué porcentaje entonces se destinaría a los otros gastos, es decir a los militares?.

Esta es la interpretación que nos parece más correcta, y en las sesiones de las Cámaras del Congreso de los Estados Unidos encontramos la confirmación a este punto.

En un detallado balance entregado al Comité de Asignaciones presupuestarias del Senado (Committee on Appropria-

tions) en 1957, por el Departamento de Estado (94), en el que se insertaba la ayuda a España durante los años fiscales de 1954 a 1957, se encontraba expresado junto al destino específico de los fondos asignados, el porcentaje de las sumas de la Cuenta Especial de contrapartida. Se decía que el "acuerdo general sobre el uso de la contrapartida es que el 60% es para la construcción de las bases" y "el 10% para uso general de los Estados Unidos".

Efectivamente, los porcentajes eran distintos. Por su parte Mr. Van Dyke Director Regional de la oficina de Operaciones Europeas de la Administración de Operaciones Extranjeras (95) declaraba en uno de los Hearings del Comité arriba mencionado ante una interpelación senatorial en torno a la Ayuda (96)

"...al elegir entre préstamos y donaciones a lo largo de los pasados tres años, hemos tenido que elegir entre obtener un 70% inmediatamente u obtener un 100% en fecha futura, 20 ó 40 años a partir de ahora.

Ante esta elección, ha sido decisión nuestra que es mejor tener un 70% ahora, porque tenemos una inmediata necesidad de pesetas en el programa de construcción".

Realmente es significativa esta declaración de Van Dyke que denotaba, por una parte, la política seguida en la ayuda a prestar, y por otra la urgencia del programa de construcción y su incidencia en la aplicación del artículo que -- estudiamos. (97)

4. ¿Qué ocurría con los fondos no afectados a los fines ya vistos, es decir, del 30% restante?. De aquellos podría el Gobierno español retirarlos "para aquellos gastos que se convengan periódicamente con el Gobierno de los Estados Unidos - de América y que se hallen de acuerdo con los fines señalados en la Ley de Seguridad Mutua de 1951, y sucesivas enmiendas". (punto 4).

Estos fondos, como se indicaba, no podían ser destinados sino a los fines de la Ley de 1951 y sucesivas enmiendas. En una primera aproximación a cuales eran éstos, podemos decir desde una perspectiva general que aquellos fondos quedaron afectados "para uso español, principalmente, para mejorar medios de transporte y especialmente aquellos de importancia para el programa de construcción de bases". (98)

Sc. B: Su origen, evolución y significado

1. Como veíamos al principio este artículo provenía de la Ley de 1948 y es de interés estudiar el desarrollo de este punto que procedía de la Sección 115 de aquella, en la legislación posterior, para comprender su significación en su totalidad.

La Ley de 1948 fue el texto legal que como sabemos sirvió de estructura jurídica para la puesta en práctica del llamado Plan Marshall, de ahí que los convenios que concerta-

sen los Estados Unidos con los países europeos llevasen inser
tas las cláusulas que aquella exigía. Una de ellas era la con
tenida en la ya mencionada Sección 115 b), punto 6 que decía
de crear:

"...en una cuenta especial un depósito en la -
moneda de tal país en cantidades proporciona-
das y bajo tales términos y condiciones como -
pueda ser acordado entre tal país y el Gobier-
no de los Estados Unidos, cuando cualquier mer
cancía o servicio sea susceptible de entrega a
través de cualquier manera autorizada en este
título y sea suministrada al país participante
con carácter de donación".

A continuación se indicaba:

"Dicha cuenta especial ... se guardará o usará
dentro de tal país... para fines de estabilizaa
ción interna financiera y monetaria, para esti
mular la actividad productiva y la exploración
para y desarrollo de nuevas fuentes de riqueza
o para tales otros gastos que puedan estar de
acuerdo con los propósitos de este título, in-
cluyendo gastos administrativos de los Estados
Unidos en moneda local conectados con operaciou
nes de este título, y con el acuerdo de que -
cualquier partida no cargada restante en dicha
cuenta el 30 de junio de 1952, será afectada -
dentro de tal país para tales fines como sean
acordados entre ese país y el Gobierno de los
Estados Unidos, sujeta por Ley o resolución -
conjunta del Congreso"(99).

Esta cláusula se insertó, de esta manera en los --
acuerdos que celebró el Gobierno de los Estados Unidos en e-
jecución del programa (100). En todos ellos prácticamente, -
se insertó el contenido de esta sección con los fines de las
partidas vistos. Si tomamos como modelo el acuerdo con Fran-
cia de 28 de junio de 1948 podemos verlo más concretamente.

En el se dice:

"Al considerar las propuestas adelantadas por el Gobierno de Francia para retirar de la Cuenta Especial, el Gobierno de los Estados Unidos de América, tendrá en cuenta la necesidad de - promover o mantener la estabilización interna monetaria y financiera en Francia y de estimular la actividad productiva y el comercio internacional y la exploración para y desarrollo de nuevas fuentes de riqueza dentro de Francia, incluyendo en particular:

a) gastos en proyectos o programas, inclusive aquellos que son parte de un programa extenso para el desarrollo de la capacidad productiva de Francia y de otros países participantes y proyectos o programas cuyos costes externos están siendo cubiertos con la ayuda otorgada - por el Gobierno de los Estados Unidos de América en la Ley de Cooperación Económica de 1948 o de otra manera, o por prestamos del Banco Internacional para la Construcción y Desarrollo.

b) gastos en la exploración de y desarrollo de producción adicional de materiales que puedan ser necesitados en los Estados Unidos de - América debido a deficiencias o deficiencias - potenciales en los recursos de los Estados Unidos de América (101).

c) retirada efectiva de deuda pública especialmente deuda emitida por el Banco de Francia u otras instituciones bancarias".

En efecto, esta normativa iba destinada a mejorar - de una manera directa la economía de los países receptores.

2. En nuestro artículo quinto sin embargo, no se hacía ninguna alusión como hemos visto a estos puntos. ¿Cuál erá - el motivo?. En realidad, como ya dijimos al comienzo, el convenio que estudiamos se inspiraba en la Ley de 1948 pero en - todo aquello que no hubiera sido modificado por la legislación posterior y en este sentido es la Ley de 1951 la que al unir los dos programas adaptaba la normativa a las nuevas circuns-

tancias. Una de las modificaciones que introducía a esta última Ley se contenía en la Sección 521 que decía:

"Los fondos asignados para la puesta en práctica de las disposiciones del título I de esta Ley serán asignados a la participación de los Estados Unidos en la adquisición y construcción de instalaciones en países extranjeros para la defensa colectiva: teniendo en cuenta que ninguna parte de tales fondos sean gastados para alquiler o adquisición de terrenos o para pago de impuestos, tales fondos serán también destinados para los gastos administrativos de la puesta en práctica de los fines de todos los títulos de esta Ley..."

Esta afectación pues de los fondos del título I, el referente a Europa, y aplicable a nuestro caso, daba una orientación muy diferente a aquellos que provenían de la Ley de -- 1948. Frente a los fines de estabilización interna financiera y monetaria, estímulo de la actividad productiva y de exploración para el desarrollo de nuevas fuentes de energía de la -- Ley de 1948, se habla en 1951 de "participación de los Estados Unidos en la adquisición y construcción de instalaciones en -- países extranjeros para la defensa colectiva".

Esto incidió considerablemente en la redacción que había de regular "el uso de las contrapartidas", en la Sección 523, y así, se estableció que el Administrador de la Ley concertaría acuerdos.

"...con respecto al uso de los fondos depositados en las cuentas especiales de los países -- participantes... y cualesquiera otros países -- que reciban ayuda de la Ley de Ayuda para la --

mutua Defensa de 1949, enmendada, de tal manera que el equivalente de no menos de 500.000.000 de tales fondos serán utilizados exclusivamente para producción, construcción, equipo y material militar en tales países. La cantidad a ser afectada de cada cuenta especial para dicho uso se acordará por el Administrador y el país o países interesados".

Estas Secciones nos explican pues jurídicamente el como y el por qué de la redacción de este artículo que estudiamos. Esta Cuenta Especial de que se hablaba en nuestro Convenio y sus fondos tenían un fin muy distinto de aquellas otras que vemos en los otros acuerdos con países europeos. La misión de esta cuenta quedó expresa y repetidamente indicada en las sesiones de los distintos comités del Congreso que tuvieron lugar en los años 1954 y 1955, en relación con nuestros convenios. Quizá fuera D. A. FitzGerald, (102) quien más claramente lo expusiera ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes:

"Este es el único acuerdo (103) que no hemos celebrado con cualquiera de nuestros otros países receptores y participantes. Quiere decir, por supuesto, que las necesidades de dólares - que los Estados Unidos requieren para proveer a la construcción de las bases se reduce por la suma de pesetas disponibles como resultado de este acuerdo. Por otra parte, por supuesto, quiere decir efectivamente que este porcentaje de la contrapartida no está disponible como ha estado en la mayoría de los otros países para proyectos acordados conjuntamente de desarrollo económico de mejora, de producción agrícola, de otras clases de actividades internas que contribuyeron tanto en otros países a la rehabilitación que siguió a la guerra y al desarrollo económico desde entonces".

SECCION II: La ayuda propiamente dicha.

Sc. A: Análisis formal del Artículo Primero del Convenio.

1. El Artículo 1º del Convenio de Ayuda económica decía textualmente:

"El Gobierno de los Estados Unidos de América facilitará al Gobierno español o a cualquier persona, entidad u organización que este último designe, la asistencia técnica y económica que se pida por el Gobierno español y se apruebe por el de los Estados Unidos de América conforme a las estipulaciones convenidas en el -- presente Convenio y con sujeción a todos los -- términos, condiciones y cláusulas de caducidad que determinen las leyes entonces vigentes en los Estados Unidos de América".

Este artículo como se observa de su simple enunciación, es concreto en cuanto que preveía la asistencia técnica y económica a facilitar por el Gobierno de los Estados Unidos, pero nada específico señalaba con respecto al alcance económico de esa asistencia, las condiciones en que había de llevarse a cabo, criterios selectivos, etc.

¿Cuáles eran las estipulaciones convenidas en el -- propio convenio, de que se hablaba en este artículo?. Las estipulaciones del Convenio no eran verdaderamente muy específicas. Tan solo en el Artº II se hacía referencia a algunos -- de estos puntos, distinguiéndose dos supuestos en función de la procedencia de los bienes o servicios, adquiridos con ayuda facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos.

En el primer supuesto, se indicaba, que el Gobierno español haría lo posible por cooperar con aquel Gobierno al objeto de que cualquier adquisición financiada con ayuda facilitada por el mismo se efectuara "a precios y en condiciones razonables" (párrafo I c)), lo cual no especificaba más de lo ya visto. Esta fórmula adolecía de generalidad y por otra parte, sin embargo, venía completada con la segunda de las Notas Interpretativas del Anejo al Convenio donde se indicaba:

"Queda entendido que el párrafo Ic) del Artº II no debilita el derecho y responsabilidad de los Estados Unidos de América a especificar cualesquiera términos y condiciones de ayuda se consideren necesarios".

Esta nota en realidad pues, como podemos observar, definía que era el Gobierno de los Estados Unidos quien en último extremo determinaría esos precios y condiciones, dejando sin sentido prácticamente el citado párrafo.

Ahora bien, este precepto, en realidad, se refería a las adquisiciones llevadas a cabo una vez asignada ya la ayuda. Realmente los términos, condiciones y cláusulas de caducidad habían de buscarse en las Leyes entonces vigentes en los Estados Unidos y la Ley directamente aplicable, como ya el propio Convenio indicaba en su preámbulo al aludir a los principios que regirían la ayuda económica y técnica, era la ya tan mencionada de 1951 que por remisión nos conectaba con la de 1948.

Quizá desde nuestra perspectiva jurídica pública no fuera necesario este análisis de la legislación indicada, entre otras razones porque en este estudio, tan solo nos interesa las grandes líneas de esta ayuda y no su desarrollo técnico. Vamos a describir sin embargo en tránsito de esta Ley, la de 1948, a la del 1951 para así introducirnos mejor en la segunda Subsección.

2. En efecto, la Sección 111, a) (1) y (2) de la Ley - de Cooperación Económica (Economic Cooperation act) de 1948 - disponfa:

"El Administrador puede asignar ayuda a cualquier país participante, en la forma y procedimientos autorizados en las subsecciones (a) y (b), respectivamente, de esta sección, mediante donaciones o pago en efectivo o a crédito o en tales otros términos de pago como pueda considerar oportuno, incluyendo pago por la transferencia a los Estados Unidos (en tales términos y en tales cantidades como pueda ser acordado entre el Administrador y el país participante) de materiales que se necesiten por los Estados Unidos como resultado de deficiencias o deficiencias potenciales en sus propios recursos.

Seguía a continuación:

"Al determinar si tal ayuda será mediante donaciones o en condiciones de pago, y al determinar las condiciones de pago actuará en consulta con el Consejo Asesor Nacional de Problemas Internacionales Monetarios y Financieros y la determinación de si un país participante debe ser requerido a realizar el pago por cualquier ayuda prestada a dicho país en desarrollo de los propósitos de este título, y los términos de tal pago, si fueran requeridos, depende

rá del carácter y finalidad de la ayuda y si hay razonable garantía de devolución considerando la capacidad de tal país para hacer tales pagos sin perjudicar el logro de los propósitos de este título".

Finalmente, a nuestros efectos, concluía:

"Cuando se determine que la ayuda debe de ser otorgada según los preceptos de este título, a crédito, el Administrador asignará fondos al Banco de Importación y Exportación de Washington... que hará y administrará el crédito en las condiciones especificadas por el Administrador en consulta con el Consejo Nacional Asesor en Problemas Internacionales Monetarios y Financieros..."

Como vemos, esta asistencia, en términos económicos que son los que nos interesan, podía efectuarse de tres maneras, bien mediante donaciones (grants), bien mediante pago en efectivo (payment in cash) o bien a crédito (on credit terms). Esto por una parte; por otra interesa asimismo resaltar los criterios a utilizar por el Administrador a la hora de decidir cual de los tres caminos había de seguirse. En este punto había de tener en cuenta: en primer lugar el carácter y finalidad de la ayuda y en segundo lugar si había razonables garantías de que el país en cuestión, considerando su capacidad, - pudiera devolver los pagos o mejor, abonar los créditos.

Esto es lo que la Ley de 1948 disponía. Sin embargo la de fecha 1951, introducía un correctivo que es de interés. Es el contenido en la Sección 522 en la que se disponía la -- adición de un nuevo párrafo a los arriba indicados y transcritos:

"De la ayuda prevista en los preceptos aplicables de esta Ley con fondos disponibles en virtud de la Ley de Seguridad Mutua la cantidad - mayor posible (en ningún caso menos de 10%) se rá asignada en forma de créditos".

La diferencia importante pues de nuestra Ley frente a la de 1948 era la de que sus fondos, habían de distribuirse a ser posible en forma de créditos. El mayor énfasis había de observarse pues a la hora de actuar aquellos fondos, sobre la base de los créditos. El ámbito de discrecionalidad del Administrador se reducía con esta adición.

Los criterios, por el contrario, a tener en cuenta por aquel, relativos a las garantías de pago del país en cuestión (104) en función de su capacidad económica, así como el carácter y finalidad de la ayuda quedaba obviamente sin ninguna modificación o alteración.

Sin embargo sobre el carácter y finalidad de la ayu da vamos a dedicar la Subsección siguiente.

Sc. B. Sus objetivos sustantivos.

1. ¿Cuáles eran los fines de esta ayuda económica y - técnica?. En torno a la finalidad de esta ayuda y dentro del análisis comparativo que venimos realizando entre las dos le yes sobre las que siempre operamos, me interesa una vez más insistir en este análisis.

El correctivo que introducía la Ley de 1951 al respecto, es decir, en cuanto a los fines se refería, es de gran interés, pues el "carácter" y "finalidad" de esa ayuda en aquella disposición eran distintos de la del programa de 1948. En efecto tras constatar en éste, que:

"La restauración o mantenimiento en los países europeos de los principios de libertad individual, instituciones libres y la independencia genuina descansa fundamentalmente sobre la base de condiciones económicas seguras, estables relaciones económicas internacionales y el logro por los países de Europa de una sana economía independiente de ayuda exterior extraordinaria....".

Declaraba ser "policy" del pueblo de los Estados Unidos:

"Urgir a aquellos países a través de una organización conjunta para ejercer comunes esfuerzos... que lograrán rápidamente esa cooperación económica en Europa que es esencial para la -- prosperidad y paz duraderas" (Sección 102 a): Findings and declaration of policy).

Por su parte, sin embargo, la ayuda de 1951 se enmarcaba dentro de estas "policies":

"El Congreso declara ser propósito de esta Ley mantener la seguridad y promover la política - exterior de los Estados Unidos con la autorización de ayuda militar, económica y técnica a - países amigos para reforzar la seguridad mutua y las defensas individual y colectiva del - mundo libre ..." (42).

La razón de la ayuda era, efectivamente, diferente en uno y otro caso.

En aquella se hacía alusión a medidas económicas y

financieras, mientras que en ésta, nada se aludía al respecto. Este silencio era significativo y es que ambas Leyes respondían a dos situaciones internacionales muy diferentes: de -- ahí que sus "políticas" fueran diferentes e incidieran tan directamente en los convenios posteriores a cada una de ellas.

El mismo N. Averell Harriman, Director de Seguridad Mutua (105) al presentar el programa de Seguridad Mutua al -- Congreso de 1952 para el año fiscal de 1953 (106) confirmaba estos puntos que he indicado al decir:

"El programa de Seguridad Mutua es una parte -- de nuestro esfuerzo total de Seguridad. Los -- fondos solicitados representan alrededor del -- $12\frac{1}{2}$ por ciento de aquella parte del presupuesto dedicada a nuestra seguridad...".

"El creciente esfuerzo defensivo europeo requiere mayores suministros de materias primas importadas. Estos suministros no pueden ser pagados completamente con las presentes ganancias europeas cuando la economía europea no ha sido aún ajustada a la diversificación de recursos básicos para uso militar. Por estas razones, el Programa de Seguridad Mutua incluye cerca de -- 1,8 billones de dólares para proveer el margen crítico de productos importados como apoyo defensivo a Europa en su conjunto...."

"Esto no es lo mismo que estuvimos haciendo en el Plan Marshall. El Plan Marshall fue ideado para ayudar a Europa a reconstruir su economía civil desde las desastrosas consecuencias de la guerra. El apoyo a la defensa (Defence - support) es también una forma de ayuda económica pero para un fin completamente diferente. -- Lo está para hacer posible a nuestros amigos en Europa a ampliar sus esfuerzos defensivos para nuestra seguridad común (42)"

2. La conexión entre este programa de ayuda y la defensa de Europa era pues clara. En realidad en todas las Leyes --

presupuestarias consultadas (107) y que abarcan tan solo, lamentablemente, hasta 1958, año en el que se discutía la Ley de presupuestos de Seguridad Mutua del año fiscal de 1959, se incidía en numerosas ocasiones en la significación del término "Defence support" en el sentido ya mencionado. La Administración de la ayuda y el propio Gobierno norteamericano mismo lo hacían en repetidas ocasiones frente al Congreso.

Ahora bien, ¿cuál era la finalidad específica de esta ayuda a España?. ¿Qué carácter adoptaba frente a nuestro país?. Ya antes apuntamos provisionalmente al estudiar el Artículo V y al hablar de la utilización del 30% que restaba de la Cuenta Especial allí vista, que aquella cantidad iba destinada a utilización española, principalmente para mejorar medios de transporte y especialmente aquellos de importancia para el programa de construcción de bases.

Efectivamente el apoyo defensivo a Europa de que -- nos hablaba A. Harriman adoptaba en España una significación muy específica derivada de nuestra situación, respecto a los otros países integrantes de aquella. Y también tenía un significado específico con respecto a las zonas e instalaciones que se construirían o adaptarían como se apuntaba antes.

Me parece relevante en este sentido insertar las declaraciones del embajador John Lodge al respecto, por confirmar este punto:

"Me gustaría ahora hablar del problema que envuelve el tercer acuerdo con España, fundamentalmente, la ayuda económica de apoyo a la defensa. Cuando comenzamos el programa de construcción de bases en España... dábamos por sentado que habrían de ser resueltos problemas en el orden económico, para alcanzar estos objetivos. Primero, era necesario asegurar que el programa de construcción de bases no alterara marginalmente la economía española"

A continuación decía:

"Un programa largo de construcción en España - sin ayuda de apoyo a la defensa podría bien -- crear crecidas presiones inflacionistas que, - entre otros malos resultados, alzaría el costo de la construcción de las bases. Esto ha sido evitado..."

En cuanto a esta ayuda y a su utilización se manifestaba en este sentido:

"La ayuda de apoyo a la defensa, por lo tanto, ha sido utilizada de dos maneras: una, proveer de materias primas y de productos agrícolas para bloquear el impacto inflacionista de la construcción de las bases y dos, ofrecer equipo de primera necesidad para los sectores de la economía en los que España es más débil. Afortunadamente, las necesidades drásticas de la economía española han coincidido con las necesidades de las bases naval y aéreas que se están construyendo...."

Finalmente insistía en el significado de la ayuda - "defence support":

"La ayuda económica a España, que está siendo destinada en considerable parte al transporte y a la energía eléctrica está bastante propiamente denominada ayuda de apoyo a la defensa - desde que su propósito es reforzar nuestro mutuo esfuerzo defensivo. Sin la mejora, los ferrocarriles, por ejemplo no podrían facilitar las comunicaciones adecuadas desde los puertos a las bases militares. Las carreteras en España

aunque en condiciones relativamente peores que su sistema ferroviario no están lejos de las exigencias tanto de la economía civil como del programa militar.

El equipo de construcción de carreteras está siendo suministrado en el programa de ayuda y está siendo utilizado en estas carreteras y ferrocarriles que son de importancia para la línea militar conjunta hispano norteamericana de comunicaciones" (108).

Efectivamente pues, tanto el Administrador del programa como la Misión Económica que se desplazó a nuestro país para actuar este Convenio debieron operar con estas políticas.

P A R T E C U A R T A

CAPITULO I:

NATURALEZA JURIDICO INTERNACIONAL DEL CONVENIO
DEFENSIVO

SECCION I: PLANTEAMIENTO

SECCION II: LA DOCTRINA

SECCION III: NUESTRA POSICION

CAPITULO I: Naturaleza juridico internacional del Convenio Defensivo.

SECCION I: Planteamiento.

A lo largo del Capítulo III de la Parte Tercera, hemos estudiado detenidamente las competencias más relevantes que los Estados Unidos ejercían en España, dejando al final, en el Capítulo IV de aquella, emplazado el tema.

Ahora nos corresponde aquí tratar de dar una respuesta a la siguiente interrogante: ¿cuál es la naturaleza jurídico internacional de este Convenio?.

Ya en otro lugar apuntamos la carencia de estudios doctrinales específicos sobre la problemática que encierra el tratamiento de las bases militares en territorio extranjero.

En efecto, la doctrina internacionalista no ha llevado en realidad a cabo un estudio detallado sobre el tema. Las únicas referencias generales son de calificación, es decir, de encuadramiento de estos tratados dentro de las grandes categorías e instituciones del Derecho Internacional Público.

Sobresale como veremos más abajo la doctrina francesa fundamentalmente y en menor medida la anglosajona, la inglesa especialmente.

SECCION II: La Doctrina

Quizá el primer estudio sobre el tema lo hiciera el profesor Rousseau en 1953 en su Droit International Public -- (109) caracterizando a aquellas bases, dentro de un regimen -- calificado de cesiones en arriendo (cession à bail) en la categoría de arriendo estratégico, situado en el título relativo a las competencias de los Estados, como modalidad de la -- competencia territorial. Calificación, por otra parte, que ha perdurado en el tiempo.

Menos específico y quizá por ello más adaptable a -- las circunstancias, es el tratamiento de Guggenheim. El jurista suizo tras incluir a estos tratados de bases, dentro de -- las limitaciones de la soberanía territorial del Estado -obligaciones de tolerancia- nos dirá:

"Les traités pour lesquels un Etat étranger se voit concéder des bases stratégiques terrestres maritimes ou aériennes impliquent une limitation très importante de l'espace de validité de l'Etat territorial" (110).

Para Guggenheim pues, y sin entrar en ninguna calificación específica, estos tratados suponen una muy importante limitación en el espacio de validez del Estado territorial.

El Profesor Flory, en 1955 (1H) sería el que primeramente matizaría la calificación de Rousseau. Nos diría que:

"La cession à bail stratégique ne correspond pas exactement à cette définition et constitue un nouveau type qui offre particularités remarquables".

Flory destacaría en este sentido, como vimos en otro

lugar, el carácter singular o particular de estos tratados, - carácter que les dota a estos de una gran heterogeneidad y - por lo tanto de gran dificultad para un tratamiento común. No les da pues una calificación propia.

Siñ embargo Delbez, más próximo a nuestras fechas, vuelve a calificar a estos tratados dentro de las competencias territoriales del Estado "in re aliena" como cesiones en arriendo "en favor de la política sistemática de bases estratégicas practicada por las grandes potencias y principalmente por los Estados Unidos de América" (112).

P. Vellas, los califica en principio como cesiones de territorio; -dentro de los límites al ejercicio de las -- competencias del Estado sobre el territorio- (113), para después tratarlos como territorios cedidos en arriendo.

Verhoeven, finalmente, se mueve en la misma óptica del arriendo estratégico, si bien no deja de conocer su dependencia, aún cuando referida a la duración de aquellos, -- con respecto a la evolución de la estrategia (114).

Del resto de la doctrina europea continental debemos destacar a Sereni quien al estudiar las limitaciones a la potestad exclusiva del Estado, debido a la asunción de la potestad de imperio sobre el territorio por parte de otro estado, nos dice que esa potestad de imperio puede referirse o - abarcar bien al ámbito espacial en el que se desarrollan las

actividades de tal Estado o bien respecto al contenido mismo de esas actividades (115).

Finalmente Verdross ve en estos tratados de bases militares un derecho territorial limitado del Estado que establece las bases, sin entrar en una calificación específica de aquellos (116) y Oppenheim por su parte considera estas porciones de territorio arrendado, como excepción a la regla de la exclusividad de la soberanía del Estado. (117)

A la vista pues de la doctrina podemos afirmar que en gran medida estos tratados vienen considerándose como arriendos de territorio o cesiones de territorio en arrendamiento.

Esta configuración, sin embargo, no pienso que sea enteramente exacta. En este sentido me parece importante la opinión de Brownlie, quien al estudiar los arriendos internacionales (International leases) donde inserta este tipo de tratados, nos dice:

"The heading (International leases) it must be emphasized, is more a concession to usage than the product of legal analysis. The use of the term is excusable, but it cannot be regarded as more than a superficial guide to the nature of the interest concerned: each case depends on its particular facts and especially on the precise terms of the grant" (118).

La posición de Brownlie me parece ser la que en mayor medida se acerca al problema. En efecto, el término de arrendamiento como nos dice, "no puede ser considerado más -

que como un índice superficial de la naturaleza de los intereses afectados: cada caso depende de su situación particular y especialmente de las condiciones precisas de la concesión" (118).

Destacado el carácter particular de estos casos, - caracter que hemos mencionado ya en otro lugar, en realidad estos llamados arrendamientos son "mas una concesión de uso que el resultado de un análisis legal" (118).

En efecto pienso que el término arrendamiento no - da una respuesta satisfactoria y definitiva de la naturaleza de estos tratados.

SECCION III: Nuestra posición

1. En lo que se refiere a nuestro Convenio Defensivo de 1953, el Capítulo III de la Parte Tercera, de esta tesis es lo suficientemente significativo como para comprender que no encierra éste ningún tipo de arrendamiento o figura similar.

No se preveía tan solo el establecimiento de unas zonas e instalaciones y su mantenimiento en eficiencia. Sos tener esto, supondría en realidad no aprehender su verdadera naturaleza.

Las competencias del Gobierno de los Estados Unidos verdaderamente eran más amplias, como hemos visto, que las de construir y utilizar esas zonas e instalaciones.

Las competencias se extendían a la utilización de nuestros espacios aéreos, fundamentalmente, y también al marítimo; se extendía asimismo a la utilización de nuestros - servicios públicos, los ríos, puertos, etc., en orden todo ello, al apoyo de operaciones en caso de emergencia y al entrenamiento de unidades militares y tácticas.

¿Qué suponen en realidad estas competencias?.

En mi opinión este Convenio puede responder e insertarse en el que Schwarzenberger, en una de sus perspectivas: la sociológica, denomina Derecho Internacional como derecho de poder. Para el Profesor de Londres el Derecho Inter

nacional puede convertirse en instrumento del poder político y tras acoger en esta categoría las alianzas, contraalianzas, la guerra ... propias de la sociedad internacional desorganizada nos dirá "que cuando el Derecho Internacional opera en este nivel tiende a presentarse como un derecho con características de un tipo extremo de sociedad, es decir, es preponderante, aunque no exclusivamente, un derecho de poder"(119).

Efectivamente , pienso que este Convenio, es expresión jurídica de un poder: el poder militar que en 1953 ostentaban los Estados Unidos en el exterior.

Así pues, la modificación del Derecho Internacional general sobre nuestro espacio aéreo con la libertad de actuación de los Mandos Militares norteamericanos así como el ejercicio de las otras competencias necesarias al objeto de realizar las funciones de administración y mantenimiento y las operacionales: el entrenamiento de unidades tácticas y militares y la realización de operaciones de apoyo en caso de emergencia, se fundamentan en la preponderancia de poder que en 1953 tenían los Estados Unidos.

2. Debemos, no obstante conocer su significación y -naturaleza, situar este Convenio en el plano del Derecho Positivo, es decir debemos estudiar su significación en el terreno de las competencias estatales y de su distribución en el Derecho Internacional, estudio analítico que hemos segui-

do y que corresponde situar ahora.

¿Dónde cabe situar estas competencias norteamericanas ejercidas en España?. Quizá estas competencias pudieran - estudiarse dentro de las competencias territoriales limitadas de que nos habla Rousseau (120) o de los que denomina Verdross derechos territoriales limitados (121). Creo, sin embargo, que en nuestro caso no se trata fundamentalmente de derechos territoriales limitados de los Estados Unidos con respecto a nuestro territorio. Estas concepciones en definitiva responden a una concepción excesivamente formal del Derecho Internacional.

En efecto, ya cuando analizábamos separadamente estas competencias a la luz del Derecho Internacional general - distinguíamos siguiendo la doctrina francesa (Burdeau, Rousseau) entre competencias territoriales y personales de un lado y entre las competencias relativas a los servicios públicos por otro. Pues bien, creo que estas competencias norteamericanas en España podrían considerarse, como competencias ejercidas en actuación del servicio público de su "defensa nacional", por aquel país (122).

En su estrategia global, con las zonas e instalaciones y todas las competencias vistas, los Estados Unidos no -- hacían sino actuar un servicio público: el de la defensa nacional.

Esta defensa, en 1953 y en virtud del desarrollo - técnico de transporte del arma atómica, entonces circunscrito

al bombardeo aéreo, exigía la existencia de unas bases aéreas fuera de su territorio nacional y concretamente en España, -- pues, entonces, la conexión entre el arma atómica y los criterios de selección de bases militares en el extranjero era -- muy estrecha (123).

El concepto jurídico de este servicio público, molde formal del concepto de defensa nacional, evidentemente político y por ende dinámico iba a cubrir y a abarcar toda una "policy" destinada a lograr la seguridad nacional de los Estados Unidos, "policy" que como dijera ya H. Kissinger en -- 1965, "en la era nuclear va mucho mas allá del concepto tradicional de conjuntar fuerzas poderosas (overwhelming power). Encierra factores políticos, psicológicos, económicos y sociales. En un sentido más amplio, comprende toda acción por la -- que una sociedad busca asegurar su supervivencia o realizar -- sus aspiraciones internacionalmente" (124).

En esa acción, el armamento nuclear tenía y tiene una significación muy específica, al incidir de manera importante (125).

Estas competencias norteamericanas, relativas a su defensa nacional serían las que entrarían en conflicto con -- las competencias territoriales españolas en sentido estricto (126).

P A R T E Q U I N T A

CAPITULO I:

EL CONVENIO DE AYUDA PARA LA MUTUA DEFENSA

SECCION I: EL ARTICULO 1º, PUNTO 1º

SECCION II: EL PROGRAMA DE 'SUMINISTROS
OFFSHORE'.

SC. A. ENCUADRAMIENTO

SC. B. ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL ACUER-
DO DE 30-7-1954.

SC. C. SU SIGNIFICACION

SECCION III: LA UTILIZACION DE LA AYUDA.

SECCION IV: EL PROGRAMA "FACILITIES ASSIS-
TANCE".

SC. A. ENCUADRAMIENTO

SC. B. ANTECEDENTES Y PROPOSITOS.

SC. C. OBLIGACIONES PARA AMBAS PARTES.

SC. D. SU SIGNIFICACION

CAPITULO I: El Convenio de Ayuda para la mutua defensa

SECCION I: El Artículo 1º, punto 1º

1. El Artículo Primero del Convenio de Ayuda Mutua para la defensa, contenía siete puntos de los cuales el número uno, a estudiar aquí, decía:

"Cada Gobierno pondrá a disposición del otro y a la de aquellos otros Gobiernos que las Partes pudieran en cada caso acordar, el equipo, materiales, servicios u otras asistencias, en las cantidades, términos y condiciones que se convenga. - El suministro y utilización de tales asistencias será concordante con la Carta de las Naciones Unidas".

Este párrafo era la puesta en práctica en realidad de la Sección 402, d) de la Ley de Asistencia para la defensa mutua de 1949 que especificaba:

"El Presidente antes de otorgar ayuda a cualquier nación elegible, concluirá acuerdos que contendrán preceptos relativos a la entrega de equipos y materiales, servicios y otra ayuda, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, a los Estados Unidos o a y entre otras naciones elegibles, para favorecer los propósitos y policies de esta Ley".

2. Este epígrafe primero es pues importante. Se decía - que cada Gobierno pondría a disposición del otro y a la de - aquellos otros Gobiernos que las partes pudieran en cada caso acordar, equipo, materiales, servicios u otras asistencias.

Se introducía aquí así la posibilidad de colabora-

ción entre varios Gobiernos, superando la estricta bilateralidad: colaboración que nos conectaba indudablemente con terceros países. El Presidente como hemos visto, había de concertar estos acuerdos para promover y desarrollar las políticas y propósitos de aquella Ley, propósitos y políticas que encontramos en los "Findings and Declaration of policy" de aquella:

"El Congreso reconoce que los esfuerzos de los Estados Unidos y otros países para promover la paz y seguridad en desarrollo de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas requieren medidas de apoyo basadas en el principio - de continua y efectiva autoayuda y ayuda mutua. Estas medidas incluyen el suministro de ayuda militar esencial que permitan a los Estados -- Unidos y otras naciones fieles a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas participar eficazmente en acuerdos de legítima defensa individual y colectiva en apoyo de esos propósitos y principios".

Esta Ley pues iba a permitir a los Estados Unidos - el administrar todo un programa militar, no precisamente a -- escala bilateral, ^(") para participar eficazmente en acuerdos de legítima defensa individual y colectiva.

En efecto, los países que gozarían de esta ayuda - se elevaban a gran número y estaban indicados en los distintos títulos de la Ley. De Europa recibirían aquella ayuda los países que el Presidente creyera "ser de importancia directa a - la defensa del área del Atlántico Norte y cuya incrementada aptitud para defenderse" el Presidente determinara es importante para la preservación de la paz y seguridad del área del

(") sino multilateral,

Atlántico Norte y a la seguridad de los Estados Unidos. Con esta redacción se permitía la ayuda que posteriormente recibirían España, Yugoslavia y Berlín. En el plano económico los países eran los mismos, así como los que indicaba la Ley de Cooperación Económica de 1948. Hasta aquí países de Europa.

Los otros títulos de la Ley ampliaban más los países receptores de la ayuda. El título II incluía Grecia, Turquía e Irán, así como cualquier país del próximo oriente que el Presidente considerara susceptible de incluir en ella, teniendo en cuenta los "provided" de la Ley. Se incluía también a Africa en este Título, a los efectos de ayuda técnica y económica, así como la ayuda a los refugiados Palestinos en conexión con las directrices de las Naciones Unidas.

Por su parte el título III abarcaba China, Filipinas y Corea (127), y el IV finalmente estaba destinado a las Repúblicas Americanas (128).

Como vemos pues, el ámbito de aplicación de la Ley por el Presidente era extensísimo. Si tenemos en cuenta que los acuerdos que había de celebrar aquel, tenían que hacer constar la cláusula que aparece en el artículo primero del nuestro: "Cada Gobierno pondrá a disposición del otro y a la de aquellos otros Gobiernos que las partes pudieran en cada caso acordar..." se puede comprender en qué manera los Estados Unidos, abriendo la posibilidad de relaciones multilaterales, administraban esta ayuda.

SECCION II: El programa de "suministros offshore".

Sc. A.: Encuadramiento.

El 30 de julio de 1954 se acordaba por canje de Notas de esa fecha, (129) la puesta en práctica de este programa en España. Las notas dichas incluían un Memorandum de acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de España referente a los suministros offshore (130) de diecisiete puntos, así como un modelo de contrato con cláusulas standard en las que se insertaba específicamente las obligaciones de las partes, contenidas aquellas en veintidos puntos.

Todo ello, formaba parte del acuerdo, pues en relación al modelo de contrato, el punto doce del Memorandum insertaba: "Un contrato tipo ha sido aprobado por los dos Gobiernos para su utilización, en casos apropiados, en los contratos suscritos entre ellos. Otras cláusulas podrán ser incluidas en los contratos individuales".

Por otra parte en las Notas introductorias del Memorandum y el modelo de contrato se indicaba que: " El Gobierno español entiende que el contrato-tipo que acompaña al Memorandum anteriormente citado será empleado como pauta de los contratos que se firmen entre ambos Gobiernos". (Nota española).

Sc. B.: Antecedentes y naturaleza del acuerdo de 30-7-1954.

1. El Coronel Critz, en un "statement" ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, nos explicaba el por qué de este programa que arrancaba en 1949 y - que adoptaba formas diversas:

"Cuando el programa de asistencia militar se inició en 1949, se programó suministrar modelos de equipo norteamericano a nuestros aliados, principalmente de stocks existentes en los Estados Unidos. Se planeó también que cualquier nuevo suministro fuera en parte entregado a las fuerzas de los Estados Unidos para reemplazar las partidas de stocks embarcadas - previamente para nuestros aliados".

A continuación manifestaba:

"En aquella época, este parecía ser el modo - más expeditivo de poner armas en manos de nuestros soldados aliados y así reforzar la capacidad total del mundo libre para resistir la - agresión. El ataque de Corea, sin embargo, alteró estos planes; y los stocks de equipo militar y munición que habían sido programados - para entrega dentro del programa de asistencia militar fueron necesariamente afectados para - satisfacer las urgentes necesidades de la guerra de Corea. Una nueva fuente de producción - tuvo que encontrarse y el OSP (131) se introdujo para suplementar la producción de los Estados Unidos que se aceleraba para satisfacer -- las necesidades del conflicto coreano(132)".

Había además de esta, otras razones que abogaban -- por este programa (133). Entre otras, el suponer una inversión en algunos casos. La construcción de buques de guerra, por -- ejemplo, fuera de los Estados Unidos y su posterior adquisición por este Gobierno, para distribuirlos a los distintos --

países resultaba económicamente más rentable que adquirirlos en su propio país.

Por otra parte los Estados Unidos realizaban los pagos en dólares, lo cual dotaba a las balanzas de pago de los países receptores, de la entonces tan necesitada divisa. La economía de aquellos países con los que se celebraron contratos en ejecución de este programa se reforzaba también indirectamente (134).

2. El punto uno del Memorandum que versaba sobre el alcance y objeto del programa decía textualmente:

"Es propósito del Gobierno de los Estados Unidos obtener en países que participan en el programa de seguridad mutua, aquellos tipos de materiales, servicios, abastecimientos y equipo, incluso buques, vehículos y aeronaves, apropiados para la ayuda mutua de seguridad militar o para su uso directo por las Fuerzas de los Estados Unidos".

Creo que aquí se encuentra claramente lo que este programa significaba; por una parte, obtener en países que participaban en el programa de seguridad mutua, aquellos tipos de materiales, servicios, abastecimientos y equipos incluso buques, vehículos y aeronaves y por otra parte afectar su destino de un lado a la ayuda mutua de seguridad militar y de otro para uso directo por las Fuerzas de los Estados Unidos.

Es de interés insistir algo más en este último punto. Así el Teniente Coronel Robert S. Pasley (135) en un inte

resante artículo aparecido en la Military Law Review en el -- que estudia con detalle algunos puntos del programa manifes-- taba que debía hacerse una distinción en torno a los suminis-- tros offshore, distinguiendo por una parte entre aquellas -- compras realizadas en el extranjero para uso de las Fuerzas de los Estados Unidos financiadas con el presupuesto del Departamento de Defensa (DODOSP) (136) y aquellas compras, por otra, realizadas en el extranjero para uso de las fuerzas de naciones extranjeras financiadas con el presupuesto de asistencia militar. (MAP-OSP) (137).

Eran pues dos medios de obtención de equipo, servi-- cios o suministros, cualificados por su financiación y funda-- mentalmente por sus destinatarios últimos. En el primer caso las Fuerzas de los Estados Unidos, en el segundo, las de otras naciones que estaban dentro del programa de asistencia militar.

Este segundo tipo de suministros offshore, aunque -- en 1949 empezó a ponerse en práctica tenía ya antecedentes en la época en la que los Estados Unidos prestaron ayuda a Gre-- cia y Turquía, en 1947. Entonces, cuando las fuerzas de los -- Estados Unidos reemplazaron a las del Reino Unido, se utilizó material británico y los Estados Unidos tuvieron que proveer-- se en aquel país del equipo necesario, ante la imposibilidad del momento, de reequipar a las fuerzas griegas de material -- de guerra norteamericano.

En cualquier caso interesa resaltar, que el programa en España, independientemente de la financiación de las compras, tenía como destinatarios en principio tanto las propias Fuerzas de los Estados Unidos como las de los países -- que formaban parte del programa de ayuda militar.

En ambos casos los Estados Unidos eran acreedores a todo equipo, servicio o suministro en virtud de los contratos celebrados, pero en el segundo supuesto los Estados Unidos no lo utilizaban, sino que estaban destinados, en las -- formas y condiciones al efecto, a los países que formaban -- parte del ya citado programa, entre los cuales, efectivamente, se encontraba España en principio.

Sc. C.: Su significación.

El programa "offshore" se insertaba en la misma línea aludida en la Ley de Seguridad Mutua. Teniendo en cuenta que estos suministros habían de realizarse de acuerdo con el programa de seguridad mutua, lo cual era ya un dato, se hacía constar asimismo en el Memorandum, de fecha 30-7-54, ya citado, en el punto uno, el propósito de estos suministros -- que era el de contribuir "materialmente a la capacidad productiva combinada de defensa de las naciones que están asociadas con los Estados Unidos en la defensa mutua de Europa occidental....." propósito que más concretamente se desarro-

llaba y ponía en práctica al obligarse el Gobierno español a favorecer los trámites relativos a licencia de importación y exportación, divisas etc., en relación con cualquier contrato de suministros offshore del Gobierno de los Estados Unidos, bien suscrito en España, bien en cualquier país del Tratado del Atlántico Norte o de la Comunidad Europea de Defensa" (Punto 10 del Memorandum). (138)

La centralización de estos materiales y equipos militares, puesto que como vimos, en todo caso el Gobierno de los Estados Unidos era siempre primer titular de esos suministros, se llevaba a cabo por los Estados Unidos que administrando el programa de ayuda militar, determinaban in fine, los destinatarios de esos equipos. El punto catorce abundaba en este sentido cuando disponía que "aunque la determinación de las especificaciones y otros requisitos de ciertos contratos de suministros offshore pueda requerir una identificación provisional del país destinatario al que los artículos terminados deben ser entregados, se entiende que los Estados Unidos podrán modificar con posterioridad tal determinación e identificación previas respecto al país que ha de ser el destinatario final de los artículos terminados producidos".

La conexión del programa con otros países, era pues evidente, hasta el punto de que se indicaba la absoluta libertad al Gobierno de los Estados Unidos para designar el desti-

natorio final de los artículos.

Nos dice el General Orval R. Cook (139), en un estudio descriptivo interesante aparecido en el Boletín del Departamento de Estado, con qué países concertó contratos de suministro el Gobierno de los Estados Unidos así como su evaluación global. Entre el primero de julio de 1951 y el treinta de junio de 1954 (tres años fiscales), se habían celebrado contratos offshore con países de la OTAN: Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega Portugal, Turquía y el Reino Unido; pero además con países no miembros de la OTAN: Alemania (140), España, Suiza, Yugoslavia, Austria, Suecia, Norte de Africa y otros; contratos todos que ascendían a la suma de \$3.036.520.000 (212.556.400.000 ptas.). (141)

Efectivamente, los países productores de suministros eran precisamente los de la OTAN y los de la Comunidad Europea de Defensa o europeos, en su mayoría, con lo cual su industria de armamento inmediatamente y su economía indirectamente, se reforzaba. Los Estados Unidos decidían finalmente a qué países irían aquellos equipos, de entre todos los contemplados en sus Leyes de Seguridad Mutua.

SECCION III: La utilización de la ayuda.

1. Un punto importante de este Convenio era el relativo a la utilización de estos equipos y materiales, es decir, aquellos equipos, materiales y asistencias puestos a disposición del Gobierno español bien directamente de los Estados Unidos o bien producto de contratos off-shore ejecutados en España o en alguno de los países vistos, ¿cómo podía emplear los el Gobierno español?.

Distinguía el Convenio dos supuestos, el relativo a la utilización por una parte y el relativo al destino final por otra. En el primer caso no era muy explícito éste; -- en el segundo lo era más, fundamentalmente, en el acuerdo -- llevado a cabo por canje de notas de 27 de noviembre de 1956, tres años más tarde, acuerdo que era desarrollo de este punto. Veamos, sin embargo los preceptos.

En cuanto a la utilización se indicaba en el punto dos:

"Ambos Gobiernos utilizarán esta asistencia, exclusivamente a los fines de afirmación de la paz y seguridad internacionales, en virtud de los acuerdos satisfactorios para ambos Gobiernos, y sin previo y mutuo consentimiento no dedicarán tal asistencia a otros fines distintos de aquellos para los que fue suministrada".

Efectivamente, la utilización de aquellos materiales era, in genere "la afirmación de la paz y seguridad internacionales", si bien se aludía a "acuerdos satisfactorios

para ambos Gobiernos" ¿Quiénes habían de interpretar este concepto y cuál era su significación? Dejemos planteado así este punto por ahora para pasar a estudiar el destino final de esta ayuda.

2. ¿Cuál era el destino final de este equipo y material?

El punto tres decía:

"Se concertarán los acuerdos necesarios para los -
cuales aquel equipo y material suministrado en ejecución de este convenio, y que no sea ya necesario a los fines para los que originariamente fue suministrado, será ofrecido para devolución al país -
que suministró tal equipo y material".

En efecto, como ya hemos dicho, estos acuerdos se contenían en el Canje de Notas de 27-9-56; cuyos puntos, reducidos a cinco, pero de interés, vamos a estudiar.

Su punto primero decía así:

"El Gobierno de España informará al Gobierno de -
los Estados Unidos sobre todo equipo o materiales que ya no sean precisados ni usados exclusiva y efectivamente para los fines consignados en el párrafo 2º del Artículo 1º del Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa y de acuerdo con sus estipulaciones. El Gobierno de los Estados Unidos podrá, asimismo, señalar a la atención de las autoridades españolas competentes todo equipo o materiales que considere comprendido en estas medidas, y cuando tal notificación se verifique, las Autoridades españolas iniciarán consultas con el Gobierno de los Estados Unidos, a fin de disponer de cualquiera de estas partidas, de acuerdo con el procedimiento que se fija en los párrafos siguientes".

Parece deducirse de este primer párrafo, que el Gobierno de España tenía competencia para determinar, sobre todo equipo y materiales que ya no fueran precisados ni usados exclusiva y efectivamente para los fines expresados, es decir .../...

los de afirmación de la paz y seguridad internacionales si - bien no era exclusiva puesto que el Gobierno de los Estados Unidos, podía "asimismo", señalar a la atención de las Autoridades españolas competentes todo equipo o materiales que - considerase comprendidos en estas medidas.

Parece también deducirse, que el Gobierno español podía interpretar, hasta cuándo este equipo y materiales serviría a los fines expresados. Creo sin embargo que este párrafo ha de ponerse en relación con el resto de los puntos y con el propio convenio.

En efecto el punto dos, decía a este respecto:

"El Gobierno de los Estados Unidos podrá aceptar el título de todo equipo o materiales para su transferencia a un tercer país o para disponer de los mismos en cualquier otra forma que establezca el Gobierno de los Estados Unidos".

Este punto, aparte de confirmar por otra parte lo que decíamos más arriba sobre la multilateralidad del programa de ayuda a la defensa mutua, se completaba con el cuatro donde se decía que:

"De todo equipo o materiales no aceptados por el Gobierno de los Estados Unidos dispondrá - el Gobierno de España en la forma que se acuerde entre ambos Gobiernos" (142).

Ante estos preceptos, podemos pensar que si el Gobierno de España no podía disponer del equipo y materiales - no aceptados por el Gobierno de los Estados Unidos, esto es, los que quedasen excluidos de las transferencias precedentes

en realidad su competencia para determinar si aquellos se -
precisaban y utilizaban a los fines ya vistos, era una com-
petencia puramente contingente y temporal y no sustantiva,
es decir, el Gobierno español en definitiva solo podría co-
municar o como dice el propio acuerdo "informar" al Gobier-
no de los Estados Unidos cuando en su opinión este equipo -
no fuera precisado ni usado a esos fines de afirmación de -
la paz y seguridad internacionales.

Es el último punto, el 5, el que confirma esta in-
terpretación:

"El Gobierno de España informará sobre cuales-
quiera restos o desechos de equipo militar o
materiales facilitados por el Gobierno de los
Estados Unidos, y se dispondrá de los mismos
de acuerdo con lo establecido en los párrafos
2, 3 y 4 de las presentes disposiciones. Los
restos o desechos no aceptados por el Gobier-
no de los Estados Unidos, se utilizarán en la
forma que se concierte mutuamente para el sos-
tenimiento del esfuerzo defensivo en España o
del de otras naciones a las que el Gobierno de
los Estados Unidos de América facilita ayuda -
militar".

Si el punto cuatro nos hablaba de "equipo no acepta-
do" este nos habla de restos o desechos. Aquí es donde se es-
pecificaba el destino de ellos, frente al punto anterior, al
decir que se utilizarían en la forma que se concertase mutua-
mente "para el sostenimiento del esfuerzo defensivo de España
o del de otras naciones a las que el Gobierno de los Estados
Unidos facilita ayuda militar".

SECCION IV: El programa "facilities assistance".

Sc. A.: Encuadramiento.

Este programa se llevó a cabo en España por tres - acuerdos constituidos por canje de notas, las primeras de 9 de abril, 11 y 19 de mayo de 1954; el segundo por las de 25 de mayo de 1955 y el tercero por las de 17 de septiembre de 1956 (143) respectivamente, con la denominación de Programa de Ayuda para instalaciones.

En el primer acuerdo se decía que el Programa "se cumplimentaría de acuerdo con los principios y condiciones - establecidos en el Convenio relativo a la Ayuda para la mutua defensa....". Parece ser éste uno de los programas de -- ayuda exterior de que hablaba el Convenio. Por otra parte, en la Nota Norteamericana de 9 de abril, se indicaba tras haber expuesto las propuestas de acuerdos bilaterales para el programa, que los acuerdos específicos sobre los proyectos detallados lo serían "conforme al Artículo 1, párrafo 1 del Convenio relativo a la Ayuda para la Defensa Mutua". Otro tanto ocurría con el de 25 de mayo de 1955 y el de 17 de septiembre de 1956.

Este programa concreto venía a actuar en parte a- quel Artículo Primero.

Sc. B.: Antecedentes y propósitos.

"El propósito de este programa", decía el acuerdo de 1954, "es el de incrementar la capacidad defensiva de España para producir pólvoras y explosivos, ya que se necesita urgentemente tal capacidad incrementada para el desarrollo y mantenimiento de la propia fuerza defensiva de España y de la fuerza defensiva del mundo libre".

El mantenimiento de la propia fuerza defensiva de España y el de la fuerza defensiva del mundo libre eran pues los fines que el acuerdo enunciaba como característicos del programa.

Son sin embargo, documentos norteamericanos los que nos dan más luz y una visión global a cerca de la naturaleza del programa.

El Coronel Harry H. Critz (144), exponía en 1957, en una declaración ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes cuál era la naturaleza de este programa, sus objetivos y políticas subyacentes. Lo definía como "aquella parte del programa de ayuda militar destinado a ayudar al establecimiento y expansión de las instalaciones (facilities) en el extranjero para la fabricación y mantenimiento de equipo militar imprescindible, como instalaciones para la producción de componentes de munición, misiles dirigidos, instalaciones de reconocimiento de motores de aviación

etc.". "Los proyectos concertados", decía, a continuación - "dentro de este programa deben suponer un neto incremento - en la capacidad total del país en cuestión o en un mejoramiento en el producto, para cubrir las exigencias militares".

Este programa comenzaría en 1954 y pasaría posteriormente por varias etapas, siendo en las primeras en las que España participaría, primera etapa que responde, como se verá, a una situación específica en las exigencias de material militar de los Estados Unidos como país impulsor del programa.

Los tres objetivos sin embargo de éste, quedaban - expuestos en el "Statement" del citado militar y que por -- guardar en todo una unidad transcribo íntegramente:

- "1. Establecer instalaciones de apoyo logístico en activo o como reserva cerca de las - áreas de combate en potencia para que las piezas militares de elevado uso estén disponibles en el tiempo más breve posible en caso de guerra.
 2. Aminorar la responsabilidad de los Estados Unidos en el suministro y mantenimiento de -- equipo militar alentando a los países receptores para que produzcan y mantengan su propio equipo mediante asistencia en el desarrollo - de las instalaciones necesarias para este propósito.
 3. Crear la capacidad productiva que mejore y modernice las fuerzas con armas que los países puedan mantener más fácilmente y que serán tecnológicamente suficientemente avanzadas para marchar paralelamente en los avances soviéticos en la tecnología de armamentos".
- (145)

El Coronel nos dice que el programa comenzó en 1954,

siendo entonces su principal objetivo la producción de componentes químicos de municiones."El programa ha sido ampliado, desde entonces para abarcar el desarrollo de plantas para la producción o mantenimiento de material militar, incluidas piezas de recambio para equipo suministrado por los Estados Unidos" (146).

Y es precisamente en este periodo, cuando se celebran estos acuerdos con España. Como ya vimos, el acuerdo de 1954 nos hablaba de "incrementar la capacidad de España para producir pólvoras y explosivos".

Sin embargo, el acuerdo de 1956 (17 de septiembre) se adaptaba ya a esa nueva ampliación de que hablaba Critz: - "La finalidad del actual programa de ayuda para instalaciones", dice el preámbulo de la Nota, "es la de incrementar la capacidad española para producir, conservar y reparar municiones y sus componentes. Ahora se propone incrementar este programa... a la ampliación de instalaciones ya existentes y a la creación de instalaciones adicionales para el montaje, mantenimiento, reparación, repaso, y conversión de toda clase de equipos y materiales utilizados para los fines de la defensa común.(146).

Es muy interesante resaltar el momento en que estos acuerdos se celebraron, fundamentalmente el primero, -- pues como nos dice el ya citado Coronel la capacidad europea

de producción entonces, y pensemos que estamos en 1954, de componentes metálicos de munición era del 25% del requerido en tiempo de guerra, pero la capacidad de producción de pólvoras y explosivos era considerablemente inferior a la indicada del 25%. "Se reconoció que la capacidad europea podría incrementarse hasta un margen razonable de seguridad en caso de interrupción de transportes transoceánicos si se diera una emergencia" (146).

Sc. C.: Obligaciones para ambas partes.

En su estructura, estos acuerdos eran idénticos; - la diferencia radica en la ampliación de supuestos que se daban en el acuerdo de 1956. Por otra parte el de 1955 era transitorio y quedaba perfectamente subsumido en el del año siguiente. Veamos pues su contenido.

1. Por parte de España, ésta había de mantener las -- instalaciones adicionales de que dispusiera, en virtud de la ayuda, de forma que estuvieran en situación de "producir pólvoras y explosivos rápidamente, cuando se necesiten" (Acuerdo de 1954, punto 1, b)) y aquellas otras que estuvieran en situación de "montar, mantener, reparar, repasar y convertir equipos y materiales para ser utilizados con prontitud a los fines de la defensa mutua cuando se necesiten". (Acuerdo de

1956, punto 1, b)).

Para la consecución de este fin se comprometía así mismo a facilitar todos los terrenos, edificios, equipos, materiales y servicios que fueran necesarios para las instalaciones adicionales de producción (caso del Acuerdo de 1954, punto 1, c)), así como la ampliación de las instalaciones -- existentes y construcción de adicionales (Acuerdo de 1956, - punto 1, c)); y en ambos casos a tomar cualesquiera medidas que fueran precisas para realizar estos fines.

También se obligaba a España a permitir la libre - importación y exportación en régimen de franquicia de equi-- pos militares y materiales enviados a España para la instalación respectiva, en los supuestos del Acuerdo de 1956 (punto 1, e)), lo cual, si tenemos en cuenta la redacción antes apuntada entre estos acuerdos y el Convenio general de Ayuda, parece que no hubiera sido necesario tal párrafo, al ser plenamente aplicables a este caso las exenciones impositivas allí expuestas.

2. Por parte de los Estados Unidos, sus obligaciones, esto es, la Ayuda, tenía por objeto el suministro al Gobierno de España de los "medios de producción y el asesoramiento técnico que puedan ser mutuamente acordados" (147), de conformidad con acuerdos suplementarios que cubrieran los pro-

yectos en particular, y que establecerían al mismo tiempo - "la cantidad de las aportaciones" de ambos Gobiernos, "la - descripción y propósito de las instalaciones a establecer" y otros detalles.

Estos acuerdos suplementarios no han llegado hasta mí, pero interesa destacar que "anteriormente a la aceptación de estos proyectos, por parte norteamericana eran valorados en todos sus aspectos bien por ingenieros competentes de compañías industriales americanas o por técnicos militares" (148).

El Coronel Critz decía en 1957, describiendo las políticas del programa (149).

"El país debe también participar en la financiación del proyecto. Hasta la fecha, la contribución financiera de los Estados Unidos ha sido del 49% del total del costo de los proyectos".

Como vemos, pues, quedaban claros cuáles eran los rasgos más significativos de estos acuerdos. Hay no obstante que tener en cuenta un dato que creo que es de interés y es el de que las instalaciones adicionales a construir y la ampliación de las existentes así como el equipo o equipos facilitados por los Estados Unidos en virtud de aquellos, podrían ser utilizados, y esto me parece importante, para otros fines, tan solo con la condición de que esta utilización "no interfiera" (Acuerdo de 1954) o "impida" (Acuerdo de 1956) la ---

pronta disponibilidad de tal equipo e instalaciones para sus fines propios.

Esto suponía que España podía utilizar estos equipos e instalaciones para sus propias fuerzas armadas. ¿Es -- quizá esta la razón por la que también España debía participar en su financiación, como exponía el tan citado Coronel - Critz en su statement al hablar del programa en general?.

Sc. D.: Su significación.

El programa "Facilities assistance" al igual que - el de suministros off-shore participaba en los objetivos de la ayuda mutua. No en vano era un programa en ejecución de - aquel general, habida cuenta de la situación conflictiva mundial y su incidencia en las necesidades de armamento de la estrategia de los Estados Unidos.

Los convenios concertados con España que llevaban a cabo estos programas nos confirman la anterior afirmación. En cuanto al programa "facilities assistance", el primer convenio concertado con España (9 de abril, 11 y 19 de mayo de 1954) el referente a las pólvoras y explosivos era taxativo:

"El Gobierno de España se compromete, en relación con la Ayuda para Instalaciones que ha de ser prestada por los Estados Unidos:

a) A no establecer discriminación en la venta de pólvoras y explosivos frente a ningún país del Tratado del Atlántico Norte con relación

al precio que se exige, calidad que se facilita, fechas de entrega, o en cualquier otra forma".

En el preámbulo se decía que esta producción era necesaria " urgentemente... para el desarrollo y mantenimiento de la propia fuerza defensiva de España y de la fuerza defensiva del mundo libre".

El punto dos del acuerdo abundaba aún más, al hacer constar:

"Queda mutuamente entendido que la asignación de fondos por el Congreso de los Estados Unidos para el Programa de Ayuda para instalaciones se efectuó con el propósito de ayudar a - crear un aumento efectivo en la capacidad europea de producción de municiones" (punto primero).

En verdad el acuerdo era explícito al respecto.

Por su parte, el de 17 de septiembre de 1956 también se manifestaba en este sentido, si bien la alusión no - se circunscribía a los países del Tratado del Atlántico Norte sino que era más general y así se decía en su artículo 1, a) que el Gobierno de España se comprometía:

"A poner los servicios de montaje, mantenimiento, reparación, repaso y conversión de las instalaciones ampliadas o creadas con ayuda de -- los Estados Unidos, a disposición de las demás naciones libres del mundo, a unos precios justos y razonables, y a no establecer discriminación respecto a los precios que se cobren por dichos servicios, calidad de los mismos, tiempo tardado en prestarlos, ni de cualquier otro tipo".

En el punto d), por su parte, se comprometía:

"A no incluir en el precio del montaje, mantenimiento, reparación, repaso y conversión de servicios disponibles a otras naciones libres, ningún recargo que pueda atribuirse en cualquier forma al precio inicial de los equipos, materiales o servicios facilitados por el Gobierno de los Estados Unidos con destino al establecimiento o incremento de la instalación correspondiente o con otra finalidad en virtud del Programa de Seguridad Mutua".

Eran pues, en este caso, las naciones libres del mundo, entendiendo por tales las que tradicionalmente se denominaban como excluidas de influencia comunista con las que España se conectaba en este programa. El ámbito de conexiones era ya más amplio.

Ya efectivamente el Coronel Critz decía en este -- sentido:

"Todas las instalaciones creadas gracias a este programa se consideran a la luz de todas las exigencias regionales más que a las exigencias de un país concreto. Los países que reciben ayuda deben acceder a poner los productos y servicios de las instalaciones resultantes al alcance de otras naciones libres, sin discriminación de tipos de precio, calidad o entrega. Estos preceptos ayudan a asegurar el carácter regional del programa de ayuda a instalaciones" (150).

Vemos pues así el carácter extenso que poseía el programa pero es asimismo de interés observar, como se decía en los dos acuerdos en esta línea de estudio que el Gobierno de España se comprometía a que además de las nuevas instalaciones previstas en estos acuerdos mantendría o haría mantener en condiciones de utilización, una capacidad total de -

producción de pólvoras y explosivos no inferior al total de la que "actualmente existe, más aquella ya prevista para su realización en España, bajo propiedad oficial o privada" (Acuerdo de 1954, punto 2). El Acuerdo de 1956, por su parte, se refería a la capacidad total de instalaciones (de montaje, mantenimiento, repaso y conversión de equipos y materiales) - que comprendería, aquellas cuya creación o ampliación se pretendía realizar por medio de la ayuda que el Gobierno de los Estados Unidos facilitaba o podía facilitar al amparo del -- acuerdo, además de la capacidad total de las instalaciones - que "actualmente existen, más aquellas de propiedad estatal cuya construcción en España esté ya prevista" (punto 2).

A este respecto el conocido Coronel manifestaba:

"Antes de elegir un país para la ayuda de este programa debe obligarse a mantener en uso en una emergencia la capacidad sumada de producción y mantenimiento en este particular - sector en cuestión incluyendo la capacidad - existente así como aquella para la cual se - suministra ayuda en este programa (150).

Los países que concertaban este tipo de acuerdos y España en nuestro caso, quedaban obligados a mantener en uso la capacidad total de producción de pólvora e instalaciones. No es difícil observar la importancia de esta medida que preveía una situación grave como indicaba el Coronel. Es quizá esta importancia la que motivó la inserción de una cláusula idéntica en su espíritu en los dos acuerdos (punto 3) si bien en estos casos no se aludía a esa situación de -

urgencia:

"Los compromisos expresados en los párrafos 1 b) y 2, respecto al mantenimiento de instalaciones se contraen a reserva de que, si un cambio en las condiciones hiciese innecesario o impracticable el cumplimiento continuo de las mismas en materia de defensa, el Gobierno español, previa consulta con el Gobierno de los Estados Unidos podrá modificarlos para adaptarlos a dichos cambios de condiciones". (Acuerdo de 1954).

Efectivamente, parece ser que la afectación de la capacidad total española de producción de explosivos y pólvoras en fabricas existentes ya, además de las que habían de crearse en función del programa, así como de las instalaciones de montaje, mantenimiento, etc., existentes y por crear, tenía un carácter normal y no excepcional o de urgencia. Y es que en realidad, este precepto lo que hacía era afectar aquella capacidad total a los fines indicados, mientras las condiciones así lo exigieran. El Gobierno español quedaba vinculado en tanto esas condiciones se dieran.

P A R T E S E X T A

CAPITULO I:

LOS CONVENIOS Y LOS DERECHOS INTERNOS

SECCION I: BREVE REFERENCIA AL DERECHO INTERNA
CIONAL.

SECCION II: LOS CONVENIOS Y EL DERECHO INTERNO
ESPAÑOL.

SC. A. INTRODUCCION.

SC. B. EL TERMINO "RATIFICACION DE TRATADOS"
EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE CORTES.

SC. C. EL TERMINO "SERAN OIDAS" DEL INDICADO
ARTICULO.

SC. D. CONCLUSION.

SECCION III: LOS CONVENIOS Y EL DERECHO INTERNO
NORTEAMERICANO.

CAPITULO I: Los Convenios y los Derechos Internos

SECCION I: Breve referencia al Derecho Internacional

Estos tres Convenios se sitúan, dentro del Derecho Internacional, por su forma de conclusión, como acuerdos concluidos entre Gobiernos (151), pues en cada uno de ellos se aludía expresamente a los "Gobiernos de los Estados Unidos de América y el Gobierno español".

Pueden ser considerados asimismo como acuerdos en forma simplificada (152).

Entraron en vigor el mismo día de su firma (Artº V del Convenio Defensivo; Artº X del de Aª Económica y Artº VII del de Ayuda para la mutua defensa) y no quedaban sujetos a ratificación.

En el plano internacional no planteaba ninguna problemática especial su vigencia a partir del propio 26 de septiembre de 1953 (153).

Lo que sí presenta interés es la significación de estos Convenios en el ámbito de los derechos internos tanto norteamericano como español y presenta interés porque nos permitirá conocer si el procedimiento constitucional de estos dos países - en el ámbito de la adopción de compromisos internacionales ha sido observado o por el contrario ha sido marginado.

SECCION II: Los Convenios y el Derecho interno español

Sc. A. Introduccion

1.- El problema de las relaciones entre estos Convenios y el Derecho interno español se nos presenta rodeado de dificultades por dos razones: la primera, por la ausencia de estudios llevados a cabo hasta ahora en este campo, (154) más acentuada por otra parte que en el caso norteamericano, y en segundo lugar por la naturaleza misma de los preceptos concretos que en nuestro ordenamiento regulan este punto.

Quizá el problema mayor radique en la ausencia misma de preceptos en nuestra Constitución sobre el Derecho Internacional y sus normas por una parte y su significación y eficacia frente al ordenamiento interno por otra, hecho este último que se observa con mayor claridad en el año 1953, año en el que el ordenamiento jurídico español, habida cuenta del carácter abierto de nuestra constitución, se venía desarrollando.

En aquel año, la Constitución española tan solo venía integrada por el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, la Ley de Referendum Nacional, el Fuero de los Españoles y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (155).

No existía en esta normativa ninguna alusión explícita al Derecho Internacional en general y el único precepto en ella que hacia referencia a las convenciones internacionales, era el

entonces Artº 14 de la Ley de Cortes (156).

Dicho artículo decía:

"Las Cortes, en pleno o en Comisión, según los -
casos, serán oídas para la ratificación de aque-
llos tratados que afecten a materias cuya regula
ción sea de su competencia, conforme a los artí
culos anteriores".

Sc. B. El término "ratificación de tratados" en el Artículo 14
de la Ley de Cortes

1. Esta norma constitucional que constituye el artículo -
14 de la Ley de Cortes tenía un objeto: la ratificación de trata
dos, y una finalidad: el que las Cortes fueran oídas, dos núcleos
de problemas interesantes que vamos a tratar con algún detalle.

¿Qué había de entenderse primeramente por el término -
"ratificación de tratados"? Hemos visto ya que estos Convenios
no necesitaban ratificación para su entrada en vigor sino que -
ésta se producía por la misma firma. Hemos visto también que doc
trinalmente al menos, no estábamos ante unos tratados sino ante
unos acuerdos en forma simplificada (157).

¿Quiere ello decir que no había de seguirse este proce
dimiento del Artº 14?. Desde una perspectiva estrictamente for
mal pienso que esa puede ser la conclusión. Sin embargo, en es
te supuesto no debemos pararnos aquí sino que cabe preguntarse
entonces: ¿quién había de determinar en nuestro ordenamiento la
forma que habían de adoptar nuestros compromisos convencionales

internacionales?. El problema se trasladaba a la fase previa, a la de la negociación, proceso sobre el que nuestro ordenamiento nada decía como sabemos en 1953.

En efecto, habría que esperar a 1957 a que la L.R.J. A.E. estableciera en su Artº 10, punto 5, que el Consejo de Ministros sería el órgano competente, para tener regulado este - punto.

¿Quién era pues en aquel momento competente en nuestro ordenamiento para negociar convenciones internacionales?. De antemano podemos adelantar que era el Jefe del Estado; ya lo veremos detalladamente esto más abajo (158).

Visto esto, en realidad, podemos afirmar que el artículo 14 desde esta perspectiva, es decir, formalmente, no tenía - ninguna relevancia con relación a estos Convenios.

Sin embargo aunque esta perspectiva formal pienso puede ser acertada, conviene estudiar este punto desde otra optica, concretamente, desde una optica sustantiva.

2. Efectivamente, el mencionado artículo 14, establecía la posibilidad de participación de aquel órgano en la adopción de compromisos convencionales internacionales por parte del ejecutivo, ya veremos, sin embargo más abajo la naturaleza de esta participación.

Su actuación competencial con respecto a estos compro-

misos en función de su materia u objeto, era la misma que con respecto a las leyes. En efecto, los redactores de la Ley, fijaron como contenido de aquellos "tratados a ratificar", materias cuya regulación por las Cortes fuera de su competencia conforme a los artículos anteriores, artículos que no eran otros sino el 10 y el 12, artículos donde se contenían las materias que habían de ser reguladas por la Ley, las materias determinadas como de reserva legal (159).

Esto visto pues, podemos preguntarnos, ¿qué materias contenían estos tres convenios, que fueran de la competencia de las Cortes conforme a los artículos 10 y 12 de la Ley? En realidad el problema es importante porque de ser materias de su competencia por el Artº 10 había de actuarse en Pleno: caso de serlo por el 12, sin embargo, aquellas habían de actuar en Comisión.

¿Qué materias de las competencias de las Cortes regulaban pues estos Convenios? ¿Afectaban a algunas de las competencias del Artº 10? ¿Hubo de no ser así, dictamen de la Comisión que establece el Artº 12 para que las Cortes conocieran de ellos?

Consultados los B.O.C.E. no he encontrado el posible dictamen de la Comisión de que nos habla este último Artículo - (160), lo cual hubiera determinado competencia tan solo de la Comisión, entonces de tratados y no del Pleno.

¿Afectaban entonces a materias indicadas en el primero de estos artículos?

Efectivamente podemos pensar tan solo, pues no hemos -

estudiado los Convenios desde esta perspectiva, que había materias en ellos, fundamentalmente en el Defensivo, que venían indicadas en el mencionado Artículo 10.

Pensemos en la exención impositiva de que gozaban las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en España y su Gobierno, - que habían de afectar indudablemente al establecimiento del régimen tributario español a que alude el punto c) de este artículo.

Otro tanto pudiéramos decir de la legislación laboral y penal española, legislaciones básicas de regulación de derechos y deberes de los españoles en esos ámbitos jurídicos (epígrafe - F) y que debieron ser afectadas en aquellos supuestos en los que de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destinadas en España surgieran relaciones jurídicas con nuestros nacionales en - nuestro territorio.

El punto j) por otra parte, las bases de la organización judicial española quizá pudieron verse afectadas igualmente; así mismo cabe hablar de las bases del Derecho social, penal o - procesal penal.

Realmente pues, las incidencias del Convenio Defensivo podían y debieron afectar en variada medida a materias de este - Artículo.

Ahora bien, en este orden de cosas, creo que conviene sin embargo insistir en un punto. ¿Había alguna materia en estos Convenios y en el Defensivo en particular que no fuera objeto de atención de nuestro Artículo 10?. Esta interrogante creo que me-

rece un interés especial.

En realidad una de las limitaciones más importantes a las competencias de nuestro Estado que el Convenio Defensivo - encerraba, ya estudiada más arriba, era la relativa a la exclusividad de utilización de nuestro espacio aéreo. Este Convenio dejaba a las F.A.-U.S.A. (161) libertad de utilización de la manera estudiada.

¿Dónde se encontraba en la Ley de Cortes, competencia de éstas en materias relativas a nuestro espacio aéreo?, o mejor, ¿dónde se insertaba en nuestro Artículo 10 la competencia de aquéllas sobre todo acto concerniente a la soberanía sobre - nuestro espacio aéreo?.

Realmente, en torno a este sector, había silencio, quizá una laguna. Dejemos sin embargo así este interesante punto.

Todas estas razones abogaban en suma, porque sustancialmente los Convenios fueran al Pleno, cosa que así sucedería (162).

Desde esta perspectiva sustantiva sin embargo, estos - Convenios y el Defensivo concretamente excedían en su contenido a las materias de las competencias de las Cortes enumeradas en - el Artículo 10. Incluso desde esta perspectiva, el propio Artículo 10 no abarcaba los supuestos de aquel Convenio sino que excedía a las materias allí enumeradas (163).

¿Pasaron entonces estos Convenios por el Pleno, en virtud de su sustantividad, que no era otra sino la participación

de las Cortes en la adopción de compromisos convencionales internacionales por parte del Ejecutivo?.

Esta interrogante, última de esta subsección nos introduce directamente con el segundo núcleo de problemas de este Artículo 14 que venimos estudiando, el relativo a su finalidad: el que las Cortes fueran oídas.

Sc. C.: El término "serán oídas" del indicado Artículo

¿Qué significación jurídica poseía el término "seran oídas"?

El problema no es otro sino el de la significación constitucional de las Cortes en materia de compromisos internacionales convencionales o si se quiere en materia de "ratificación de tratados". La interrogante tiene importancia porque como dijera el Consejo de Estado:

"... el control jurídico y político de las competencias internacionales del Estados por los órganos internos del mismo, no tiene otro objeto que evitar que por vía internacional, se atente a la distribución de competencias que en el orden interno realiza la Constitución. Esto es en último término, las competencias internas y las competencias internacionales del Estado no son sino dos aspectos de una misma atribución de potestad que, en favor de las mismas instituciones realiza el ordenamiento jurídico, de manera que a quien corresponde la competencia de legislar en lo interno corresponde la competencia internacional en materia legislativa y así en los demás casos" (164).

Comprender pues correctamente su significación exige - estudiar previamente la significación jurídico-política de nues

tras Cortes en 1953, estudio que aunque propio del derecho constitucional, por la remisión del Artículo 14 vista, incide de manera directa en nuestro campo.

Y el preámbulo de la Ley de Cortes nos decía con una redacción que hasta hoy se ha conservado:

"... Continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, en los términos de las leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, el órgano que se crea significará, a la vez que eficaz instrumento de colaboración en aquella función, principio de autolimitación para una institución más sistemática del Poder".

El Decreto de 30 de enero de 1938 por su parte, dejaba en vigor el de Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, que indica por su parte:

"En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División Don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado".

De otro lado el Artº 2 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado decía:

"La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada. Generalísimo de los Ejércitos, Don Francisco Franco Bahamonde".

Esto visto, en un principio, la interrogante que se nos plantea es la de su validez. En realidad no eran Leyes Fundamentales y su vigencia estaba declarada tan solo en el Preámbulo de una de ellas (165).

Ahora bien admitiendo su plena vigencia jurídica a nuestros efectos, ¿que significación poseían entonces las Cortes en

el panorama jurídico-político de nuestro derecho constitucional? La interrogante es obligada, pues engloba directamente nuestro problema. ¿Serían tan solo eficaz instrumento de colaboración en la función de dictar normas jurídicas de carácter general, principio de autolimitación para una institución más sistemática de poder? ¿De qué manera jugaría ese principio de autolimitación en cuanto a los compromisos internacionales a adquirir por el Jefe del Estado?

Fernández Carvajal (166) nos dice en torno al primer punto que "no se trataba en 1942 de modificar los fundamentos de la potestad legislativa, sino tan solo de crear según reza el preámbulo un eficaz instrumento de colaboración que fuera también principio de autolimitación para una institución más sistemática de poder. A partir de marzo de 1943", nos sigue diciendo, "con la inauguración de la primera legislatura de las Cortes, el poder del Jefe del Estado va transformándose en un poder asistido que recaba y recibe el consilium de determinados órganos, pero sin que la inicial concentración de poderes a su favor, sean objeto de expresar modificación".

Por otra parte el propio Artículo primero de la Ley de Cortes se manifiesta en el mismo sentido: "... Es misión principal de las Cortes la preparación y elaboración de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado".

Si la función de las Cortes en 1953, dada la concentración de poderes en el Jefe del Estado era tan solo la de preparar

y elaborar Leyes y no de aprobarlas o sancionarlas, las competencias de aquellas no podían exceder en materia convencional - internacional, a las que no podían tener en el ámbito interno - (167). No olvidemos por otra parte que en los poderes del Jefe del Estado se encontraban comprendidos no sólo los de la esfera interna sino también los relativos al ámbito exterior.

En este sentido y como hemos visto, el Artº 14 era un Artículo sin contenido sustantivo propio, que nos remitía a las materias de reserva legal de los Artículos 10 y 12.

Si con respecto a las Leyes, las Cortes tan solo podían prepararlas y elaborarlas, era evidente que en torno a la "ratificación de tratados" donde obviamente no tenían competencia para negociar, tan solo "fueran oídas".

Sc. D.: Conclusión

En realidad no cabe un análisis jurídico estricto del problema de la función que habían de realizar las Cortes en estos Convenios. Solo cabe analizarla desde una perspectiva política.

Es esta la razón, pienso, por la que estos Convenios fueron enviados a las Cortes para conocer el Pleno de ellos y no porque existiera una obligación jurídica de actuación en este sentido.

Son razones políticas y no jurídicas las que determinaron este procedimiento. Estos Convenios afectaban, desde una óptica política "hondamente la vida nacional", expresión que a propósito del Concordato utilizara el Presidente de las Cortes (168) y que en este caso no se constató explícitamente, pero que no implica otra interpretación como lo demuestra el mensaje que el propio Jefe del Estado envió junto con ellos.

Los Convenios fueron aprobados por el Pleno de las Cortes, no porque nuestro ordenamiento jurídico así lo dispusiera, sino por motivaciones extrajurídicas.

SECCION III: Los Convenios y el Derecho interno norteamericano

1. ¿Ante qué tipos de convenios estamos dentro del derecho norteamericano? ¿Se han obligado los Estados Unidos internacionalmente de acuerdo a las disposiciones establecidas en su ordenamiento constitucional? ¿Ha habido una adecuada distribución constitucional de competencias?

Estas tres interrogantes nos adentran en un sector difícil, en el que el derecho constitucional, norteamericano en concreto, incide de manera directa.

El problema se centra fundamentalmente en el estudio de quién tiene el poder de obligar a los Estados Unidos convencionalmente en el esfera internacional y lo que es más importante aún, en qué condiciones y circunstancias puede hacerlo.

La Constitución norteamericana, de 17 de mayo de 1787, presenta a lo largo de su articulado preceptos con relevancia en la esfera internacional. De ellos, el más significativo para nosotros por el momento, es el contenido en la Sección 2 del Artículo 2, donde se indica que el Presidente:

"... con el consentimiento y consejo del Senado - tendrá poder para celebrar tratados siempre que - estén conformes con ello dos terceras partes de - los senadores" (punto 2).

Ante este precepto constitucional ¿cómo se ha operado en estos Convenios?. El término "tratado" que ahí se contiene - ¿qué significación tiene?.

Quizá pudiéramos responder a esta interrogante desde una perspectiva teórica; prefiero sin embargo, partir de aquellos Convenios.

2. En primer lugar debemos distinguir entre los dos Convenios de Ayuda y el Convenio Defensivo y esta distinción porque el Convenio de Ayuda para la defensa mutua y el de Ayuda Económica poseen en orden a su configuración jurídico interna unas características propias que le diferencian del Defensivo.

En efecto en el Preámbulo de aquellos se podía leer:

"Considerando que el Congreso de los Estados Unidos de América ha promulgado una legislación que permite a los Estados Unidos de América prestar - ayuda militar, económica y técnica a España".

A juzgar por este Preámbulo "El Gobierno de los Estados Unidos" actuaba en nuestros Convenios teniendo en cuenta esa legislación del Congreso.

Efectivamente, en el propio articulado se indicaba con detalle este punto. El Convenio de Ayuda para la defensa mutua nos decía en el Artículo Primero que toda asistencia que pudiera ser prestada por el Gobierno de los Estados Unidos, lo sería "dentro de las previsiones y con sujeción a todos los términos, condiciones y supuestos de la Ley de Ayuda para la Defensa Mutua de 1949 y a la Ley de Seguridad Mutua de 1951, leyes que las enmiendan y complementan y Leyes presupuestarias consiguientes".

El Convenio de Ayuda económica, igualmente por su par-

te, al hablar de la ayuda técnica y económica a facilitar por - aquel Gobierno, indicaba que lo sería "con sujección a todos los términos, condiciones y cláusulas de caducidad" que determinasen "las leyes entonces vigentes en los Estados Unidos de América"; haciéndose mención expresa también a la Ley de Seguridad Mutua - (en el Preámbulo y en sus cinco primeros artículos).

Estos dos Convenios estaban pues, estrechamente conectados en principio, con la legislación interna norteamericana, - concretamente con esta Ley (169).

El Convenio Defensivo, por el contrario no aludía a legislación especial alguna; tan solo se expresaba con la fórmula: "en consecuencia con los principios pactados en el Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua defensa". No se volvía sin embargo a mencional aquella Ley en el resto del articulado.

Esto visto, pues, cabe volverse a preguntar ¿Qué suponen estos tres Convenios con referencia a la Sección 2 del Artículo 2 de la Constitución?, ¿estamos en presencia de unos "tratados", que necesitaban por tanto la aquiescencia del Senado? Caso de no ser tratados, ¿necesitaban aquella?. De no necesitarse la intervención del Senado, ¿qué relevancia tenían estos Convenios en el Derecho Constitucional norteamericano?.

En realidad parecen claros el origen formal y naturaleza interna de los Convenios, al menos los dos de ayuda. Sin embargo nuestra tarea es precisamente el análisis jurídico de - éste a la luz de los preceptos constitucionales.

Tanto el Convenio de Ayuda para la Mutua Defensa como el de Ayuda Económica, se llevaron a cabo, hemos visto, en ejecución de una Ley: La Ley de Seguridad Mutua de 1951, Ley que obviamente el Congreso había aprobado al ser "enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled". En estos dos casos el Presidente de los Estados Unidos no hacía sino actuar y ejecutar una normativa aprobada por el Congreso norteamericano. En efecto la Sección 402 de la Ley de Ayuda para la Mutua Defensa de 1949, en vigor por remisión de la de 1951, decía:

"El Presidente, antes de la entrega de Ayuda a cualquier nación elegible, concertará agreements en cada nación o grupo de tales naciones..."

Igualmente la Sección 115 (a) Título I de la Ley de Cooperación Económica de 1948 decía:

"El Secretario de Estado, después de consultar con el Administrador está autorizado para concertar... agreements en desarrollo de los preceptos de este título..."

La decisión última de concertar estos acuerdos pues, era del Gobierno de los Estados Unidos y del Presidente en particular. Al considerarse por la Ley a España país elegible en potencia para recibir ayuda, quedaba dentro de la discrecionalidad de este último el decidir si había o no de concertarse.

Estos Convenios sin embargo y esto debe retenerse, que daban perfectamente legitimados en la esfera interna desde el momento mismo de su firma, siempre que el Presidente no se hubiera

excedido en los poderes que esta legislación le concedía. Su - legitimación les venía dada desde un principio.

Estos dos Convenios, en el plano interno norteamerica no no eran dos tratados que necesitasen el consejo y consentimiento del Senado. No eran sino procedimiento para la puesta en práctica de los objetivos de una Ley en el plano internacional.

Es más, pienso que para el derecho interno de los Estados Unidos estos Convenios no poseían sustancialmente mayor singularidad que pudiera poseer cualquier otra Ley relativa, por - ejemplo, a imposiciones fiscales federales. La única diferencia radicaba es sus destinatarios. En este caso se trataba de terceros Estados. Pensemos que la mencionada Ley de Seguridad Mutua - de 1951 no siguió trámite especial que la diferenciase de las - demás leyes a adoptar por el Congreso (170).

¿Quiere ello decir que no estamos en presencia de compromisos internacionales?. Desde esta perspectiva constitucional interna, pienso que éstos no eran efectivamente compromisos internacionales en tanto en cuanto la naturaleza de su contenido y las condiciones en las que éste había de actuarse venían regulados y determinados por la mencionada Ley.

Es más, configurados de esta manera, parece difícil llegar a ver la posibilidad de responsabilidad de los Estados Unidos en la ejecución de estos Convenios, en el terreno internacional. La subordinación era total con respecto a la legislación interna.

En este sentido el problema de la constitucionalidad - de estos dos Convenios no se nos plantea pues, en torno a ellos. El problema, es más amplio de lo que aparentemente puede parecer.

El Congreso de los Estados Unidos, al aprobar la Ley - de Seguridad Mutua actuaba un poder que la propia Constitución - le había otorgado. Aquella se aprobaba efectivamente para "to - maintain the security and promote the foreing policy and provide for the general welfare of the United States" (171), dentro del poder que el Congreso tenía "for the common defense and general welfare of the United States" que contenía la Sección 8, 1 del Artículo 1 de la propia Constitución. Estos poderes venían atribuidos directamente al Congreso, de ahí que esta tipología convencional, aunque no referida epecíficamente a estos acuerdos la denominara Elbert Byrd "congressional-executive agreements" (172).

Esto visto, sin embargo, la interrogante que se nos - plantea es la siguiente ¿es que el Congreso de los Estados Unidos podía legislar con un ámbito de validez espacial que podía - ser aplicable más alla de los límites territoriales del Estado? ¿acaso estaba previsto en la constitución?.

Creo interesante en este sentido, mencional aquí una - sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la de Vermilya-Brown Co v. Connell et al., sentencia dictada en apelación o recurso del Circuit Court of Appeals, donde se dilucidaba si - la base aérea de Bermuda gozaba del carácter de "posesión de los

Estados Unidos" a los efectos de la Fair Labor Standards Act.

En aquella ocasión el alto Tribunal norteamericano -
decía:

"No tenemos duda de que el Congreso tiene poder en determinadas ocasiones, de regular actos de - nuestros ciudadanos más allá de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos aunque el acto penado ocurriese dentro del territorio de una nación extranjera o no. Esto quedó establecido en - cuanto a crímenes directamente afectantes al Gobierno en U. States v. Bowman. 260. U.S. 94..... A fortiori civil controls pueden aplicarse, pensamos, a responsabilidades creadas por regulación - estatutaria de contratos laborales, aun cuando - extranjeros pudieran ser afectados, donde los incidentes regulados ocurran en áreas bajo control, aunque no dentro de la jurisdicción territorial o soberanía de la nación que dicta la legislación... Este poder... no depende de la soberanía sobre el territorio en un sentido político o en cualquier otro" (173).

En realidad pienso que esta construcción a fortiori resulta algo excesiva. Sin embargo el Tribunal continúa:

"Es un problema de interpretación legal si las leyes (statutes) son o no efectivas más allá - de los límites de la soberanía nacional. Ello depende de los fines de la Ley. Donde como aquí, el propósito es regular relaciones laborales - en un área vital para nuestra vida nacional, - parece razonable interpretar sus preceptos como en vigor donde la nación tiene el único poder, más que limitar su ámbito de aplicabilidad (coverage) a la soberanía" (173).

Otro tanto sucede en Spelar v. United States donde el Circuit Court se manifestaba, en este caso, sobre la aplicabilidad de la Federal Tort Claims Act, derivada de actos conectados o ejecutados en la base aérea de Newfoundland.:

"... Ha sido discutido mucho el en alguna ma-

nera místico problema de hasta donde la soberanía ha sido otorgada; no obstante la forma en que sea decidido, parecería que donde los Estados Unidos construyen, operan y controlan una base aérea tan completamente como es el actual caso, tan obviamente en línea directa con el propósito de los Gobiernos contratantes, es del todo fantástico considerar este territorio un país extranjero dentro del significado de una ley doméstica (local statute) que afecta la relación de este gobierno y las personas privadas" (174).

Estas dos leyes, la Fair Labor Standards Act y la Federal Claims Act, en realidad son de naturaleza distinta a las que aquí venimos estudiando, puesto que sus destinatarios son sujetos de derecho interno, es decir personas físicas o jurídicas no estatales. No obstante estos sujetos pasivos, lo que me interesa resaltar es su ámbito de aplicación en el que se comprenden territorios más allá de aquellos sobre los que ^{el} Estado federal ejerce su soberanía en sentido estricto, territorios que son calificados de "area vital" donde los Estados Unidos construyen, operan y controlan una base aérea.

Resulta algo difícil separar los conceptos de poder y soberanía, tal como aparecen en *Vermilya-Brown v. Connel et alia*. ¿Cuál es la diferencia entre aquél y ésta? ¿Qué significación jurídica tiene ese poder?

Dejemos, sin embargo este punto así planteado.

3. ¿Y en cuanto al Convenio Defensivo? ¿Se trataba también de un Convenio en ejecución de una Ley interna?.

Este Convenio presenta una diferencia frente a los otros dos, y esta diferencia es su autonomía con respecto a la legislación norteamericana. ¿Quiere ello decirse que se trataba de un tratado y que había de someterse a la aprobación del Senado?

Este Convenio no era, hemos visto, internacionalmente, un tratado, desde una perspectiva formal. Entraba en vigor el mismo día de su firma y no necesitaba ratificación. Había sido concertado por el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la autoridad del Presidente.

Este plano formal, sin embargo, vamos a dejarlo de lado para estudiar el problema desde un punto de vista sustantivo, punto de vista donde la problemática varía de sentido.

¿Podía el Presidente de los Estados Unidos ejercer las competencias en España que el Convenio Defensivo indicaba, de acuerdo con la Constitución?

Hay un dato previo que me parece importante resaltar y es el de que fundamentalmente en este Convenio el Presidente no adquiría, sustancialmente en principio, compromisos internacionales. Pensemos, que los únicos compromisos que el Presidente adquiriría en él, eran los relativos al suministro de material de guerra a nuestras Fuerzas Armadas, pero como ya vimos no eran absolutos sino condicionados (175).

El Presidente de los Estados Unidos no adquiría pues compromisos sustantivos en estos Convenios; por el contrario, lo que había pactado era el ejercicio en España de unas competencias

que de otra manera no habría podido actuar.

En este sentido no hay en la Constitución de aquel - país un precepto que prohiba al Presidente el realizar este Convenio.

En realidad el Presidente no se comprometía a enviar a España Fuerzas Armadas de su país para contribuir a nuestra defensa exterior frente a un ataque armado como pudiera suceder - en otros países de la O.T.A.N.

El Presidente iba a ejercer unas competencias en nuestro espacio aéreo y para ello era necesario que unas zonas e instalaciones se construyeran en España y fueran administradas por las Fuerzas Armadas de su país, situación realmente diferente a la anterior.

Lo que efectivamente hacía el Presidente no era otra - cosa sino ejercer el poder que la Constitución le otorgaba, de Comandante en Jefe de la Marina, Armada y Fuerzas aéreas, por - extensión, (Artículo 2; Sec 2, 1 de la Constitución) de su país (176).

Entonces, ¿es que estaba autorizado por la Constitución a ejercer sus poderes de Comandante en Jefe de los Ejércitos de los Estados Unidos fuera del territorio federal?

La interrogante es análoga aunque en distinto grado, a la vista al hablar del Congreso. Y es que en realidad el problema no era de ~~dis~~tribución constitucional de competencias, que como hemos visto fueron respetadas, sino de ámbito especial de validez de esa distribución competencial constitucional. ¿Suponía

ello que las competencias del Congreso y del Presidente se ejercerían fuera del ámbito estrictamente territorial de los Estados Unidos?.

Esta interrogante, así planteada, nos sitúa ante una problemática enormemente significativa y de gran interés, y —a mi juicio— de gran transcendencia.

Si nos circunscribimos al Convenio Defensivo y operamos funcionalmente con esas competencias del Congreso y especialmente del Presidente, dejando de lado el problema general ya enunciado, la interrogante última adquiere dimensiones importantes.

Si las competencias presidenciales en nuestro territorio —en sentido amplio— actuaban como ha quedado indicado, el servicio público de la defensa nacional de los Estados Unidos, parece evidente que las competencias del Congreso y específicamente del Presidente, se habían de ejercer fuera del ámbito estrictamente territorial de los Estados Unidos.

¿Es que entonces estas competencias constitucionales del Presidente y del Congreso, podían ejercerse en España, habida cuenta de las normas del Derecho Internacional, que prescribían el derecho de todo Estado a desarrollar en su territorio, — en nuestro caso España, la actividad estatal, las funciones de Estado de que nos habla el Profesor Carrillo y que vimos más — arriba? (177).

El problema, insisto, me parece de gran significación. Pensemos por otra parte que el Derecho interno norteamericano, —

es doctrina generalizada, ha considerado tradicionalmente las normas del Derecho Internacional como "part of the law of the land" ¿Cómo puede mantenerse en nuestro caso este principio? (178).

El superar esta contradicción nos exige adentrarnos en el sector de la seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas, donde como veremos más adelante, la Organización había fracasado. Pensemos tan solo aquí que, de haberse llevado a cabo el sistema de la Carta, la normativa al respecto de aquella habría pasado a ser parte integrante de la Constitución norteamericana, al ser la Carta un tratado ratificado por aquel país y las decisiones a adoptar por el Consejo de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, habrían sido decisiones self-executing, es decir, de aplicación inmediata (Artículo 24,1 y 25 de la Carta) (179).

P A R T E S E P T I M A

CAPITULO I:

LOS CONVENIOS Y EL SISTEMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
COLECTIVA DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

SECCION I: EMPLAZAMIENTO.

SECCION II: LA AYUDA PARA LA DEFENSA Y LOS ACUER—
DOS DE LEGITIMA DEFENSA INDIVIDIVI—
DUAL Y COLECTIVA EN LA LEY DE SEGU—
RIDAD MUTUA.

SECCION III: EL CONVENIO DEFENSIVO.

CAPITULO I: Los Convenios y el sistema internacional de seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas:

SECCION I: Emplazamiento

(1). Es el tema de la seguridad colectiva prevista en la - Carta de las Naciones Unidas uno de los que la doctrina internacionalista ha trabajado más exhaustivamente y desde variadas perspectivas.

El sistema de seguridad colectiva, formalmente previsto en la Carta, no llegó a ver la luz ya incluso en los comienzos de la propia organización.

Los Estados Miembros de la Organización, al depositar en el Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad (Artº 24), cedían a aquél, el ejercicio de su propia defensa exterior; en términos jurídicos, la atomización propia de la sociedad internacional desorganizada - como era la anterior, no obstante el intento de la Sociedad de Naciones, daría paso a un sistema mundial donde al mantenimiento de la paz y la seguridad, que debió haberse convertido jurídicamente en un servicio público mundial —con una estructuración - prevista en la Carta—, quedaría en manos de cinco Potencias, - miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, - resuelta a preservar del flagelo de la guerra a las generaciones

venideras y para ello dispuesta a mantener la paz y seguridad - internacionales mediante el uso de la fuerza armada en servicio del interés común (Preámbulo de la Carta), se encontró ya desde su comienzo imposibilitada a actuar, cuando las grandes potencias/ se enfrentaron directamente (180).

Todo el sistema previsto en la Carta, en sus tres sectores, había de quebrar formal y sustantivamente. El Capítulo VI relativo a la solución pacífica de controversias no se iba a seguir en los supuestos previstos. Tampoco el Capítulo VII iba a ponerse en práctica en toda su extensión, y el Capítulo VIII, - por otra parte, subordinado en las materias relativas al mantenimiento de la paz y seguridad al Consejo de Seguridad, no habría de adoptar la significación que los redactores de la Carta le - asignaron. Otro tanto ocurriría finalmente con las disposiciones
1250 | relativas a la regulación de los armamentos (Artº 26) y al posible desarme (Artº 47).

Ante esta falta pues de puesta en práctica de este sistema, se produciría la disgregación del mismo, disgregación no - ya sustantivo como decíamos, al no lograrse conseguir nunca una cohesión, una virtualidad, sino incluso su disgregación formal.

La seguridad internacional, jurídicamente, ya en la década de los 50, quedaba en una situación precaria y compleja; - precaria en cuanto que la acción de la Organización se ignoraba cuál iba a ser ante el desacuerdo de los Grandes; compleja en - cuanto que junto a la acción de la Organización, todos los Estados y en concreto los Estados ./.

Unidos y la Unión Soviética se veían posibilitados a adoptar las medidas que creyeran oportunas para mantener su seguridad propia, con tan solo unos preceptos a los que formal y sustantivamente se habían adherido al ratificar la Carta, como eran el Artículo dos, punto 4 en el que se comprometían a abstenerse en sus relaciones con otros Estados a recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza, así como su corolario, el número tres, relativo al arreglo pacífico de controversias, pero que por su carácter de principios adoptaban jurídicamente una significación muy "sui generis" (181).

(2) No es este sin embargo el lugar donde vayamos a estudiar la actuación de la Organización (182) y su labor en el campo de la seguridad internacional. Tampoco vamos a analizar aquí las expresiones jurídicas, al margen de la Organización, que los Estados llevaron a cabo para asegurar su propia defensa, por ser excesivamente amplias y variadas en naturaleza y número.

Lo que en este Capítulo vamos a tratar de llevar a cabo es insertar nuestros Convenios en su lugar propio, una vez mencionada primeramente, la distinta actuación de la Organización y la de los Estados, para estudiar su significación en el sistema que la Carta de las Naciones Unidas había previsto.

¿Donde se sitúan estos Convenios en este sistema? Aunque este punto, en definitiva, se irá viendo a medida que nos vayamos acercando al término de esta tesis, debemos determinar

en este momento su conexión con aquel sistema.

3/ Estos Convenios, digamos en principio no eran completamente ajenos a la Carta de las Naciones Unidas. El Convenio de Ayuda para la mutua defensa al hablar del material y equipos a entregarse recíprocamente los dos Gobiernos, indicaba que tal suministro y utilización serían concordante con la Carta de las Naciones Unidas (Artº 1,1).

Asímismo, en este Convenio igualmente, se decía que - ambos Gobiernos estaban dispuestos a cooperar en los esfuerzos internacionales que se realizasen para llegar a convenios sobre la reglamentación universal y reducción de armamentos, bajo las adecuadas garantías contra toda tentativa de eludirlos o violar los (Artº 5, 3º), esfuerzos internacionales en los que la Organización tenía un papel importante (Artículos 11,1; 26 y 47,1. de la Carta).

El Convenio de Ayuda para la defensa mutua se veía pues conectado con la Carta y asimismo con la Organización. Vamos a profundizar sin embargo, en este punto.

Este Convenio de Ayuda venía, como se verá en su momento, muy relacionado con la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y por remisión, con la Ley de Ayuda para la mutua defensa de 1949 (Artº 1º,1, punto 2). Aquella Ley tenía por objeto autorizar ayuda militar y económica a países amigos "para reforzar la seguridad mutua y la defensa individual y colectiva del mundo libre" y -

1949
51

para facilitar de esta manera la participación de aquellos países en el sistema de "seguridad colectiva de las Naciones Unidas" (183).

mund libre

En efecto pues, la conexión de esta ayuda con la Carta y la Organización eran evidentes, sin embargo en este Preámbulo pienso, se daba un dato interesante: esta ayuda iba dirigida por una parte a reforzar la defensa individual y colectiva del mundo libre tan solo y al mismo tiempo por otra, se facilitaba a los países receptores, su participación en el sistema de seguridad colectiva de la Organización. Es decir, se aludía a la defensa individual y colectiva del mundo libre y al sistema de seguridad colectiva de la Organización si bien esta categoría de "mundo libre" no se veía prevista en la Carta, en los preceptos relativos al sistema a crear.

Dos interrogantes, sin embargo, surgen aquí. ¿Autorizaba la Carta a los Estados Unidos a llevar a cabo esta asistencia de material o económica a determinados países? ¿Lo hacían los Estados Unidos de conformidad con recomendaciones de la Organización?. Nada decía esta Ley.

Por el contrario la Ley de 1949 (en vigor por remisión de aquella), era bastante más explícita en este sentido al decirse en su Preámbulo:

"... El Congreso encuentra por lo dicho hasta ahora que los esfuerzos de los Estados Unidos y otros países para promover la paz y seguridad en desarrollo de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas requieren medidas adicionales de apoyo..."

Esta Ley parece que legitimaba a los Estados Unidos a llevar a cabo este programa.

Efectivamente, dado que los propósitos de la Carta al respecto, puede pensarse, no obligaban, dado su caracter de non self executing (181) quizá podríamos concluir que los Estados Unidos con esta legislación incorporaba en su ordenamiento a aquellos.

Continuaba, sin embargo, el Preámbulo de la citada Ley:

"Estas medidas incluyen la entrega de ayuda militar esencial para permitir a los Estados Unidos y a otras naciones dedicadas a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas participar efectivamente en acuerdos para legítima defensa individual y colectiva en apoyo de esos propósitos y principios..."

El Preámbulo introducía pues este dato que matizaba el destino de aquellas medidas adicionales: la participación en acuerdos de legítima defensa individual y colectiva.

Los Estados Unidos pues habían dictado aquella Ley de 1949 para aumentar los esfuerzos de legítima defensa individual y colectiva de los países que hubieran concertado acuerdos en ese sentido, y la de 1951, además de para aquella defensa, para que los países receptores participaran más fácilmente en el sistema de seguridad colectiva de la Organización.

La interrogante sigue, sin embargo, latente, ¿podían jurídicamente los Estados Unidos llevar a cabo estos programas? En nuestro caso, el suministro de esos materiales a España ¿se llevaba a cabo, efectivamente, de forma concordante con la Carta de las Naciones Unidas?.

Pensemos por otra parte que como hemos visto eran "los equipos, materiales, servicios u otras asistencias" a entregarse recíprocamente, de que nos hablaba el Artículo 1º de este Convenio lo que había de realizarse de conformidad con la Carta. /

Y en realidad, la Carta nada decía al respecto, pues en torno a los armamentos, fue claramente previsto que su regulación debería venir después y no antes de la implantación completa del sistema de seguridad colectiva (184).

Solamente podremos responder a esta interrogante conociendo la naturaleza de los llamados acuerdos de legítima defensa individual y colectiva así como la significación de esa ayuda militar en el sistema de seguridad de la Carta.

SECCION II: La ayuda para la defensa y los acuerdos de legítima defensa individual y colectiva en la Ley de Seguridad Mutua.

①. ¿Qué entendía la Ley de 1949 según hemos visto por acuerdos de legítima defensa individual y colectiva? ¿Se especificaban en la Carta éstos?. ¿Qué significación poseía la legítima defensa en el sistema de seguridad a crear? En realidad estas tres - interrogantes aunque distintas, guardan como veremos una conexión muy estrecha.

Los únicos acuerdos que la Carta de las Naciones Unidas preveía en materia de seguridad eran los acuerdos regionales, acuerdos regulados en el Capítulo VIII.

Estos acuerdos, que preveían la aparición posible de organismos regionales dada su conexión con la paz y seguridad - internacionales, estaban subordinados sin embargo en su actuación coercitiva al Consejo de Seguridad (Artº 53).

No tenían sin embargo en la Carta, una conexión directa formal con la legítima defensa individual o colectiva de que nos habla el Artículo 51. Aunque relacionados todos estos preceptos con el sistema de seguridad, todos ellos tenían una significación específica.

Los Estados Unidos, por acuerdos de legítima defensa, entendían entonces implícitamente, al indicarse en las propias Leyes los países elegibles, el Tratado del Atlantico Norte y el Tratado de Rio fundamentalmente.

¿Cuál era, sin embargo, la naturaleza de estos Trata-

dos frente a la Carta de las Naciones Unidas? (185).

No se trataba de acuerdos plurilaterales de legítima defensa colectiva, fundamentalmente, porque esta figura no estaba prevista en la Carta, como veremos, ni en el sistema a crear.

¿Eran entonces acuerdos regionales?

Interesa analizar este punto porque creo que nos va a dar luz al respecto.

+ Putsch

2. El Tratado interamericano de asistencia recíproca de 2 de septiembre de 1947 (186), el primer acuerdo plurilateral - que sobre aspectos relativos a la seguridad aparece después de la firma de la Carta, no presenta técnicamente ninguna anomalía frente a la Carta de las Naciones Unidas. Su artículo segundo alude a los métodos de solución pacífica de controversias, remitiéndose a los procedimientos vigentes en el sistema interamericano.

El Artículo 3 por su parte, núcleo del Tratado, conviene en obligación positiva para las partes contratantes, lo que - el artículo 51 de la Carta enmarcaba como "derecho".

Ahora bien, como complemento de este artículo, el quinto indica:

"Las Altas Partes contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con los artículos 51 y 54 de la Carta de San Francisco información completa - sobre las actividades desarrolladas o proyectadas en el ejercicio del derecho de legítima defensa o

con el propósito de mantener la paz y la seguridad interamericana".

Así configurado, pienso que este Tratado encajaba perfectamente en el Capítulo VIII. Es decir, formalmente en principio, este Tratado era un acuerdo regional en el sentido dado por aquel Capítulo (187).

¿Y el Tratado del Atlantico Norte? En este Tratado la situación se presentaba y presenta de modo distinto. En él se alude a la solución pacífica de controversias (Artº 1º), así como a la obligación recíproca de asistencia en caso de ataque armado (Artº 5º) convirtiendo asimismo en obligación el derecho del Artículo 51 de la Carta.

Sin embargo hay una diferencia importante frente al Tratado de Río, y es que no se alude aquí al Artº 54 de la Carta. Las medidas a adoptar en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad no actuara, y llevadas a cabo en caso de ataque armado habrían efectivamente de ser comunicadas a aquél. Nada se decía sin embargo con respecto a las proyectadas, en relación con el Consejo de Seguridad.

Lo que por el contrario se insertaba en este Tratado era la previsión de esas medidas precisamente y así, las Partes:

"A fin de asegurar de la manera más eficaz la realización de los fines del presente Tratado, actuando individual y conjuntamente de una manera continua y efectiva por la aportación de sus propios medios y prestándose asistencia mutua, mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistencia al ataque armado" (Artº 3).

Este artículo, pienso, es el que convertía en imposible el calificar al Tratado de acuerdo regional, según el Capítulo VIII.

En efecto el Artículo 54 era parte integrante del Capítulo y por tanto estos acuerdos y organismos regionales habían de comunicar al Consejo de Seguridad, dada la subordinación de éstos a aquél, las medidas a que hacía referencia. De ser el Tratado del Atlantico Norte un acuerdo u organismo regional, no eran tan solo las medidas adoptadas en el ejercicio del derecho de legítima defensa las que habían de comunicarse al Consejo en tanto en cuanto permaneciera éste inactivo por el veto de alguno de sus miembros permanentes; eran también las actividades desarrolladas o proyectadas en el ejercicio de ese derecho, como tal organismo o acuerdo.

Formalmente pues, el Tratado del Atlantico Norte no era un acuerdo regional mientras que el de Río, sí lo era.

No debemos olvidar, sin embargo que esta perspectiva no nos explica la realidad, por que a pesar de ello, sustantivamente, los dos Tratados, no obstante sus diferencias formales, iban a actuar y actuarían de forma análoga en su preparación para la defensa, al menos con respecto a nuestro artículo.

En efecto, ante una situación mundial en la que reinaba la guerra fría y como dijera Boutros Ghali, : "el respeto de este artículo supondría informar al enemigo, comunista para los unos, imperialista para los otros, ambos miembros del Consejo de

Seguridad, de las decisiones que adoptaría la alianza" (188). Efectivamente el Artículo 54 permanecería inoperante a lo largo del tiempo en este campo (189).

3. Si no eran estos acuerdos es decir, el Tratado de Río y el Pacto del Atlántico Norte sustantivamente acuerdos regionales, previstos en el Capítulo VIII de la Carta, ¿qué significación tenían en el sistema de seguridad previsto en ella?. ¿En qué parte de la Carta encuentran su fundamento? ¿Quizá en el artículo 51?.

La Carta de las Naciones Unidas y la institucionalización de la seguridad colectiva en ella prevista era amplia aunque concisa. Lo era, sin embargo en el mundo internacional de aquel momento, es decir en el mundo internacional de junio de 1945.

En realidad en aquella época se habían puesto grandes esperanzas en el sistema de la Carta y aún no se había producido un enfrentamiento importante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En efecto, con esta colaboración inicial todo resultaba más factible. El Consejo de Seguridad tendría la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y cuando éste lo creyera oportuno podría delegar su autoridad en los acuerdos u organismos regionales (Capítulo VIII) lográndose una eficaz descentralización.

En toda esta institucionalización, el artículo 51, que he dejado para este momento, enmarcaba el ejercicio del derecho

de legítima defensa al hecho de producirse un "ataque armado" - tan solo.

¿Hay alguna razón que justifique esta interpretación de este artículo de esta manera?. Al margen de consideraciones estrictamente formales pienso que deben tenerse en cuenta dos - hechos, a mi juicio importantes. El primero es el hecho de que en 1945 la situación mundial se hallaba resentida del conflicto. El Preámbulo de la Carta es bastante sintomático en este sentido.

Por otra parte, la revolución china aún no se había producido. Ante esto, ¿qué Estado podría querer en la práctica una política armanentista o bélica sin que la Organización y su sistema de seguridad actuase?. En realidad en aquellos momentos | ninguno.

Pensemos por otro lado que en cuanto a los países ex-enemigos, el Artículo 53 dejaba en libertad completa a los Estados, para la formación de acuerdos regionales, dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de dichos países, hasta tanto que a solicitud de los Gobiernos interesados quedara a cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados. El Artículo 107, completaba por su parte esta institucionalización (190).

En efecto, el sistema de seguridad a crearse por la Organización podría y debería prever los demás supuestos y así era. Cualquier actitud tendente a la guerra de cualquier Estado,

o cualquier política armamentista podrían ser consideradas por el Consejo de Seguridad como "una amenaza a la paz" y aplicar las medidas del Capítulo VII (191). Por otra parte, además, el Consejo de Seguridad había de impulsar planes para la regulación de los armamentos.

Sustantivamente, en realidad, la limitación del ejercicio de la legítima defensa al caso de ataque armado no era - una medida fuera de lugar, sino una medida localizada dentro de un sistema que iba a actuar la propia Organización de las Naciones Unidas y que trataba de responder a una realidad existente.

El segundo hecho al que aludía más arriba, es el que se produce tres meses después del de la firma de la Carta; me refiero a la explosión de la primera bomba atómica y lo que ello supone.

La puesta a disposición de una potencia: los Estados Unidos, de este elemento, contribuiría a una mayor diferencia en las actitudes de las dos partes que después consagrarían - toda una situación internacional.

Objetivamente considerado, el armamento atómico desfasaba todo el sistema institucional de seguridad colectiva previsto en la Carta. Ya no se trataba de llevar a la práctica el Capítulo VII y de regular los armamentos. El problema básico al que la Organización había de responder era el control del armamento atómico, para que no fuera utilizado militarmente. Una

agresión o un ataque armado con bombas atómicas podía derrotar definitivamente un Estado.

La Organización y el sistema de seguridad a crearse, estaban preparados tan solo sobre una base sociológica en la - que los armamentos convencionales eran los únicos en juego. Es to es importante retenerlo. Con el arma atómica todo el siste-
ma se desvirtuaba en su misma base.

Pensemos que la inactividad del Consejo de Seguridad, por el veto de uno de sus miembros permanentes en esta nueva - situación alcanzaba una significación mucho más notable. Es más, un ataque armado atómico podía tener consecuencias irreparables, sin que la Organización a través del Consejo de Seguridad pudie-
ra reaccionar.

En esta nueva etapa que se abría, era materialmente - imposible actuar este derecho de legítima defensa dentro del re-
ducido límite del Artículo 51. El problema no era ya de interpre-
tación, era más hondo.

Los Estados de la Comunidad internacional ante esta - nueva situación se encontraban sin un sistema de seguridad apro-
piado, es decir, en una situación muy "sui generis", con algu-
nas de las características propias de sociedad internacional -
desorganizada o descentralizada, en categorías de Verdross, don-
de su defensa correspondía a cada uno de ellos y donde cada Es-
tado tan solo podía recurrir a los medios de defensa que el De-
recho Internacional general le ofrecía. Lo único que se salvaba

de este nuevo planteamiento eran los "Propósitos y Principios" de la Carta "referentes a la seguridad y al uso de la fuerza", precisamente por ese carácter de principios. El sistema restante había quebrado.

4. El fundamento de estos acuerdos —Tratado de Río, O. T.A.N.— podemos afirmar, que, de una parte no estaba en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y por otra, que ni aquella Carta y con menor motivo, la Organización, autorizaron a los Estados Unidos a llevar a cabo su programa de la Ley de Seguridad mutua.

Entonces, ¿no se llevó a cabo el suministro de material militar de que nos habla el artículo primero de nuestro Convenio de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas en tanto en cuanto aquella Ley no se llevó a término de conformidad con la Carta?

Efectivamente, pienso que este suministro no se llevó a cabo de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

SECCION III: El Convenio Defensivo

Ninguna conexión con la Carta

¿Qué significación tiene el Convenio defensivo frente al sistema de la Carta?

El Convenio Defensivo y las competencias que los Estados Unidos ejercían en España, no guardaba ninguna conexión con el sistema de seguridad de la Carta.

En ella se preveía la posibilidad de que los Miembros de las Naciones Unidas se comprometieran a poner a disposición - del Consejo de Seguridad de acuerdo con convenios especiales - "... las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso" necesarios para mantener la paz y seguridad internacionales (Artº 43).

Pero esta previsión estaba engarzada en el sistema de seguridad a crear, del que hemos hablado y que no habría de llevarse a cabo. Este punto quedaría sin ninguna aplicación.

Este Convenio, pues, el más importante en el plano sustantivo, objetivamente y en cuanto a nosotros se refiere, no iba a tener ninguna conexión con el sistema de seguridad de la Carta.

Como respuesta al ejercicio en España de la defensa nacional de los Estados Unidos, se insertaba y operaba en la sociedad internacional desorganizada que se había producido por las razones expuestas y en la que los Estados Unidos era uno de los dos protagonistas principales.

P A R T E O C T A V A

CAPITULO I:

LOS CONVENIOS Y LA DEFENSA EXTERIOR DE ESPAÑA

- SECCION I: INTRODUCCION.
- SECCION II: LOS CONVENIOS Y NUESTRA DEFENSA EXTERIOR.
- SECCION III: LA UTILIZACION CONJUNTA Y SU SIGNIFICADO.
- SECCION IV: EL SUMINISTRO DE MATERIAL MILITAR Y SU SIGNIFICADO.
- SECCION V: LA SEGURIDAD EXTERIOR DE LAS ZONAS E INSTALACIONES Y SU SIGNIFICADO.

CAPITULO I: Los Convenios y la defensa exterior de España

SECCION I: Introducción

1. Con anterioridad a 1953, jurídicamente, en el plano internacional, España tan solo estaba obligada por las normas del Derecho Internacional general y sus compromisos convencionales y no cabe duda que en esa fecha permanecía desligada de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de su sistema de seguridad, al no ser miembro entonces de esa Organización. Militarmente no estaba integrada por otra parte en ningún sistema internacional general de seguridad (192).

Con la firma de estos Convenios, sin embargo, nuestro país se insertaba, militar y jurídicamente en un sistema de seguridad colectiva: el desarrollado por los Estados Unidos.

Ahora bien, el grado de integración en ese sistema era particular frente al de otros Estados del mismo y diferente en función del Convenio de Ayuda y del Defensivo. Veamos esta diferencia.

En función del Convenio de Ayuda y de los que ~~le~~ desarrollan y ~~complementan~~, España quedaba integrada militarmente en el sistema mundial de seguridad norteamericano.

En efecto, la Ley de Seguridad Mutua de 1951, no obstante estar conectada con los programas de la O.T.A.N. relativos a la defensa mutua (193), respondía en si a exigencias propias -

de la política exterior norteamericana. Dean Acheson, entonces Secretario de Estado, se manifestaba en este sentido defendiendo el proyecto de Ley frente al Congreso:

"El programa de ayuda militar que la Administración trata de someter al Congreso en esta sesión no es un programa en desarrollo del Tratado del Atlántico Norte. El programa sería necesario incluso si no hubiera Tratado del Atlántico Norte de la misma manera que el Tratado sería necesario incluso si el programa de asistencia militar no hubiese sido formulado aún. El programa de ayuda militar, ambos en su concepción y comienzo, tiene su propia validez y necesidad, basada en elementos básicos de nuestra política exterior. Es cierto - que algunos de estos elementos de nuestra política exterior son comunes a aquellos que subraya el Tratado del Atlántico Norte. El principal elemento envuelto es aquel del interés nacional de los Estados Unidos en asegurar la seguridad de ciertas naciones libres" (194).

C. Acheson N
libres 1

Efectivamente "esos elementos básicos de nuestra política exterior" de que hablaba Acheson eran los que motivaban el programa (195).

Esta integración militar, sin embargo, que llegaba hasta afectar la capacidad total española de pólvoras y explosivos - así como la capacidad total asimismo de las instalaciones de montaje, mantenimiento, repaso y conversión de equipos y materiales militares (196), a unos fines concretos, como eran la venta indiscriminada a los países de la O.T.A.N. de aquellos y la puesta en servicio por otra parte de estas instalaciones para las "naciones del mundo libre", no era jurídicamente orgánica e institucional. Esta integración era, yo diría, estructural; y estructural en el sentido de que se encontraba dentro de un sistema en cuyos órga-

nos de gestión y decisión no participaba en modo alguno, estructura pues con caracteres de dependencia.

¿Cuál era por su parte la integración de nuestro país | en aquel sistema, en función del Convenio Defensivo?. La integración de España en el sistema de seguridad norteamericano alcanzaba en este Convenio su carácter más singular y más sustantivo en el sentido de que si en el Convenio de Ayuda, nuestro país - se conectaba con los del resto del sistema tan sólo a unos efectos muy precisos militarmente; en este, hay una característica - que le diferencia: la integración se lleva a cabo, solamente con los Estados Unidos, con la autorización a estos al ejercicio de unas competencias determinadas en nuestro país.

Estas zonas e instalaciones y en particular las bases aéreas como ya vimos, suponían un factor vital para la defensa - nacional de los Estados Unidos. Eran bases aéreas destinadas fundamentalmente a la aviación estratégica de aquel país, es decir, a las Unidades del Mando Aéreo Estratégico (S.A.C.), dentro del complejo desarrollado en la década de los años 50 para actuar y dar contenido a su defensa nacional.

Tengamos en cuenta en este sentido que el Mando Aéreo Estratégico no estaba por otra parte integrado en la O.T.A.N., | sino que dependía directamente del Gobierno de los Estados Unidos (197).

Las Unidades de este Mando, portadoras de armamento -

atómico en sus bombarderos, necesitaban de unas bases donde ope
rar fuera del territorio de los Estados Unidos, en función de -
los adelantos técnicos de transporte de aquella arma (198).

SECCION II: Los Convenios y nuestra defensa exterior

Llegado este momento debemos preguntarnos, estos Convenios ¿tienen alguna relevancia en nuestra defensa exterior? o, de otro modo ¿de qué manera inciden estos en nuestra defensa exterior?.

La interrogante es amplia por su naturaleza y quizá - conviniera matizarla. Estos Convenios, o mejor, esta integración militar estructural por una parte y esta autorización al Gobierno norteamericano al ejercicio de estas competencias específicas por otra, ¿qué suponen o aportan a nuestra defensa exterior?

El problema es complejo para el jurista, fundamentalmente, por la naturaleza del concepto de "~~defensa exterior~~"; en realidad es un concepto lleno de ~~contenido~~ político donde no estamos preparados para su estudio. Sin embargo, sí creo que debo dar una respuesta a aquella interrogante o al menos intentar - darla.

En realidad en 1953, el mundo se veía dividido en dos bloques cuyos representantes militares de más poder eran los Estados Unidos y la Unión Soviética; esta situación sociológica de base había de incidir notablemente en la organización del poder militar de estas Superpotencias. En efecto, la estrategia de - 1953 venía motivada por el enfrentamiento de aquellas dos Superpotencias mencionadas. Esto suponía que al estar España integrada militar y jurídicamente dentro del área de los Estados Unidos en el grado estudiado, desde una perspectiva política al menos,

perspectiva política de bloques, la defensa exterior de los Estados Unidos, indirectamente, estaba contribuyendo a nuestra defensa exterior.

Militarmente sin embargo, el ejercicio en España de aquellas competencias por los Estados Unidos, convertían a esas zonas e instalaciones y a nuestro territorio por extensión, en objeto de represalia soviética, peligro que "jurídicamente" no se veía por otra parte asegurado en los Convenios. La defensa exterior de España, en el plano jurídico, correspondía totalmente a nuestra Administración militar. En efecto en el Convenio Defensivo no había ningún precepto análogo al del Artículo 3, punto 1 - del Tratado de Río de Janeiro (199) o al del Artículo 5 del Pacto del Atlántico (200) que supusiera una ayuda del Gobierno de los Estados Unidos caso de producirse un ataque exterior contra la integridad territorial española.

Es difícil, sin embargo pensar que una agresión exterior soviética a nuestro territorio (no a las zonas necesariamente) dejara impasibles al Gobierno de los Estados Unidos política y militarmente.

Cabe y debe, no obstante, distinguirse entre estas dos perspectivas porque creo que tienen importancia y verdadera significación.

Hay además un dato que merece destacarse en este sentido por ser relevante y es que España no pretendía entonces que su defensa exterior fuera objeto de atención directa de los Estados Unidos.

dos Unidos. El propio Jefe de Estado así lo indicaba en el discurso que acompañó a los Convenios a las Cortes cuando decía: - "No es nuestro propósito el que los otros nos defiendan sino el de defendernos por nosotros mismos" (201). En esta perspectiva había una correspondencia de criterios.

SECCION III: La utilización conjunta y su significado

¿Qué significación jurídica tenía entonces la expresión "utilización conjunta" de las zonas e instalaciones que aparece en el texto y cuya incongruencia ha sido sobradamente estudiada?.

En realidad, cuando estudiamos la utilización de las zonas e instalaciones (Sc. F, Sección II, Capítulo III) vimos - que, primeramente, no todas las zonas e instalaciones habían de utilizarse conjuntamente. En efecto, las instalaciones petrolíferas de las bases aéreas eran de uso exclusivo norteamericano (202). Otro tanto sucedía con el oleoducto (203) y las redes telefónicas, de teletipo y de intercomunicación, así como las instalaciones de radio de enlace con la red militar mundial norteamericana y las de comunicación con aviones militares de aquel país (204).

Al margen sin embargo de este dato, en cuanto a las zonas a utilizar conjuntamente, tanto las de operatividad de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en sentido estricto, las bases aéreas, como las de la Marina de aquel país, es decir los depósitos de combustibles y de municiones, así como Rota, lo que se establecía en realidad tanto en aquellas como en estas, eran dos zonas bien delimitadas y otras zonas comunes para uso común, más que para utilización conjunta.

Efectivamente, como ya vimos en la indicada Subsección, las zonas e instalaciones de utilización común eran tan solo las

pistas de despegue y las Torres de Mando en las bases aereas por una parte y los muelles y las vías de comunicación interna para manejo y transporte de municiones en Cartagena y El Ferrol por otra. Pequeñas instalaciones y equipos de emergencia también podían ser de uso común.

En realidad, el único supuesto donde jurídicamente podemos hablar de utilización conjunta es en el caso de los depósitos de combustible, depósitos donde las dos Marinas podían realizar el almacenamiento de combustible y obtenerlo in distintamente.

Lo que definitivamente se hacía en los acuerdos distinguiendo esas dos zonas, era delimitar competencias. En las zonas norteamericanas las F.A.-U.S.A. destinadas en ellas, actuarían sus competencias que no eran otras que las relativas a su mantenimiento. En las zonas españolas nuestras Fuerzas Armadas actuarían por su parte las competencias normales que en último término tenían por objeto nuestra defensa nacional. Y es que si efectivamente hubiera habido un compromiso de la naturaleza del Pacto del Atlántico, las zonas e instalaciones, no habrían tenido zonas de distinta utilización, sino que hubieran sido verdaderamente bases conjuntas, en definitiva, bases dependientes de un órgano distinto de los dos Estados propiamente dichos. Estaríamos en este caso en un regimen de bases análogo en principio al existente en la O.T.A.N. (205), y esto fundamentalmente porque en -

tal supuesto la defensa exterior de España, como sucedía en los países de la O.T.A.N. en 1953 y sucede en la actualidad con respecto a su defensa exterior, sería jurídicamente de la incumbencia de aquella Organización. .

SECCION IV: El suministro de material militar y su significado

1. ¿Qué significación posee por su parte el artículo primero del Convenio Defensivo en sus puntos uno y tres en los que como vimos, se comprometía el Gobierno de los Estados Unidos a entregar al Español material bélico para nuestras fuerzas armadas?. Los negociadores españoles de 1953 conocían perfectamente el riesgo nuclear que íbamos a correr que antes mencionábamos.

Martín Artajo decía entonces:

"En otras palabras que España... necesitaba disponer de un ejército en condiciones de hacer frente a los peligros de una situación de emergencia, ya que en los objetivos totales europeos siempre corría el riesgo nuestra Patria de constituir un objetivo cuando menos mediano de la agresión soviética, tal como lo viene siendo desde hace años en la "presente guerra fría" (206).

Sin embargo, sobre este punto, pienso que las interpretaciones al respecto eran distintas por parte española y por parte norteamericana.

En efecto, el Gobierno norteamericano se había obligado "al apoyo del esfuerzo defensivo español... mediante la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra... a fin de contribuir... a la eficaz defensa aérea de España y para mejorar el material de sus fuerzas militares y navales..." Ahora bien tal apoyo, ya vimos (207), tenía unos condicionamientos (compromisos internacionales de los Estados Unidos; exigencias de la situación internacional y concesiones de crédito por el Congreso) es decir, estas obligaciones no eran -

absolutas, sino que se veían determinadas no ya a la acción del Congreso en el plano presupuestario, sino asimismo a la discrecionalidad de la Administración en lo que había de entenderse - por "compromisos internacionales" o "exigencias de la situación internacional".

El punto tres de este mismo artículo nos insistía en esta problemática. Este punto del que ya hemos estudiado algún aspecto (208), nos hablaba de "necesidades mínimas de material, requeridas para la defensa del territorio español" y las afectaba a un fin específico: "con el fin de que si llegase un momento en que se hiciera necesaria la utilización bélica de las zonas e instalaciones... se hallen cubiertas en la medida de lo posible las necesidades previstas en orden a la defensa aérea del territorio, y a la dotación de sus unidades navales y a lo más adelantado posible el armamento y dotación de las unidades de su Ejército".

¿Podía interpretarse este párrafo en el sentido de que las necesidades mínimas de material a entregar por parte de los Estados Unidos ~~tenían~~ como finalidad el que las Fuerzas Armadas españolas estuvieran lo suficientemente preparadas en caso de - utilización bélica de las zonas e instalaciones?.

Es evidente que el compromiso por parte del Gobierno de los Estados Unidos de la concesión de ayuda militar a las - Fuerzas Armadas de España no era absoluto sino que estaba relacionado estrechamente con aquellas zonas. Este era, creo, el sen

tido interpretativo que el Gobierno norteamericano daba a sus obligaciones.

Por otra parte, pienso que merece destacarse en este sentido, por confirmar en cierto modo esta posición, las Conclusiones de la Comisión Militar de la Escuela de Altos Estudios Militares del CESEDEN, a propósito de un Estudio sobre los Acuerdos, celebrado en 1968. Sobre la defensa aérea se concluía:

"Considerada en 1953 como de máxima prioridad, - llegó a ser efectiva al poder desplegarse 6 Escuadrones de F-86, estar además desplegado en la 65ª División Aérea de los Estados Unidos (con 3 escuadrones más, 1 de F-104 y 2 de aviones de todo tiempo); y ponerse a punto las redes de alerta, control y comunicación, transmisiones necesarias; para las correspondientes operaciones aéreas. Al retirarse la 65ª División Aérea y agotarse los F-86 España se ha quedado prácticamente sin defensa aérea y por consiguiente, el Convenio no ha sido cumplido por los Estados Unidos en este importantísimo aspecto" (209).

Y a propósito de las Causas y efectos de los mismos se concluía asimismo:

"El refuerzo de nuestros Ejércitos y Marina tenía entonces para los Estados Unidos una importancia secundaria" (210).

(2.) ¿Y en cuanto a los materiales recibidos de aquel Gobierno en virtud del Convenio de Ayuda, bien directamente, bien como producto de contratos de suministro off-shore? ¿Cuál era su destino? ¿Qué finalidad tenían?

Ya vimos que el número dos del Artº 1º de aquel Convenio. nos hablaba de los fines de "afirmación de la paz y seguri

dad internacionales", en virtud de los acuerdos satisfactorios para ambos Gobiernos (211).

En efecto, este material no estaba destinado al sostenimiento del esfuerzo defensivo de España, sino a la afirmación de la paz y seguridad internacionales "in genere".

¿Es que entonces eran fines distintos? ¿es que se excluían ambos supuestos?

Efectivamente se establecía esta distinción. En principio estos materiales irían destinados a la afirmación de la paz y seguridad internacionales y era fundamentalmente, cuando aquellos no fueran precisados para estos fines, cuando a través del procedimiento establecido que vimos en lugar oportuno, los restos o desechos "podía utilizarlos" el Gobierno español para la fuerza defensiva española.

Al establecerse esta distinción, se limitaba pues la utilización del material entregado, que quedaba afectado a fines de afirmación de la paz y seguridad internacionales.

En realidad, para comprender la significación de este acuerdo hemos de recordar que este programa nacía de una Ley interna norteamericana, la Ley de Seguridad Mutua que ya conocemos y que iba a motivar toda una serie de acuerdos, análogos al nuestro —algunos de los cuales con países de América del Sur y centro-américa ya se han mencionado en otro lugar a concertar con "las naciones del mundo libre". En todos estos acuerdos se afectaba este material a aquellos fines y se excluía su utilizada

ción para la defensa de cada país en particular, administrando en todos los casos esta ayuda el Gobierno norteamericano.

De haberse permitido a los países receptores la utilización de este material bélico con fines a determinar por cada Estado en particular, estos armamentos podrían destinarse o haberse destinado a fines no previstos en la citada Ley. Pensemos que en la década de los años 50 el movimiento descolonizador estaba iniciándose y países europeos miembros de la O.T.A.N., así como España poseían aún territorios coloniales. No controlar este armamento habría supuesto desvirtuar los fines de aquella Ley.

En este sentido conviene mencionar un hecho que es significativo. Es el hecho de que al parecer -dado que carecemos de fuente de cita que fundamente esta afirmación- el Gobierno de los Estados Unidos prohibió al español utilizar el armamento suministrado en las revueltas ocurridas en algunos territorios españoles en el continente africano.

Tal prohibición era perfectamente concordante con - aquella Ley.

Cabe, sin embargo preguntarse si era el material bélico prohibido, el entregado en función del Convenio de Ayuda o - el entregado en función del Defensivo.

La interrogante no es académica porque, jurídicamente, de haber sido suministrado en función de este último, no debe-

ría haber habido en principio limitación en su utilización por parte de nuestro Gobierno en aquellos conflictos, supuesto distinto al del material entregado en función del Convenio de Ayuda.

Y es que en realidad esta ~~prohibición~~ de utilización del armamento norteamericano suministrado, aunque ignoramos sus términos por la ausencia mencionada de documentos, parece lógico que no hiciera distinción entre el material otorgado en función del Convenio de Ayuda y el entregado en función del Defensivo, situación que nos viene a confirmar por otra parte la interpretación ya indicada, según la cual este material de guerra se afectaba más que a la defensa del territorio español, a la defensa de las zonas e instalaciones.

SECCION V: La seguridad exterior de las zonas e instalaciones
y su significado

1. ¿Qué supone, finalmente, la seguridad exterior de las zonas e instalaciones de utilización conjunta de que nos hablaba el Artículo III en todo este contexto?.

El Artículo III del Convenio Defensivo nos decía: "Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta... España asumirá la obligación de adoptar las medidas necesarias para su seguridad exterior" (212).

Realmente si la defensa exterior de España correspondía como ya vimos a España y estas zonas estaban en nuestro país, parece obvio en exceso este punto; ya indicamos en otro lugar - que más bien parecía el mismo una carga que un derecho en el - ejercicio de nuestra soberanía (213).

Esta cláusula, sin embargo, creo que tiene un sentido en esta interpretación general que venimos realizando sobre la significación de nuestra defensa exterior, ante estos Convenios.

En realidad, pensemos que si para los Estados Unidos, el objeto primero de este Convenio —objeto ya visto— era el mantenimiento en eficiencia de aquellas zonas e instalaciones, ya que la utilización conjunta de que nos hablaba el Convenio, asimismo, no suponía una interferencia española en aquella función, así como el hecho de que en último lugar la ayuda militar otorgada por aquel país iba dirigida a las Fuerzas Armadas espa

ñolas, pero añadamos, con objeto de que estuvieran lo suficientemente preparadas, en caso de utilización bélica de las zonas e instalaciones y con las reservas ya vistas. ¿Podemos pensar - que con este término de "seguridad exterior", el Gobierno norteamericano quería desentenderse de todo tipo de riesgo exterior a las propias zonas que pudiera amenazar su operatividad y funcionamiento normales?.

En este sentido creo que deben interpretarse estas - cláusulas. Lo que debiera ser el ejercicio de un derecho, se - convertía en este caso en obligación convencional para España. Ante esta cláusula, a esta última no solo le correspondía jurídicamente su defensa exterior como quedó indicado, sino también y como su consecuencia, la de las propias zonas.

CONCLUSIONES

PRIMERA

1) El sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas aparecía ya inoperante en los comienzos mismos de las actividades de la propia Organización de las Naciones Unidas. El sistema previsto de Julio de 1945, era un sistema que, si bien podía no ser actuado ante la oposición de los Miembros permanentes del Consejo de Seguridad, respondía sociológicamente a los armamentos existentes y a la configuración - que los Estados llevaban bilateral o colectivamente, a la Conferencia de San Francisco, en cuanto a su seguridad se refiere -Acta de Chapultepec y alianzas anglo-rusa y franco-rusa.

La aparición del armamento atómico casi inmediatamente después a la entrada en vigor de la Carta, hacía quebrar toda la - realidad sociológica de base en la que se cimentaba el sistema de seguridad que la Organización había de poner en práctica.

No obstante esto, los Estados, en un intento de superación de esta contradicción que se producía en un mundo bipolar ideológicamente, considerado y calificado de guerra fría, iban a - querer legitimar sus intentos para conseguir asegurar su propia defensa, en el único supuesto de todo el sistema de seguridad de la Carta que pudiera permitir tal posibilidad. Todos los Tratados multilaterales de defensa e incluso algunos bilaterales, fundamentarían su juridicidad en el Artículo 51 de - la Carta, cuando en realidad este Artículo había sido concebi

do y había de actuar dentro de un sistema organizado de seguridad, donde él no era sino una parte de un todo.

SEGUNDA

2. Ante esta nueva situación, los Estados de la comunidad internacional se encontraban sin un sistema de seguridad apropiado, en una situación con algunas de las características propias de sociedad internacional desorganizada, donde su defensa correspondía a cada uno de ellos y donde solo podían recurrir a los medios de defensa que el Derecho Internacional general les ofrecía.

TERCERA

lo Nuclear

3. Para los Estados Unidos el ejercicio del servicio público de la defensa nacional exigía todo un despliegue de fuerzas operativo, en el que el armamento nuclear en sus dos facetas de - investigación y perfeccionamiento así como la de su utilización operacional militar, ocupaba un lugar fundamental y primario.

En nuestro caso, el Convenio Defensivo iba a servir de cobertura jurídica a la utilización operacional militar de ese armamento.

CUARTA

4. En 1953, el sistema de defensa de los Estados Unidos se

basaba fundamentalmente en dicho armamento nuclear, operativo solo desde el aire en aquellas fechas.

En efecto, son los bombarderos ~~B-36~~ que transportaban armas atómicas -bombas atómicas- y que en este período, en plena guerra fría, se encontraban permanentemente en el aire, al menos algunos de ellos, los que exigían técnicamente para su operacionalidad estratégica, su ubicación y repostaje -en lo que a nosotros concierne- en España. En su virtud en el Acuerdo de Procedimiento nº 14, de desarrollo del Convenio Defensivo se establecería una libertad absoluta de sobrevuelo sobre nuestro espacio aéreo a los aviones militares de los Estados Unidos, al permitir que fueran los Mandos Militares de los Estados Unidos los que concediesen las autorizaciones de vuelo sin que las Autoridades Españolas pudiesen oponerse jurídicamente a ello.

El Convenio de Chicago de 1944, Convenio que consagra el Derecho Internacional general en cuanto al espacio aéreo, la soberanía exclusiva y absoluta de cada Estado sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio, venía a ser marginado.

QUINTA

5. El ejercicio de estas competencias de los Estados Unidos en nuestro espacio aéreo y el corolario de competencias derivadas de aquellas, responden a un Derecho Internacional como

derecho de poder.

SEXTA

6. Los Estados Unidos en virtud del Convenio Defensivo, no adquirían ningún compromiso relativo a nuestra seguridad exterior como sucede en el Tratado del Atlántico Norte. Lo que se ha venido conociendo como "zonas de utilización conjunta" y la utilización de éstas por el Gobierno de los Estados Unidos, juntamente con el Gobierno de España que en el Convenio se indica (Artº 1º) significaba en realidad la delimitación en esas zonas e instalaciones de dos espacios de localización y ejercicio de competencias. En las zonas norteamericanas, - las F.A.U.S.A. destinadas en ellas, actuarían sus competencias que no eran otras que las relativas a su mantenimiento. En las zonas españolas nuestras Fuerzas Armadas actuarían por su parte las competencias normales que en último término tenían por objeto nuestra defensa nacional.

Las únicas zonas de utilización común, eran tan solo las pistas de despegue y las Torres de mando en las bases aéreas, así como los muelles y vías de comunicación interna en Cartagena y Ferrol. También lo serían pequeñas instalaciones y equipos de emergencia. No eran verdaderamente bases conjuntas.

SEPTIMA

7. El Convenio de Ayuda Económica, no obstante servir para

el suministro a España de ciertos productos y partidas, fué el mecanismo jurídico-económico que se empleó para la financiación en parte de la construcción de las bases militares y fundamentalmente para proveer de materias primas y de productos agrícolas, para bloquear el impacto inflacionista de la construcción de aquellas y ofrecer equipo de primera necesidad para los sectores de la economía en los que España era más débil. Las necesidades de la economía española coincidían con las necesidades de las bases que se estaban construyendo. La mejora en la red ~~infraestructural de transporte~~ (ferrocarriles y carreteras) y de energía eléctrica fué objeto directo de aquella. Era una ayuda de apoyo a la defensa. XY

OCTAVA

8. Las obligaciones que los Estados Unidos habían de cumplir, esto es, la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra para nuestras Fuerzas Armadas, no eran obligaciones absolutas en sí mismas sino que estaban condicionadas a la supeditación de concesiones de crédito por el Congreso y lo que es más importante a las prioridades y limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los Estados Unidos, así como a las derivadas de las exigencias de la situación internacional. Esto -

imposibilitaba a España para exigir de los Estados Unidos responsabilidad internacional por su incumplimiento, ya que eran aquellos quienes podían interpretar aquellas condiciones.

El material de guerra suministrado en virtud del Convenio Defensivo estaba más conectado a la preparación de las Fuerzas Armadas españolas en caso de utilización bélica de las zonas e instalaciones, que a la preparación de aquellas en sentido estricto, ante lo cual este suministro estaba vinculado en alguna manera a las exigencias de las citadas zonas.

NOVENA

Z. Guerra; Suministro de guerra

9. El material de guerra suministrado en virtud del Convenio de Ayuda formalmente distinto al entregado en virtud del Convenio Defensivo, sería afectado a fines de afirmación de la paz y seguridad internacionales a excepción de los restos o desechos que podían ser otorgados a las Fuerzas Armadas españolas. Sin embargo como este programa de suministro de material de guerra, programa en el que nuestro país se conectaba con las "naciones del mundo libre" indicadas en la Ley de Seguridad Mutua de 1951, no era concordante con la Carta de las Naciones Unidas y en menor grado con actuaciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General en materias concernientes al mantenimiento de la paz y seguridad, podemos concluir que este material de guerra servía asimismo, al menos

en lo que a nuestro país se refiere y jurídicamente, para actuar la defensa exterior de los Estados Unidos aunque en grado distinto al del Convenio Defensivo, dentro de las "policias" que actuaban la defensa nacional de los Estados Unidos.

DECIMA

10. Desde el punto de vista de la relación de estos tres Convenios con el derecho interno norteamericano, el de Ayuda para la Mutua Defensa y el Económico fueron acuerdos concertados por el Presidente de los Estados Unidos en virtud de la Autorización de la Ley de Seguridad Mutua de 1951, Ley que el Congreso adoptaba en el ejercicio de las competencias que la constitución le otorgaba, relativas "a la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos" (Sec. 8,1. Artº 1º).

El Convenio Defensivo por su parte era el instrumento jurídico por el cual el Presidente de los Estados Unidos ejercía en España y en concreto en su espacio aéreo el ejercicio constitucional de sus competencias de Comandante en Jefe de la Marina, Armada y en 1953 de las Fuerzas Aéreas (Artº 2, Sec. 2, 1) de los Estados Unidos.

La distribución constitucional de competencias del derecho interno norteamericano no se había alterado.

UNDECIMA

11. En cuanto a nuestro derecho interno, la situación era distinta. Estos convenios afectaban efectivamente a materias cuya regulación el Derecho Internacional general reserva a la competencia doméstica de los Estados.

Fueron aprobados por el Pleno de las Cortes en virtud de motivaciones extrajurídicas, ya que la Ley de Cortes no exigía jurídicamente este procedimiento.

CONCLUSION FINAL

¿Hasta qué punto la aparición del armamento atómico ha operado en la sociedad internacional y, en nuestro caso, - hasta qué punto este armamento supone una nueva concepción en la concepción jurídica del derecho de legítima defensa que todo Estado posee en virtud del Derecho Internacional general, concepción de urgente necesidad en tanto en cuanto no se controle jurídico-internacionalmente la utilización del átomo, para fines no pacíficos, por la sociedad internacional organizada?

NOTAS DE PIE DE PAGINA
=====

NOTAS AL PROLOGO

- (1) Vease Apéndice
- (2) Corpus Iuris Gentium. García Arias. Zaragoza 1968, págs. 810 y ss.
- (3) Spanish base agreement. Hearings before the Committee on foreign relations. Senate. 91st Cong. 2nd Ses. Agos to 1970. Government Printing Office. Washington 1970; B.O.E. 26-9-70 (Aranz 1970, nº 1568); T.I.A.S. 6924; U.S.T. 1677.
- (4) Vease Apéndice
- (5) T.I.A.S. 6977; U.S.T. 2259-2415
- (6) Vease Apéndice
- (7) Estos acuerdos no se estudian en esta tesis. En sentido estricto y formalmente, no guardan conexión con nuestros Convenios. No obstante, sí habían de estar conectados en la realidad con el Convenio Defensivo. En cuanto a su número, vease apéndice
- (8) Sobre el estado en que se hallan todos estos textos, - desde el ángulo norteamericano, confíerase: Treaties - in force. A list of treaties and other international - agreements of the United States in Force on January 1, 1971.

N O T A S

- (1) Tamames (R) Introducción a la economía española. Madrid. Alianza Editorial. 1968, pag 149 y ss.
- (2) Lowi (T). Bases in Spain. American civil-military decisions. A twentieth century fund study. University of Alabama Press. 1963, pag 668-700. Este estudio es de los más completos sobre el origen y antecedentes de los Convenios. Vease especialmente los cuatro primeros capítulos, pag 669-682
- (3) Veanse en este sentido en Public papers of the Presidents: Henry Truman, las declaraciones en Conferencias de Prensa de los siguientes años:
1946: 8 de Marzo; 11 de Abril y 18 de Abril
1949: 31 de Marzo; 12 de Mayo; 2 de Junio; 14 de Julio; 1 y 15 de Septiembre.
1950: 4 de Enero; 19 de Julio y 28 de Diciembre
1951: 6 de Septiembre; 2 y 16 de Noviembre
1952-1953: 7 de Enero de 1952.
- (4) Fulbright (J.W.) The pentagon propaganda machine. Liveright. Publishing Corp. New York 1970.
 United States security agreements and commitments abroad Spain and Portugal. Hearings before the Subcommittee on United States security agreements and commitments abroad of the Committee on foreign relations. Senate. 91st. Cong 2nd Sess, Part II U.S. Government Printing Office Washington. 1970.
 Spanish base agreement. Hearings before the Committee on foreign relations. United States Senate. 91st Cong. 2nd Sess. Agosto 1970. U.S. Government Printing Office. Washington 1970.
- (5) Sobre politica exterior española, véase el interesante trabajo de Aguirre de Cárcer (N) y Fernandez de la Mora (G): The foreign policy of Spain, en Foreign Policies in a world of change. Harper & Row. New York 1963.
- (6) Véase la bibliografía contenida en la obra de Lowi de la nota (1), pag 700.

- (7) La bibliografía sobre la guerra fría es inmensa. Citemos a título de ejemplo:
Fleming, 1917-1960 Doubleday and London: allen and - Unwin 1961. New York.
García Arias (L) El concepto de guerra y la denominada guerra fría, en la guerra moderna y la Organización Internacional. Ins. Est. Pol. Madrid 1962, pag 91-136.
Horowitz (D) From Yalta to Vietnam. Penguin books. Middlesex. England. 1967.
 Desde una perspectiva sociológica véase Talcott Parson: La polarización y el orden internacional, en Rev. Pol. Int. 1962 nº 61.
- (8) Sobre su problemática vease el Dictamen del Consejo de Estado de 5 de Mayo de 1960 (exp 26.161). Consejo de Estado. Recopilación de Doctrina legal 1959-1960. Madrid. 1961.
- (9) Los estudios realizados son parciales y se circunscriben a aspectos concretos. Véase en este sentido: Quintano Ripollés: Soberanía, jurisdicción territorial y bases militares, en R.E.D.I. 1955.
 Desde el punto de vista de la práctica de nuestros tribunales internos y su significación juridico-internacional vease los comentarios del Profesor Gonzalez Campos a las siguientes sentencias de nuestro Tribunal Supremo y Acuerdo del T.E.A.C.:
 Sª 5-12-1963 (REDI 1965 nº 2); Sª 20-5-1964 (REDI 1966 nº 1); Sª 23-10-1964 (REDI 1966 nº 3); Sª 14-7-1964 (REDI 1966 nº 3); Sª 9-12-1964 (REDI 1966 nº 3); Sª 5-1-1965 (REDI 1966 nº 4); Aª 7-6-1963 (REDI 1965 nº 4). Sentencias y Acuerdos relacionados con estos Convenios son los siguientes:
 Sª 30-9-1959 (Aranz 1959 nº 3429); Sª 24-6-1960 (Aranz 1960 nº 2693); Sª 7-5-1962 (ARAnz nº 1814) y Sª 11-10-1962 (REDI 1964 nº 3, recogida por el Profesor Pastor Ridruejo; Aª 22-5-1959 (Aranz 1959 nº 2594); Aª 23-9-1960 (Aranz 1960 nº 3194); Aª de 27-1-1961 (Aranz 1961 nº 578) y Aª de 17-9-1965 (Aranz 1966 nº 939).
- (10) Esta exención se ampliaba incluso a los bienes e ingresos que en territorio español adquirieran los Miembros de las F.A-U.S.A. (Acdo Técnico Anexo Artº 19,2).
- (11) Este programa de promoción de las inversiones privadas

norteamericanas en el extranjero a través de estas garantías contra ciertos riesgos, que aparece en la Ley de Cooperación Económica de 1948 no tuvo éxito al pa-recer. Vease Marina Von Neuman Whitman, Government risk-sharing in foreign investment. Princenton Univer-sity Press. 1965.

- (12) Verdross, Derecho Internacional Público, 4ª edic. Tra-
ducida por A. Truyol. Aguilar 1967. Para este autor,
los principios de la Carta de las Naciones Unidas, in-
sertos en el artículo 2 de aquella, escapan a este ca-
rácter.
Miaja de la Muela (A). Introducción al Derecho Inter-
nacional Público. Madrid 1968, pags 83-87.
Schwarzenberger en su Manual of International Law.
London 1967 nos habla de la ausencia de normas de ius
cogens "on the level of unorganised society".
Carrillo Salcedo (J.A.) Soberanía del Estado y Derecho
Internacional. Madrid 1969, pag 228.
- (13) Fecha de aprobación y entrada en vigor de la Ley de
Cooperación Económica, mecanismo jurídico del Plan
Marshall.
- (14) Flory. Les bases militaires a l'etranger. A.F.D.I.
1955, pag 3.
- (15) La situación la resalta el Profesor Aguilar Navarro en:
Regimen de bases estratégicas y coexistencia nuclear,
R.E.D.I. 1962, nº 3, pag 398.
- (16) Martens Recueil de Traités et de Droit International.
Deuxième serie XII, pag 629.
- (17) Martens. Recueil cit. pag 634.
- (18) Téngase presente la diferencia frente al régimen de
mandato del Pacto de la Sociedad de Naciones que prohi
bía todo tipo de bases militares en estos territorios
(Artº 22, punto 5 del Pacto) Vease Quincy Wright: Man-
dates under the League of Nations. 1930 Chicago, pag
589, donde se contienen las decisiones del Consejo de

la Sociedad, estableciendo aquellos.

- (19) International Organization and Integration. Sijthoff. Leyden 1968, pag 284.
Vease Francis B. Sayre. Are administering authorities free to erect military and naval bases in non-strategic trust territories? A.J.I.L. abril 1948, pag 287. Como ejemplo, vease el articulo 10 del acuerdo de fideicomiso sobre Western Samoa en International Organization 1947, pag 216-219.

- (20) De estas, el Profesor Flory distinguiría entre "bases resultantes de una entente de caracter federal" y "bases resultantes de un acuerdo bilateral"

- (21) Rousseau. Derecho Internacional Publico. Traducción española. Barcelona 1966, pag 229, en el epígrafe "territorios cedidos en arriendo a la Gran Bretaña".

- (22) A.J.I.L. 1943. Official Documents, pag 83.

- (23) Societe des Nations. Recueil des Traites. Vol CCIV, pag 136.

- (24) Flory. art. cit, pag 1.

- (25) Flory. art. cit, pag 5.

- (26) Lazarev (M.I.) en "The problem of foreign military bases and armed forces abroad in writings on International law". Sov. Year of Int. Law, pag 379, insiste en este punto aunque no parecen muy convincentes algunas de sus razones. (S.Y.I.L. 1960)
Uno de los aspectos de esta problemática que ha sido estudiado con cierto detalle por la doctrina es el referente al estatuto de las fuerzas militares en el extranjero, desplazadas para operar y administrar estas bases militares, así como llevar acabo las funciones que se les asignen. Vease a este efecto Lazareff (S) Status of military forces under current international law. Leyden 1971 y la bibliografía contenida

*Intervención
Boyle*

en pags 447 a 452 (Sijthoff).

Sobre bases militares en sentido estricto, sin embargo, véase el sugestivo tratamiento sobre Guantánamo de Alvarez Tabío (F). El principio de la no ingerencia en los asuntos internos de los Estados y la cuestión de las bases militares situadas en territorio extranjero. Política Internacional. La Habana. 1964, pag 31-73.

Vease asimismo sobre Guantánamo: Gary L. Maris: Guantánamo: no rights of accupancy, y Lazar (J): "Cession in Lease" of the Guantnamo Bay Naval Statio and Cuba's "ultimate sovereignty", en A.J.I.L. 1969, 1, pag 114-118

- (27) Vease infra. Parte Sexta, Cap I, Sec III, pag. 226

- (28) Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Escuela de Altos Estudios Militares (ALEMI). IV Ciclo de Estudios sobre Defensa Nacional (1968). Estudio de los Acuerdos con los Estados Unidos ante su posible prórroga en 1968. 1ª Fase: Expositiva. Conferencia, Gestación de los Convenios Militares Hispano-norteamericanos. Cte: A. Carrero Blanco, pag 9.

- (29) B.O.C.E. nº 447, pag 8599.

- (30) Canje de Notas sobre asistencia militar. 1963. "El Gobierno español entiende que el Gobierno de los Estados Unidos, a reserva de la acción que adopte el Congreso concederá apoyo a nivel apropiado al esfuerzo defensivo español, haciendo asequible la asistencia militar a las Fuerzas Armadas Españolas". García Arias. Corpus cit, pag 813.

- (31) B.O.E. de 26 de Septiembre de 1970 (Aranz 1970/1568)

- (32) 82 Congreso. 1ª Sesión. Hearings. Comisión de Fuerzas Armadas y Relaciones exteriores del Senado. Mutual Security Act of 1951. 31 Julio 1951, pag 161.

- (33) Flory. art. cit. pag 26.

- (34) B.O.C.E. nº 447, pag 8599 citado anteriormente.

- (35) Quizá como dato curioso se pueda resaltar como hace Flory, aunque tan solo como índice indicativo de algunos sectores de la opinión pública española, este párrafo aparecido en el diario ABC:
 "Nuestra bandera ondeará en todas las bases. El estatuto logrado para las bases conjuntas es un éxito - diplomático indiscutible para España. Ninguna nación ha obtenido de los Estados Unidos un reconocimiento tan completo de soberanía en los puntos estratégicos de utilización conjunta " (traducción del texto francés). Flory. obr. cit. A.F.D.I. 1955.

- (36) B.O.C.E. nº 447, citado anteriormente, pag 8606.

- (37) Efectivamente son los Estados Unidos en este caso y no su Gobierno quien es el ~~titular~~ de estas competencias. Son los Estados y no sus Gobiernos, las partes contratan en los tratados y demás acuerdos y los que ostentan los derechos y obligaciones en ellos contraídos. Vease McNair. The law of Treaties. Oxford 1961, pag 20.

- (38) Otra categoría aparece también, que es la de Autoridades de los Estados Unidos; por ejemplo en el Acuerdo - Técnico, en su nº 12, entre otros casos.

- (39) Estas eran, pienso, "las normas de tráfico" a que aludía el artº 7 del que partimos al principio.

- (40) "De mutuo acuerdo se pondrán a disposición de las Autoridades Militares de los Estados Unidos aquel espacio aéreo que resultara necesario para entrenamiento".

- (41) "Los aviones que realicen vuelos de entrenamiento en este espacio y en condiciones V.F.R. (reglamentos visuales de vuelo), no estarán obligados a dar partes periódicos de situación".

- (42) Subrayado mío

- (43) Interesa poner de relieve que se daban diferencias de ubicación entre el Anexo Técnico nº 1 y los distintos Acuerdos de Procedimiento. Su razón puede ser, el hecho de que estas zonas e instalaciones en general se fueron construyendo sucesivamente con sus correspondientes a adaptaciones de lugar. En realidad la fijación de éstos el 26 de Septiembre de 1953 fue en principio general y amplia sin que ello quisiera decir que se llevarían a cabo todas aquellas construcciones. En este sentido no todas las nueve bases se ampliaron a efectos de utilización

- (44) 207 UNTS 83.

- (45) Se refiere al Defensivo.

- (46) B.O.E. 6 de Marzo de 1955. (Aranz 1955).

- (47) B.O.E. 5 de Abril de 1956. (Aranz 1956).

- (48) Se trata del Artº III y no del XXI. El Convenio sólo tiene cinco artículos.

- (49) En algunos Acuerdos de Procedimiento se vuelve a reiterar esta redacción. Así, el nº 25, que se refiere a Rota decía: "...La zona convenida será llamada en adelante "Base Naval de Rota" y permanecerá siempre bajo Bandera Española y Mando Español". (punto 1, a). El Anexo al Acuerdo de Procedimiento nº 18 sobre instalaciones petrolíferas en Bases Navales Españolas decía por su parte: "Las zonas e instalaciones que aquí se -- asignan permanecerán siempre bajo Bandera y Mando español". (punto 2, c. 3). El Acuerdo nº 24 sobre municiones en Bases Navales Españolas: "Las zonas asigñadas a los Estados Unidos permanecerán siempre bajo Bandera y Mando Español".

- (50) Tan solo se menciona en este caso a los Estados Unidos y no específicamente al Gobierno de los Estados Unidos.

- (51) El Acuerdo de Pto nº 17 sobre depósitos de combustible

en aeropuertos civiles españoles, cuya existencia ya conocemos (epigrafe 1, punto b, a) Sc. C) contenía - autorización concreta al Gobierno Norteamericano en su punto 4: "El Gobierno de los Estados Unidos queda autorizado para mejorar y mantener los depósitos de combustible y sus instalaciones accesorias que cubre este acuerdo. Estas instalaciones serán para el uso exclusivo del Gobierno de los Estados Unidos". Este es el único supuesto donde no se alude específicamente para su utilización a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se indicaba asimismo que se concedía en todo momento a los representantes oficiales del Gobierno de los Estados Unidos el derecho de entrada y salida de estas instalaciones" (párrafo segundo, punto 1º)

- (52) El General Pachynski, Director adjunto de comunicaciones, decía a este respecto ante el subcomité dependiente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, en Marzo de 1955:
- "Las comunicaciones arrendadas en España representan la infraestructura y sistemas que se requieren en la construcción de las bases y facilidades de los Estados Unidos en ese país. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido designada como agencia responsable para contratar inicialmente y pagar las necesidades de comunicaciones militares. Con la terminación de las facilidades ampliadas - por la Compañía Comercial española de comunicaciones, circuitos y líneas quedarán susceptibles de utilización (de ser arrendadas -for lease-) para apoyar operaciones estratégicas, logísticas y de defensa aérea. Durante la etapa de preparación se decidió que es más económico obtener los servicios de comunicación en España en base a su pago, mejor que el Gobierno de los Estados Unidos instalara y operara sus propias facilidades".
- 84 Congreso. 1ª Sesión. Hearings. Subcomité de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes. Vol 54. Asignaciones del Departamento de la Fuerza Aérea para 1956. 25 de Marzo de 1955.

- (53) Tengase en cuenta la expresión, poco frecuente en textos convencionales.
- (54) No ha llegado hasta mí este Anexo.

- (55) Decía este apartado. "Dentro de la Base Naval de Rota, la Zona denominada "A" en el Anexo nº 1 quedará reservada para uso exclusivo de las Fuerzas de España".
- (56) Que lo estaban allí lo indica el propio acuerdo al autorizar su construcción (vease lo indicado al hablar de la autorización al Gobierno Norteamericano a construir las zonas, pag 75).
- (57) 83 Congreso. 2ª Sesión. Hearings. Comité de Asignaciones del Senado. Military construction. 2 de Abril de 1954, Vol 125, pag 131.
- (58) Aclaración mía
- (59) Tengamos presente que eran bases españolas ya existentes sobre las que se estaba construyendo.
- (60) Cabía la posibilidad de venta de productos petrolíferos al Gobierno español (punto 4) pero en nada modificaba esto su utilización.
- (61) Vease supra. Sc. C., pag 74 donde aludimos al epigrafe I -en lugar de punto, como aquí hacemos-.
- (62) Vease Garcia Arias (L) Corpus Iuris Gentium. Zaragoza 1968, pag 470.
- (63) *con la C. O. Jara*
Su antecedente se encuentra en el artículo 32 de la - Convención de 1919. Los primeros intentos de regulación del espacio aéreo a comienzos de siglo tuvieron una conexión muy directa con la aviación militar. --- (John C. Cooper: El derecho de volar. Buenos Aires 1950 pag 13 y ss; entre nosotros Gomez Jara: El estatuto -juridico de la aeronave militar, pag 14), afirmandose aquellos unilateralmente por via consuetudinaria tanto en la aviación civil como militar. Al iniciarse en 1919 (Paris) y 1926 (Madrid) la regulación multilateral del espacio, se estudia tan solo la primera. La -aviación militar quedaba sujeta a la voluntad del Estado y todo intento de regulación convencional incidía en el desarme y la reducción de armamentos (John C. Cooper, obr, cit. pag 87).

- (64) No obstante esto, la Convención no olvida la conexión de la aviación y la seguridad mundial al preveer que la OACI puede celebrar "acuerdos que sean apropiados con cualquier organización general que establezcan las naciones del mundo para mantener la paz". (Artº 64) En 1944 la Organización de las Naciones Unidas estaba gestándose y los Estados firmantes de aquella pensaban en el sistema de seguridad que se pudiese crear. Tengamos presente este dato.

- (65) B.O.E. nº 55; 24 de Febrero de 1947 (Aranz 1947 nº 262).

- (66) Gomez Jara: El estatuto juridico de la aeronave militar, pag 62

- (67) En el caso de los derechos de paso sobre territorio in dio, el T.I.J. consideró necesario el determinar si ta les derechos de paso tenían un fundamento consuetudinario o de principio general. (Cour Internationale de Justice, Recueil des arrêts. 1960, pag 44). En este caso, sin embargo, el problema se circunscribía a derechos de paso sobre territorio físico y no en el espacio aéreo que es el que ahora nos ocupa.

- (68) H. Perrin de Boussac. Le statut international de l'espace aerien. Thèse. Paris 1931, pag 169.

- (69) Estas interrogantes tienen importancia e interés. En esta autorización y su naturaleza jurídica incidían y esto hemos de observarlo con detenimiento, problemas de otra naturaleza. Pensemos en los diferentes tipos de sobrevuelo que las F.A-U.S.A. podían realizar en nuestro espacio aéreo, como por ejemplo, el sobrevuelo con armamento atómico

- (70) Artº 1 del Anexo nº 1 al acuerdo de 4 de octubre de 1952 Referencia: Le retrait français de l'OTAN. Charpentier (J) A.F.D.I. 1966, pag 413, nota 19.

- (71) Acdo Pto nº 16; punto 5, a: "Los Mandos locales de los Estados Unidos en Cartagena y la Graña..."; punto 7, - donde se dice que los programas de utilización serán preparados por el "Mando local de los Estados Unidos"

etc. Vease la subsección F. del Capitulo III: Las F.A. U.S.A. en España y la utilización de las zonas e instalaciones.

- (72) Téngase presente que es en el aire solamente donde el-Esta Estado posee en virtud del Derecho Internacional, soberanía exclusiva y absoluta, cosa que no sucede ni en el espacio marítimo bajo su competencia ni en el propio territorio en sentido físico. (Artº I. Convención de Chicago).
- (73) Su artículo primero dice; "El espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial está sujeto a la soberanía del Estado español".
- (74) Vease García Arias, Corpus citado, pag 415.
- (75) Esta libertad de paso inocente se contenía ya en la base 20 de discusión, elaborada como resultado de consultas hechas a los Gobiernos, en la Conferencia para Codificación del Derecho Internacional de 1930 en Ginebra. Decía así:
- "El Estado costero deberá reconocer el derecho de paso inocente en sus aguas territoriales, incluidos - submarinos, que naveguen en superficie.
- El Estado costero está facultado para establecer las condiciones de tal paso sin no obstante tener el derecho a exigir previa autorización.
- El Estado costero está facultado para establecer las condiciones de estancia de buques de guerra extranjeros en sus aguas territoriales pero no puede prohibir la estancia, en caso de daño en el barco o de peligro. (societe des Nations. Conference pour la Codification de Droit International, Tome II. Eaux territoriaux. Gneve 1929, pag 75.)
- El Artº 12 de la Conferencia, abarcaría el mismo contenido sustantivo de aquella base de discusión. En efecto:
- "Como regla generla, el Estado ribereño no impedirá el paso de buques de guerra extranjeros en su mar territorial y no exigirá una autorización o notificación previas.
- El Estado ribereño tiene derecho a reglamentar las condiciones de este tránsito.
- Los buques de guerra submarinos tienen la obligación de pasar navegando en superficie" (Citado en el ex-

celente libro de Fariña (F): El buque de guerra ante - el Derecho Internacional. Madrid 1941, pag 173). En aquella Conferencia de 1930, destaquemos incidentalmente, la delegación española no consideró el paso inocente como un derecho de aquellos buques sino como una concesión del Estado ribereño sin fundamento jurídico y sí producto de la comitas gentium (societe des Nations. Actes de la Conference pour la Codification du Droit-International. Geneve 1930, pag 66).

- (76) Sobre este concepto y su apreciación en la doctrina española vease el estudio: El tránsito inocuo de los buques de guerra. Garcia Arias (L) en Estudios de Historia y doctrina de Derecho Internacional. Madrid 1964. Instituto de Estudios Políticos, pag 283 y ss.
- (77) Punto éste, el cuarto, que se completaba con el Artº 17: "Los buques extranjeros que utilizan el derecho de paso inocente deberán someterse a las Leyes y a los reglamentos promulgados por el Estado ribereño de conformidad con estos articulos y con las demás normas del Derecho Internacional y especialmente, a las Leyes y a los reglamentos relativos a los transportes y a la navegación".
- (78) Sobre la evolución de este derecho, vease el estudio citado de García Arias (L), pag 290 a 305: "En nuestra opinión, el tránsito es un verdadero derecho del buque - de guerra, siempre que, naturalmente, sea un tránsito - inocuo...)"
En 1938 Baldoni (C) (Rec des Cours. 1938. III Les navires de guerre dans les eaux territoriales étrangères) decía a este respecto que la práctica internacional por una parte y la mayoría de la doctrina por otra se pronunciaban en el sentido de que el paso inocente de los buques de guerra era una cuestión de comitas gentium y no de un derecho consuetudinario.
- (79) De Azcárraga (J.L). Derecho Internacional Marítimo. 1970 pags 48, 118 y 121; Vease también Fariña, obr, cit, pag 175.
Por otra parte el único Artículo de la Convención que trata este punto es el 16:
"Respecto de los buques que se dirigen hacia las aguas interiores, el Estado ribereño tiene, además, el derecho de tomar las medidas necesarias para impedir - cualquier infracción de las condiciones aplicables a

la admisión de dichos buques en tales aguas".
 Tratamiento por otra parte algo indirecto.
 Sobre la práctica internacional relativa al régimen de las aguas interiores y territoriales, contemporánea de la Convención, vease Laws and regulations on the regime of the territorial sea. United Nations. Legislative Series. United Nations. New York. 1957, pag 361 a 420.

- (80) B.O.E. de 24 de Diciembre de 1971 (Aranz 1971. 2296).
- (81) Aranzadi Legislación 1969, nº 756. B.O.E. 28-4-1969
- (82) Aranzadi Legislación 1958, nº 611. B.O.E. 31-3-1958
- (83) Citadas por Fariña (F) El buque de guerra ante el Derecho Internacional. Madrid 1941.
- (84) Oppenheim (L) obr. cit, pag 441; asimismo Rousseau (Ch) Droit International Public. Paris 1970, pag 242; Fariña (F) obr. cit, pag 180.
- (85) Boletín Jurídico-Administrativo. Apéndice de 1928, pag 45.
- (86) La normativa prevista en esta Orden Ministerial, ¿modifica o altera el contenido del Real Decreto Ley?. No pienso que esté totalmente fuera de lugar plantearse la validez de esta Orden frente a la anterior disposición.
- (87) Aranzadi. Legislación 1964, nº 988. B.O.E. 4-4-1964.
- (88) U.S.T., pag 2298.
- (89) Burdeau (G). Traité de Science Politique. Tome II. Paris 1967, pag 84 y ss.
- (90) Rousseau (Ch) Principes de Droit International Public. Tome II, Rec des Cours 1958 (93), pags 405-414.

- (91) Carrillo Salcedo (J.A). Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Madrid 1969, pag 69 y ss.
- (92) Vease supra: Introducción: Metodo, estructuración y - Plan, pag 14.
- (93) "reconociendo la prioridad de los gastos a que se refiere el párrafo tercero de este artículo... " (punto cuarto, Artº V).
- (94) 85 Congreso. 1ª Sesión. Hearings. Comité de Asignaciones del Senado. Volumen 141. Mutual Security Appropriations for 1958. 29 de Julio de 1957, pag 270.
- (95) En 1958, la Agencia que administraba los programas de ayuda exterior era la Administración de Operaciones - Extranjeras. (FOA Foreign Operations Administration).
- (96) Vease nota (94); 85 Congreso... pag 271.
- (97) Podríamos preguntarnos por qué no se incluyó este porcentaje en el propio convenio. No parece haber una razón que impidiese su inserción en él. Sin embargo parece ser que se debió a medidas de seguridad, al menos en aquellas fechas. En las actas de las sesiones del Comité de Asuntos exteriores de la Cámara de Representantes, en las deliberaciones de la Ley de Seguridad-Mutua de 1954, se encuentra alguna cita al respecto - suprimida con la nota "security deletion", no infrecuente, por otra parte en otros puntos:
 "...El Comité recordará también que en el acuerdo de Ayuda económica con España, se hizo la provision de que una parte sustancial (security deletion) de la contrapartida generada de la asistencia al apoyo defensivo sería asignada por el Gobierno Español para pagar parte de los costes en pesetas de la construcción de las bases españolas" (Declaración de D. A. FitzGerald, Director Adjunto para operaciones. - Administración de Operaciones Extranjeras. 83 Congreso, 2ª Sesión. Hearings. Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mutual Security Act of 1954. 13 de Mayo de 1954, pg 689.
 Esto sucede, sin embargo, hasta 1955, pues a partir de esta fecha ya aparecen los porcentajes que estudiamos,

de una manera expresa.

(Tomese de este párrafo tan solo el dato referente a nuestro punto, pues contiene imprecisiones generales).

(98) Vease nota (94): 85 Congreso...pag 270.

(99) A.J.I.L. Vol 43. 1949. Official Documents, pag 83.

(100) Estos acuerdos son los siguientes, celebrados con:

Francia:	28 de Junio de 1948	19 UNTS	9
Bélgica:	2 de Julio de 1948	19 UNTS	9
Italia:	28 de Junio de 1948	20 UNTS	43
Holanda:	2 de Julio de 1948	20 UNTS	92
Islandia:	3 de Julio de 1948	20 UNTS	141
Noruega:	3 de Julio de 1948	20 UNTS	185
Austria:	2 de Julio de 1948	21 UNTS	29
Dinamarca:	29 de Junio de 1948	22 UNTS	217
Reino Unido:	6 de Julio de 1948	22 UNTS	263
Grecia:	2 de Julio de 1948	23 UNTS	43
Suecia:	3 de Julio de 1948	23 UNTS	101
Irlanda:	28 de Junio de 1948	24 UNTS	3
Luxemburgo:	3 de Julio de 1948	24 UNTS	35
Turquía:	4 de Julio de 1948	24 UNTS	67
Portugal:	28 de Septiembre de 1948	29 UNTS	213

(101) Este punto, es decir el b), no se incluía por otra parte en todos los acuerdos celebrados con los países europeos.

(102) 83 Congreso. 2ª Sesión. Hearings. Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mutual Security Act of 1954. 13 de Mayo de 1954, pag 689.

(103) Está refiriéndose al económico.

(104) Esto llevó en el caso nuestro, como en el del resto de los países a que los administradores del programa conocieran lo más exactamente posible la capacidad económica de pago de la economía española y su evolución. Son continuas y constantes las alusiones a la economía española en las sesiones de los distintos Comités del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado (vease Documentos concernientes a los otros dos

Convenios en el Apéndice), así como reiterados estudios, algunos con gran detalle sobre la economía española, los sectores agrícola e industrial, el comercio exterior, las divisas existentes y en general toda la estructura de nuestra balanza de pagos, La Administración del programa conocía perfectamente la situación de nuestra economía en 1953 así como su evolución posterior.

- (105) La Agencia de Seguridad Mutua fue creada por la Ley de 1951, para que administrase los programas.
- (106) Boletín del Departamento de Estado de 24 de Marzo de 1952, pag 467 y 468.
- (107) Vease Apéndice: Documentos relativos a los otros dos Convenios.
- (108) Boletín del Departamento de Estado de 9 de Enero de 1956, pag 46.
Vease asimismo Caffery (J): Informe sobre la ayuda al exterior de los Estados Unidos preparado por el Ex-Embajador J. Caffery, a instancias del Comité especial de estudio del Programa de Ayuda al Extranjero (Sesión del Congreso de los Estados Unidos correspondiente al día 29 de Marzo de 1957) Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficina de Información Diplomática, pags 12 y 21, y las estadísticas de esta ayuda allí contenidas
Nathaniel J. de los Rios
- (109) Rousseau. Droit International Public. Paris 1953, pag 227.
- (110) Guggenheim (P) Traité de Droit International Public. Tome I. Geneve 1953, pag 401.
- (111) Flory. obr. cit. A.F.D.I. 1955, pag 16. En esta época, el Profesor de la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence, formaba parte del Centro de estudios jurídicos de Marruecos. Los Estados Unidos, digamos incidentalmente habían concertado con Francia un tratado secreto para el establecimiento de bases para sus unidades del S.A.C. (Mando Aéreo estratégico) en aquel país, del que tan solo ha llegado hasta mí su fecha: 22 de Diciembre de

1950.

Este estudio de Flory es de los más completos sobre ba
ses militares, si bien en mi opinión no estudia algu-
nos problemas importantes que estas bases llevan con-
sigo.

- (112) Delbez (L). Les principes generaux de Droit Internation
al Public. 3^a Edit. Paris 1964.
- (113) Vellas (P). Droit International Public. 2^a Edit. Paris
1970.
- (114) Verhoeven (J) "Le statut des bases militaires etrange-
res et des quartiers generaux interallies implantes en
Belgique". Rev. Bel de Dr. Int. 1969 n^o 2, pag 594.
- (115) Sereni (A.P) Diritto Internazionale II, Organizzazione
Internazionale. Milan 1958, pag 624.
- (116) Verdross (A) Derecho Internacional Público. Traducción
española de A. Truyol. 4^a edic. 1963, pag 203.
- (117) Oppenheim (L) Trtado de Derecho Internacional Público.
Traducción española de L. Olivan y Castro-Rial. Tomo I.
Vol II (Paz), pag 8, Barcelona 1961.
- (118) Brownlie (I) Principle of Public International Law.
Oxford 1966, pag 104.
- (119) ¹¹
Schwarzenberger. A manual of International Law. 5^a ed
London 1967, pag 12-13; Power Politics. London 1951,
pag 203-207; The frontiers of International Law. Lon
don 1962, pgs 25-29.
- (120) Rousseau. Principes de Droit International Public. Rec
des Cours 1958 (93) I, pag 403 y ss.
- (121) Verdross. obr. cit. en nota (116)

- (122) Es en este criterio "de la función" o "del servicio" donde el Profesor Quintano Ripolles fundamentaba el privilegio de las F.A-U.S.A. destinadas en España, - relativo a su status penal. Privilegio "intuitu officio". Soberanía, Jurisdicción territorial y bases militares. R.E.D.I. 1955, pag 555.
- (123) Vease el interesante estudio publicado por The Rand-Corporation: Selection and use of strategic air bases. Wohlstetter (A.J), Hoffman (F.S), Lutz (R.J) and Rowen (H.S). A report prepared for United States Air Force project Rand. Abril 1954.
- (124) Kissinger (H) Problems of National Strategy (A book - readings) Washington. 1955, pag 7.
- (125) Obr. cit. en nota anterior, pag 9-16.
Kahn (H) Escalation as a strategy, pags 17-33
Kennedy (J.F.) Nuclear testing and disarmament, pags 392-401.
- (126) Aquí sitúa el Profesor Rousseau estos conflictos como típicos de la ocupación militar en tiempo de guerra y el estacionamiento de zonas en tiempo de paz. Vease - supra Rousseau. Rec des Cours 1958, pag 413-414.
- (127) Todos estos países, ya gozaban de ayuda anteriormente en virtud de leyes de ayuda militar y económica.
- (128) Entre los acuerdos concertados con estas Repúblicas, en ejecución de esta Ley, están los celebrados con:
- | | | | |
|------------|-------|---------|---------|
| Brasil: | 15 de | Marzo | de 1952 |
| Chile: | 9 de | Abril | de 1952 |
| Colombia | 17 de | Abril | de 1952 |
| Cuba | 7 de | Marzo | de 1952 |
| Ecuador | 20 de | Febrero | de 1952 |
| Haiti | 28 de | Enero | de 1955 |
| Honduras: | 20 de | Mayo | de 1954 |
| Nicaragua: | 23 de | Abril | de 1954 |
- Fuente: Treaties in force. A list of treaties and - other international agreements of the U. S. in force on January 1, 1970. Washington. Government Printing Office.

- (129) Vease Apéndice
- (130) Podría traducirse como suministros que vienen del extranjero. Off-fuera de, más alla de; shore-la costa
- (131) O.S.P.- Offshore procurement
- (132) Director adjunto, Oficina de programación y control. Oficina de Asuntos Internacionales de seguridad. Departamento de defensa. 85 Congreso, 1ª Ses. Hearings, Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Vol 60. Mutual Security Act of 1957. 21 - de Junio de 1957, pag 977 A.
- (133) Sobre su importancia cualitativa y cuantitativa, vea se Boletín del Departamento de Estado. 18 de Octubre de 1954, pag 567 y ss.
- (134) Consideraciones de índole estratégica y logística también contaban en el programa.
Las limitaciones, por su parte que se oponían a la celebración de estos contratos están contenidas en el - Department of Defense Directive, de 17 de Agosto de - 1951 y eran:
 "-Injustificado costo comparativamente al suministro en los Estados Unidos.
 -Retrasos en la entrega, inaceptables militarmente.
 -Serios efectos adversos en la economía de los Estados Unidos, empleo o base de movilización industrial.
 -Amenaza a los intereses de seguridad de los Estados Unidos" (Citadas por el C. Critz en Hearings... documento aludido en nota (132)).
 Estos cuatro puntos y consideraciones vistas iban a - informar de una manera directa, como en su lugar veremos, tanto el Memorandum de entendimiento concertado- con España como el contrato modelo.
- (135) J.A.G.C. USAR; Profesor de Derecho en la Universidad- de Cornell Ll. B, 1936; Miembro del "New York Bar". - Military Law Review (27.100.18)
- (136) Department of Defense offshore procurement.

- (137) Mutual Assistance Program, offshore procurement.
- (138) Sobre el programa offshore en la OTAN, vease NATO, the first five years. Lord Ismay. Netherlands 1956, pag 138 Asimismo Treaties and alliances of the World. Keesing's pag 78, donde se encuentra relación de acuerdos de este tipo concertados con los miembros de la Alianza.
- (139) Deputy Commander in Chief. U.S. European Command. Boletín del Departamento de Estado. Octubre 18, 1954, pag - 567.
- (140) Alemania accede ala OTAN por protocolo en París, el 23 de Octubre de 1954, que entra en vigor el 5 de Mayo de 1955; de la misma forma accede a la Unión Europea Occidental.
- (141) Pesetas de 1971: cifra que en 1954 tendría mayor valor.
- (142) El punto 3 versaba sobre el procedimiento y condiciones a emplear en la entrega.
- (143) Vease Apéndice.
- (144) Vease supra nota (132), pag 968_A.
- (145) Vease supra nota (132), pag 968_A.
- (146) Vease supra nota (132), pag 969_A.
- (147) Terminología idéntica en ambos acuerdos.
- (148) Vease supra nota (132), pag 968_A.
- (149) Vease supra nota (132), pag 968_A.
- (150) Vease supra nota (132), pag 968_A.

- (151) McNair, The law of treaties. Oxford 1961, pag 19.
- (152) Rousseau (Ch). Derecho Internacional Público. Trad. esp. de Gimenez Artigues. Barcelona 1961, pag 12 -citado en-
nota 21⁴.
- (153) El Artº 24 de la Convención de Viena sobre Derecho de -
los Tratados de 23 de Mayo de 1969 establece que:
"Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fe
cha que en él se disponga " (punto 1). R.E.D.I. 1969
nº 2.
- (154) Los trabajos de la doctrina española son escasísimos:
Cabaleiro (E): Los tratados Internacionales (La ratifica
ción de tratados en el derecho español) pag 188 y ss.
Madrid 1962.
Pastor Ridruejo (J.A): La estipulación y eficacia inter
na de los tratados en el derecho español. R.E.D.I.
(XVII. 1964).
- (155) La Ley de Principios del Movimiento Nacional es de 17
de Mayo de 1958 y la Ley Orgánica del Estado de 10 de
Enero de 1967.
- (156) La legislación posterior, fundamentalmente la Ley Or
gánica del Estado, aunque ha modificado y ampliado el
anterior Artº 14 e introducido otros de significación
notable (Artº 9) no contiene tampoco ningún precepto a
lusivo específico a la eficacia en nuestro ordenamient
to del Derecho Internacional, a diferencia por ejemplo
de la Constitución de la segunda República. Vease el-
estudio de Perez Voituriez (A): Las Leyes fundameta-
les ante el Derecho Internacional. R.E.D.I. 1962 nº 2.
- (157) La Convención de Viena sobre Derecho de los tratados no
distingue sin embargo entre unos y otros sino que de-
fine el término como "Acuerdo internacional celebrado
por escrito entre Estados y regido por el Derecho In-
ternacional" Artº 2, punto 1, a) R.E.D.I. 1969 nº 2,
abarcando pues todo tipo de acuerdos.
- (158) ¿Por qué se daría esta forma sin embargo, y no la de un
tratado?. Razones extrajuridicas debieron influir, como
pudiera ser quizá el hecho de que el ordenamiento nor

teamericano no los considerase un tratado. Esta razón no obviaba por otra parte que hubieran sido considerados como tratados por nuestro derecho. En definitiva el proceso de control interno de los compromisos internacionales es una cuestión doméstica. Vease, por ejemplo el Convenio de Ayuda para la mutua defensa concertado entre - U.S.A y Francia, el 27 de Enero de 1950 donde para aquellos era un agreement y para estos un tratado (80 UNTS 171). Con mayor motivo en nuestro caso en el Convenio Defensivo.

(159)

Artículo 10:

"Las Cortes conocerán en Pleno, de los actos o leyes que tengan por objeto alguna de las materias siguientes:

- a) Los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado.
- b) Las grandes operaciones de caracter económico y financiero.
- c) El establecimiento o reforma del régimen tributario.
- d) La ordenación bancaria y monetaria.
- e) La intervención económica de los sindicatos y cuantas medidas legislativas afecten, en grado trascendental, ala economía de la nación.
- f) Leyes básicas de regulación de la adquisición y pérdida de la nacionalidad española y de los derechos y deberes de los españoles.
- g) La ordenación juridico-política de las instituciones del Estado.
- h) Las bases del régimen local.
- i) Las bases del Derecho civil, Mercantil, Social, Penal Procesal.
- j) Las bases de la Organización judicial y de la Administración pública
- k) Las bases para la ordenación agraria, mercantil e industrial.
- l) Los planes nacionales de enseñanza.
- m) Las demás Leyes que el Gobierno, por sí o a propuesta de la Comisión correspondiente, decida someter al Pleno de las Cortes.

Igualmente el Gobierno podrá someter al Pleno, materias o acuerdos que no tengan caracter de Ley"

Artículo 12 (parrafo primero:

"1. Son de la competencia de las Comisiones de las Cortes todas las disposiciones que no estén comprendidas en el artículo 10 y que deban revestir forma de Ley, bien porque así se establezca en alguna posterior a la presente o bien porque se dictamine en dicho sentido por una Comisión compuesta por el Presidente de las Cortes, un

Ministro designado por el Gobierno, un Consejero perteneciente a la Comisión permanente del Consejo Nacional, un Procurador en Cortes con título de Letrado, el Presidente del Consejo de Estado y el del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Comisión emitirá dictamen a requerimiento del Gobierno o de la Comisión Permanente de las Cortes.

- (160) Durante los años consultados: 1951, 1952 y 1953, esta - Comisión no ha emitido ningún dictamen, al menos, no se contienen en los B.O.C.E.
- (161) Tengase presente que no se trata de las F.A-U.S.A. destinadas en España, sino de las Fuerzas Armadas de los - Estados Unidos en general.
- (162) El procedimiento seguido en los Convenios fue el siguiente:
El B.O.C.E. nº 437 de 5 de Octubre de 1953 incluía la - notificación de envío de la Presidencia de las Cortes - a la oportuna comisión en este sentido:
"Remitido a esta Presidencia el texto de los Convenios firmados en Madrid, entre España y Norteamérica, a los efectos de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley de creación de las Cortes españolas, se ordena su envío a la Comisión de Tratados, a la que corresponde su estudio.
Los Procuradores, cualquiera que sea la Comisión a - que pertenezcan, podrán formular observaciones al - texto de dichos Convenios durante un plazo de quince días, a partir de la fecha de esta publicación.
Palacio de las Cortes a 5 de Octubre de 1953".
Asimismo se nombraba la correspondiente ponencia:
"La Ponencia que ha de informar el convenio entre España y Norteamérica..."
Con posterioridad el B.O.C.E. nº 446 de 25 de Noviembre de 1953 insertaba dictamen favorable a la ratificación - de dichos convenios:
"Exmo Señor:
La Comisión de Tratados de las Cortes españolas luego de examinar los Convenios firmados en Madrid entre España y Norteamérica, cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del día 5 de Oc-

tubre de 1953, que, previo informe favorable de la ponencia, han sido sometidos a su deliberación, con arreglo al artículo 14 de la Ley de creación de las Cortes Españolas, tiene el honor de elevar a V.I. - dictamen favorable a la ratificación de dichos Convenios.

Palacio de las Cortes a 25 de Noviembre de 1953.

Exmo Señor Presidente de las Cortes Españolas".

Finalmente en el número 447, de 30 de Noviembre de 1953 de la misma colección, se contenían los últimos trámites seguidos, es decir, los habidos en la sesión plenaria. Tras darse lectura del dictamen de la Comisión de Tratados, favorable a su ratificación, el Ministro de Asuntos Exteriores se dirigió al Pleno informando de ellos y a continuación el Presidente de las Cortes daría lectura al mensaje que el Jefe del Estado había dirigido a - aquellas a propósito de estos Convenios".

La tramitación de estos tres Convenios concluiría:

"Seguidamente, y previa la correspondiente pregunta- quedó aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de tratados".

- (163) ¿Hasta qué punto este Convenio Defensivo tuvo conexión con la nueva redacción de este artículo de la Ley Orgánica del Estado de 1967?
- (164) Dictamen nº 36017 de 20 de Junio de 1968. Consejo de - Estado. Recopilación de doctrina legal 1967-1968. Boletin Oficial del Estado. Madrid 1971, pag 24.
- (165) Este es un problema interesante sobre el que la doctrina juridico-política española no se ha manifestado. Su inserción en el Preámbulo de la Ley de Cortes dejaba - duda sobre su vigencia jurídica.
El hecho por otra parte de que en la actualidad la vigencia de estas leyes venga declarada en la disposi---ción transitoria I, 2 de la Ley Orgánica del Estado aclara jurídicamente el problema en mayor medida.
- (166) Fernandez-Carvajal (R). La Constitución española. Edi- tora nacional. Madrid 1969, pag 101 y 84 respectivamen- te; en general pags 88-118.
- (167) Expresión de este punto era el procedimiento reglamen- tario de aquellas y de estos. En efecto, en las Leyes

los procuradores podían enviar enmiendas (a la totalidad o a su articulado) a los proyectos de Ley (Artº 35 del Rto de 26.12.57), mientras que en los tratados, en los nuestros, al menos, tan solo podían formular observaciones.

El actual Reglamento de 15.11.1971, no modifica esta redacción que ahora pasa al artº 67,1.

- (168) Sesión Plenaria de 26 de Octubre de 1953. B.O.C.E. nº 444:
 "La necesidad de cumplir el precepto legal del Artº 14 de nuestra Ley constitutiva, que exige que las Cortes sean oídas antes de la ratificación de los tratados internacionales y singularmente en el Pleno cuando se trate de materias que afecten hondamente a la vida nacional".
- (169) La Ley de Seguridad mutua (Mutual Security Act. A.J.I.L. vol 46. 1952. Official Documents) aprobada el 10 de - Octubre de 1951, en su título primero: "Europa", al - fijar el presupuesto de ayuda a autorizar al Administrador del programa hacía una distinción que era im--portante frente a la anterior orgánica legislativa - norteamericana. Distinguía la ayuda en virtud de los-preceptos de la Ley de Asistencia para la mutua defensa (Mutual Defense Assistance Act de 1949. A.J.I.L.,- vol 44, 1950. Official Documents) con sucesivas enmiendas por una parte y por otra la ayuda según preceptos de la Ley de Cooperación Económica (Economic Coopera-tion Act de 1948. A.J.I.L. Vol 43. 1949. Official Documents) con sucesivas enmiendas asimismo.
 En esta Ley pues se unificaban los programas militar y económico hasta entonces administrados en forma separada, pero sin embargo esta misma Ley nos remitiría a - los preceptos legales de aquellas dos disposiciones.
- (170) Zinn (Ch) How our laws are made? U.S. Government Printing Office. Washington. 1969.
- (171) "By furnishing assistance to friendly nations in the interest of international peace and security".
- (172) M. Byrd (E) Treaties and executive agreements in the United States. Nijhoff. The Hague. 1960, pag 80 y ss.

- (173) Annual Digest. 1947. Lauterpacht. Londres. 1951, pag 53. Subrayados míos.

- (174) A.J.I.L. 1949, Abril, pag 375. Subrayado mío.

- (175) Vease supra. Parte Segunda, Cap II, Sec II, Sc A, pag 49 y 50.

- (176) ¿Podemos pensar como hacen algunos autores, aunque refiriéndose a otros supuestos, que estas bases en España y las tropas que las mantenían en eficiencia, podrían contribuir al desencadenamiento de una guerra, con lo cual el Presidente actuaba las competencias del - Congreso relativas a la declaración de guerra?. Sobre este punto véase: Documents relating to the war power of Congress, the President's authority as commander - in chief and the war in Indochina. U. S. Government - Printing Office. Washington 1970; especialmente las - notas de la Revista de Derecho de Harvard: "Congress, the President and the Power to commit forces to combat. June 1968, en pag 43.

- (177) Vease supra. Parte Segunda, Cap IV, Sec IV, pag 148.

- (178) Moore (J.B) A digest of International law, Vol I, pag 9-11.
 Whiteman (M.M) Digest of International Law. Washington 1963, pag 103-116.
 Kunz (J.L) International law By analogy. A.J.I.L. 1951 pag 330.

- (179) Sobre la problemática de los tratados self-executing, vease:
 Hudson (M) Charter provisions on human rights in American law. A.J.I.L. 1950, pag 543.
 Evans (A) Some aspects of the problem of self-executing treaties. Turlington (E). The legal effect of - treaties in municipal law: the special position of federal states; Preuss: The execution of treaty obligations through internal law-system of the United States and of some other countries. Proceedings of the - American Society of International Law. Abril 1951, pag 73-108.
 En los trabajos de Dumbarton Oaks, véase Whiteman. Digest of International law. Washington 1963, Vol I, pag 108.

- (180) Goodrich et Hambro. Commentaire de la Charte de Nations Unies. Neuchatel. 1946, pag 44.
Carrillo Salcedo (J.A) El mantenimiento de la paz:- veinte años de esfuerzos. O.N.U. año XX. Tecnos 1966 pag 185.
- (181) Vease más.arriba, sobre la Carta de las Naciones Unidas y su caracter de tratado self-executing en materia de mantenimiento de la paz y seguridad, en nota (179).
- (182) Vease sobre este punto:
Van Langenhove (F). La crise du systeme de securite collective des Nations Unies. 1946-1957. Nijhoff. La Haya 1958.
Carrillo Salcedo (J.A) art. cit, pags 183-197.
- (183) A.J.I.L. Vol 46, 1952 Official Documents, pag 14.
- (184) M. Goodrich (M) The United Nations. 1959, pag 219.
- (185) Sobre la naturaleza y significación de los pactos multilaterales relativos a la seguridad y aparecidos con posterioridad a la Carta vease la siguiente bibliografía:
Yepes (J.M) Les accords regionaux et le droit international. Rec des Cours 1947 (71), pag 227-344.
Kunz (J.L) The inter-american Treaty of reciprocal -- assistance A.J.I.L. 1948, pag 111.
Van Kleffens (E.N) Regionalism and political facts. A J.I.L. 1949, pag 666.
Fenwick (CH) The Atlantic Pact. A.J.I.L. 1949, pag 312
Kalijarvi, Heindel y Wilcox. The North Atlantic Treaty in the United States Senate. A.J.I.L. 1949, pag - 633.
Kulsky. The soviet system of collective security compared with the western system. A.J.I.L. 1950, pag 453.
Kelsen. Is the North Atlantic Treaty a regional arrangement? A.J.I.L. 1951, pag 162.
Fenwick. Treaty establishing the European defense - community A.J.I.L. 1952, pag 698.
Verdross. Ideas directrices de L'Organization des Nations Unies. Rec des Cours. 1953 (83), pag 1-77
Fenwick (Ch) Collective security and the London agreements. A.J.I.L. 1955, pag 54
Bebr (G) Regional ornizations: a United Nations problem A.J.I.L. 1955, pag 166.
Boutros Ghali. Middle Eastern security pacts. Rev Egy.

Dr. Int. 1957.

Vease asimismo sobre el regionalismo:

Orue y Arregui. Le regionalisme dans L'Organisation internationale. Rec des Cours. 1935 (53), pag 1-95.

Freytagh-Loringhoven. Les ententes regionales. Rec des Cours 1936. (56), pag 585-677.

Saba. Les accords regionaux dans la Charte de L'O.N.U. Rec des Cours. 1952 (80), pag 635-720.

Khadduri. The arab League as a regional arrangement. - A.J.I.L. 1946, pag 756.

- (186) Vease Garcia Arias. Corpus Iuris Gentium. Zaragoza 1968 pag 178.

- (187) En las propuestas de Dumbarton Oaks sobre la futura Organización, el Capitulo VIII que versaba sobre : "Arrangement pour le maintien de la paix et de la securite internationale, y compris la prevention et la repression de l'agression", quedaba dividido en tres secciones, - la tercera de las cuales se titulaba "arrangement regionaux" (U.N.C.I.O. Tome IV Propositions de Dumbarton Oaks, pag 11 y 16).

Sin embargo en el interim que se extiende desde la Conferencia de Dumbarton Oaks (Octubre 1944) hasta Abril de 1945, cuando en San Francisco se aprueba definitivamente la Carta, se suceden tres hechos de importancia, el primero de ellos. de mayor trascendencia, la firma - del Acta de Chapultepec (Febrero-Marzo de 1945); el segundo, la enmienda presentada conjuntamente por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China, en favor de la inclusión de acuerdos regionales -- "dirigés contre la reprise, par ces Etats, de leur politique agressive..." (U.N.C.I.O. Tome IV. Propositions de Dumbarton Oaks, Doc 2 G/29 (a), pag 895) y por último, la firma del Pacto de la Liga Árabe.

Tres posiciones pues, iban a tratar de plasmarse en San Francisco; por una parte la postura defendida por los países firmantes del Acta de Chapultepec, por otra lado los países firmantes de la Liga y finalmente la conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China.

- 1 La de los países americanos (con los Estados Unidos en primer lugar) trataban de salvaguardar el principio contenido en el Acta, de que todo ataque dirigido por un Estado, sea contra la integridad o la inviolabilidad - del territorio, sea contra la soberanía o a la independencia política de un Estado americano, sería considerada como un acto de agresión contra los otros Estados signatarios hasta el empleo de la fuerza armada (Docu-

ments on American Foreign Relations. 1944-1945, pag 719).
¿Cómo iba a salvarse esta posición de los países americanos, es decir, a introducirse en las del proyecto de Dumbarton Oaks? ?Y los acuerdos de alianza concluidos por la URSS?.

Los países firmantes del Pacto de la Liga, iban a actuar frente a la Carta desde una óptica diferente a la de los americanos, pues estos, iban a tratar de que la Carta incluyera su sistema de defensa regional. "Pour les états arabes, par contre, c'est l'Organisation des Nations Unies, dont le projet de Charte reconnaissait solennement l'egalite juridique de ses Membres, et prevoyait l'Organisation de leur securite collective, qui - devait être le garant supreme de leur independance nouvelle" (Saba, Curso citado, pag 668).

Ante estas tres propuestas, solo la americana (pensemos que el número de estos países de aquel continente se e levaban a 21 sobre un total de 46 de los que en la Conferencia (Yearbook of the United Nations 1946-1947, pag 12) tomaran parte y la conjunta de los Estados Unidos, La Unión Soviética, Gran Bretaña y China obtuvieron éxito.

Esto explica la inclusión en el capítulo, de estos dos grupos de acuerdos tan dispares y la significación tan directa del Acta de Chapultepec en el mismo.

- (188) Boutros-Ghali. Contribution a une theorie générale des alliances. Pedone. Paris. 1963.

- (189) Repertory of practice of the United Nations Organs. Vol II, Artículos 23-54 de la Carta. New York, 1955, pag - 461.
 Supplement nº 1. Vol I, pags 369-370. 1958
 Supplement nº 2. Vol II, pags 479-480.
 Supplement nº 3. Vol III, pags 301-303
 En el epigrafe 6 del General Survey del Supplement nº 3 se indica:
 " In all those instances (letter of 5.9.60 from U. R.S.S. -action of the OAS relating to the Dominican Republic-; Complaint by Cuba -letter of 21.11.61.; Complaint by Cuba -letter of 22.2.1962-; Letter, of- 8.3.62 from the representation of Cuba in connexion with the Punta del Este decisions; Situation in the Dominican Republic) discussions relating to Article 54 centred primarily on the cuestion whether in --- transmitting to the Council certain matter for its- information pursuant to that article, the OAS had - fulfilled all its obligations under the Charter".

Vease asimismo la enmienda de Guinea a una propuesta - conjunta de Marruecos y Costa de Marfil a propósito de la situación en la República Democrática del Congo, en 1964, en ese mismo Supplement.

- (190) "Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida o autorizada como resultado de la segunda guerra mundial con respecto a un Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada guerra, por los Gobiernos responsables de dicha acción".

- (191) El caso de España es ilustrativo en este sentido. Polonia, por carta de 9-4-1946 dirigida al Consejo de Seguridad argumentaba que el régimen de Franco había llevado a fricción internacional y hacía peligrar la paz y la seguridad internacionales. En la resolución que proponería al Consejo, aludía a los artículos 39 y 41 para la adopción de medidas. (Repertory of practice of the United Nations Organs. Vol II. Artículos 23-54 de la Carta. New York 1955, pags 279-280).

- (192) El Tratado de amistad y no agresión entre España y Portugal, de 17-3-1939 (Corpus Iuris Gentium cit, pag 795) no establecía ninguna orgánica. Es por otra parte en el Protocolo adicional de 29-7-1940, donde se indica tan solo que los dos Gobiernos "se obligan a concertarse entre sí a cerca de los medios de salvaguardar...los intereses mutuos".
Que España se condujera jurídicamente en sus relaciones exteriores de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas era algo que incumbía a la propia Organización y no a España (Artº 2, punto 6 de la Carta). No era ajena, sin embargo al desarrollo del Derecho Internacional al que esta Organización hubiera contribuido.

- (193) Vease Lord Ismay, obr. cit. en nota (138), pags 136-139.

- (194) Contestación de Dean Acheson al Senador Vanderberg, citada en Assignment of ground forces in European Area. 82 Cong. 2nd Ses. Vol 130; 27 de Febrero de 1951 (subrayado mío).

- (195) La propia Ley así lo indicaba en su Preámbulo. Se dictó

"para mantener la seguridad y promover la política exterior así como para proveer al bienestar de los Estados Unidos de América mediante el suministro de ayuda a naciones amigas en el interés de la paz y seguridad internacionales".

Este es un dato interesante a retener, pues pensemos- que incluso en la actualidad la ayuda al exterior, ayuda a llevar a cabo en virtud de la Ley de Ayuda Extranjera (Foreign Assistance Act) de 1961, fue dictada para promover la política exterior, la seguridad y el bienestar general de los Estados Unidos. Vease Legislation on foreign relations with explanatory notes. Abril 1971. Government Printing Office. Washington. 1971.

- (196) Recordemos los puntos 2 de los acuerdos de 9-4-1954; 11-5-1954 y de 17-9-1956 respectivamente del programa facilities assistance y las declaraciones del Coronel Critz (Parte Quinta, Capítulo I, Sec IV, Sc D).
- (197) Lord Ismay, obr cit. en nota (138), pags 106-107.
- (198) Vease Selection and use of strategic air bases, obr.- cit en nota (123).
- (199) Vease Garcia Arias. Corpus citado, pag 178.
- (200) Vease Garcia Arias (L). Corpus citado, pag 227
- (201) B.O.C.E. nº 447, pag 8606.
- (202) Sc F, pag 105 (punto 4. Acdo Pto nº 20).
- (203) En cuanto al oleoducto nada se dice en el Acdo de Pato nº 22, aunque si tenemos en cuenta que aquel servia para suministrar combustible a las instalaciones petrolíferas de las bases aéreas -de utilización exclusiva de los Estados Unidos- y que tan solo podían ser vendidos estos productos cuando hubiera "disponibilidad de ellos" (punto 5), su utilización, podemos concluir era efectiva-

mente de uso exclusivo norteamericano.

- (204) Sc. F. pag. 97. También eran de uso exclusivo del Gobierno norteamericano los depósitos de combustible en aeropuertos civiles españoles aunque estuvieran afectados al servicio de las F.A. U. S. A. (punto 1, epig 1. Acdo Pto nº 17) (Vease nota 60)
- (205) Flory obr. cit. pag 9
- (206) B. O. C. E. nº 447, pag 8599.
- (207) Sc A, Sec II, Cap II, Parte Segunda, pag 49 y 50. No tenía conexión con este compromiso, los materiales militares res-
tado de los restos o desechos y que hubieran sido entregados en virtud de la ayuda para la mutua defensa.
- (208) Sc. A, Sec II, Cap II, Parte Segunda, pag 46 y 55.
- (209) Centro superior de Estudios de la Defensa Nacional; IV
Ciclo de estudios sobre la Defensa Nacional (1968); Es-
tudios de los Acuerdos con los Estados Unidos ante su
posible prórroga en 1968; 2ª Fase analítica; Conclusio-
nes de la Comisión Militar. 2122. Resultados de los Con-
venios.
- (210) Estudios citado. 2121. Convenios defensivos con los Esta-
dos Unidos. Causas y efectos.
- (211) Sec. III, Cap. I. Parte Quinta, pag 196
- (212) "La responsabilidad de la seguridad externa de la Base
Naval de Rota será del Gobierno de España" (punto 5 A-
cuerdo de Pto nº 25)

"Será de la absoluta responsabilidad del Mando español la seguridad exterior de la Base Naval de Rota, incluso la defensa portuaria y línea de costa, por medio de una vigilancia que será mantenida desde el exterior de los límites o perímetros de dicha base y en la zona marítima terrestre por fuerzas españolas" (nº 2, párrafo 1 de los Procedimientos navales de vigilancia que completan las normas que rigen la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de América de la Base Naval de Rota).

"La seguridad de las zonas e instalaciones asignadas a

los Estados Unidos, será mantenida en la forma siguiente:

a) El Mando español garantiza al Mando de los Estados Unidos la seguridad externa de las zonas asignadas por medio de vigilancia que será ejercida desde el exterior de los límites o perímetros de dichas zonas" (Punto 3, Anexo al Acdo de Pto nº 24 sobre Procedimientos que completan las reglas que rigen la utilización de las instalaciones de almacenamiento de municiones de la Marina de los Estados Unidos en España.

"La seguridad militar e industrial de las zonas asignadas en Cartagena y la de las instalaciones de petróleo en la Estación Naval de la Graña será mantenida de la forma siguiente:

a) , en Cartagena el Mando español garantiza al Mando de los Estados Unidos la seguridad exterior de la zona asignada mediante la vigilancia que será mantenida en el exterior de los límites o perímetros de dichas zonas..
b), En la Graña, el Mando de la Estación Naval de la Graña garantiza la seguridad exterior de las instalaciones de petróleo de esa Estación ..." (Punto 4 Anexo al Acdo de Pto nº 18 sobre Procedimientos que completan las reglas que rigen la utilización de las instalaciones de petróleo en las Bases Navales españolas por las Marinas de España y de los Estados Unidos).

"La seguridad exterior de todo el combinado del oleoducto será de la responsabilidad del Gobierno español"
(Acuerdo de Pto nº 22, punto 6 sobre utilización de productos petrolíferos, oleoductos e instalaciones afines).

I DOCUMENTOS

A) DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

1. Concernientes al Convenio Defensivo
2. Concernientes a los otros dos Convenios

B) OTROS DOCUMENTOS

1. Norteamericanos
2. Españoles
3. De la Sociedad de Naciones y Naciones Unidas
4. Del Tribunal Internacional de Justicia

II FUENTES DE CONOCIMIENTO UTILIZADAS

III OBRAS, ARTICULOS Y TRABAJOS ESPECIFICOS

A) OBRAS GENERALES

B) ARTICULOS Y TRABAJOS ESPECIFICOS

I DOCUMENTOS

A) DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

1. Concernientes al Convenio Defensivo

- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. Military construction. Vol 124, pags 1-61.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subcommittee on Real Estate- and Military Construction of the Committee on Armed Services Senate. Exchange of surplus agricultural commodities. Vol 134 pags 1-22.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. Military construction. Vol 125, pags, 2; 10-45; 71-165.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Additional Hearings. Committee on - Appropriations. Senate. Military construction. Vol 125, pags 1-23.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. The supplemental appropriations bill, 1955. Vol 132. pags 848-866.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. of the Committee on - Appropriation. The supplemental appropriation bill, 1955. Mi-
litary construction. Vol 40, pag 52.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriation. H.R. The supplemental Appropriation bill, 1955, Acquisition and construction of Real property. Sesión de 8 de junio de 1954.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. The supplemental appropriations bill, 1955. Vol 132, pag 1064.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropria-
tions. H.R. The supplemental appropriations bill, 1955. (Mi-
litary construction). Vol 40, pag 534-543.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Report and Hearings of the Subcommittee for Special Investigation of the Committee on Armed Services, under the authority of H. Resolution 112. House of Represen-
tatives. Vol 41, pag 12-37
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. of the Committee on Appropriation. H.R. Department Air Force. Appropriations for 1956. Vol 14, pags 1036; 1307-1309; 1313; 1315. Vol 54, se-
sión de 25 de marzo de 1955.

- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. Senate. Department of Defense Appropriations, 1956. Vol 139, pages 50; 85-86; 101; 109; 1177-1178; 1190-1191.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. Senate. Military construction 1955. Vol 142, - pages 42-46
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. Senate. Department of Defense Appropriations - for 1956. Vol 139, pag 320.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. H.R. Military construction Appropriations for- 1956, Vol 22, pag 499-503; 49.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Appropriation Senate. The Supplemental Appropriation bill, 1956. Vol 143, pag 223-224.
- 84th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. H.R. Department of Defense Appropriations for 1957, Vol 31, pag 834.
- 84th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriation. H.R. Department of the Navy Appropriations for- 1957, Vol 32, pages 833-836
- 84th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc Committee on Appro - priation. H. R. Navy Military construction appropriations for 1957. Vol 38, pages 388-393.
- 84th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appro - priation. H.R. Military construction appropriations for 1957. Air Force Appropriations. Vol 38, pages 25; 58-59; 294; 302-306.
- 84th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appro - priation. Senate. Department of Defense Appropriations for 1957. Vol 150, pages 926-931; Vol 151, pages 991, 1010.
- 85th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on appro - priations. Senate. Department of Defense appropriations for 1958. Vol 137, pag 1224
- 85th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on appro - priations. H.R. Military Construction Appropriations for 1958. Overall program. Vol 23, pag 430.

- 85th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on appropriations. H.R. Military Construction Appropriations for 1958. Overall program (Air Force). Vol 23, pags 20; 304; 316-321.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on appropriations. H.R. Department of defense Appropriations for 1959. Vol 31, pag 75.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings before the Subc. on military construction. 19 de mayo de 1958, pags 282-283; 286.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. H. R. Military construction appropriations for 1959. Vol 40, pags 840-843.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. on Military Construction of the Committee on Armed Services. Senate. Military construction authorization. Fiscal year 1959. Vol 154, pag 797.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. Senate. Department of Defense appropriations for 1959. Vol. 149, pag 742-743.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. Senate. Military construction appropriations for 1959. Vol 150, pags 104-105; 260-263.

2. Concernientes a los otros dos Convenios

- 82nd. Cong. 1st. Ses. Hearings. Foreign Relations Committee and Armed Forces. Senate. Mutual Security Act of 1951. 31 de julio de 1951.
- 82nd. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Foreign Affairs Committee. H. R. Mutual Security Act extension. Vol 57, pags 552-553.
- 82nd. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Appropriations Committee. H. R. Vol 55, pag 530-537.
- 83th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Foreign Affairs Committee. H.R. Mutual Security Act extension. Vol 55, pag 110; 183; 317; 542; 683; 1077-1078; 1283.
- 83th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Foreign Relations Committee. Senate. Mutual Security Act of 1953. Vol 149, pag 193;.
- 83th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subcommittee of the Committee on Appropriations. H. R. Mutual Security appropriations for 1954, pag 503-505.

- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Foreign Affairs Committee. H.R. Mutual Security Act of 1954. Vol 57, pags 35; 92; 126; 160-161; 167; 172; 688-697; 710-715; 724-725.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Foreign Relations Committee. Senate. Mutual Security Act 1954. Vol 152, pag 44; 158-159.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subcommittee of the Committee on Appropriation. H. R. Mutual Security Appropriations for 1955. Vol 41, pag 247.
- 83th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. Mutual Security Appropriations for 1955. Vol 132, pag 23.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Foreign Relations. Senate. Mutual Security Act of 1955. Vol 171, pag 45.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Foreign Affairs H. R. Mutual Security Act of 1955. Vol 56, pags 16-17; 54; 166; 207; 227-228; 234-237; 372; 374; 384-389; 393-394; 399-400; 667; 670-673; 684-685.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. of the Committee on Appropriation. Mutual Security appropriations for 1956. Vol 21, pags 169-170; 174; 200-203; 206-209; 218-222;.
- 84th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. The supplemental appropriation bill 1956. Vol 143, pags 104-105 y sesiones de 11 de julio de 1955.
- 84th Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. Mutual Security appropriations for 1956. Vol 142, pags 48; 73; 79; 135.
- 84th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Foreign Affairs H. R. Mutual Security Act of 1956. Vol 57, pags 64; 130; 134; 137; 139.
- 84th Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriation. H. R. Mutual Security Appropriation for 1957. Vol 40, pags 278-283.
- 85th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Foreign Relations. Senate. Mutual Security Act of 1957. Vol 168, pags 381; 385-386; 404-405; 407-408.
- 85th. Cong. 1st Ses. Hearings. Committee on Foreign Affairs

H. R. Mutual Security Act of 1957. Vol 60, pags 655-656; 661-663; 732-735; 770; 809; 859; 865; 895-897; 925; 931-932; 1279; 977A.

- 85th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriation. H. R. Mutual Security Appropriations for 1958. Vol. 24, pags 457; 474-475; 484-485; 505.
- 85th. Cong. 1st. Ses. Hearings. Committee on Appropriation. Senate. Mutual Security Appropriations for 1958. Vol 141, pags 268-277; 608; 692-695.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Foreign Affairs. H. R. Mutual Security Act of 1958. Vol 62, pags 119; 128; 171-173; 318-321; 383; 433; 772; 784; 791; 798-799; 900-901; 1171; 1195; 1280; 1282; 1500-1501; 1761-1762; 1801-1803 y otras.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Foreign Relations. Senate. Mutual Security Act of 1958. Vol 169, pags 364-367; 762-765.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Subc. Committee on Appropriations. H. R. Mutual Security Appropriations for 1959. Vol. 38, pags 303; 587; 593-594; 626-627.
- 85th. Cong. 2nd. Ses. Hearings. Committee on Appropriations. Senate. Mutual Security appropriations for 1959. Vol 150, 10 de julio de 1958; pags 188-197; 214-217.

B) OTROS DOCUMENTOS

1. Norteamericanos

- Documents on American Foreign Relations. 1944-1945. Washington,
- Documents relating to the war power of Congress, the President's authority as commander in chief and the war in Indo china. U. S. Government Printing Office. Washington 1970.
- Caffery (J). Informe sobre la ayuda al exterior de los Esta dos Unidos preparado por el Ex-Embajador J. Caffery a ins - tancias del Comité especial de Estudio del Programa de Ayu - da al Extrabajero (Sesión del Congreso de los Estados Unidos correspondiente al día 29 de marzo de 1957) Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información Diplomática.
- Spanish base agreement. Hearing before the Committee on Foreign Relations. United States Senate. 91st. Cong. 2nd. Ses. Agosto 1970. U.S. Government Printing Office. Washing - ton. 1970.
- Treaties in force. A list of treaties and other internatio - nal agreements of the U. S. in force on January 1, 1970. Washington Government Printing Office.
- United States security agreements and commitments abroad. Spain and Portugal. Hearings before the Subcommittee on United States security agreements and commitments abroad of the Committee on Foreign Relations. Senate. 91st. Cong. 2nd Ses. Part II. U.S. Government Printing Office. Washing - ton 1970.
- Public Papers of the Presidents: Henry Truman

2. Españoles

- Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Escuela de Altos Estudios Militares (ALEMI). IV Ciclo de Estudios sobre Defensa Nacional (1968). Estudio de los Acuer - dos con los Estados Unidos ante su posible prórroga en 1968.
 - 1ª Fase: Expositiva. Conferencia: Gestación de los Conve - nios militares Hispano-Norteamericanos. Cte Carrero Blanco.
 - 2ª Fase: Análitica; Conclusiones de la Comisión Militar. 2121. Convenios defensivos con los Estados Unidos. Causas y Efectos. 2122. Resultados de los Convenios.
- 1 Dictamen del Consejo de Estado de 5 de mayo de 1960 (exp 26.161. Consejo de Estado. Recopilación de Doctrina legal 1959-1960. Madrid 1961.

- Dictamen del Consejo de Estado de 20 de junio de 1968 (nº 36017). Consejo de Estado. Recopilación de doctrina legal 1967-1968. Boletín Oficial del Estado Madrid 1971.

3. De la Sociedad de Naciones y Naciones Unidas

- Societe des Nations. Conference pour la Codification de Droit International. Tome II. Eaux territorieaux. Geneve 1929.
- Societe des Nations. Actes de la Conference pour la Codification du Droit International. Geneve 1930
- United Nations Conference on International Organization. Tome IV.
- Yearbook of the United Nations. 1946-1947.
- Laws and regulations on the regimen of the territorial sea. United Nations. Legislative Series. United Nations. New York. 1957.
- Repertory of practice of the United Nations Organs. Art 23-54 de la Carta. New York:
 - Vol II. 1955, pag 461-467
 - Supplement nº 1. Vol I. 1958, pags 369-370
 - Supplement nº 2. Vol II. 1964, pag 479-480.
 - Supplement nº 3. Vol III. 1971, pags 301-313.

4. Del Tribunal Internacional de Justicia

- Cour Internationale de Justice. Recueil des arrêts. 1960.

II FUENTES DE CONOCIMIENTO

- Annual Digest. 1947. Lauterpacht. Londress. 1951.
- Moore. A digest of International Law. Vol I.
- Whiteman (M.M) Digest of International Law. Washinton 1963.
- Martens. Recueil de Traites et de Droit International.
Deuxéme serie, XII, pag 629.
- Societe des Nations. Recueil des Traites
- United Nations Treaty Series.
- Corpus Iuris Gentium. Garcia Arias (L). Zaragoza 1968.
- International Organization and Integration Sijthoff. Leyden 1968.
- Práctica de nuestros Tribunales en torno a los Convenios y recogida por González Campos (J) en la Revista Española de Derecho Internacional (números indicados en la nota nº 7 de esta tesis)

III OBRAS, ARTICULOS Y TRABAJOS ESPACIFICOS

A) OBRAS GENERALES

- Brownlie Ian. Principles of Public International Law. Oxford 1966.
- Burdeau (G) Traité de Science Politique. 2eme edi. T II. 1967
- Carrillo Salcedo (J.A) Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Madrid 1969.
- Delbez (L). Les principes generaux du Droit International Public. 3^e edic 1964
- Duguit (L). Las transformaciones del Derecho Público. Traducción de Adolfo Posada y Ramon Jaen. 1913. Madrid.
- Duguit (L). Manual de Derecho Constitucional. Traducción al español de Jose Acuña. 1913. Madrid
- Guaita (A). Derecho Administrativo especial. I. 1960
- Guggenheim (P) Traite de Droit International Public. Tome I 1953.
- Oppenheim (L) Tratado de Derecho Internacional Público. Traducción española de Lopez Olivan y Castro Rial. Tomo I, Vol II. Barcelona 1961.
- Rousseau. Droit International Public. Paris 1953.
- Rousseau. (Ch) Principes de Droit International Public. Tome II. Rec des Cours 1958 (93).
- Rousseau (Ch) Derecho Internacional Publico. Traducción española de Gimenez Artigues. 3^e edic. Barcelona 1966.
- Rousseau (Ch) Droit International Public. Paris 1970.
- Schwarzenberger (G) A manual of International Law. 5^e edic. London 1967
- Sereni (A). Diritto Internazionale II. Milano 1958.
- Vellas (P). Droit International Public. Paris 1970. 2^e edic.
- Verdross (A). Derecho Internacional Público. Traducción española de Antonio Truyol. Madrid 1967.

- 1 Verdross (A) Idees directrices de l'Organization des Nations Unies. Rec des Cours 1953 (83).

B) ARTICULOS Y TRABAJOS ESPECIFICOS

- Aguilar Navarro (M) "Algunas reflexiones sobre las alianzas". Rev de Pol. Int. 1953.
- Aguilar Navarro (M) "Regimen de bases militares y coexistencia nuclear" R.E.D.I. 1962
- De Azcárraga (J.L) Derecho Internacional Marítimo. Ariel-Barcelona 1970.
- Baldoni. Les navires de guerre dans les eaux territoriales étrangères. Rec des Cours 1938.
- Barcia Trelles (C). El pacto del Atlantico. Ins. Est. Pol. (.)
- Bebr (G) Regional organizations: a United Nations problem A.J.I.L. 1955, pag 166
- Boutros-Ghali. Contribution a une theorie generale des alliances. Pedone. Paris. 1963.
- Boutros-Ghali. Middle Eastern security pacts. Rev. Eryp. Dr. Int. 1957.
- Cabaleiro (E) Los tratados internacionales (La ratificación de tratados en el Derecho español). Madrid 1962.
- Carrillo Salcedo. (J.A) El mantenimiento de la paz: veinte años de esfuerzos. (O.N.U., año XX) Tecnos 1966, pag 185.
- Charpentier (J) Le retrait français de l'O.T.A.N. A.F.D.I. 1966, pag 409.
- Cooper (J) El derecho de volar. Buenos Aires 1950.
- "La defense Nationale". Centre de Sciences politiques de l'institut d'etudes juridiques de Nice. Paris 1958.
- Evans. Some aspects of the problem of self-executing treaties. Proceedings of the American Society of International law, abril 1951.
- Fariña (F) El buque de guerra ante el Derecho Internacional. Madrid 1941
- Fenwick (Ch) The Atlantic Pact. A.J.I.L. 1949, pag 312.
- Fenwick (Ch) Treaty establishing the European defense community. A.J.I.L. 1952, pag 698.
- (.) Madrid 1950.

- Fenwick (Ch) Collective security and the London agreements. A.J.I.L. 1.955, pag 54
- Fernandez-Carvajal (R) La Constitución española. Madrid 1.969.
- Fleming. (D.F) The cold war and its origins. 1.917-1.960. 2 vol. Doubleday and London: Allen and Unwin 1.961. New York.
- Flory. Les bases militaires a l'etranger. A.F.D.I. 1.955
- Freytagh-Loringhoven. Les ententes regionales. Rec des Cours. 1.936 (56), pag 585-677.
- Fulbright. The pentagon propaganda machine. Liveright. Publishing Corp. New York. 1.970.
- Garcia Arias (L) El concepto de guerra y la denominada guerra fría: La guerra moderna y la Organización internacional. Inst. Est. Pol. Madrid 1.962, pags 91-136.
- Garcia Arias (L) El tránsito innocuo de los buques de guerra: Estudios de Historia y Doctrina de Derecho Internacional. Ins. Est. Pol. Madrid 1.964, pags 283 y ss.
- Goodrich et Hambro. Commentaire de la Charte de Nations Unies. Neuchatel. 1.946.
- Goodrich (M) The United Nations. 1.959.
- Herrero de Miñon. Ordenación de la actividad administrativa del Estado en materia de Tratados internacionales; el Decreto 801/1.972 de 24 de Marzo. Revista de Admon. Pública 1.972. Mayo-Agosto pag 359.
- Horowitz (O) From Yalta to Vietnam. Middlesex. England. 1.967.
- Hudson. Charter provisions on human rights in American law. A.J.I.L. 1.950, pag 543
- Lord Ismay. NATO, the first five years. Netherlands 1.956.
- Kalijarvi, Weindel y Wilcox. The North Atlantic Treaty in the United States Senate. A.J.I.L. 1.949, pag 633.
- Keesing's publications. Treaties and Alliances of the World.
- Is the North Atlantic Treaty a regional arrangement? A.J.I.L. 1.951, pag 162. Kelsen,
- Khadduri The arab League as a regional arrangement A.J.I.L. 1.946, pag 756.
- Kulsky. The soviet system of collective security compared with the western system. A.J.I.L. 1.950.

- Kunz (J.L) International law by analogy. A.J.I.L. 1.951 pag 330.
- Kunz (J.L) The inter-american treaty of reciprocal assistance. A.J.I.L. 1.948, pag 111
- Kissinger (H). Problems of National Strategy. Edit Preager. New York 1.965.
- Lazarev (M.I) The problem of foreign military bases and armed forces abroad in writings on international law. Sov. Year. of Inter. Law. 1.960, pag 379.
- Lazareff (S) Status of military forces under current international law. Leyden. Sijthoff. 1.971.
- Loewenstein (K) Sovereignty and International Cooperation. A.J.I.L. Abril 1.954, pag 222.
- Lowi. Bases in Spain American civil-military decisions. A twentieth century fund study. University of Alabama Press. 1.963, pag 668-700.
- M. Byrd. (E) Treaties and executive agreements in the United States. Nijthoff. The Haghe 1.960.
- McNair The law of treaties. Oxford. 1.961.
- Nagendra Singh. Nuclear Weapons and Int. Law. London. 1.959.
- Orue y Arregui. Le regionalisme dans l'organisation internationale. Rec des Cours. 1.935 (53).
- Pasley (R) Offshore procurement. Military Law Rev. (27.100.18
- Pastor Ridruejo (J.A) La estipulación y eficacia interna de los tratados en el derecho español R.E.D.I. (XVII) 1.964.
- Perez Voituriez (A) Las leyes fundamentales ante el Derecho Internacional. R.E.D.I. 1.962 nº 2
- Perrin de Boussac. Le statut international de l'espace aérien Thèse. 1.951.
- Preuss. The execution of treaty obligations through internal law-system of the United States and of some other countries. Proceedings of the American Society of International law. Abril 1.951.
- Quincy Wright. Mandates under the League of Nations, Chicago 1.930

- Quintano Ripolles. El principio de competencia personal en lo penal internacional. R.E.D.I. 1.954.
- Quintano Ripolles. Soberanía jurisdicción territorial y bases militares. R.E.D.I. 1.955.
- Saba. Les accords regionaux dans la Charte de l'O.N.U. Rec des Cours. 1.952 (80) pages 635-720.
- Sayre Francis. Are administering authorities free to erect military and naval bases in non-strategic trust territories? A.J.I.L. April 1.948.
- Talcott Parson. La polarización y el orden internacional. Rev. Pol. Int. 1.962 nº 61.
- Burlington. (E). The legal effect of treaties in municipal law; the special position of federal states. Proceedings of the American Society of International Law. April 1.951.
- Verhoeven Joe. Le statut des bases militaires etrangeres et des quartiers generaux interallies implantes en Belgique. Rev. Bel. du Dr. Int. 1.969, nº 2.
- Von Neuman Whitman (M) Government risk-sharing in foreign investment. Princenton University Press. 1.965.
- ± Van Klefflens. Regionalism and political facts. A.J.I.L. 1.949, pag 666.
- Van Langenhove. (F) La crise du systeme de securite collective des Nations Unies 1.946-1.957. Nijthoff. La Haya 1.958.
- Wohlstetter (A.J); Hoffman (F.S); Lutz (R.J); Rowen (H.S) The Rand Corporation. A report prepared for U.S. A.F. project Rand. April 1.954.
- Jeyes (J.) Les accords regionaux et le droit international. Rec des Cours 1.947 (71), pag 227-344.
- Zinn (Ch) How our laws are made? U. S. Government Printing Office. Washington 1.969.
- Nelson Dallas Administrative agencies of the U.S.A. Detroit Wayne State University Press. 1.964.

APENDICES

- I Acuerdos de ejecución y desarrollo del Convenio Defensivo.
- II Acuerdos de ejecución y complementarios del Convenio de Ayuda para la Mutua Defensa.
- III Acuerdo complementario del Convenio de Ayuda Económica.
- IV Acuerdos celebrados de conformidad con el Título I de la Ley de Comercio Agrícola, Ayuda y Desarrollo de 1954 (Ley Pública 480).
- V Ejecución orgánica e institucional en el Derecho - español de los Convenios.
 - A) Organismos de Administración en sentido estricto
 - B) Otros Organos
 - C) Disposiciones administrativas "strictu sensu", de ejecución de los Convenios.

I.- Acuerdos de ejecución y desarrollo del convenio defensivo

- 1) Acuerdo Técnico Anexo al acuerdo defensivo (26-9-1953)
- 2) Acuerdo Técnico nº 1: Adquisición y desarrollo de las zonas servidumbre e instalaciones acordadas. (26-9-1953)
- 3) Anexo Técnico nº 2: Normas de construcción. (26-9-1953).
- 4) Anexo Técnico nº 3: Utilización de zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones. (26-9-1953).

5) Borrador del Anexo Técnico nº 4: Personal

- 1) Acuerdo de Procedimiento nº 5: Normas reguladoras de la importación de material que ha de ser empleado por las fuerzas de los Estados Unidos en ejecución de los acuerdos firmados con dicho país en 26-9-1953. (18-3-1954)

Dos enmiendas de fechas 11-6-1955 y 30-7-1959, respectivamente

- 2) Acuerdo de Procedimiento nº 6: Permiso de conducir. (30-4-54)
- 3) Acuerdo de Procedimiento nº 7: Transmisiones y electrónicas (30-4-1954)
Anexo: Previsiones de necesidad de territorio para instalaciones de transmisiones y electrónicas.
- 4) Acuerdo de Procedimiento nº 8: Declaración de aduanas para efectos oficiales transportados por valija. (7-5-1955).
- 5) Acuerdo de Procedimiento nº 9: Normas relativas a la importación y exportación de efectos personales de los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos en España. (25-6-1954)
- 6) Acuerdo de Procedimiento nº 10: Pasaportes y documentos de

identidad. de los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos en España. (1-7-1954)

- 7) Acuerdo de Procedimiento nº 11: Normas relativas a las visitas de buques de los Estados Unidos a puertos españoles (9-7-1954).

Procedimientos navales para dar cumplimiento a las normas que regulan las visitas de buques de los Estados Unidos a puertos españoles (22-7-1954).

- 8) Acuerdo de Procedimiento nº 12: Exenciones fiscales (22-7-54)

- 9) Acuerdo de Procedimiento nº 13: Matriculación de automoviles (22-7-1.954).

- 10) Acuerdo de Procedimiento nº 14: Regulación de vuelos de aviones militares. (12-11-1954).

- 11) Acuerdo de Procedimiento nº 15: Normas reguladoras de los servicios médicos de las Fuerzas de los Estados Unidos en España. (3-5-54).

- 12) Acuerdo de Procedimiento nº 16: Jurisdicción sobre Miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos. (4-2-1955)

- 13) Acuerdo de Procedimiento nº 17: Construcción y utilización de instalaciones para depósitos de combustibles de los aeropuertos civiles (18-2-1955).

- 14) Acuerdo de Procedimiento nº 18: Normas que rigen la utilización conjunta de instalaciones petrolíferas en las Bases y Estaciones Navales españolas para las Marinas de los Estados Unidos y de España. (28-4-1955)

-Anexo al acuerdo de Procedimiento nº 18: Procedimiento que

completa las reglas que rigen la utilización de las instalaciones de petróleo en la bases Navales españolas, para las Marinas de España y de los Estados Unidos. (17-8-1956).

-Enmienda a los Procedimientos que completan las reglas que rigen la utilización de las instalaciones de petróleo en las bases navales españolas, para las Marinas de España y de los Estados Unidos. (15-7-1960).

- 15) Acuerdo de Procedimiento nº 19: Cartografía y fotografías aéreas (10-6-1.955)
Anexo A del Acuerdo de Procedimiento nº 19 (10-6-1.955).
- 16) Acuerdo de Procedimiento nº 20: Almacenamiento y distribución de productos petroíferos en las Bases aéreas (25-8-55)
- 17) Acuerdo de Procedimiento nº 21: Transporte y almacenamiento de explosivos militares (25-8-1955).
- 18) Acuerdo de Procedimiento nº 22: Utilización de productos petroíferos, oleoductos e instalaciones afines. (26-9-1955)
- 19) Acuerdo de Procedimiento nº 23: Asuntos laborales, (26-9-1955)
Nota interpretativa para el acuerdo de procedimiento nº 23 (26-9-1955)
- 20) Acuerdo de Procedimiento nº 24: Normas que rigen el desarrollo y utilización de las instalaciones de almacenamiento de munición naval de los Estados Unidos en España. (15-10-1955)
-Anexo al Acuerdo de Procedimiento nº 24. Procedimiento que completa las reglas que rigen el desarrollo y utilización de las instalaciones de almacenamiento de munición naval de los Estados Unidos en España. (16-7-1956)
- 21) Acuerdo de Procedimiento nº 25: Normas que regirán la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de la Base

Naval de Rota (15-12-1955).

-Nota adicional al párrafo 3º del Acuerdo de Procedimiento nº 25. (9-1-1957)

-Procedimientos navales de vigilancia que completan las normas que rigen la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de la Base Naval de Rota (18-5-1959)

-Procedimientos navales para la ejecución de las operaciones portuarias; complemento de las normas que rigen la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de la Base Naval de Rota. (13-5-1960)

-Anexo al acuerdo de Procedimiento nº 25.

22) Acuerdo de Procedimiento nº 26: Disposiciones que regulan la liquidación de las propiedades sobrantes del Gobierno de los Estados Unidos sitas en territorio español (16-10-1956).

-Anexo nº 1 al Acuerdo de Procedimiento nº 26 (16-10-1956)

II.- Acuerdos de ejecución y complementarios del Convenio de ayuda para la mutua defensa

- 1) Acuerdo sobre la disposición final de equipo y materiales constituido por Canje de Notas de 27-11-1.956
- 2) Acuerdo para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica, constituido por Canje de Notas de 21-7-1960
- 3) Programa "facilities assistance";
 - Canje de Notas de 9-4-1.954; 11 y 19-5-1954
 - Canje de Notas de 25-5-1955
 - Canje de Notas de 17-9-1956
- 4) Programa "offshore procurement":
 - Canje de Notas de 30-7-1954
 - Canje de Notas de 26-10-1954
 - Canje de Notas de 21 y 27-12-1956
 - Canje de Notas de 29-10 y 11-11-1958

(Treaties in force. A list of treaties and other international agreements of the U.S. in force on January 1, 1970 Government Printing Office. Washington)

III.- Acuerdo complementario del Convenio de Ayuda Económica

- 1) Acuerdo sobre modificación del depósito de contrapartida constituido por Canje de Notas de 22-5-1962.

(Treaties in force. A list of treaties and other international agreements of the U. S. in force on January 1, 1.970. Government Printing Office. Washington).

IV.- Acuerdos celebrados de conformidad con el Título I de la Ley Comercio Agrícola, Ayuda y Desarrollo de 1954 (Ley Pública 480).

- 1) Canje de Notas de 20-4-1955
 - enmienda de 20-10-1955
 - enmienda de 21-1-1956
 - suplemento de 18-10 y 6- 11-61
- 2) Canje de Notas de 5-3-1956
 - suplemento de 16- y 17-3-1956
 - suplemento de 20-3-1956
 - suplementos de 15-9-1956
 - enmienda de 20 y 28-9-1956
- 3) Canje de Notas 23-10-56
 - enmienda de 1-2-1957
 - enmienda de 26-3-1957
 - enmienda de 12-6 y 30-7-1958
 - enmienda de 25-6 y 15-7-1959
- 4) Canje de Notas de 27-1-1958
 - suplemento de 10-4-1958
 - suplemento de 30-6-1958
 - suplemento de 31-10-1958
- 5) Canje de Notas de 13-1-1959
- 6) Canje de Notas de 22-6-1960
- 7) Canje de Notas de 22-5-1961

(Treaties in force. A list of treaties and otrher international agreements of the U. S. in force on January 1, 1.970. Government Printing Office, Washington).

V.- EJECUCION ORGANICA E INSTITUCIONAL EN EL DERECHO ESPAÑOL
DE LOS CONVENIOS HISPANONORTEAMERICANOS.

A) ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION EN SENTIDO Estricto

DECRETO-LEY de 2-10-1953 (BOE. 3-11-1953, por el que se crea dependiente de la Subsecretaría de Economía Exterior una Dirección General denominada de Cooperación Económica.

DECRETO (Presidencia del Gobierno) de 28-10-1957 (BOE 16-11-1957) sobre constitución de la Oficina de la Comisión Delegada del Gobierno para desarrollo de los Convenios con Norteamérica.

DECRETO (Presidencia del Gobierno) de 26-3-1964 (BOE 17-4-64) por el que se suprime la Oficina creada por Decreto anterior .

DECRETO (Ministerio Asuntos Exteriores) de 26-3-1964 (BOE 17-4-1964), por el que se crea la Dirección General de Relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.

DECRETO (Ministerio de Hacienda) de 22-1-1954 (BOE 1-2-1954) por el que se otorga competencia al Ministro de Hacienda en materias de exenciones derivadas de los convenios.

ORDEN (Ministerio de Hacienda) de 9-4-1954 (BOE 12-4-1954), por la que se crea dependiente de la Subsecretaría de este Ministerio una Oficina que cuidará de todo lo relativo a la concesión de exenciones fiscales derivadas de los convenios.

ORDEN (Ministerio de Hacienda) de 6-6-1957, por la que la Oficina creada anteriormente queda adscrita a la Secretaría General Técnica del Departamento.

ORDEN (Ministerio de Hacienda) de 22-10-1960 (BOE 1-2-1961), por la que se dispone que la Oficina para la ejecución de los Convenios con Norteamérica se denomina en lo sucesivo

"Oficina de Relaciones Financieras Exteriores"

B) OTROS ORGANOS

DECRETO-LEY de 23-12-1954 (BOE 2-1-1955), por el que se crea la Comisión Mixta de Competencias, en relación con los Acuerdos

ORDEN (Presidencia del Gobierno) de 1-8-1958 (BOE 9-8-1958) por la que se crea la Subcomisión Mixta de Competencias entre Autoridades de Marina y el Mando Americano de la Base Naval de Rota.

ORDEN (Presidencia del Gobierno) de 8-7-1959 (BOE 14-7-1959), que aclara la que crea la Subcomisión Mixta de Competencias de la Base Naval de Rota.

DECRETO-LEY de 9-5-1958 (BOE 21-6-1958), por el que se constatan las competencias del Comité Consultivo creado en el Acuerdo de Procedimiento laboral.

ORDEN de 11-8-1959 (BOE 25-8-1959) (Presidencia del Gobierno), por la que se crea en el Ministerio de Trabajo la Secretaría española del Comité Consultivo Mixto constituido en virtud del Acuerdo de Procedimiento nº 23.

ORDEN (Presidencia del Gobierno) del 12-2-1959 (BOE 13-2-1959) sobre la Competencia del Comité.

ORDEN de 12-11-1958 (BOE 13-11-1958), sobre competencia del Comité. (Presidencia de Gobierno)

C) DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS STRICTU SENSU, DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS

a.- Leyes para ejecución de inversiones derivadas de los convenios:

- Ley de 23-12-1959 (BOE 29-12-1959)

- Ley de 19-4-1.961 (BOE 21-4-1.961)
- Ley de 2-3-1.963 (BOE 5-3-1963)

b.- Expropiaciones

- 1.- Decreto de 25-2-1955 (BOE 6-3-1955), expropiación y obras
- 2.- Decreto-Ley de 23-3-1956 (BOE 5-4-1956) expropiación forzosa.
- 3.- Decreto de 23-3-1956 (BOE 5-4-1956), cumplimiento Deto-Ley anterior.
- 4.- Decreto de 11-11-1955 (BOE 21-11-1955), urgencia y expropiación forzosa.
- 5.- Orden de 23-11-1955 (BOE 6-12-1955), cumplimiento Decreto 11-11-1955
- 6.- Decreto de 27-9-1962 (BOE 6-10-1962) declaración de urgencia.

TEXTOS INCLUIDOS

I Convenio Defensivo

- Acuerdo Técnico Anexo al Acuerdo Defensivo
- Anexo Técnico nº 3
- Borrador del Anexo Técnico nº 4
- Acuerdo de Procedimiento nº 7
- Acuerdo de Procedimiento nº 14
- Acuerdo de Procedimiento nº 25

II El Convenio de Ayuda para la mutua defensa

III Convenio de Ayuda Económica

CONVENIO DEFENSIVO

PREAMBULO

Frente al peligro que amenaza al Mundo occidental, los Gobiernos de los Estados Unidos y de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacional, con medidas de previsión que aumenten su capacidad y la de las demás naciones que dedican sus esfuerzos a los mismos altos fines, para poder participar eficazmente en acuerdos sobre la propia defensa;

Han convenido lo siguiente:

Artículo I.- En consonancia con los principios pactados en el Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa, estiman los Gobiernos de los Estados Unidos y de España que las eventualidades con que ambos países pudieran verse enfrentados aconsejan que sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de una amistad estable, en apoyo de la política que refuerza la defensa del Occidente. Esta política comprenderá lo siguiente:

1. Por parte de los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español para los fines convenidos, mediante la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra y a través de un periodo de varios años a fin de contribuir, con la posible cooperación de la industria española, a la eficaz defensa aérea de España y para mejorar el material de sus fuerzas militares y navales en la medida que se convenga en conversaciones técnicas a la vista

de las circunstancias. Tal apoyo estará condicionado, como en el caso de las demás naciones amigas, por las prioridades y limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los Estados Unidos y de las exigencias de la situación internacional y supeditado a las concesiones de crédito por el Congreso.

2. Como consecuencia de las premisas que anteceden y a los mismos fines convenidos, el Gobierno de España autoriza al Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden a desarrollar mantener y utilizar para fines militares juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos Gobiernos, como necesarias para los fines de este Convenio.

3. Al conceder asistencia a España, dentro de la política expresada, mientras avance la preparación de las zonas e instalaciones acordadas, el Gobierno de los Estados Unidos satisfará, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1, las necesidades mínimas de material requeridas para la defensa del territorio español, con el fin de que si llegare un momento en que se hiciera necesaria la utilización bélica de las zonas e instalaciones, se hallen cubiertas en la medida de lo posible las necesidades previstas en orden a la defensa aérea del territorio, y a la dotación de sus unidades navales, y lo más adelantado posible el armamento y dotación de las unidades de su Ejército.

Artículo II.- A los fines de este Convenio y de conformidad con los Acuerdos técnicos que sean concertados entre las autoridades competentes de ambos Gobiernos, se autoriza

a los Estados Unidos a preparar y mejorar las zonas e instalaciones convenidas para uso militar, y realizar, en cooperación con el Gobierno de España las construcciones necesarias a tal fin, para acuartelar y alojar el personal civil y militar indispensable en las mismas y atender a su seguridad, disciplina y bienestar, a almacenar y custodiar provisiones, abastecimientos, equipo y material, y a mantener y manejar las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de dichas zonas y de su personal.

Artículo III.- Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta, quedarán siempre bajo pabellon y mando español y España asumirá la obligación de adoptar las medidas necesarias para su seguridad exterior. Sin embargo, los Estados Unidos podrán, en todo caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo estadounidenses.

El momento y la forma de utilización bélica de dichas zonas e instalaciones, serán fijados de mutuo acuerdo.

Artículo IV.- El Gobierno de España adquirirá, libres de toda carga y servidumbre, los terrenos que puedan ser necesarios para fines militares y conservará la propiedad del suelo y de las obras de carácter permanente que se construyan. El Gobierno de los Estados Unidos se reserva el derecho de retirar todas las demás construcciones e instalaciones hechas a sus expensas cuando lo estime conveniente o cuando este Convenio sea cancelado. En ambos casos podrán ser adquiridas, previa tasación, por el Gobierno español, siempre que no se trate de instalaciones de índole reservada.

El Estado español se hará cargo de toda reclamación formulada al Gobierno de los Estados Unidos por tercera perso-

na, en los casos que se refieran a la propiedad y utilización de los terrenos arriba aludidos.

Artículo V.- El presente Convenio entrará en vigor al ser firmado y estará vigente por una duración de diez años automáticamente prorrogados por dos periodos sucesivos de cinco años cada uno, de no seguirse el procedimiento de cancelación que a continuación se detalla.

A la terminación de los diez años iniciales o de cualquiera de las dos prórrogas de cinco año, cualquiera de los dos Gobiernos puede informar al otro de su proposito de cancelar el Convenio, iniciandose con ello un periodo de consultas de seis meses. En caso de no haber conformidad sobre la prórroga, este Convenio caducará al año de concluir el periodo de consultas.

En fé de lo cual, los respectivos Representantes, debidamente autorizados para este fin, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid el día 26 de Septiembre de 1953, en doble ejemplar, en lengua española e inglesa, siendo ambos textos fe hacientes.

Por el Gobierno Español
El Ministro de Asuntos Exteriores
(L. S.) Alberto Martín Artajo

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América -
(L.S.) James Clement Dunn.

ACUERDO TECNICO ANEXO AL ACUERDO DEFENSIVO

Artículo I.- A los fines del antedicho acuerdo el Gobierno de España pondrá a disposición del de los Estados Unidos, libre de toda carga y servidumbre, los terrenos que se convenga ser necesarios para la construcción, desarrollo y utilización de las zonas e instalaciones acordadas, sin carga ni gravamen por los Estados Unidos, conforme con el Artº. XIV, del acuerdo defensivo.

Artículo II.- Excepto en lo previsto en el Artº I, de este Convenio los gastos de construcción y desarrollo de las zonas e instalaciones convenidas, juntamente con las comunicaciones necesarias, serán objeto de consulta y acuerdos entre ambos Gobiernos.

Artículo III.- Los gastos de entretenimiento y servicio de las zonas e instalaciones convenidas, y de material y abastecimientos, utilizados conjuntamente por Estados Unidos y España, serán repartidos entre los dos Gobiernos, proporcionalmente y en razon de su utilización. El gasto de entretenimiento y servicio de las zonas e instalaciones convenidas, y los de material y abastecimientos, utilizados únicamente por Estados Unidos serán por cuenta del Gobierno de los Estados Unidos, durante el periodo de tal utilización.

Artículo IV.- La ordenación de los servicios en la utilización de las zonas e instalaciones convenidas, incluidas las disposiciones de seguridad interior y de vigilancia de material y abastecimiento, será distribuida entre los dos Gobiernos de común acuerdo. Sin embargo esta responsabilidad será únicamente del Gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta a los sectores de terreno e instalación y específicamente se

asignen o puedan asignarse a los Estados Unidos para fines de utilización alojamiento y almacenamiento.

Artículo V.- (1º) Las instalaciones realizadas a expensas del Gobierno de Estados Unidos, así como el material y efectos traídos por su cuenta a territorio español, o adquiridos en este para la construcción, ampliación, entretenimiento y funcionamiento de dichas instalaciones, serán propiedad de aquel Gobierno, que conservará el derecho a retirarlas del territorio español en cualquier momento, con exención de todo género de impuestos y restricciones.

(2º) Cuando el Gobierno de Estados Unidos considere necesario la utilización de ciertas zonas e instalaciones, y en cualquier caso, cuando deba quedar cancelado este acuerdo, las Autoridades competentes de ambas partes, examinarán, las condiciones en que deban dejarlas y determinarán, mediante acuerdo, cual sea el valor remanente de las instalaciones erigidas a expensas del Gobierno de los Estados Unidos o por su cuenta y que no hayan de ser removidas, adquiriendo el de España su propiedad, previo reembolso el de Estados Unidos del valor residual acordado.

El Gobierno de Estados Unidos no estará obligado a devolver las zonas e instalaciones en el estado y condiciones en que se hallaban previamente a la utilización por sus Fuerzas pero si en condiciones al servicio para las Fuerzas españolas que hubieren de permanecer en ellas, siempre que esto no origine gastos adicionales para dicho Gobierno.

(3º) El Gobierno de Estados Unidos podrá disponer en cualquier momento de sus efectos de equipo, material y suministro en España, sea antes de la terminación de este acuerdo, sea ulteriormente, dentro de un plazo de tiempo

razonable, en condiciones acordadas con las Autoridades españolas, Sin embargo, el Gobierno de España tendrá la opción de adquirir dichos efectos de equipo, material y suministros que el Gobierno de los Estados Unidos ofrezca para su enajenación en España, en los precios que determinan las Autoridades competentes de ambos Gobiernos.

Artículo VI.- A fin de adaptar y preparar para su mejor utilización militar las zonas convenidas, las Autoridades competentes de ambos Gobiernos acordaran los trabajos previos que procedan y el de los Estados Unidos podrá realizar por gestión directa, o por medio de contratas de su elección, el montaje, construcción, financiamiento, conservación o sustitución de las instalaciones que se considere necesarias.

Artículo VII.- (1º) Las Fuerzas de Estados Unidos destinadas a utilizar y servir las zonas e instalaciones acordadas, tendrán libertad para desplazarse dentro del territorio español, en las aguas jurisdiccionales y en su espacio aéreo. La misma libertad se reconocerá a los buques, embarcaciones, aeronaves y vehículos dependientes de dichas Fuerzas, o afectas al servicio de los Estados Unidos a los fines de este acuerdo, los cuales recibirán el mismo trato concedido a los buques, aeronaves y vehículos del Gobierno Español a todos los efectos de exención de derechos e impuestos de cualquier naturaleza.

(2º) Tales buques, embarcaciones, aeronaves y vehículos que se hallan en territorio, aguas jurisdiccionales o espacio aéreo, estarán sometidas al control de sus mandos, pero observarán las normas de tráfico convenidas entre las Autoridades competentes de ambos Gobiernos. Las demás naves, embarcaciones, aeronaves y vehículos, que deban acceder a zonas convenidas, salir de ellas, o estacionarse en su proximidad, obedecerán las órdenes y controles que para cada localidad a-

cuerden las Autoridades mencionadas.

Artículo VIII.- A todos los efectos del acuerdo defensivo relacionado con la preparación y utilización de las zonas e instalaciones convenidas, queda autorizado el Gobierno de los Estados Unidos para hacer uso en territorio español, de todos los Servicios Públicos, en las mismas circunstancias y con las mismas tarifas aplicadas a las Fuerzas Armadas españolas.

Artículo IX.- En los términos y condiciones que se acuerden con las Autoridades españolas competentes, los Estados Unidos podrán, fuera de las zonas convenidas, construir y utilizar oleoductos, almacenes y otras instalaciones, así como ampliar y construir caminos puentes, mejorar y dragar fondeaderos, darsenas y canales y faciliten el acceso y servicio de dichas zonas.

Donde sea procedente, el Gobierno español utilizará las expropiaciones o establecerá arreglos con los propietarios de los terrenos para que el Gobierno de los Estados Unidos, pueda, sin gastos por este concepto, emprender las obras y mejoras estimadas necesarias.

Artículo X.- Fuera de las zonas convenidas el Gobierno Español facilitará terreno, o establecerá las oportunas servidumbres, para que el de los Estados Unidos pueda construir y mantener en servicio instalaciones de telecomunicación.

Los Organismos técnicos de ambos países adoptarán las necesarias disposiciones para coordinar servicios y evitar interferencias.

Artículo XI.- Los Estados Unidos podrán hacer los levantamientos topográficos, hidrográficos, costeros y geode-

sicos que puedan convenirse entre los dos Gobiernos, Se suministrará a España copias del trabajo y datos de triangulación de cualquiera de estos levantamientos.

Artículo XII.- Las Autoridades de Estados Unidos de acuerdo con las Autoridades españolas podrán ordenar estudios de ingeniería o técnicos de otra índole, relacionados con trabajos consecuencia de este convenio.

Artículo XIII.- Las Autoridades sanitarias de ambos países cooperarán en el estudio y adopción de las medidas relacionadas con el saneamiento de los terrenos próximos a las zonas convenidas y al mejoramiento de las condiciones de salubridad.

Artículo XIV.- Los Estados Unidos podrán establecer y mantener en funcionamiento dentro de las instalaciones y zonas utilizadas por las fuerzas de los Estados Unidos en virtud de este Convenio, Estafetas Militares de Correos de Estados Unidos para el uso de los miembros de dichas fuerzas, para la remisión de correo entre dichas Estafetas en España y entre éstas y otras Oficinas de correos de los Estados Unidos.

Artículo XV.- Las organizaciones de los Estados Unidos podrán establecer dentro de las zonas convenidas, cantinas economatos militares, comedores y círculos sociales, para servicio de su personal. Estas organizaciones estarán exentas de tributos y derechos de todo género.

Las autoridades militares de los Estados Unidos de acuerdo con las españolas adoptarán medidas administrativas adecuadas para evitar la reventa de los productos expedidos por estas organizaciones a personas no autorizadas para adquirirlos, y de modo general para evitar el abuso de los beneficios aquí concedidos.

Artículo XVI.- 1º). Para la realización de este Convenio, los Estados Unidos podrán destinar a territorio bajo jurisdicción española a miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos suministrarán a España una relación de los nombres y nacionalidades de los miembros no militares de las Fuerzas de los Estados Unidos, que no teniendo esa nacionalidad entre en territorio español. Sin embargo en este último caso, España se reserva el derecho de admisión.

2º) El Régimen de pasaporte no será aplicable al personal de las Fuerzas de los Estados Unidos, que será provisto de Tarjetas o signos de identidad cuyo modelo será facilitado a las Autoridades españolas competentes. Al personal no militar, le será aplicado el régimen normal de pasaporte, pero el visado, registro de extranjeros y formalidades de inspección de inmigración, no serán de aplicación a los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos.

3º) Si la situación de cualquier persona destinada a España según el apartado 1º). de este Artículo, debiera cambiar de forma que su permanencia pasara a ser condicional, las Autoridades de los Estados Unidos lo comunicaran a las españolas y en caso de que estas lo solicitasen, tomarán las medidas pertinentes para su salida de España en plazo prudencial y sin gastos para el Gobierno de ésta.

Artículo XVII.- STATUS JURIDICO - JURISDICCIONAL CRIMINAL Y CIVIL.-

1º) Los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos, están obligados a respetar el derecho vigente en España y a abstenerse de toda actividad que no esté de acuerdo con el espíritu de los presentes Acuerdos y, en particular de toda actividad política en España. Los Estados Unidos contraen la obliga-

ción de adoptar las medidas necesarias a tal fin.

2º) Las Autoridades Militares de los Estados Unidos tendrán el derecho de ejercer sobre los miembros de sus fuerzas, dentro de los territorios bajo jurisdicción española, las jurisdicciones y controles que les son conferidas por las Leyes y Reglamentos de Estados Unidos.

3º) Las Autoridades de los Estados Unidos y Españolas cooperarán al objeto de que puedan tomarse rápidamente las medidas adecuadas contra aquellos miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos que violasen las Leyes españolas, y cada una de ellas dará cuenta a la otra parte de la acción disciplinaria que se tome, con arreglo a las siguientes normas convenidas.

a) Los Tribunales militares de los Estados Unidos y Autoridades de dicho país tendrán el derecho de ejercer en territorio bajo jurisdicción española la jurisdicción criminal con relación a todas las faltas y delitos que puedan cometerse por miembro de las Fuerzas de los Estados Unidos y punibles bajo los términos del Uniform Code of Military Justice determinado por el "Manual for Courts Martial U. S. 1951", con las enmiendas o modificaciones que pudieran introducirse.

Para aquellas faltas o delitos contra la Ley española que no estén comprendidos en el citado Uniform Code of Military Justice, estarán sujetos los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos a la jurisdicción de los Tribunales españoles, que aplicarán su propia Ley.

b) Aun cuando los Estados Unidos puedan ejercer la jurisdicción en la forma antes citada, podrán las Autoridades de los Estados Unidos, en casos particulares renunciar a esta

jurisdicción. Con relación a esto, darán las Autoridades de los Estados Unidos plena consideración a toda petición formulada por las Autoridades españolas de que, en casos particulares, el delincuente, normalmente sujeto a jurisdicción de los Estados Unidos sea juzgado por los Tribunales españoles.

c) Los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos detenidos por las Autoridades españolas, serán rápidamente entregados a las Autoridades de los Estados Unidos, para aplicación de medidas disciplinarias. Sin embargo, al acceder las Autoridades de Estados Unidos a una solicitud de las Autoridades españolas para juzgar a un delincuente por los Tribunales españoles, dicho delincuente será rápidamente entregado a las Autoridades españolas.

4º) a.- Siempre que las Autoridades Militares de los Estados Unidos ejerzan la jurisdicción o control citado en el apartado segundo de este artículo y soliciten la cooperación de las Autoridades españolas competentes, estas deberán auxiliarlas en la recogida de informes y realización de todas las investigaciones necesarias. Las Autoridades competentes españolas tomarán las medidas necesarias para la presentación de los ciudadanos españoles y otras personas en territorio bajo jurisdicción española (excepto de los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos), como testigos en las investigaciones oficiales y ante Tribunales Militares, incluyendo, en los casos pertinentes, la incautación y entrega de testimonios. piezas de convicción y objetos relacionados con el hecho.

b) De modo análogo, las Autoridades Militares de los Estados Unidos recogerán los testimonios de miembros de sus fuerzas y auxiliarán a las Autoridades españolas en el caso de un hecho delictivo.

5º.- a) Los Estados Unidos tendrán derecho, de acuerdo con los términos del Artículo IV anterior, a ejercer la vigilancia de aquellos sectores de las zonas e instalaciones que puedan utilizarse exclusivamente por los Estados Unidos y tomarán todas las medidas que se estimen necesarias para asegurar el mantenimiento de la disciplina, orden y seguridad interior de aquellas.

b) Por fuera de las zonas convenidas y mediante acuerdo con las Autoridades competentes españolas, puede emplearse a los Miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos para servicios de policía, en tanto que dicho empleo sea, necesario para el mantenimiento de la disciplina y orden entre los Miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos. En estos casos, tendrá la policía española que pudiera estar de servicio conjuntamente con los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos en servicio de policía, la autoridad superior con respecto a las personas y propiedades de ciudadanos españoles.

c) Los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos podrán llevar armas estando de servicio, al ser autorizados para ello por las Autoridades Militares de los Estados Unidos de acuerdo con las españolas.

6º.- Para la resolución de las cuestiones de competencia que puedan suscitarse, se establecen en un Anexo Técnico las normas pertinentes.

Artículo XVIII.- JURISDICCION CIVIL.-

1º.- Los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos, no estarán sujetos a la jurisdicción civil de Tribunales o Autoridades españolas por actos u omisiones ocurridos en

el desempeño de sus deberes oficiales. Las Autoridades españolas considerarán como concluyente un certificado expedido por las Autoridades Militares de los Estados Unidos, atestiguando la situación a este respecto de un miembro de aquellas Fuerzas.

2º.- Cada Gobierno renuncia a toda reclamación contra el otro por daños a bienes en territorio español propiedad o utilizados por él, si este daño:

a) Fuera causado por un miembro de las Fuerzas armadas o personal civil anejo del otro Gobierno en el desempeño de sus deberes oficiales, o

b) Si ocurrió por la utilización de cualquier vehículo, buque o aeronave propiedad de, o utilizado por el otro Gobierno, sus Fuerzas armadas o un empleado de aquel. Cada Gobierno renuncia a toda reclamación contra el otro por salvamento marítimo o aéreo siempre que el buque, avión o cargamento salvado sea propiedad del otro Gobierno o fuera utilizado por sus Fuerzas armadas en el momento de ocurrir el incidente.

3º.- Cada Gobierno renuncia a toda reclamación contra el otro por daños o muerte sufrida por cualquier miembro de sus Fuerzas armadas o componentes civiles de la misma en el desempeño por aquel de sus deberes oficiales.

4º.- Las reclamaciones de habitantes de territorios españoles por actos u omisiones de miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos podrán ser resueltas con arreglo a las disposiciones de aplicación al caso de las Leyes de los Estados Unidos, Cualquier convenio que se llegue con arreglo a ello, se considerará como un descargo completo, tanto para los Es-

tados Unidos como para el individuo en cuestión respecto a ulterior responsabilidad por los daños resultante de tal acto u omisión.

5º.- La tramitación de un litigio ante un tribunal civil español contra miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos con ocasión de daños imputables a algún acto u omisión del citado personal, se considerará como una renuncia a cualquier derecho que pudiera tener el Gobierno Español o personas residentes en dicho país, a una compensación administrativa por parte del Gobierno de los Estados Unidos por las reclamaciones que surjan como consecuencia de tal acto u omisión incluso el procedimiento a que se refiere el parrafo 4º anterior.

Artículo XIX.- (1º) El material y efectos de todo género los abastecimientos, enseres domésticos, automóviles particulares, efectos de vestuario y de uso personal traídos a territorio español con relación a la ejecución de este convenio, o adquirido a los mismos fines dentro del territorio español por el Gobierno de los Estados Unidos o sus agentes quedaran exentos de todo impuesto o gravamen y podrán salir libremente del territorio español.

2º) Iguales exenciones serán aplicables a los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos por cuanto se refiere a sus ingresos y a los bienes que en territorio español adquirieran como consecuencia de su permanencia temporal en él, a los que tampoco será de aplicación impuesto sucesorio alguno en caso de fallecimiento del poseedor.

3º) Si a los fines de este Convenio acordasen los Gobiernos de Estados Unidos y de España que miembros de las Fuerzas Armadas españolas tuviesen que entrar en territorio,

bajo jurisdicción de Estados Unidos, el Gobierno de Estados Unidos estará dispuesto a reconocer a tal personal como miembro de la Embajada española y a concederle la misma situación privilegios e inmunidades concedidas al personal de la Embajada de España de empleo equivalente.

4º) Si como consecuencia de este Convenio se hiciera necesario que el Gobierno español tuviera que adquirir para sus Fuerzas Armadas equipo en Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos dará al Gobierno español las mismas facilidades de suministro para que los tales desembolsos españoles disfruten de las mismas exenciones que se aplica en los Estados Unidos a los suministros para las Fuerzas Armadas de esta nación,

Artículo XX.- 1º) El Gobierno de España exime de la observación de las normas aduaneras reglamentarias:

a) Al material militar o de construcción, efectos, de equipo, abastecimientos, provisiones u otros productos importados en territorio bajo jurisdicción española por el Gobierno de Estados Unidos o sus contratistas en relación con la ejecución de este convenio.

b) A los efectos personales, mobiliario y enseres domesticos indicados en el artículo precedente importados por las Autoridades de Estados Unidos o por conductos comerciales normales para uso personal de miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si bien en este caso la importación estará autorizada por un certificado expedido por dichas Autoridades en el que se acredite el destino de los efectos. Las autoridades militares facilitaran a las Autoridades Aduaneras españolas la relación de los funcionarios facultados para expedir dichos certificados así como el fascimil de sus firmas y sellos.

c) Documentos oficiales bajo sello.

2º) Los bienes antes mencionados de modo generico, podrán salir de territorio español libres de todo impuesto o gravamen, no siendoles de aplicación los reglamentos y normas aduaneras de despacho.

3º) Los bienes traídos a territorio bajo jurisdicción española en virtud de los términos del apartado I/b) de este artículo, no podrán ser transferidos endichos territorios a ciudadanos españoles o a extranjeros que se hallan en España, en concepto de venta, donación o cambio a menos que la transferencia de estos a tales personas, fuera autorizada con arreglo a las condiciones determinadas por las Autoridades competentes españolas. Sin embargo tales bienes podrán ser transferidos a miembros de las Fuerzas de Estados Unidos. Las Autoridades Militares dictaran y harán cumplir en la medida de lo posible, normas encaminadas a evitar la venta o suministro a miembros de las Fuerzas de Estados Unidos de cantidades de generos importados exentos de impuestos que fueran excesivos para sus necesidades personales, y mediante consulta con las Autoridades competentes españolas se determinará cuales serán los más susceptibles de convertirse en objeto de tráfico abusivo y los medios más sencillos de obstaculizarlo.

Artículo XXI.- Los Miembros de las Fuerzas de Estados Unidos podrán adquirir localmente los géneros necesarios para su propio uso y consumo y aquellos servicios que pudieran necesitar en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Tales géneros podrán ser sacados del territorio bajo jurisdicción española, libres de derechos de aduanas u otros cargos.

Los Estados Unidos podrán adquirir localmente los

géneros necesarios para la subsistencia de las Fuerzas de Estados Unidos en territorio bajo jurisdicción española. Las autoridades españolas a petición de las Autoridades competentes de Estados Unidos facilitarán en la medida posible el suministro de los pedidos.

Artículo XXII.- El Gobierno Español autoriza el empleo de personal civil de esta nacionalidad por los Estados Unidos o sus contratistas o agentes y será la norma de los Estados Unidos o de sus contratistas o agentes, el emplear preferentemente a personal civil español donde a su juicio se encuentre disponible y reúna condiciones de aptitud para realizar el trabajo previsto. Las condiciones de empleo y trabajo, en particular salarios, pagas adicionales, incluyendo pluses, normas para la protección de productores, descuento y pago de contribuciones para los Seguros Sociales, serán regidas por la Legislación española, por el procedimiento acordado en los pertinentes anexos técnicos.

Artículo XXIII.- El Gobierno de España, admitirá sin examen de aptitud los permisos de conducir expedidos por un Organismo competente en o de los Estados Unidos a los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos, o bien expedirá sus propios permisos de conducir sin examen ni derechos a aquellas personas que estén en posesión del correspondiente permiso de los Estados Unidos.

Artículo XXIV.- Se establezcan acuerdos especiales entre las Autoridades competentes Españolas y de los Estados Unidos para la adquisición, utilización, conversión y transferencia de moneda.

Artículo XXV.- A los efectos de este Convenio, de los Anexos a él incorporados, o que se unan en lo sucesivo, el término "Miembro de las Fuerzas de los Estados Unidos" se

aplicará:

- a) Al personal militar de las Fuerzas de los Estados Unidos.
- b) A los técnicos y personal a ellas afectas o por ellas empleadas, que estén sujetas a la legislación Militar de los Estados Unidos.
- c) A los miembros de las familias de los comprendidos en los apartados a) y b)

Artículo XXVI.- Los acuerdos técnicos para la ejecución de este Convenio autorizados por él, se determinan en los Acuerdos técnicos que se adjuntan. El presente acuerdo con su Anexo adjunto, entrará en vigor al firmarse el Acuerdo Defensivo entre ambos Gobiernos y continuará vigente mientras permanezca en vigor dicho Acuerdo Defensivo. Si ulteriormente fuera necesario para el desarrollo de alguno de los extremos previstos se incorporarán al presente Acuerdo técnico como nuevos Anexos integrados en él, los acuerdos que al efecto se establecerá por las Autoridades Militares de ambos Gobiernos.

En testimonio de lo cual, los representantes debidamente autorizados españoles y estadounidenses abajo firmantes han firmado el presente Acuerdo.

ANEXO TECNICO NUMERO 3

Utilización de zonas convenidas, derechos de paso
e instalaciones

1).- Introducción.

Este Anexo técnico establece las previsiones relativas a la utilización de las zonas convenidas, derechos de paso o instalaciones en territorio bajo jurisdicción española, incluyendo aguas territoriales, en virtud de los términos del Acuerdo Técnico establecido entre ambos Gobiernos y firmado en 26 - IX- 53 y es complementario de los Artículos pertinentes del mismo.

Por ello el Gobierno español autoriza a los Estados Unidos a utilizar la medida que se estime necesaria todas las zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones construidas o ampliadas bajo los términos del Acuerdo Técnico firmado en 26 - IX - 53 a los fines establecidos en dicho Acuerdo y con excepción de aquello que pudiera específicamente limitarse o restringirse en este u otro de los Anexos Técnicos. La utilización de las zonas convenidas, derechos de paso o instalaciones de apoyo para los fines de este Anexo, se considera que comprende:

a).- El establecimiento en ellas de los elementos indispensables de las Fuerzas de los Estados Unidos para el mantenimiento en eficiencia de las instalaciones de las Bases.

b).- El empleo de dichas Fuerzas a efectos de entrenamiento.

c).- El funcionamiento de las instalaciones de apo-

yo para el mantenimiento de las fuerzas de los Estados Unidos establecidas en las zonas convenidas.

d).- La utilización de las instalaciones adicionales construídas o ampliadas bajo los términos del Acuerdo Técnico o puestas a la disposición por el Gobierno Español para la ejecución de los fines del Acuerdo.

2.- Aplicación.

Los términos de este Anexo Técnico son aplicables a la utilización de las zonas convenidas, derecho de paso o instalaciones de apoyo en tiempo de paz. En el caso de hostilidades o de inminencia de las mismas, el Gobierno Español suprimirá aquellas limitaciones o restricciones que pudieran estar vigentes y referentes a la utilización de las zonas convenidas, derechos de paso e instalaciones de apoyo por los Estados Unidos.

3.- Generalidades.

Para la utilización de las zonas convenidas que estarán siempre bajo Pabellón y Mando español, con arreglo a lo establecido en el Artículo XXI del Acuerdo Defensivo serán de aplicación los siguientes convenios:

a).- Las Bases especificadas en el Anexo Técnico número 1 y la red de control de aviones y de alarma antiaérea, - las comunicaciones y demás Instalaciones de apoyo serán mantenidas con el personal mínimo necesario para poder apoyar las operaciones en caso de emergencia y entrenamiento de unidades militares de los Estados Unidos. En adición podrán establecerse un número mínimo de Grupos de Cazas interceptores y los elementos necesarios de apoyo que cooperarán con las Fuerzas Aéreas es-

pañolas en la defensa aérea.

b).- Los Estados Unidos quedan con ésto autorizados a utilizar, previo acuerdo con las Autoridades españolas, estas Bases para llevar a cabo el entretenimiento de unidades tácticas sobre unas normas de rotación de las citadas unidades.

c).- En aquellos casos en donde exista la utilización conjunta por parte de Fuerzas españolas y de los Estados Unidos, se convendrán por las Autoridades competentes españolas y de los Estados Unidos, los pormenores de utilización de cada Base o instalación. Dentro de cada una de estas Bases o instalaciones de utilización conjunta, podrán los Mandos competentes españoles y de los Estados Unidos acordar las zonas dentro de las que prevalecería la Autoridad de los mandos respectivos de cada nación y establecer aquellos acuerdos por separados que pudieran ser necesarios. Tales acuerdos pudieran ser necesarios con relación a la seguridad de la Base, tanto interna como externa, y al mantenimiento de las instalaciones establecidas en ellas.

d).- El Gobierno español accede a establecer y mantener una Autoridad Aduanera y de inmigración en alguna de las Bases señaladas por acuerdos como puertos o aeropuertos de entrada, a los fines de llevar a cabo lo convenido en los Artículos VII, XVI, XIX, y XX del Acuerdo Técnico firmado en 26 - IX - 53.

El Mando de los Estados Unidos cooperará y auxiliará a las Autoridades aduaneras y de inmigración en el desempeño de sus obligaciones.

e).- En las Bases se coordinará a través del mando - español el enlace con las autoridades civiles locales.

f).- Para la puesta en vigor de este Anexo Técnico, se

prepararán por los mandos competentes españoles y de los Estados Unidos, aquellos acuerdos aceptables a ambas partes para la utilización de cada una de las zonas, derechos de paso e instalaciones.

4.- Instalaciones navales de la Bahía de Cádiz (Matagorda)

Para la utilización del muelle de descarga y pista de despegue, propuesta a desarrollar en la vecindad de Matagorda, en la Bahía de Cádiz, serán de aplicación los siguientes convenios específicos:

a).- La pista de despegue podrá ser utilizada conjuntamente por las fuerzas españolas y de los Estados Unidos y en la forma que acuerden los mandos navales competentes.

b).- Queda autorizada la descarga desde buques en el muelle de Matagorda y transporte a su destino en el interior de España, de aquellos abastecimientos de todas clases que necesiten las Fuerzas de los Estados Unidos que utilicen las zonas - convenidas, derechos de paso e instalaciones bajo los términos del Acuerdo Técnico firmado en 26 -IX - 53.

c).- La utilización del muelle e instalaciones a construir en Matagorda, quedará bajo control del mando local de los Estados Unidos, que actuará en coordinación con las Autoridades locales españolas.

5.- El Gobierno español autoriza la utilización de aquellas zonas acordadas, asignadas para la distribución del combustible, juntamente con aquellas instalaciones de almacenamiento de los mismos, propuestas para ampliación en las condiciones siguientes:

a).- Para suministro de las Fuerzas de los Estados Unidos.

1.- Oleoductos desde:

Matagorda a Rota, via San Cristobal (Cadiz)
San Cristobal a Madrid vfa Sevilla
Madrid a Albacete.
Bilbao a Zaragoza.
Barcelona a Base Aérea de Muntadas-Reus
Valencia a Manises.

2.- Instalaciones de almacenamiento de productos petroliferos en o en las cercanías de:

San Cristobal (Cádiz)
Bilbao
Madrid
Sevilla
Valencia.

3.- Instalaciones de almacenamiento de gasolina, de aviación en:

Cartagena (San Pedro).

b).- Para suministro conjunto de las Fuerzas españolas y de los Estdos Unidos en la forma que pudiera establecerse por separado en cada caso por los Mandos locales competentes.

1.- Almacenamiento de productos petroliferos e instalaciones en:

El Ferrol - La Graña
Tarifa (Cádiz)
Cartagena-Atalaya de Galeras
Palma
Mahón (Menorca)
Soller (Mallorca)

c).- Para la utilización conjunta de las instalaciones.

- 1.- Se establecerá un acuerdo por separado referente a procedimientos de características y contabilización para todos aquellos productos petrolíferos que se almacenen en cualquiera de los emplazamientos especificados.
- 2.- Queda cada Gobierno autorizado a introducir o retirar de los túneles almacenes de combustibles y de acuerdo con las reglas que de mutuo acuerdo puedan establecerse, productos petrolíferos de los almacenados en los citados túneles. Las Autoridades competentes españolas y de los Estados Unidos se comunicaran mutuamente con la antelación necesaria las necesidades corrientes y de largo plazo para productos (POL) Petróleo-Gas-Oil-Gasolina-Lubrificantes, así como aviso de la retirada o relleno de productos POL en estas instalaciones.
- 3.- Quedan autorizados los Estados Unidos a mantener un pequeño grupo de personal en cada instalación en donde pudieran almacenarse sus productos petrolíferos de acuerdo con los términos de este Anexo y a los fines de mantenimiento, operación y seguridad.
- 4.- El pago de los productos petrolíferos que se retiren será efectuado por el Gobierno que lo realice de acuerdo con las disposiciones y precios que mutuamente se acuerden.

6.- Instalaciones de almacenamiento de municiones

Además de las necesidades normales de almacenamiento de municiones, se autoriza a los Estados Unidos a utilizar, sobre una base conjunta con las Fuerzas españolas, aquellas instalaciones adicionales convenidas que se proponen para fines de almacenamiento de municiones en el Anexo 1, bajo las condiciones siguientes:

a).- Al utilizar cualquiera de los emplazamientos especificados para almacenamiento de municiones de los Estados Unidos, podrá ser establecido el personal de los Estados Unidos necesario a los fines de mantenimiento operación y seguridad.

b).- La capacidad de almacenamiento de municiones puesta a la disposición de los Estados Unidos en los emplazamientos especificados, será objeto, de tiempo en tiempo, de acuerdos ~~mútuos~~ entre los mandos locales navales competentes.

c).- La vigilancia y pruebas periódicas de municiones de los Estados Unidos se llevarán a cabo de tiempo en tiempo de acuerdo con las necesidades y reglamento de los Estados Unidos.

d).- Los Estados Unidos quedan autorizados, en donde sea necesario, a modificar las instalaciones especificadas de Almacenamiento de municiones y a instalar aquel equipo adicional que permita dicho almacenamiento de municiones de los EE.UU.

7.- Puertos.

Quedan autorizados los Estados Unidos al uso de todos los puertos y rios españoles, así como a facilidades de atraque con arreglo a las mismas cargas y derechos que sean aplicados

a los buques de la Marina de guerra española. Específicamente:

a).- Quedan autorizados los Estados Unidos, de acuerdo con las Autoridades españolas competentes, a:

- 1.- Llevar a cabo dragados y mejoras portuarias en la zona de Cádiz.
- 2.- Instalar aquellos auxilios suplementarios a la navegación que pueda acordarse.
- 3.- Descargar buques de abastecimiento y transportar dichos abastecimientos para fuerzas de los Estados Unidos dentro de España.
- 4.- Establecer agentes locales portuarios de los Estados Unidos para el control de los buques de transportes militares de los Estados Unidos.
- 5.- Apostar y mantener en puertos españoles aquellos buques que pudieran considerarse necesarios para mantener comunicaciones, enlaces y apoyo de proyectos militares bajo los términos del Acuerdo Técnico firmado en 26-IX-53.

b).- Los Estados Unidos en las operaciones de sus buques, se ajustarán a todos los reglamentos portuarios españoles respecto a practicaaje, sanidad y aduana, que sera de aplicación a los buques de la Marina española.

c).- El Gobierno español conviene en que las Autoridades españolas:

- 1.- Prepararán de acuerdo con las Autoridades de los Estados Unidos, carpetas portuarias detalladas interesadas por

los Estados Unidos, Estas carpetas se levantarán para suministrar aquella información portuaria que pudiera facilitar las operaciones dentro del puerto.

2.- Poner a disposición de los Estados Unidos y de acuerdo con un plan a convenir de mútuo acuerdo, aquellas facilidades de reparaciones de buques que pudieran ser solicitadas por los Estados Unidos.

8.- Instalaciones de comunicaciones

La utilización por las Fuerzas de los Estados Unidos de las telecomunicaciones, auxilio a la navegación, control de aviones y red de alarma antiaérea, propuesta para ampliación en o en la inmediata vecindad de, o en las servidumbres de paso por fuerza de las zonas convenidas, se establecerá, de mutuo acuerdo, en un Anexo Técnico independiente y unido al Acuerdo Técnico firmado en 26-IX-53.

9.- Carreteras y ferrocarriles

Los Estados Unidos quedan autorizados a:

a).- Hacer uso sin restricciones y en todo tiempo en la medida posible, de la red pública de carreteras de España, para utilizarla en el movimiento de aquellos abastecimientos, materiales y equipo que pudieran necesitar las Fuerzas de los Estados Unidos y para transporte de personal de las mismas dentro y entre las zonas e instalaciones convenidas, así como entre puertos y aeropuertos de entrada y las zonas o instalaciones convenidas. Para estos fines los Estados Unidos podrán usar para sus Fuerzas los vehículos que estimen necesarios, tanto en modelo como en cantidad.

b).- Transportar a través de la RENFE aquellos abastecimientos, materiales y equipo que pudieran necesitar las fuerzas de los Estados Unidos en España y para transporte de personal de las mismas dentro y entre las zonas o instalaciones convenidas, así como entre puertos, aeropuertos de entrada y las zonas e instalaciones convenidas, a tarifas no superiores a las aplicables a las Fuerzas armadas españolas y de acuerdo con planes interesados por las Fuerzas de los Estados Unidos.

26 de Septiembre de 1.953

BORRADOR DEL ANEXO TECNICO NUMERO 4

P E R S O N A L

En apoyo del Artículo XVI del Acuerdo Técnico de fecha 26 - IX - 53, se acuerda lo siguiente con referencia al personal de los Estados Unidos en territorio español durante la vigencia del Acuerdo:

1.- Cantidad de personal

a).- Por la presente quedan autorizados los Estados Unidos a traer al territorio bajo jurisdicción española al número mínimo de miembros militares de sus fuerzas que se estimen necesarios para el funcionamiento, administración y control de Bases e instalaciones que contengan, para llevar a cabo los fines del Acuerdo Defensivo firmado en 26-IX-53 y del Acuerdo Técnico firmado en 26 - IX - 53. Además un número mínimo de personal de grupos de cazas interceptores y sus medios de apoyo, podrán ser establecidos para cooperar con las Fuerzas Aéreas españolas en la defensa aérea.

b).- Los Estados Unidos aceptan que la presencia del personal autorizado en el párrafo anterior será llevado a cabo gradualmente.

c).- El personal en entretenimiento rotativo (en adición del autorizado en el apartado anterior), se entrenará normalmente formando unidades, pero el total de personal de los Estados Unidos en estas condiciones, no excederá, en ningún momento, de los verdaderos mínimos necesarios, pudiendo ser variada la cifra de tiempo en tiempo, en la forma con-

venida por las Autoridades competentes españolas y de los Estados Unidos.

d).- El Gobierno español acepta que las limitaciones de personal señaladas en los párrafos a, b y c anteriores, sean suprimidas en el caso de hostilidades inminentes.

2.- Uniformes

Los miembros de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos establecidas en España, quedan autorizados al uso del uniforme de su Ejército. Al estar francos de servicio queda autorizado al uso de ropa de paisano por los miembros de las Fuerzas militares de los Estados Unidos.

3.- Disciplina

a).- El mantenimiento superior de la Ley y disciplina en las Bases e instalaciones de apoyo, será responsabilidad del Mando español, salvo en aquellos sectores o instalaciones que los mandos locales acuerden considerar como zonas de responsabilidad primordial de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Artículo XVII del Acuerdo Técnico firmado en 26 - IX - 53 el Gobierno español conviene que los miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos arrestados o detenidos por Autoridades españolas serán entregados a las Autoridades Militares de los EE.UU. para la pertinente acción disciplinaria. El mando estadounidense será responsable del mantenimiento de la Ley y disciplina del personal de los Estados Unidos en aquellos sectores e instalaciones que los mandos locales convengan en considerar como zona de responsabilidad primordial de los Estados Unidos.

b).- Con objeto de que el mando de los Estados Unidos pueda descargar su responsabilidad en virtud del anterior

apartado y con el fin de auxiliar a las Autoridades disciplinarias españolas, queda autorizado a establecer en aquellos lugares como la entrada a las zonas convenidas y en algunos centros en las ciudades próximas a las zonas e instalaciones convenidas, unos destacamentos de policia militar. Los vehículos de Policía Militar quedan autorizados al tránsito, sin restricciones, dentro y fuera de aquellas zonas, instalaciones de apoyo y ciudades adyacentes.

ACUERDO DE PROCEDIMIENTO NUM. 7

TRANSMISIONES Y ELECTRONICAS

I).- Generalidades

1.- Los Estados Unidos podrán suministrar instalaciones y servicios de transmisiones y electrónicas en la medida necesaria, en apoyo de sus propias Fuerzas en España, bajo los términos de los Acuerdos del 26 de septiembre de 1.953; pero en general, y donde se disponga de ellos, los servicios telefónicos, telegráficos y de teletipo podrán ser proporcionados por los recursos locales.

2.- A este fin, Los Estados Unidos quedan autorizados a construir, instalar, utilizar y mantener telecomunicaciones, redes de auxilio a la navegación y de control de aviones y alarma antiaérea en las zonas acordadas, en su inmediata vecindad, o en servidumbres establecidas fuera de las citadas zonas.

3.- Se adjunta como Anexo una previsión global del terreno que pudiera necesitarse para estas instalaciones. El Gobierno español pondrá a la disposición de los Estados Unidos los terrenos y servidumbre necesarios, con arreglo a lo previsto en el Anexo Técnico número 1.

II).- Transmisiones alámbricas terrestres

1.- Las necesidades de las Fuerzas de los Estados Unidos en cuanto a instalaciones y servicios de telecomunicaciones alámbricas terrestres, serán coordinadas con las

necesidades de las Fuerzas Militares españolas. Las normas para la obtención de las instalaciones y servicios de telecomunicaciones alámbricas terrestres que se consideren necesarias por los Estados Unidos, serán convenidas entre las Autoridades Militares competentes españolas y de los Estados Unidos. El pago de tales servicios se realizará con - - arreglo a lo establecido en los Acuerdos de fecha 26 de Septiembre de 1.953.

2.- Con objeto de auxiliar a las Autoridades españolas de telecomunicación, civiles y militares, en el desarrollo de circuitos terrestres apropiados, serán notificadas estas Autoridades de las necesidades previstas para dichos circuitos por las Fuerzas de los Estados Unidos.

3.- Las Fuerzas de los Estados Unidos podrán instalar, mantener y utilizar su propio material en líneas terrestres suministradas por parte española. Queda autorizado el uso de códigos, claves y medios técnicos de seguridad - criptográfica. El material instalado no deberá causar ninguna interferencia en las demás líneas terrestres españolas, y debe conformarse a las recomendaciones del Comité Consultivo Internacional Telefónico (C.C.I.F.) y las condiciones del Organismo español interesado.

4.- Podrán ser instaladas las redes telefónicas, de teletipo y de intercomunicación consideradas como necesarias para el apoyo de las operaciones militares de los Estados Unidos. Caso de convenirse de mutuo acuerdo, estas redes podrán ser integradas en las de las Fuerzas Militares españolas.

5.- Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos podrán instalar, en la medida necesaria, circuitos de control

desde las zonas convenidas hasta las instalaciones de transmisión y de recepción y hasta las de auxilios electrónicos a la navegación, situadas fuera de las zonas convenidas. El trazado exacto de las líneas terrestres para estos fines - será fijado por mutuo acuerdo entre las Autoridades Militares competentes españolas y de los Estados Unidos.

III).- Transmisiones radio

1.- Quedan autorizadas las Fuerzas de los Estados Unidos a instalar, mantener y utilizar:

a) Una instalación radio principal de enlace con la red militar mundial de los Estados Unidos.

b) Aquellas otras instalaciones menores de radio-comunicación, que puedan ser necesarias en apoyo de los servicios militares y administrativos de los Estados Unidos en España.

c) Instalaciones radio para comunicación con aviones militares de los Estados Unidos que se encuentren en vuelos de largo alcance a o desde España y zonas contiguas a esta nación.

d) Aquellas otras instalaciones radio que contribuyan al normal bienestar e instrucción de las Fuerzas de los Estados Unidos, pudiendo incluir los elementos de la red militar de aficionados (MARS) y aquellas estaciones de radiodifusión de baja potencia de las bases que pudieran ser necesarias.

e) Códigos, claves y medios de seguridad criptográfica.

2.- Los transmisores y receptores suministrados por los Estados Unidos para fines militares de transmisiones,

deberán ser empleados en lugares situados a distancia no menor de cinco millas de una base aérea y separados entre sí ocho o más millas.

3.- Las frecuencias de radio para utilización por las Fuerzas de los Estados Unidos, serán coordinadas, convenidas y asignadas mediante los trámites normales.

IV).- Torres de Mando

1.- Las Torres de Mando de las bases aéreas que se utilicen conjuntamente por las Fuerzas españolas y las de los Estados Unidos, podrán ser dotadas conjuntamente por personal español y de los Estados Unidos. Las Fuerzas de los Estados Unidos suministrarán el material requerido para cubrir sus propias necesidades. Las normas operativas unificadas serán desarrolladas conjuntamente y de mutuo acuerdo para satisfacer las necesidades de aquellas bases aéreas, incluso las comunicaciones y normas entre bases adyacentes, en donde exista o pueda producirse una superposición sistemática de tráfico.

V) Auxilios a la navegación y control de aterrizajes

1.- Las fuerzas de los Estados Unidos podrán instalar, mantener y utilizar aquellos auxilios electrónicos a la navegación que consideren necesarios para satisfacer sus propios requisitos operativos.

2.- Las Fuerzas de los Estados Unidos podrán instalar, mantener y utilizar aquellos sistemas de vigilancia aérea en la zona, control de aterrizaje por radar y fonía (G.C.A.) (Ground) Controlled Approach), gonios de aterrizaje (Homing Beacons), localizadores (Localizers) gonios omnidireccionales

(V.H.F. Onniranges) de alta frecuencia, controles radar de dirección (Racon Beacons), sistemas de aterrizaje por instrumentos (I.L.S.) (Instrument Landing Systems) o cualquier otro auxilio a la navegación que pueda ser desarrollado y adoptado para el uso. Algunos de estos auxilios a la navegación deben estar emplazados a una distancia tal que queden por fuera de las zonas convenidas de bases. Las previsiones de las necesidades de terreno, son las indicadas en el Anexo adjunto.

3.- Por mutuo acuerdo entre las Autoridades Militares competentes españolas y de los Estados Unidos, se establecerán las normas y reglamentos para la utilización de los auxilios electrónicos a la navegación y controles de aterrizaje.

VI).- Control de aviones y alarma antiaérea.

1.- Las Fuerzas de los Estados Unidos podrán instalar y mantener una red de control de aviones y de alarma antiaérea en aquellas localidades que se determinen de mutuo acuerdo entre las Autoridades Militares competentes de España y de los Estados Unidos, la cual será utilizada conjuntamente con las Fuerzas Aéreas españolas. Las previsiones de las necesidades de terreno para tal red, son las indicadas en el Anexo adjunto.

VII).- Estación móvil de vigilancia de tráfico radio

1.- Las Fuerzas de los Estados Unidos podrán instalar, mantener y utilizar las instalaciones para una estación móvil de vigilancia de tráfico radio de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Las previsiones de terreno necesario para esta instalación, son las indicadas en el Anexo adjunto.

VIII).- Utilización

1.- Las Fuerzas de los Estados Unidos podrán utilizar todas las zonas convenidas, servidumbre e instalaciones, concedidas para fines de transmisiones, sobre la misma base establecida por separado para todas las demás zonas convenidas, servidumbres e instalaciones, estableciendo al efecto los acuerdos oportunos con las Fuerzas Aéreas españolas.

Madrid, 30 de abril de 1.954

Por el Alto Estado Mayor
Juan Vigón

Por el Departamento de De-
fensa de los Estados Unidos
de América
August. W Kissner

Teniente General
Jefe del Alto Estado Mayor

Major General U.S.A.F.
Chief JUSMG

ACUERDO DE PROCEDIMIENTO NUM. 14

REGULACION DE VUELOS DE AVIONES MILITARES

1.- En consonancia con la autorización contemplada en los Acuerdos de fecha 26 de Septiembre de 1.953, quedan autorizados los aviones militares de los Estados Unidos de Norteamérica, o aviones de transportes contratados por el Gobierno de los Estados Unidos, para sobrevolar, aterrizar o despegar en España o en territorio bajo control español. Para la ejecución de esta autorización, se acuerda lo siguiente.

2.- Tráfico Aéreo.

a) Todos los vuelos se llevarán a cabo de acuerdo con planes de vuelo debidamente aprobados. Las dotaciones norteamericanas se regirán por los Reglamentos de Vuelo vigentes en España y por las instrucciones dictadas por las Autoridades regionales o locales de Control de Tráfico Aéreo.

b) Los Mandos militares de los Estados Unidos concederán las autorizaciones de vuelo para todos los aviones del Gobierno de los Estados Unidos así como para los aviones de transporte contratados por dicho Gobierno que entren, salgan, sobrevuelen o efectúen vuelos en España o por territorio bajo control español. Estos Mandos coordinarán su actuación en este respecto con las Autoridades regionales y locales de los Centros de Control de Tráfico Aéreo de conformidad con los Reglamentos de Vuelo vigente en España.

c).- Las Autoridades de los Estados Unidos notificarán, siempre que sea posible, a las Autoridades españolas competentes,

con doce (12) horas de antelación, los vuelos de aviones en formación a partir de la unidad escuadrón y que entren, salga o sobrevuelen por España o por territorio bajo control español.

d).- En caso de emergencia, quedan autorizados los aviones militares de los Estados Unidos para aterrizar y despegar en cualquier Base aérea española.

3.- Espacio aéreo para entrenamiento.

a).- De mutuo acuerdo se pondrá a disposición de las Autoridades militares de los Estados Unidos, aquel espacio aéreo que resultara necesario para entrenamiento.

b).- Los aviones que realicen vuelos de entrenamiento en este espacio y en condiciones V. F. R. (Reglamento Visuales de Vuelo), no estarán obligados a dar partes periódicos de situación.

4.- Polígono de Tiro y Bombardeo.

Quedan autorizados los aviones militares de los Estados Unidos, estacionados en Bases españolas, para realizar ejercicio de tiro y bombardeo tanto aéreo como de aire-superficie o superficie-aire, dentro de las zonas de tierra y mar que mutuamente se acuerden. Las normas para utilización de estas zonas se fijarán de mutuo acuerdo entre las Autoridades militares competentes españolas y de los Estados Unidos.

5.- Operaciones de Base

Los Mandos españoles y de los Estados Unidos en cada Base establecerán de mutuo acuerdo las normas de control de aerodromos, estacionamiento de aviones, operación de Torre de Mando, utilización de equipos de socorro y otros asuntos

de interés mutuo que pueden contribuir a la eficiencia y seguridad de las operaciones.

6.- Accidentes ocurridos a aviones militares de los Estados Unidos

En caso de accidente ocurrido a aviones militares de los Estados Unidos o a aviones contratados por el Gobierno de los Estados Unidos, las Autoridades españolas y de los Estados Unidos cooperarán en la adopción de medidas de salvamento con responsabilidad primaria de las Autoridades de los Estados Unidos. Las medidas para hacerse cargo de retirar el avión averiado y su equipo técnico, serán de la responsabilidad de las Autoridades competentes de los Estados Unidos.

Las Fuerzas militares o de Policía española tendrán en principio la responsabilidad de la seguridad exterior de tales aviones averiados. Sin embargo, de llegar primero al lugar del accidente las Fuerzas militares de los Estados Unidos, éstas asumirán dicha responsabilidad en tanto lleguen las Fuerzas españolas.

7.- Búsqueda y salvamento aéreo.

Las Autoridades españolas y de los Estados Unidos cooperarán y prestarán toda la ayuda posible en las operaciones de búsqueda y salvamento aéreo.

8.- Servicio Meteorológico.

Las Autoridades de los Estados Unidos podrán establecer instalaciones meteorológicas en cada zona convenida que utilicen las Fuerzas de los Estados Unidos.

Establecerán con el Servicio Meteorológico español un intercambio de las informaciones pertinentes que pudieran ser deseables por cada servicio, Las normas y procedimientos de coordinación se establecerán de mutuo acuerdo entre las

Autoridades españolas y de los Estados Unidos.

9.- Hostilidades e inminencia de las mismas

En caso de hostilidades o inminencia de las mismas, cualquier limitación o restricción antes citado queda anulada.

Madrid, 12 de noviembre de 1.954

Por el Alto Estado Mayor

Por el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos de América,

Juan Vigón
Teniente General
Jefe del Alto Estado Mayor

August W Kissner
Major General USAF
Chief JUSMG.

ACUERDO DE PROCEDIMIENTO NUM. 25

NORMAS que regirán la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de la Base de Rota

1.- a) En consonancia con la autorización contenida en los Acuerdos de fecha 26 de septiembre de 1953, el Gobierno de España establece, para utilización conjunta por España y los Estados Unidos, la zona indicada en el Anexo núm. 1 que se acompaña, cuyo Anexo queda incorporado y forma parte de este Acuerdo de Procedimiento.

La zona convenida será llamada en adelante "BASE NAVAL DE ROTA" y permanecerá siempre bajo Bandera española y Mando español. (Esto es, no obstante, la organización, el funcionamiento y la utilización de las instalaciones en la zona que se señala en el apartado 3º, correrá a cargo del Mando de las Fuerzas de los Estados Unidos).

b).- Se acuerda, expresamente, el uso conjunto por los buques y aviones militares de las respectivas Fuerzas de las instalaciones portuarias, pistas, ayudas para la navegación torre de mando y equipo de emergencia contra incendios y accidentes, aunque éstos puedan estar físicamente emplazados en cualquier zona.

c).- En la función que le correspondan, según el apartado 1.- a), las Fuerzas de los Estados Unidos, por medio de su Comandante Naval local, tendrán en cuenta las necesidades españolas para empleo militar de las instalaciones cuya utilización conjunta se ha acordado y en todos los casos, coordinarán las necesidades del Gobierno español actuando éste a través de su Comandante Naval local, con aquéllas de los Estados Unidos.

d).- En atención a que las instalaciones, cuyo empleo conjunto se ha acordado, son de capacidad limitada y que pueden surgir necesidades que no pudieran ser satisfechas simultáneamente, se conviene que, en tales casos, la resolución que recaiga sea de acuerdo entre los Mandos navales respectivos.

2.- Dentro de la BASE DE ROTA, la zona denominada "A" en el Anexo núm. 1, queda reservada para uso exclusivo de las Fuerzas de España. En esa zona, el Gobierno español construirá, mantendrá y operará a sus propias expensas las instalaciones para uso militar que juzgue necesarias.

En relación con lo anterior, el Gobierno de España acuerda que no construirá, mantendrá y utilizará ninguna instalación o estructura que de alguna manera pudiera dificultar o poner en peligro el funcionamiento de las instalaciones de la BASE NAVAL DE ROTA.

3.- Toda la zona comprendida dentro de los límites de la BASE NAVAL DE ROTA señalados en el Anexo núm 1, con excepción de aquella a que hace referencia el apartado 2º, queda asignada para las instalaciones y servicios de las Fuerzas de los Estados Unidos. En esa zona, el Gobierno de los Estados Unidos queda autorizado, a sus propias expensas, a construir, mantener y utilizar tales instalaciones de uso militar como pueda juzgar necesarias. Estas instalaciones pueden incluir, pero no limitarse a lo siguiente:

a.- Instalaciones aeronavales para base, revisión, instrucción y operación de toda clase de aeronaves.

b.- Instalaciones portuarias para carga y descarga

de aviones, productos petroliferos, municiones y carga general.

c.- Instalaciones de almacenamiento y distribución, para la recepción, almacenaje y expedición de productos petroliferos, incluyendo la expedición, de éstos por el oleoducto, a otras zonas convenidas situadas dentro de España.

d.- Instalaciones de almacenamiento para la recepción, almacenaje y expedición de municiones.

e.- Instalaciones de transmisiones y ayudas para la navegación en operaciones militares.

Para ejecución de lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos acuerda que no construirá, mantendrá u operará ninguna instalación o estructura que de alguna manera pudiera dificultar o poner en peligro el funcionamiento de la BASE NAVAL DE ROTA.

4.- Dentro de sus respectivas zonas, especificadas en los apartados 2º y 3º de este Acuerdo, los Mandos de las Fuerzas de cada país podrán estacionar y alojar el personal indispensable, tanto militar como civil, y proveer lo necesario para su seguridad, disciplina y bienestar, almacenar y custodiar provisiones, pertrechos, equipos y material y mantener y utilizar las instalaciones necesarias en apoyo de las misiones asignadas a los respectivos Comandantes Navales.

5.- La responsabilidad de la seguridad externa de la BASE NAVAL DE ROTA será del Gobierno de España.

Para garantizar la seguridad del personal y equipos de los Estados Unidos, se pondrán en conocimiento de su Comandante Naval, por el Comandante Naval español, cuantos detalles le pudieran interesar.

6.- La responsabilidad de la seguridad interna de las respectivas zonas designadas en los apartados 2º y 3º de este Acuerdo será de los Mandos respectivos. No obstante, si los Comandantes Navales locales, español y de los Estados Unidos, creen necesario situar personal de ambas nacionalidades para seguridad de ciertos puntos dentro de la BASE NAVAL DE ROTA, tales como puertas y muelles, quedan autorizados para dicha coordinación. Sin embargo, la Autoridad de los Comandantes Navales locales, dentro de sus respectivas zonas, no quedará mermada por el nombramiento conjunto de personal de vigilancia.

7.- Queda autorizado el uso conjunto de las vías de comunicación dentro de la BASE DE ROTA, por las Fuerzas de ambos países.

8.- El Gobierno de los Estados Unidos acuerda proporcionar a España, en la BASE NAVAL DE ROTA, productos petrolíferos de la misma forma ya establecida en el apartado 6º del ACUERDO DE PROCEDIMIENTO NUM. 18 sobre "Normas que rigen la utilización conjunta de instalaciones petrolíferas en las Bases y Estaciones Navales españolas para las Marinas de España y de los Estados Unidos".

9.- Si en el futuro y por acuerdo de los Gobiernos de España y de los Estados Unidos se reconociera la necesidad de ampliación de la BASE NAVAL DE ROTA, los terrenos necesarios para tal ampliación serían adquiridos por el Gobierno español. La asignación y utilización de estos terrenos se hará con arreglo a lo estipulado en el Acuerdo de 26 de septiembre de 1.953 y con lo que en éste se establece.

10.- Los procedimientos detallados para el cumplimiento de estas reglas quedarán especificados en los "Procedimientos Navales para la puesta en vigor de las Normas que re-

girán la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de la BASE NAVAL ROTA".

11.- Las cláusulas del ACUERDO DE PROCEDIMIENTO NUMERO 14, sobre "Regulación de Vuelos de Aviones Militares", firmado el 12 de noviembre de 1.954, por los Representantes Militares de España y los Estados Unidos, tendrán aplicación en la BASE NAVAL DE ROTA.

12.- Este Acuerdo, firmado en Madrid este día 15 de diciembre de 1.955, es efectivo desde esta fecha y permanecerá en vigor por la duración de los Acuerdos o hasta que sea cancelado o modificado por consentimiento de ambos Gobiernos.

Madrid, 15 de diciembre de 1.955

Por el Alto Estado Mayor,
Carlos Aensio Cabanillas

Teniente General
Jefe del Alto Estado Mayor

Por el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos de
América

August W. Kissner
Major General USAF
Chief JUSMG.

NOTA ADICIONAL

Al párrafo 3 del Acuerdo de Procedimiento núm. 25

Se entiende y acuerda que el Gobierno de los Estados Unidos está autorizado para construir, mantener y utilizar, dentro de la Base Naval de Rota, oficinas y elementos de apoyo para los Cuarteles Generales de los Comandantes Navales de los Estados Unidos que éstos puedan desear establecer en Rota. Tales mandos se ejercerán solamente sobre Fuerzas de los Estados Unidos.

Madrid, a 9 de enero de 1.957

Por el Alto Estado Mayor,
Carlos Asensio Cabanillas

Teniente General Jefe

Por el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos de
América

A. W. Kissner
Major General USAF

PROCEDIMIENTOS NAVALES DE VIGILANCIA

que complementan las normas que rigen la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de América de la Base Naval de Rota.

1.- Las Marinas de los Estados Unidos y de España acuerdan que los procedimientos de vigilancia que aquí se establecen complementarán el Acuerdo de Procedimiento número 25 en relación con las normas relativas a la utilización conjunta de la Base Naval de Rota por España y los Estados Unidos de América.

2.- Será de la absoluta responsabilidad del Mando español la seguridad exterior de la Base Naval de Rota, incluso la defensa portuaria y línea de costa, por medio de una vigilancia que será mantenida desde el exterior de los límites o perímetros de dicha base y en la zona marítimo-terrestres por fuerzas españolas.

En tiempo de guerra o en tiempo de grave emergencia, reconocida como tal por ambos Comandantes, y por acuerdo previo entre estos Comandantes, las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos pueden reforzar a las fuerzas españolas de seguridad exterior.

En las puertas de acceso, situadas en el perímetro exterior, el Mando Español podrá establecer una guardia militar para atender a la vigilancia y seguridad exterior de las puertas, obligando a quienes pretendan penetrar, lo hagan a través de los controles establecidos en el apartado c) del Artículo 7º, y sirviendo de apoyo y protección a los mismos.

3.- Será de absoluta responsabilidad del Comandante local español la seguridad interior de la zona reservada para uso exclusivo de las fuerzas españolas y de otras zonas fuera de ella, asignadas para cualquier uso de las fuerzas españolas, incluyendo cualquier parte de estas zonas que contengan instalaciones designadas para utilización conjunta de las fuerzas de España y de los Estados Unidos, y de todo el personal de las fuerzas españolas, instalaciones, almacenes, equipos y servicios situados dentro de la misma. Esta vigilancia será ejercida por fuerzas españolas, excepto en caso de que concurran circunstancias del parrafo 9).

4.- Será de la absoluta responsabilidad del Comandante local de los Estados Unidos la seguridad interior de toda zona asignada para las instalaciones y servicios de las fuerzas de los Estados Unidos, incluyendo cualquier parte de dicha zona que contenga instalaciones asignadas para utilización conjunta de las fuerzas de España y de los Estados Unidos y de todo el personal de los Estados Unidos, instalaciones, almacenes, equipos y servicios situados dentro de la misma. Esta vigilancia será ejercida por fuerzas americanas, excepto en caso de que concurran circunstancias del párrafo 7 c y 9).

5.- Salvo que sea establecido específicamente de otro modo en los párrafos sucesivos de estos Procedimientos complementarios, cada Comandante local, al cumplir sus responsabilidades de seguridad interior, tendrá la absoluta autoridad dentro de su zona asignada, incluyendo aquellas partes de la misma que contengan instalaciones designadas para uso conjunto, para prescribir las normas de acceso, movimiento, seguridad y salvaguardia y determinar el grado de seguridad interior que ha de ser alcanzado, determinar los métodos de garan-

tizar esta seguridad interior, y complementar las medidas necesarias para conseguir la seguridad interior.

6.- En tiempos normales, no se considerará una medida necesaria de seguridad interior que los centinelas de los Estados Unidos lleven fusiles y armas de gran alcance. En tiempo de guerra o de grave emergencia, reconocida como tal por ambos Comandantes locales de España y de Estados Unidos, los tipos de armas que pueden llevar los centinelas de seguridad interior de los Estados Unidos serán determinadas por el Comandante local de los Estados Unidos.

7.- Al ejercer el control de acceso, los Comandantes locales de España y de Estados Unidos se regirán por las siguientes normas:

a).- Por control de acceso se entienden la Autoridad de permitir o negar el acceso y de registrar o inspeccionar las personas y objetos en los lugares de entrada o salida.

b).-Cada Comandante local tiene la absoluta autoridad para controlar el acceso de todas las personas y objetos a todas las partes de su zona asignada que no contengan instalaciones designadas para uso conjunto.

c).- El control de acceso a las vías de comunicaciones y otras partes de la Base Naval de Rota, que contengan instalaciones designadas para el uso conjunto, será de la doble responsabilidad de ambos Comandantes locales de España y de Estados Unidos.

Cada Comandante local controlará el acceso a dichas zonas de todo el personal y objetos de su pertenencia, pertenecientes a o requeridos por sus propias fuerzas para el desempeño de sus tareas, misión y responsabilidades. El control de ac-

ceso a dichas zonas de otro personal u objetos, será ejercido por el Comandante local de la zona a la que se desee efectuar el mismo. Con objeto de efectuar los controles de acceso mencionados en este artículo en las puertas de la Base Naval de Rota, se establecerá un servicio conjunto de Control, integrado por personal de ambas nacionalidades, con absoluta independencia de la guardia militar que pueda establecerse para la vigilancia exterior prevista en el artículo 2º.

d).- Cada Comandante local tiene autoridad para extender pases o autorizaciones personales o correspondientes a vehiculos, objetos u otros para el personal y objetos sobre los que le ha sido asignado control de acceso en los subpárrafos anteriores, cuya sola autoridad bastará para dar la validez a dichos pases. No obstante, el Comandante local de Estados Unidos deberá enviar al Comandante local español, para su visado, aquellos pases que hayan de ser entregados por el Comandante local de Estados Unidos a ciudadanos españoles.

e).- Cada Comandante local permitirá el acceso sin registro o inspección del personal y objetos cuyo acceso haya sido autorizado por el otro Comandante local, a las vías de comunicación y otras zonas que contengan instalaciones designadas para utilización conjunta que se encuentren físicamente situadas dentro de su zona asignada. No obstante, el Comandante local que permita este acceso directo a su zona, puede solicitar del otro Comandante local que efectúe una inspección o registro de cualquier personal y objetos cuyo acceso fue autorizado por él, y el otro Comandante local satisfará esta solicitud. Queda entendido que un Comandante local no efectuará dicha solicitud de registro o inspección a menos que existan autenticas razones que indique una amenaza o violación de su seguridad interior.)

8.- Al ejercer el control de movimiento, seguridad y salvaguardia dentro de su zona designada, cada Comandante local tendrá en consideración las necesidades del otro Comandante local, en cuanto al movimiento, seguridad y salvaguardia de su personal que pueda estar presente en las partes de la zona asignada que contiene instalaciones designadas para uso conjunto y coordinará estas necesidades con las propias en cuanto a la protección de la seguridad y salvaguardia de sus propias fuerzas.

9.- Sin que disminuya en forma alguna la responsabilidad y autoridad asignada al Comandante local de Estados Unidos respecto a seguridad interior dentro de la zona a él asignada, se conviene expresamente en que el Comandante local español puede participar en hacer cumplir las regulaciones de movimiento, seguridad y salvaguardia prescritas por el Comandante local de los Estados Unidos en los muelles y vías internas de comunicación situadas en la zona asignada para instalaciones y servicios de las fuerzas de los Estados Unidos a excepción de la zona residencial, POL y polvorines. Sin que disminuya en forma alguna la responsabilidad y autoridad asignada a cada Comandante local en cuanto a la seguridad interior de su zona asignada, se acuerda que cada Comandante local pueda invitar al otro Comandante local a participar en la observancia de las regulaciones prescritas por él sobre movimiento, seguridad y salvaguardia en otras partes de su zona asignada que contengan instalaciones designadas para uso conjunto. La participación conjunta se llevará a cabo por medio de fuerzas de seguridad mixtas compuestas por personal español y de los Estados Unidos sujeta a las siguientes normas:

a).- El personal de seguridad permanecerá bajo el mando de sus respectivos Comandantes locales. No obstante, el

Comandante local participante dará al personal de seguridad bajo su mando las mismas órdenes e instrucciones que el Comandante local responsable dé a su personal de seguridad, y también ordenará a su personal de seguridad situarse en los puestos o zonas de servicios que sean designados por el Comandante local responsable.

b).- El personal de seguridad aportado por el Comandante local participante, estará armado en forma similar al personal de seguridad del Comandante responsable.

c).- Normalmente el personal de seguridad observará las regulaciones prescritas únicamente en lo que se refiere a personas correspondientes o pertenecientes a sus fuerzas respectivas. No obstante, en caso de emergencia, todo el personal de seguridad tendrá los mismos poderes en cuanto a la observancia de las regulaciones de movimiento, seguridad y salvaguardia sobre todas las personas presentes, sin tener en cuenta la fuerza o nacionalidad a que pertenezcan.

10.- Un Comandante local no asumirá responsabilidad ni obligación alguna en lo que respecta a la seguridad interior de buques, aviones, vehículos, edificios, almacenes, equipos, instalaciones u otros objetos situados dentro de su zona asignada, que pertenezcan o correspondan solamente a las fuerzas del otro Comandante local.

11.- Las violaciones de las normas de seguridad interior dentro de la Base Naval de Rota serán comunicadas al Mando que haya establecido las mismas, y al mando con que se encuentre ligado el ofensor. Si el personal de seguridad de los Estados Unidos toma bajo su custodia ofensores que sean miembros de las fuerzas españolas o personal civil español, deberán ser puestos inmediatamente bajo la custodia del Coman-

dante local español para que se tomen las medidas disciplinarias que correspondan o para su ulterior entrega a las Autoridades civiles de la localidad, según sea oportuno. Si el personal de seguridad español toma bajo su custodia ofensores que sean miembros de las fuerzas de los Estados Unidos la disposición de los mismos se hará de acuerdo con las normas del artículo XVII del Acuerdo Técnico Anexo al Acuerdo de Defensa y del Acuerdo de Procedimiento número 16.

12.- Tanto el Comandante local de los Estados Unidos como el Comandante local español, proporcionará al otro copias de todas las reglas de seguridad interior, órdenes y directrices a las fuerzas de seguridad interior, que el personal de la otra fuerza necesita conocer en el ejercicio de sus derechos de utilización conjunta de las instalaciones especificadas en la Base Naval de Rota.

Madrid, 18 de mayo de 1.959

Por el Departamento de Marina
de los Estados Unidos de América

H. H. Hale
Capitan de Navio
de la Marina de los
Estados Unidos.

Por el Ministro de Marina
del Gobierno Español

Alfonso Colomina Boti
Contralmirante

PROCEDIMIENTOS NAVALES

para la ejecución de las operaciones portuarias; complemento de las normas que rigen la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de América de la Base Naval de Rota.

(ANEXO AL ACUERDO DE PROCEDIMIENTO NUM. 25)

1.- Las Marinas de los Estados Unidos y España acuerdan que los procedimientos para las operaciones portuarias aquí establecidas se ajustarán al Acuerdo de Procedimiento núm. 25, en cuanto al Reglamento concerniente a la utilización conjunta por España y los Estados Unidos de América de la Base Naval de Rota.

2.- La organización interna, funcionamiento, utilización y seguridad de los medios portuarios en el área asignada para las instalaciones y servicios de las Fuerzas de los Estados Unidos están bajo la responsabilidad del Comandante local de los Estados Unidos. El Comandante local de los Estados Unidos puede delegar esta responsabilidad en un Capitán de Puerto de los Estados Unidos designado por él.

3.- El Comandante General de la Base Naval de Rota, asignará con carácter permanente un Capitán de Puerto Español, el cual mantendrá contacto directo y enlace con el Capitan de Puerto de los Estados Unidos. El Comandante local de los Estados Unidos proporcionará espacio adecuado para la Oficina del Capitan de Puerto español, adyacente al del Capitan de Puerto de los Estados Unidos.

4.- El plan operativo para la utilización de los muelles y demás medios portuarios se preparará por el Capitán de Puerto de los Estados Unidos en consulta con el Capitan de

Puerto español bajo la autoridad delegada de sus respectivos Comandantes y teniendo en cuenta las necesidades de ambas Marinas. Normalmente la utilización conjunta de muelles y demás medios portuarios se regirá según las prioridades siguientes:

a).- Primera prioridad: Petroleros cargando o descargando productos petrolíferos.

b).- Segunda prioridad: Barcos de municionamiento cargando o descargando municiones.

c).- Tercera prioridad: Otros barcos de ambas Marinas cargando o descargando productos petrolíferos, municiones u otros pertrechos o carga.

d).- Cuarta prioridad: Otros barcos cargando o descargando carga.

e).- Quinta prioridad: Todos los demás barcos de ambas Marinas.

f).- La prioridad entre los barcos que estén en el mismo grupo se establecerá por el orden de llegada, con la excepción de que, dentro del tercer grupo, la prioridad de los barcos que están cargando será en el mismo orden de la hora prevista de salida de la Base.

Cuando arriben barcos de la Marina de los Estados Unidos o barcos bajo el control del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, según se definió en los Procedimientos Navales para aplicación de las normas que rigen las visitas de los barcos de los Estados Unidos a puertos españoles, el despacho de salida será expedido únicamente por el Capitán de Puerto de los Estados Unidos. Para los barcos españoles y cual-

quier otro buque de los Estados Unidos o extranjero, el despacho de salida será expedido por el Capitán de Puerto español.

6.- Todas las solicitudes de los Comandantes de buques españoles sobre medios o servicios portuarios, se harán al Capitán de Puerto español para su coordinación y transmisión al Capitán de Puerto de los Estados Unidos.

7.- El Capitán de Puerto de los Estados Unidos será responsable de la aplicación del Programa Operativo, preparado de acuerdo con el punto 4 anterior. Proporcionará o dispondrá de los remolcadores, botes auxiliares y demás servicios portuarios, tales como agua, electricidad, petróleo, personal para amarras, etc. El Capitán de Puerto español proporcionará el personal de amarras necesario para los barcos de la Marina española.

8.- Por lo que se refiere el servicio de practicaje el Capitán de Puerto de los Estados Unidos dispondrá los prácticos para los buques de guerra de su país y para los que están bajo el control del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, siempre que lo considere necesario. De manera similar, el Capitán de Puerto español dispondrá los prácticos, cuando lo considere necesario, para todos los buques sobre los cuales tiene la autoridad de despacho.

Madrid, 13 de mayo de 1.960

Por el Departamento de Marina
de los Estados Unidos de América

H. H. Hale
Capitán de Navío de la
Marina de los Estados Unidos

Por el Ministro de Marina
del Gobierno Español

Alfonso Colomina Boti
Contralmirante

CONVENIO RELATIVO A LA AYUDA PARA LA MUTUA DEFENSA .

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de España:

Deseando estimular la paz y la seguridad internacional y promover la comprensión y buena voluntad y para mantener la paz mundial: Considerando que el Congreso de los Estados Unidos de América ha promulgado una legislación que permite a los Estados Unidos de América prestar ayuda militar, económica y técnica a España de modo que pueda cumplir tales objetivos;

Deseando establecer las obligaciones y condiciones que rigen el suministro de ayuda militar por el Gobierno de los Estados Unidos de América bajo tal legislación y las medidas que los dos Gobiernos han de adoptar aislada y conjuntamente para la consecución de los objetivos antes mencionados;

Han convenido lo siguiente:

Artículo I.- Cada Gobierno pondrá a disposición del otro y a la de aquellos otros Gobiernos que las Partes pudieran en cada caso acordar, el equipo, materiales, servicios u otras asistencias, en las condiciones, términos y condiciones que se convenga. El suministro y utilización de tales asistencias será concordante con la Carta de las Naciones Unidas.

Toda asistencia que pueda ser prestada por el Gobierno de los Estados Unidos en cumplimiento de este Convenio, será suministrada dentro de las previsiones y con sujeción a todos los términos, condiciones y supuestos de la Ley

de Ayuda para la Defensa Mutua de 1949 y a la Ley de Seguridad Mutua de 1951, Leyes que las enmiendan y complementan y Leyes presupuestarias consiguientes.

Los dos Gobiernos negociarán, cuando se considere necesario, los arreglos convenientes para la ejecución de las previsiones de este apartado.

2. Ambos Gobiernos utilizarán esta asistencia exclusivamente a los fines de afirmación de la paz y seguridad internacionales, en virtud de los acuerdos satisfactorios para ambos Gobiernos, y sin previo y mutuo consentimiento no dedicarán tal asistencia a otros fines distintos de aquellos para los que fue suministrada.

3.^{Se} concertarán los acuerdos necesarios para los cuales aquel equipo y material suministrado en ejecución de este Convenio, y que no sea ya necesario a los fines para los que originariamente fue suministrado, será efrecido para devolución al país que suministró tal equipo o material.

4. Sin previo y mutuo consentimiento, ninguno de los dos Gobiernos transferirá a personas ajenas a ellos, o a cualquiera otra nación, los títulos o derechos de posesión de equipo, material, propiedad información o servicios recibidos bajo los términos de este Convenio.

5. El Gobierno de España tomará aquellas medidas de seguridad que en cada caso acuerden ambos Gobiernos para evitar la difusión del conocimiento de efectos y materiales militares conceptuados como reservados, o de servicios o informaciones suministrados en ejecución del Convenio.

6. Cada Gobierno adoptará las medidas adecuadas, compatibles con la seguridad para mantener informada a la

opinión pública de las disposiciones de ejecución de este Convenio.

7. Ambos Gobiernos acordarán las normas por las que el Gobierno español pueda depositar, segregar o asegurar destino a todos los fondos asignados o que se deriven de cualquier programa de ayuda de los Estados Unidos, a fin de que dichos fondos no puedan quedar sujetos a embargo, confiscación decomiso u otro proceso legal análogo, por cualquier persona entidad o Gobierno, cuando en la opinión de los Estados Unidos, dicho proceso legal pudiera interferir el logro de los objetivos de dicho programa de asistencia.

Artículo II.- Los dos Gobiernos a requerimiento de cualquiera de ellos, negociarán entre si acuerdos adecuados a fin de proveer metodos y términos para la cesión de derechos de patente e informaciones técnicas para la defensa que, facilitando dicho intercambio, al mismo tiempo protejan los intereses privados y mantengan las necesarias garantías de seguridad.

Artículo III.- 1. El Gobierno de España, aparte de las obligaciones que contraiga a consecuencia de otros acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos, se compromete a poner a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América, las sumas en pesetas necesarias para los gastos administrativos y los derivados de las operaciones que para los Estados Unidos acarrea el programa de Ayuda Exterior. Los dos Gobiernos iniciarán seguidamente las discusiones para determinar el monto de tal suma en pesetas y para establecer acuerdos sobre su adecuado suministro.

2. A menos que otra cosa se acordase. el Gobierno

de España garantizará la franquicia de derechos de importación y exportación, así como la exención de tributos internos, sobre los productos, propiedades, materiales o equipo, importados en su territorio como consecuencia de este Convenio o de algún otro similar entre el Gobierno de los Estados Unidos y el de cualquier otro país que reciba asistencia militar.

3. a). Las inversiones y gastos efectuados en España por el Gobierno de los Estados Unidos, o por su cuenta para el común esfuerzo defensivo, incluso los que se realicen como consecuencia de cualquier otro programa de ayuda exterior, quedarán relevados de todo impuesto. A este fin el Gobierno español dictará normas pertinentes, satisfactorias para ambas partes.

b). Un Anexo técnico unido a este Convenio y autorizado por él, fijará las normas y procedimientos generales de ejecución de esta cláusula.

c). La exención de impuestos autorizada anteriormente será aplicable a las operaciones y desembolsos de los Estados Unidos que se autoricen en virtud del Convenio Defensivo, de los que en consecuencia se concierten y del Convenio de Ayuda Económica, en la forma convenida entre los dos Gobiernos.

Artículo IV.- 1. El Gobierno de España admitirá al personal del Gobierno de los Estados Unidos de América que deba cumplir en territorio español las obligaciones adquiridas por este Convenio, al que concederá las facilidades necesarias para observar los progresos en la realización de la asistencia prestada. Este personal, que será de nacionalidad norteamericana, incluso el temporalmente destinado,

operará en sus relaciones con el Gobierno de España, como parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, bajo la dirección y control del Jefe de la Misión Diplomática, y tendrá el mismo estatuto que el personal de la categoría correspondiente de la Embajada de los Estados Unidos de América. Al recibir la pertinente notificación del Gobierno de los Estados Unidos concederá el Gobierno español pleno estatuto diplomático al número que se acuerde del personal designado por este artículo.

2. El Gobierno de España concederá exención de impuestos de importación y exportación a los objetos de uso personal que sean propiedad de las mencionadas personas o de sus familiares, y adoptará medidas administrativas adecuadas para facilitar la citada importación y exportación de las propiedades personales de dichos funcionarios y sus familiares.

Artículo V.- 1. El Gobierno de ambos países:

a) Colaborará en el mejoramiento de la comprensión y buena voluntad internacionales y en el mantenimiento de la paz mundial;

b) Adoptará las medidas que conjuntamente convengan para eliminar causas de tensión internacional; y

c) Cumplirá las obligaciones militares asumidas en Acuerdos bilaterales o multilaterales o Tratados de que ambos países sean parte.

2. El Gobierno español:

a) Aportará al desarrollo y mantenimiento de su propio poder defensivo y el del mundo libre, en la medida de su estabilidad política y económica, la plena contribu-

ción que le permitan su potencial humano, recursos, instalaciones y condición económica general;

b) Adoptará todas las medidas razonables que sean necesarias para desarrollar su capacidad defensiva; y

c) Tomará todas las medidas adecuadas para asegurar la utilización efectiva de la asistencia económica y militar proporcionada por los Estados Unidos de América.

3. Ambos Gobiernos están dispuestos a cooperar en los esfuerzos internacionales que se realicen para llegar a convenios sobre la reglamentación universal y reducción de armamentos, bajo las adecuadas garantías contra toda tentativa de eludirlos o violarlos.

Artículo VI.- En interés de su mutua seguridad, el Gobierno de España cooperará con el de los Estados Unidos en la adopción de medidas previstas para controlar el comercio con naciones que amenacen el mantenimiento de la paz mundial.

Artículo VII.- 1. Este Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y continuará hasta un año después de recibida por cualquiera de las partes notificación escrita de la otra, de su intención de terminarlo, subsistiendo las previsiones de los párrafos 2 y 4 del artículo I, los convenios de sus párrafos 3, 5 y 7, así como el del Artículo II y párrafo 3 del artículo III, que continuarán vigentes, a menos que otra cosa acuerden los dos Gobiernos.

2. Los dos Gobiernos se consultarán, a requerimiento de cualquiera de ellos, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación o modificación de este Convenio.

3. Este Convenio será registrado en el Secretariado de las Naciones Unidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

En fe de lo cual, los respectivos Representantes debidamente autorizados para este fin, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid el día 26 de septiembre de 1953, en doble ejemplar, en lengua inglesa y española, siendo ambos textos fehacientes.

Por el Gobierno Español
El Ministro de Asuntos Exteriores
(L.S.) Alberto Martín Artajo

Por el Gobierno de los Estados Unidos
El Embajador de los Estados Unidos de América

ANEXO UNICO

1). a) De conformidad con el artículo III, apartado 3 del Convenio relativo a la para la Mutua Defensa, el Gobierno español acuerda y garantiza todas las actividades y gastos que se ejecuten dentro de la jurisdicción del mismo por o en nombre de los Estados Unidos, para la defensa común, incluyendo las operaciones y desembolsos llevados a cabo en relación con cualquier programa de ayuda exterior acordado por los Estados Unidos, y que las operaciones y desembolsos efectuados por los Estados Unidos para la defensa común, bajo los términos de este Convenio o fuera de él quedarán exentos de impuestos (incluso sobretasas, contribuciones u otras cargas de cualquier naturaleza, salvo aquella razonable compensación que puedan hacer los Estados Unidos por aquellos

servicios solicitados y recibidos) por parte o en beneficio del Gobierno español, de los organismos políticos que de él dependan o de entidades semiestatales.

b) Estas exenciones serán de aplicación en todos los casos en que el obligado al pago del impuesto sea en último término los Estados Unidos, en todos los casos en que se trate de impuestos que repercutan de forma directa en los gastos que efectúen los Estados Unidos y en todos los casos previstos en el Convenio Defensivo y convenios que en virtud del mismo se establezcan y en los Convenios relativos a la ayuda para la Mutua Defensa y Económico firmados en 26 de septiembre de 1953.

Las exenciones fiscales concedidas por el presente Convenio, no alcanzarán, excepto en los casos antes citados, a los impuestos que de manera directa gravan los beneficios, utilidades y operaciones de las personas y entidades que realicen servicios, obras o trabajos por cuenta de o para los Estados Unidos.

c) Los impuestos cuya exención se concede por el presente Anexo y de cualquier otro modo que pudiera convenirse entre ambas partes, deberán incluir, sin que ello suponga limitación a los siguientes:

- (1) Impuestos sobre las transmisiones de bienes y derechos reales (derechos de bienes raíces)
- (2) Derechos de importación (cualquier impuesto o derecho que deba pagarse por la importación de artículos, materiales o partes o piezas de los mismos, adquiridos con cargo a los desembolsos antes expresados).

- (3) Derechos de exportación
- (4) Transportes e impuestos sobre las entradas y salidas
- (5) Impuesto sobre tonelaje
- (6) Impuesto de Timbre
- (7) Impuesto de Usos y Consumos, excepto en los casos de aquellos productos (petróleo y sus derivados y tabacos) cuya producción o venta este monopolizado por el Estado. Caso de efectuarse las adquisiciones de otros orígenes que no sean de los propios fabricantes, este impuesto será de aplicación, pero se concederá su devolución de acuerdo con unas normas a desarrollar, de aquella parte del precio que comprenda este impuesto. Estas normas comprenderán el método a seguir para determinar el importe del impuesto a reintegrar.
- (8) Impuestos provinciales (excepto los correspondientes a servicios prestados).
- (9) Impuestos Municipales (excepto los correspondientes a servicios prestados).
- (10) Impuestos sobre industrias u oficios y profesiones en la cuantía, caso de existir, en que dicho impuesto aumentase a causa de las actividades y gastos a que se hace referencia en el apartado 1) a) anterior.
- (11) Cualquier impuesto adicional que sea de aplicación

d) Las exenciones fiscales otorgadas de conformidad con los preceptos de este Convenio se considerarán como ampliación de las exenciones que normalmente disfrutaban los Estados Unidos dentro de la jurisdicción del Gobierno de España. Las exenciones así concertadas serán de aplicación a todas las ope-

raciones y desembolsos de la indole descrita en el apartado a) del presente Anexo, que puedan producirse despúes de la fecha de este Convenio.

e) Con respecto a cualquier otra contribución no expresamente mencionada en el subapartado c) del presente Anexo y que pudiera ser de aplicación a desembolsos u operaciones de la indole aqui citada, los dos Gobiernos se consultarán con objeto de llegar a soluciones mutuamente satisfactorias sobre las normas a seguir para lograr la exención fiscal de las mismas, de acuerdo con el principio de exención fiscal otorgado en el subapartado a) del apartado 1).

f) Del mismo modo, caso de surgir situaciones o circunstancias especiales en relación con los impuestos de la indole expuesta en el subapartado c) que pudieran afectar al cumplimiento de las condiciones de exención concedidas por el presente Anexo, tales situaciones o circunstancias serán objeto de discusión entre los dos Gobiernos con objeto de ampliar este Convenio con arreglo al espíritu y los términos de este Anexo. Si fuera preciso, el Gobierno español estudiará la conveniencia de dictar las medidas legislativas adecuadas para el cumplimiento de este fin.

g) No estarán afectados por este Convenio los requisitos de la Legislación española que tengan carácter social ni cualquier otra contribución relacionada con el empleo de la mano de obra.

2. La exención antes especificada será concedida con arreglo a las normas detalladas que a continuación se expresan. Las modificaciones de las citadas normas, que pudieran aparecer como ventajosas con objeto de simplificar el trabajo burocrático y la ejecución de la exención antes concedida, po-

drán ser iniciadas de mutuo acuerdo entre las Autoridades competentes españolas y de los Estados Unidos, El protocolo de estas modificaciones podrá tener la forma de un anexo o anexos a unir a éste cuando así sea necesario.

Los Estados Unidos comunicarán al Gobierno español (Ministerio de Hacienda), las operaciones y gastos que realicen que a su juicio deban gozar de las exenciones fiscales que concede el presente Convenio, haciéndolo con el detalle suficiente para la mejor identificación del concepto y cuantía de la operación. A la vista del escrito, el Gobierno español (Ministerio de Hacienda) dará las Órdenes oportunas a los servicios correspondientes (Direcciones Generales, Aduanas, Delegaciones de Hacienda, etcétera), para la exención de impuestos. En caso de que éstos hubieran sido ya pagados, se ordenará su devolución.

En el Ministerio de Hacienda se creará una Oficina que cuidará expresamente de la ejecución de este Anexo.

Caso de surgir discrepancias sobre la ejecución del presente Anexo, podrán ser éstas elevadas a la consideración de una Junta compuesta por Autoridades competentes de ambos Gobiernos.

3. El Gobierno español (Ministerio de Hacienda) podrá, de acuerdo con el de Estados Unidos y en la forma que se establezca en cada caso, tomar las medidas necesarias para - asegurarse de que los materiales y productos importados o - adquiridos exentos de impuestos no sean usados o destinados en atenciones distintas de las reseñadas en el apartado 1) a) del presente Anexo.

NOTA INTERPRETATIVA DEL ANEXO DE EXENCION FISCAL

Por la presente se hace constar la siguiente interpretación a ciertos puntos del Anexo de Exención Fiscal:

Queda entendido que los casos de exención fiscal contenidos en el primer párrafo del apartado 1. b) del anexo de Exención Fiscal al Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa no pueden interpretarse como limitativos al alcance de la exención fiscal prevista en el párrafo 1. a) y que solamente confirman ciertas aplicaciones particulares de dicha exención.

Queda también entendido que las frases "en todos los casos en que el obligado al pago del impuesto sea en último término los Estados Unidos" y "todos los casos en que se trate de impuestos que repercutan de forma directa en los gastos que efectúen los Estados Unidos" en el párrafo citado tienen por objeto incluir en la exención la incidencia directa e indirecta de impuestos sobre el precio final pagado por el Gobierno de los Estados Unidos en relación con los desembolsos descritos en el párrafo 1. a). Además queda entendido que la referencia en el segundo párrafo 1. b) a impuestos sobre "operaciones" alude a impuestos sobre licencias para ejercer negocios y no comprende ningún otro de los impuestos enumerados en el 1. c) del Anexo de Exención Fiscal.

CONVENIO SOBRE AYUDA ECONOMICA

El Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno español:

Reconociendo que la libertad individual, las instituciones libres y la verdadera independencia de todos los países, al igual que la defensa contra la agresión, tiene como base principal el establecimiento de una economía sana;

Considerando que el Congreso de los Estados Unidos de América ha promulgado legislación que permite a los Estados Unidos de América facilitar a España asistencia militar, económica y técnica; y

Deseando exponer los principios que rigen la prestación de ayuda económica y técnica por el Gobierno de los Estados Unidos de América de conformidad con la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y sucesivas enmiendas, así como establecer las medidas que ambos Gobiernos adoptarán separada y conjuntamente para la consecución de los fines de dicha legislación;

Han convenido lo siguiente:

Garantias

Artículo I.- a). El Gobierno de los Estados Unidos de América facilitará al Gobierno español o a cualquier persona, entidad u organización que este último designe, la asistencia técnica y económica que se pida por el Gobierno español y se apruebe por el de los Estados Unidos de América conforme a las estipulaciones convenidas en el presente Convenio y con sujeción a todos los términos, condiciones y cláusulas de

caducidad que determinen las leyes entonces vigentes en los Estados Unidos de América.

b) Ambos Gobiernos establecerán los procedimientos por los cuales el Gobierno español depositará, segregará y protegerá todos los fondos asignados o que se deriven de cualquier programa de ayuda de los Estados Unidos de América, con objeto de que dichos fondos no puedan quedar sujetos a embargo, confiscación, decomiso u otro procedimiento legal análogo por ninguna persona, sociedad, entidad, corporación, organización o Gobierno, cuando, en opinión de los Estados Unidos de América dicho procedimiento legal pudiera entorpecer el logro de los fines de dicho programa de asistencia.

Obligaciones generales

Artículo II.- 1. Con el objeto de alcanzar los fines expuestos en la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y de lograr, mediante el empleo de la asistencia recibida del Gobierno de los Estados Unidos de América los máximos beneficios, el Gobierno español hará lo posible por:

a) Adoptar o mantener las medidas necesarias para asegurar el empleo eficaz y práctico de todos los recursos de que dispone, incluyendo:

i) Las medidas necesarias para asegurar que los bienes y servicios suministrados en cumplimiento de este Convenio, incluso los obtenidos con los fondos depositados en la Cuenta Especial establecida en el artículo V del mismo, se usan solamente para los fines que convengan ambos Gobiernos;

ii) La observación y vigilancia del uso de dichos

bienes y servicios mediante un sistema de fiscalización eficaz y mutuamente aceptable; y

iii) Medidas, en cuanto sea posible, para localizar, identificar y utilizar de un modo adecuado los bienes y rentas situados en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones que pertenezcan a subditos españoles. Esta cláusula no impone obligación alguna a los Estados Unidos de colaborar en la ejecución de dichas medidas;

b) Estabilizar su moneda, fijar o mantener un tipo de cambio real, equilibrar su presupuesto estatal tan pronto como ello sea posible, crear o mantener una estabilidad financiera interna y, en general, restaurar o mantener la confianza en su sistema monetario;

c) Cooperar con el Gobierno de los Estados Unidos de América para asegurar que cualquier adquisición financiada con la ayuda facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno español sea efectuada a precios y en condiciones razonables y que la distribución en España de los mencionados bienes o servicios se haga de tal manera que los mismos se utilicen efectivamente para el fin a que fueron destinados;

d) Cooperar con el Gobierno de los Estados Unidos de América para asegurar que cualquier adquisición igualmente financiada y procedente de zonas distintas de la de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones sea también realizada a precios y en términos razonables, de manera que los dólares suministrados por este concepto al país del cual se adquirieran dichos bienes y servicios se empleen de conformidad con los acuerdos celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y dicho país;

e) Desalentar las prácticas y arreglos comerciales que tengan carácter de monopolio o "cartell" de los que resulte una restricción de la producción y un aumento de los precios o que pongan trabas al comercio internacional; estimular la competencia y la productividad y facilitar y fomentar el desarrollo del comercio internacional, reduciendo los obstáculos que puedan entorpecerlo, cuando ello afecte a la realización del programa convenido;

f) Concertar lo antes posible un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América en el que se reglamente para los nacionales y compañías norteamericanos un sistema de pagos y transferencias internacionales que permita la conversión paulatina de sus saldos acumulados en pesetas;

g) Facilitar al Gobierno de los Estados Unidos de América la observación e información de las condiciones de trabajo en España, en la medida en que éstas se relacionen con los fines y desarrollo del Programa de Seguridad Mutua.

2. Los Gobiernos de ambos países:

a) Colaborarán en el mejoramiento de la comprensión y buena voluntad internacionales y en el mantenimiento de la paz mundial;

b) Adoptarán las medidas que conjuntamente convengan para eliminar causas de tensión internacional; y

c) Cumplirán las obligaciones militares asumidas en Acuerdos bilaterales o multilaterales o Tratados de que ambos países sean parte.

3. El Gobierno español:

a) Aportará al desarrollo y mantenimiento de su propio poder defensivo y el del mundo libre, en la medida de su estabilidad política y económica, la plena contribución que le permitan su potencial humano, recursos, instalaciones y condición económica general:

b) Adoptará todas las medidas razonables que sean necesarias para desarrollar su capacidad defensiva; y

c) Tomará todas las medidas adecuadas para asegurar la utilización efectiva de la asistencia económica y militar proporcionada por los Estados Unidos de América.

Garantías

Artículo III.- Ambos Gobiernos a petición de cualquiera de ellos, se consultarán sobre aquellos proyectos que debieran realizarse en España propuestos por nacionales de los Estados Unidos de América en relación con los cuales el Gobierno de los Estados Unidos de América pueda oportunamente dar las garantías previstas en las disposiciones de la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y sucesivas enmiendas, que incorpora la Sección III b) de la Ley de Cooperación Económica de 1948 y enmiendas sucesivas. Con respecto a las garantías que cubran proyectos aprobados por el Gobierno español, éste conviene en lo siguiente:

a) Si el Gobierno de los Estados Unidos de América efectúa un pago en dolares de los Estados Unidos de América a cualquier persona cubierta por dicha garantía, el Gobierno español reconocerá la transferencia a los Estados Unidos de América de cualquier derecho, título o interés que dicha persona

posea en bienes, moneda, créditos o cualquier otra propiedad por cuenta de la cual se efectuó el mencionado pago y la subrogación de los Estados Unidos de América en cualquier reclamación o acción legal que pueda corresponder a tal persona en relación con el caso. El Gobierno español reconocerá asimismo toda transferencia a favor del Gobierno de los Estados Unidos de América -como consecuencia de la citada garantía- cuyo contenido sea una compensación por pérdida cubierta por garantías recibidas de distinto origen que el del Gobierno de los Estados Unidos de América.

b) Las sumas en pesetas adquiridas por el Gobierno de los Estados Unidos de América como consecuencia de dichas garantías, no recibirán un trato menos favorable que el que se conceda en el momento de la adquisición a los fondos privados procedentes de transacciones de nacionales de los Estados Unidos de América comparables a las transacciones cubiertas por dichas garantías y las citadas sumas en pesetas serán puestas a libre disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América para gastos administrativos;

c) Toda reclamación del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el Gobierno español que resulte de la subrogación arriba mencionada o que guarde relación con los bienes, moneda, créditos u otra clase de propiedad o toda diferencia que surja con motivo de este artículo, será sometida a negociación directa entre los dos Gobiernos. Si, dentro de un periodo razonable, no pudieran resolver de común acuerdo la reclamación o la diferencia, ésta se referirá a un único árbitro designado de mutuo acuerdo para resolución final. Si, dentro de un plazo de tres meses, los Gobiernos no llegasen a un acuerdo en esta designación, el árbitro podría ser nombrado por el Presidente del Tribunal de Justicia Internacional a petición de cualquiera de los dos Gobiernos.

Acceso a ciertos productos

Artículo IV.- 1. El Gobierno español facilitará a los Estados Unidos de América la adquisición, en condiciones razonables de venta, cambio, compensación u otra forma cualquiera y en las cantidades y por el periodo de tiempo que se convenga entre ambos Gobiernos, de aquellos productos originados en España que los Estados Unidos de América necesiten como resultado de las deficiencias reales o potenciales de sus propios recursos y para la formación de "stocks" u otros fines. En dichas transacciones se tendrán siempre presentes las necesidades de España en los mencionados productos, tanto para su consumo interno como para su comercio de exportación. El Gobierno español tomará las medidas específicas que sean necesarias para llevar a cabo las disposiciones de este párrafo, incluyendo el fomento de la producción de los productos en cuestión y la supresión de cualesquiera obstáculos que impidan la adquisición de dichos productos por los Estados Unidos de América o su recepción. A petición de cualquiera de los dos Gobiernos, se iniciarán negociaciones con el fin de suscribir los arreglos necesarios para el cumplimiento de lo estipulado en este párrafo. El Gobierno de los Estados Unidos de América hará lo posible para ayudar al Gobierno español a aumentar la producción en España de los productos a que se refiere este artículo, siempre que se convenga que ello es practicable y compatible con los fines de la Ley de Seguridad Mutua y sucesivas enmiendas.

2. En relación con aquellos productos que se originen fuera de España, ambos Gobiernos, a petición de cualquiera de ellos, cooperarán, siempre que sea oportuno, en la consecución

ción de los fines a que se refiere el párrafo I de este artículo.

Moneda local

Artículo V.- 1. Las estipulaciones de este artículo solamente serán aplicables a la asistencia técnica y económica que sea facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América con carácter de donación.

2. Se abrirá una cuenta especial en el Banco de España a nombre del Gobierno español -que en adelante se llamará Cuenta Especial- en la que se depositarán pesetas en cantidades de valor equivalente al coste en dólares para el Gobierno de los Estados Unidos de América de las mercancías, servicios e información técnica (incluidos los costes de transformación, almacenaje, transportes, reparaciones y otros servicios) que se pongan a disposición del Gobierno español con carácter de donación conforme al presente Convenio. El Gobierno de los Estados Unidos de América notificará periódicamente al Gobierno español el coste en dólares de tales mercancías, servicios e información técnica, y el Gobierno español, acto seguido, ingresará en la Cuenta Especial el importe equivalente en pesetas computado al cambio que mutuamente se haya convenido entre ambos Gobiernos. Si en el momento de la notificación el Gobierno español fuera miembro del Fondo Monetario Internacional y hubiera llegado a un acuerdo con dicha Institución sobre un tipo de cambio, el importe en pesetas a depositar será computado al tipo de cambio que corresponda a la paridad convenida en aquel momento con el Fondo Monetario Internacional, siempre que esta paridad convenida sea el único tipo de cambio aplicable a la compra de dólares para importaciones en España. Si en el momento de la notificación se hubiera llegado a esta-

blecer con el Fondo Monetario Internacional determinada paridad y existiesen uno o más tipos de cambios aplicables a la compra de dólares para importaciones en España, o si no se hubiese llegado a establecer ninguna paridad con dicho Fondo el tipo o tipos de cambio para este fin serian mutuamente convenidos entre los dos Gobiernos. El Gobierno español podrá encualquier momento, anticipar depósitos en la Cuenta Especial, que serán acreditados a cuenta de futuras notificaciones, de acuerdo con lo establecido en este párrafo.

3. a) El Gobierno de los Estados Unidos de América notificará oportunamente al Gobierno español sus necesidades en pesetas para gastos administrativos y de ejecución como consecuencia de las operaciones realizadas en España, de conformidad con la Ley de Seguridad Mutua de 1951 y disposiciones modificativas y complementarias y el Gobierno español pondrá, en consecuencia, a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América dichas sumas, retirándolas de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial en la forma pedida por el Gobierno de los Estados Unidos de América en su notificación. Estas sumas serán cargadas al porcentaje mencionado en este párrafo. El diez por ciento de cada depósito efectuado de acuerdo con este artículo se pondrá a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América. Queda entendido que el Gobierno de los Estados Unidos de América no convertirá los fondos adquiridos de conformidad con este artículo en otras monedas sin previa consulta con el Gobierno español.

b) Ambos Gobiernos se pondrán de acuerdo sobre el número y características generales de las instalaciones militares de defensa mutua que hayan de construirse en España y el Gobierno de los Estados Unidos de América notificará periódicamente al Gobierno español las necesidades para gastos en

pesetas que se ocasionen por la construcción y mantenimiento de dichas instalaciones militares. El Gobierno español, acto seguido, facilitará estas sumas retirándolas de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial en la forma requerida por el Gobierno de los Estados Unidos de América en su notificación

4. Reconociendo la prioridad de los gastos a que se refiere el parrafo 3 de este artículo, el Gobierno español podrá retirar fondos de cualquier saldo existente en la Cuenta Especial para aquellos gastos que se convengan periódicamente con el Gobierno de los Estados Unidos de América y que se hallen de acuerdo con los fines señalados en la Ley de Seguridad Mutua de 1951, y sucesivas enmiendas.

5. Cualquier saldo no comprometido que quede en la Cuenta Especial en el momento de la terminación de la asistencia prestada como consecuencia de este Convenio, descontando las sumas no gastadas asignadas en el parrafo 3 a) de este artículo, podrá emplearse dentro de España para los fines que posteriormente se convengan entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y España, quedando entendido que la aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América estará sujeta a la aprobación por Ley o resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos de América.

Consulta y transmisión de información

Artículo VI.- 1. Ambos Gobiernos se consultarán, a petición de cualquiera de ellos, sobre todo asunto referente a la aplicación de este Convenio o a las operaciones y arreglos que se lleven a cabo de conformidad con el mismo.

2.- En la forma y tiempo indicados por el Gobierno

de los Estados Unidos de América, previa consulta al Gobierno español, éste le comunicará lo siguiente :

a) Información detallada acerca de los proyectos, programas y medidas propuestos o adoptados por el Gobierno español para cumplir las estipulaciones de este Convenio.

b) Relaciones completas de las operaciones realizadas según este Convenio, incluyendo un estado del empleo de los fondos, mercancías y servicios recibidos en cumplimiento del mismo; dichas relaciones se harán trimestralmente.

c) Información relativa a la economía española, incluyendo las estadísticas nacionales y la balanza de pagos, que el Gobierno de los Estados Unidos de América necesite para determinar la naturaleza y el alcance de las operaciones realizadas según el Convenio y evaluar la eficacia de la ayuda proporcionada o prevista en el mismo, y en general, los progresos realizados a este respecto durante su vigencia.

(3º) El Gobierno español, prestará su ayuda al Gobierno de los Estados Unidos de América para obtener información relativa a los productos originados en España que se refiere el artículo IV y que sea necesaria para formular y ejecutar lo estipulado en dicho artículo.

Publicidad

Artículo VII.- (1º) El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno español reconocen que es de mutuo interés el que se de completa publicidad a los fines y desarrollo de la asistencia prestada de conformidad con este Convenio y el poner a disposición del pueblo español toda la información pertinente. El Gobierno español estimulará la -

difusión de dicha información, dando a la asistencia facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con arreglo a este Convenio, una continua y completa publicidad a través de la Prensa, la radio y demás medios de que se dispone en España, y permitirá al Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante acuerdo con el Gobierno español, el uso de dichos medios en la medida que sea necesario para cumplir esa finalidad.

(2º) El Gobierno español concederá a los representantes de la Prensa de los Estados Unidos de América completa libertad para observar e informar sobre el funcionamiento de los programas de asistencia técnica y económica realizados de conformidad con este Convenio.

(3º) El Gobierno español publicará trimestralmente en España relaciones completas de las operaciones verificadas según el Convenio, incluyendo información sobre el uso de los fondos, mercancías y servicios recibidos.

Misión económica especial

Artículo VIII.- (1º) El Gobierno español accede a recibir una Misión económica especial que asumirá las obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos de América en España a que se refiere este Convenio.

(2º) El Gobierno español, previa notificación en regla del Embajador de los Estados Unidos de América^{en} España, considerará a la misión especial y a su personal, así como al representante especial de los Estados Unidos de América,^(") como parte de la Embajada de los Estados Unidos en España al efecto de gozar de los privilegios e inmunidades otorgados a dicha Embajada y a su personal de rango equivalente.

(") en Europa

(3º) El Gobierno español prestará su entera cooperación al personal de la Misión especial, al aludido representante de los Estados Unidos de América en Europa y a su personal. Esta cooperación incluirá el suministro de la información y de las facilidades necesarias para la observación y vigilancia del cumplimiento de este Convenio así como del empleo de la asistencia facilitada en virtud del mismo.

Resolución de las reclamaciones de los nacionales

Artículo IX.- (1º) El Gobierno español y el de los Estados Unidos de América convienen en someter a la decisión del Tribunal de Justicia Internacional o a la de un tribunal de arbitraje o un tribunal arbitral, que se designen de común acuerdo, toda reclamación apoyada o presentada por cualquiera de los dos Gobiernos en nombre de uno de sus nacionales y que surja como consecuencia de medios oficiales (distintas de las tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre bienes y derechos del enemigo) adoptadas después del 3 de - abril de 1948 por el otro Gobierno y que afecten a los bienes o derechos de dicho nacional, incluyendo los contratos o concesiones otorgados por las Autoridades competentes del citado Gobierno. Se entiende que el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de América con respecto a las reclamaciones - apoyadas por el Gobierno español, de conformidad con este párrafo, se adquiere con las facultades y dentro de los límites de los términos y condiciones del reconocimiento por los Estados Unidos de América de la jurisdicción obligatoria del Tribunal de Justicia Internacional (sic), según el artículo 36 de los Estatutos de dicho Tribunal, como aparece en la declaración del Presidente de los Estados Unidos de América de fecha 14 de agosto de 1946.

(2º) Queda, además, entendido que ninguno de los dos Gobiernos apoyará o presentará una reclamación con arreglo a este artículo hasta que su nacional haya agotado los procedimientos administrativos y judiciales del país en que surgió la reclamación.

(3º) Las estipulaciones de este artículo no impedirán de forma alguna la utilización por cualquiera de los dos Gobiernos de otras vías de acceso, si las hubiere, al Tribunal de Justicia Internacional u otro tribunal arbitral o el apoyo y presentación de reclamaciones alegadas por cualquiera de los dos Gobiernos fundándose en la violación de derechos y deberes derivados de los tratados, acuerdos o principios de derecho internacional.

Entrada en vigor, enmiendas y duración

Artículo X.- (1º) Este Convenio entrará en vigor el día de la fecha. Con sujeción a las estipulaciones de los párrafos 2 y 3 de este artículo continuará vigente hasta el 30 de junio de 1956 y, salvo que al menos seis meses antes de dicha fecha cualquiera de los dos Gobiernos haya notificado al otro por escrito su intención de poner término al Convenio en el mencionado 30 de junio de 1956, quedará en vigor hasta la expiración de un periodo de seis meses, a contar de la fecha en que la notificación hubiera sido hecha.

(2º) Si durante la vigencia de este Convenio cualquiera de los dos Gobiernos considerase que se ha producido un cambio fundamental en los supuestos básicos en que se apoya, lo notificará por escrito al otro, y ambos Gobiernos se consultarán con el fin de convenir la enmienda, modificación o término del mismo. Si después de tres meses de dicha notificación no hubiesen llegado a coincidir los dos Gobiernos sobre la decisión que hubiera que adoptar en tal caso, cualquiera de ellos puede notificar al otro, por escrito, su decisión de poner término a este Convenio. Entonces, y con -

sujección a las estipulaciones del párrafo 3 de este artículo, el Convenio terminará :

a) Seis meses después de la fecha de notificación de la intención de ponerle término, o bien,

b) Después de un periodo de tiempo breve que se considere mutuamente como suficiente para asegurar que se cumplen las obligaciones del Gobierno español con respecto a cualquier ayuda que continúe siendo facilitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América con posterioridad a la fecha de notificación; siempre que se mantenga la vigencia del artículo IV y del párrafo 3 del artículo VI hasta dos años después de la fecha de notificación de la intención de terminar, pero nunca - más tarde del 30 de junio de 1956.

(3º) Los acuerdos y arreglos subsidiarios negociados de conformidad con este Convenio pueden permanecer en vigor después de la fecha de terminación del mismo y su periodo de efectividad quedará regulado por sus propios términos. El artículo V se mantendrá en vigor hasta que todas las sumas en moneda española a cuyo depósito obliga dicho artículo de conformidad con sus propios términos, hayan sido utilizadas de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

(4º) Este Convenio puede ser modificado en cualquier momento si así lo convienen ambos Gobiernos.

(5º) El Gobierno de los Estados Unidos de América registrará este Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los respectivos representantes, debidamente autorizados para este fin, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid el día 26 de septiembre de 1953, en dos ejemplar, en lengua inglesa y española, siendo ambos textos fehacientes.

Por el Gobierno Español
El Ministro de Asuntos Exteriores
(L.S.) ALBERTO MARTIN ARTAJO

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América
El Embajador de los Estados Unidos de América.-
(L.S.) JAMES CLEMENT DUNN

A N E J O

Notas Interpretativas

1. Queda entendido que los requisitos del párrafo 1 a) del artículo II, referentes a la adopción de medidas para la utilización eficiente de los recursos, incluirán, en relación con las mercancías facilitadas dentro del Convenio, las medidas necesarias para salvaguardar dichas mercancías e impedir su desviación a mercados o cauces comerciales de carácter ilegal o irregular.

2. Queda entendido que el párrafo 1 c) del artículo II no debilita el derecho y responsabilidad de los Estados Unidos de América a especificar cualquiera términos y condiciones de ayuda que se consideren necesarios.

3. Queda entendido que las prácticas y arreglos comerciales a que se refiere el párrafo 1 e) del artículo II significan :

a) Fijación de precios, términos o condiciones que hayan de observarse al tratar con otros en la compra, venta o arrendamiento de cualquier producto.

b) Exclusión de empresas de mercados territoriales o campos de actividad comercial, asignación o división de los mismos, o asignación de clientes o fijación de cuotas de ventas y compras

c) Discriminación contra determinadas empresas.

d) Limitación o fijación de cupos de producción.

e) Evitación por acuerdo del desarrollo o aplicación de progresos técnicos o inventos patentados o sin patentar.

f) Extensión del uso de derechos patentados, marcas registradas o derechos de propiedad industrial, concedidos por cualquiera de los dos países, a materias que -de acuerdo con sus leyes y reglamentos- no pueden ser objeto de tales concesiones o a productos, condiciones de producción, uso o venta -que tampoco pueden ser objeto de tales concesiones o a productos, condiciones de producción, uso o venta que tampoco pueden ser objeto de dichas concesiones; y

g) Aquellas otras prácticas que ambos Gobiernos acuerden incluir.

4. Queda entendido que el Convenio a que se hace referencia en el párrafo 1 f) del artículo II deberá contener un sistema de conversión de los saldos en pesetas que tenga en cuenta, en cada momento, las fluctuaciones en las disponibilidades españolas de dólares.

5. Queda entendido que los Estados Unidos de América no proyectan revender dentro de España ninguno de los productos que adquieran de conformidad con el párrafo 1 del artículo IV.

6. Queda entendido que el momento de la notificación, a que se hace referencia en el párrafo 2, artículo V, a efectos de determinar el tipo de cambio que será usado al computar los depósitos que se han de efectuar como consecuencia de las notificaciones al Gobierno Español de los indicados costes en dólares de las mercancías, servicios e información técnica se considerará, en el caso de toda notificación que cubra un periodo de pago, el de la fecha del último día del periodo de pago cubierto por la misma.

7. Queda entendido que el sentido y la intención de la última frase del párrafo 2 del artículo V es que el Gobierno español adoptará medidas para asegurar que las sumas en pesetas depositadas en la Cuenta Especial son suficientes en todo momento para permitir al Gobierno de los Estados Unidos de América atender sus obligaciones de pago en pesetas para los fines previstos en este Convenio. Los Estados Unidos de América informarán al Gobierno español, siempre que sea necesario, de sus necesidades en pesetas y están de acuerdo en que sus peticiones al Gobierno español para atender dichas necesidades no deberán exceder del importe de la asistencia económica y técnica asignada en firme a España con carácter de donación en el momento de hacer dichas peticiones.

8. Queda entendido que todo acuerdo a que pueda llegarse de conformidad con el párrafo 1 del artículo IX quedaría sujeto a la aprobación del Senado de los Estados Unidos de América.